Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Estudios de Posgrado

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Estudios de Posgrado

Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas

Hegemonía, puja distributiva y restricción externa. Un análisis de la relación entre capital y trabajo durante período, 2003-2015.

Agustín Pineau

Tesis para optar al grado de Magister

Director Dr. Andrés Musacchio

Buenos Aires, diciembre de 2017

ÍNDICE

Agradecimientos **3**

Resumen **5**

Introducción **7**

1. Sobre el problema de estudio 7
2. Sobre el estado de la cuestión 10
3. Organización de la tesis 13

Capítulo I **17**

Una propuesta de análisis desde el concepto de hegemonía y las teorías de la acción colectiva 17

1.1. Actores y practicas subjetivas: un análisis sobre la disputa política y social 17

1.2. El concepto de hegemonía y sus antecedentes históricos 18

1.3. Hegemonía desde la perspectiva de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe 24

1.4. Las distintas perspectivas de las teorías de la acción colectiva 33

1.5. Sobre el objeto de estudio 37

Capítulo II **39**

Los inicios de la posconvertibilidad, contexto de crisis y proceso de dislocación (2002-2003) 39

2.1. Características generales de la crisis del régimen de convertibilidad 39

2.2. Los comienzos del gobierno de transición y el resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal 41

2.3. El último periodo del gobierno de transición y el ascenso político de Néstor Kirchner 65

2.4. Desarticulación del orden neoliberal y las capacidades de una nueva articulación 85

Capítulo III **87**

La fase expansiva del ciclo, una nueva articulación hegemónica y el despliegue político del kirchnerismo (2003-2007) 87

3.1. Una breve caracterización general a comienzos del periodo 87

3.2. La configuración de un nuevo diseño macroeconómico 89

3.3. Reestructuración de la deuda pública y pago al Fondo Monetario Internacional 98

3.4. La revitalización de la negociación colectiva y los marcos institucionales en la relación entre capital y trabajo 106

3.5. La relación política del gobierno nacional con los sectores empresariales y los trabajadores en el marco de la puja distributiva 115

3.6. Un análisis de la articulación hegemónica del kirchnerismo 126

Capítulo IV **133**

La crisis internacional, sus impactos en la economía local y el inicio de movimientos contrahegemónicos (2008-2011)....133
4.1. El segundo gobierno kirchnerista: una aproximación al contexto general del periodo.133
4.2. El impacto de la crisis internacional en la economía local y su pronta recuperación....134
4.3. El conflicto de la Resolución 125 y la reconfiguración del campo político y social.....147
Capítulo V 161
La fase contractiva del ciclo, crisis de hegemonía y restricción externa (2012-2015).....161
5.1. Una aproximación al contexto general del periodo.....161
5.2. Dificultades, desajustes y restricciones en el diseño macroeconómico 162
5.3. Una reconfiguración de las relaciones con los trabajadores y los empresarios 183
5.4. La consolidación de un escenario contrahegemónico 199
Conclusiones 203
Bibliografía.....209

Agradecimientos

Le agradezco sinceramente a mi Director, Dr. Andrés Musacchio, cuyos aportes y contribuciones han sido sumamente imprescindibles y valiosas para el desarrollo de esta tesis.

Además, en el transcurso de la cursada de la Maestría, los profesores han realizado diversos aportes en las distintas etapas por la que atravesó esta investigación.

En especial, quiero mencionar al Dr. Mario Rapoport, Director de la Maestría, al Subdirector y Prof. Carlos Bulcourf, por su excelente disposición a escuchar todas las dudas e inquietudes, a la Coordinadora Académica, Licenciada Lidia Knecher y a la Dra. Noemí Brenta.

Quiero agradecer especialmente al Licenciado Héctor Palomino, por su acompañamiento, por sus aportes y enseñas en estos últimos años que han sido fundamentales para mi desempeño académico. También quisiera agradecer al Licenciado David Trajtemberg, por sus aportes para la construcción del objeto de estudio y al Dr. Carlos Tomada, por brindarme la posibilidad de desempeñarme profesionalmente durante su gestión en el Ministerio de Trabajo. A mi hermana, Licenciada Natalia Pineau, por su constante, paciente y siempre predispuesta colaboración para auxiliarme en mis dudas metodológicas y conceptuales en la elaboración de esta tesis.

Quisiera expresar un reconocimiento muy especial a mi amigo y compañero, Dr. Sebastián Carbonetto, por su acompañamiento y por sus consejos en estos años de trabajo. Como también al compañero y Licenciado Artemio López, por su siempre entera predisposición a compartir sus conocimientos y experiencia.

Por último, quiero agradecer a mi familia por las palabras de ánimo y de aliento para seguir siempre adelante y a mi novia Carla Michieli, por acompañarme en todo este proceso y por tolerar mis cambiantes estados emocionales durante todo este año.

Agustín Pineau

Buenos Aires, diciembre de 2017

Resumen

La tesis se propone abordar cómo el contexto de restricción externa, que comienza a manifestarse plenamente sobre la economía nacional a finales del período 2003-2015, repercute de forma significativa sobre el campo sectorial -capital y trabajo- tendiendo agudizar las tensiones en torno a la puja distributiva y, por consecuencia, hacia el interior de la propia hegemonía constituida a comienzos de la etapa de postconvertibilidad. La configuración de ese escenario, de restricción externa, lo ubicamos inicialmente en 2008, a partir de la crisis financiera internacional, y luego con mayor notoriedad y relevancia a partir de 2012.

La fase expansiva del periodo, que se inaugura a principios de 2003, signada por las altas tasas de crecimiento, un aumento considerable en la generación de empleo y una creciente distribución del ingreso encuentra su límite. El inicio de esa fase contractiva genera tensiones que se manifiestan en los conflictos entre los diferentes actores sectoriales, generando una creciente debilidad en el accionar del gobierno nacional y en su capacidad de articular el campo social y, por lo tanto, de sostener su hegemonía en el tiempo.

Esta situación, de contracción y de restricción externa, repercute negativamente sobre el mercado de trabajo, evidenciando dificultades en la generación de empleo, a un ritmo significativamente menor que al comienzo del periodo y se manifiesta también en el sostenimiento del poder adquisitivo del salario. Se pone de relieve las dificultades de los sectores empresariales vinculados a la producción de bienes destinados al mercado local, en una situación en donde se les dificultad seguir sosteniendo y ampliando su tasa de ganancia.

En ese cuadro de situación, distintos actores sindicales, de mayor relevancia y peso, por consecuencia de su posición en actividades estratégicas, comienzan a tomar un rol creciente de oposición, generando así un aumento de la conflictividad laboral. Se suceden divisiones en el seno del movimiento obrero organizado, siendo fundamento de esa fragmentación la relación con el gobierno nacional.

Durante los últimos años del periodo a analizar, 2012-2015, la política económica en materia de controles del mercado cambiario y las correcciones en el tipo de cambio, con el objetivo de controlar la inflación y, al mismo tiempo, preservar el nivel de reservas, produce efectos políticos de hostilidad y conflicto, en los sectores importadores y exportadores hacia el gobierno, y en términos económicos tiende a agravar el contexto de restricción externa, que conlleva finalmente a un salto devaluatorio.

La tesis se organiza a partir de un marco teórico que se nutre de la perspectiva de análisis del concepto de "Hegemonía", desarrollado por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe y en las teorías de la "Acción Colectiva".

La incorporación del concepto de "Hegemonía", a modo de instrumento de análisis, nos proporciona comprender el despliegue de los actores sociales, y como estos mismos se constituyen, formando ordenamientos de carácter político, en una dinámica de dicotomía y antagonismo, de polarización de las relaciones sociales.

Concebimos que la lógica hegemónica articula distintas particularidades, generando un entramado social que logra convertirse en una totalidad de diferencias, siendo ésta misma abierta e incompleta, sin llegar a ser una finalidad universal completamente suturada, con una identidad permanentemente móvil y en constante resignificación, con desplazamientos que limitan y constituyen continuamente la división del campo político y social.

Asimismo, se incorpora las teorías de la "Acción Colectiva", como la *movilización de recursos*, enfocándonos prioritariamente en el proceso de formación y desarrollo de la acción, en donde subrayamos la racionalidad misma de los actores en movimiento, destacando las diversas variables en materia de organización, estrategias, intereses, recursos y oportunidades. Se consideran en esa perspectiva los aportes de John McCarthy y Mayer Zald. Por otro lado, se integran los aportes de *las oportunidades políticas y los repertorios de la acción colectivas*, sostenidas por autores como Sidney Tarrow y Charles Tilly y aquellos que se focalizan en la *identidad colectiva*, como Alain Touraine y Alberto Melucci.

Desde ese marco teórico, abordamos la problemática, en donde la *lógica hegemónica* ocupa un lugar central en nuestro análisis, incorporando además las teorías de la *acción colectiva*, como elementos que nos posibilitan comprender el movimiento y el desplazamiento de los actores sectorial en la división dicotómica del campo político y social en contexto de restricción externa que se irá agudizando hacia finales del periodo.

Introducción

1. Sobre el problema de estudio

La tesis se propone abordar la problemática en torno al contexto de restricción externa, que comienza a manifestarse plenamente sobre la economía nacional hacia finales del período 2003-2015 y cómo este repercute de forma significativa sobre el campo sectorial -capital y trabajo- tendiendo agudizar las tensiones en torno a la puja distributiva y, por consecuencia, hacia el interior de la propia hegemonía constituida a comienzos de la etapa de posconvertibilidad.

Partimos de la base que la expansión económica que se inaugura a principios del periodo en 2003-2007, produciendo altas tasas de crecimiento, generación de empleo y distribución del ingreso, enfrenta dificultades en un primer momento en el contexto de la crisis internacional de 2008-2009 y, posteriormente, esos mismos problemas se acrecientan de manera notable hacia fines del periodo, 2012-2015.

Para comenzar a desarrollar la problemática a investigar, nos ubicamos inicialmente en los acontecimientos que se suceden durante 2002 y 2003, en donde procuramos caracterizar las consecuencias de las crisis del régimen cambiario de paridad fija. En ese escenario, comienza a desarticularse de manera gradual la *hegemonía neoliberal*, predominante durante la década de los noventa, dando paso a un nuevo ciclo que brinda la posibilidad de una reconfiguración del orden político y social.

En los inicios de ese nuevo periodo, se conforma una construcción política, el kirchnerismo, que se presenta con una orientación contraria al paradigma anterior, apoyándose en términos políticos en determinados actores representativos del capital y el trabajo. Al mismo tiempo, encontrará desde un comienzo puntos de sustentación en el ámbito político partidario.

La ascendente fuerza política que, con el devenir de los acontecimientos, logrará hegemonizar el nuevo periodo, desarrollará un discurso que le permitirá articular una lógica equivalencial de demandas, que lo posicionarán en un lugar de antagonismo frente a la experiencia neoliberal de la fase anterior.

Asimismo, nos detenemos a analizar la compleja articulación de actores que caracteriza la política de acumulación y sustentación del gobierno a lo largo del periodo. Para eso, incorporamos el concepto de *hegemonía* como un instrumento de análisis para nuestro marco teórico, con el objetivo de analizar los ordenamientos que se irán reconfigurando desde una compresión dicotomía y de polarización de las relaciones sociales.

Concebimos a la lógica hegemónica como la articulación de distintas particularidades, que generan un entramado social que logra convertirse en una totalidad de diferencias, siendo ésta misma abierta e incompleta, sin llegar a ser una finalidad universal completamente suturada, con una identidad permanentemente móvil y en constante resignificación, con desplazamientos que marcan sus límites continuamente.

Paralelamente, incorporamos al marco teórico las teorías de la "Acción Colectiva" con el objetivo de comprender los comportamientos de las organizaciones colectivas de los actores a analizar.

En primer lugar, ponemos el énfasis en las teorías que focalizan su análisis en la construcción de *identidad*, que le brinda un fundamento y sentido a la acción. En segundo lugar, en las teorías de la *movilización de recursos*, donde es prioritario el proceso de formación y desarrollo de la acción. Finalmente, añadimos las teorías de *oportunidades políticas* y *los repertorios de acción*, que sustentan que el accionar colectivo surge de los cambios en se suceden en el ambiente o en el entorno social.

Destacamos que nuestro enfoque prestará particular atención sobre determinados elementos que serán parte de la lógica articulatoria desplegada por la fuerza predominante de la época. Nos detendremos en el análisis de las relaciones entre el capital y el trabajo, y como el despliegue político del kirchnerismo logra conformar determinados ordenamientos con relación a los actores del empresariado y los trabajadores.

En ese sentido, ponemos el acento en el ámbito empresarial sobre la Unión Industrial Argentina (UIA) y entre los sectores del movimiento obrero organizado, prestaremos singular atención a la Confederación Central del Trabajo (CGT).

Desde perspectiva teórica señalada anteriormente, nos detendremos en las consecuencias que genera la coyunta económica signada por la restricción externa sobre el ámbito de los actores del trabajo. Ese contexto repercute sobre las capacidades de seguir expandiendo el producto nacional y la distribución salarial, y trae aparejado consecuentes comportamientos en las organizaciones de empresarios y trabajadores.

De esa manera, comienza a presentarse dificultades en materia de puja distributiva y, al mismo tiempo, empieza a tomar relieve una *crisis de hegemonía* que de forma progresiva desarticula las bases de sustentación del gobierno nacional.

La fase contractiva del ciclo económico repercute sobre el mercado de trabajo, evidenciando dificultades en la generación de empleo y en la sostenibilidad del poder adquisitivo del salario. Frente a esa circunstancia, se pone de relieve las dificultades de los sectores empresariales vinculados a la producción de bienes destinados al mercado local, en una situación en donde se les dificultad seguir sosteniendo y ampliando su tasa de ganancia.

Por otro lado, distintos actores sindicales de mayor relevancia y peso, por sus actividades estratégicas en la economía nacional, toman un rol de oposición creciente hacia el gobierno, generando un aumento significativo de la conflictividad laboral.

En ese contexto, se generan divisiones dentro del movimiento obrero organizado, vinculados a la relación con el gobierno nacional. Asimismo, durante los dos últimos años del periodo 2003-2015, la política económica en materia de controles del mercado cambiario y las correcciones progresivas del tipo de cambio, con el objetivo de controlar la inflación y preservar el nivel de reservas, produce distintos efectos que conforman conflictos y tenciones entre los sectores empresarios destinados a la importación y exportación, agravando el contexto de restricción externa que conlleva finalmente a un salto devaluatorio.

En esa situación, se provocan distintos movimientos entre los actores sectoriales en la arena política, en donde las posiciones de confrontación con el gobierno nacional aumentan y se hacen claramente manifiestas, dando así inicio a una construcción *contrahegemónica*, que logrará tomar forma y relieve hacia finales del ciclo.

Nuestro objetivo general, se sitúa en analizar las consecuencias que irán generando en el contexto de restricción externa, hacia el interior de la formación hegemónica articulada por el gobierno nacional.

La concepción de *hegemonía* que hemos desarrollado y la incorporación del análisis de la acción colectiva, nos proporciona los elementos necesarios para abordar con capacidad explicativa la problemática plateada.

Ahora bien, el primer objetivo específico será analizar las principales políticas económicas que se desarrollan durante el periodo y cómo estás se irán modificando en cada una de las etapas del ciclo económico.

En relación con el segundo objetivo específico, estudiaremos los posicionamientos políticos empresariales y sindicales, y sus respectivos cambios con respecto al gobierno nacional. Nos centraremos en los alineamientos de las centrales de trabajadores como también nos detendremos en las organizaciones empresarias.

En el tercer objetivo específico, daremos cuenta de la conflictividad laboral durante el periodo, comprendiendo específicamente los vinculados al ámbito privado. Aquí nuestra atención estará enmarcada en dar cuenta sobre la puja distributiva en cada coyuntura del ciclo, como también poder dilucidar el carácter que las medidas de acción colectiva y las respectivas reivindicaciones, con el objeto de dar cuenta la orientación del reclamo y carácter político-sectorial que esas mismas poseen.

Sostenemos como hipótesis principal que, el progresivo contexto de restricción externa, que logra consolidarse hacia finales del ciclo, genera tensiones en materia de puja distributiva

hacia el interior de la propia hegemonía constituida en los primeros años de la posconvertibilidad.

Al mismo tiempo, trabajaremos con dos hipótesis secundarias. En primer lugar, argumentamos que, hacia mediados del ciclo, particularmente en 2008, el conflicto con el sector agroexportador posibilita la generación de una contrahegemonía incipiente que excede el marco de la dinámica estrictamente sectorial entre capital y trabajo.

En segundo lugar, sostenemos que, durante la última etapa del periodo, la política en materia de controles en el mercado cambiario y de correcciones progresivas y controladas -*crawling peg*- en el tipo de cambio, con la finalidad de controlar inflación y de preservar el nivel de divisas, generaron expectativas en el sector exportador e importador que agudizaron aún más los problemas de restricción externa.

El abordaje metodológico consistió en una exhaustiva exploración bibliográfica sobre el periodo en cuestión, incorporando, además, las coyunturas históricas análogas que a travesado la economía argentina a lo largo del siglo XX, para enfrentar los obstáculos en materia de restricción externa. La indagación de fuentes periodistas de difusión nacional, nos posibilita tener una compresión detallada del periodo. Destacamos la utilización de estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), del Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

2. Sobre el estado de la cuestión

El estado de la cuestión sobre la problemática y el periodo que aquí se propone investigar, se compone de estudios de carácter monográficos, publicaciones y ensayos de diversos autores que recogen aspectos de la economía nacional desde el abordaje de diferentes perspectivas y enfoques.

Esto nos permitirá exponer y organizar las diversas producciones que se nos presentan, destacando sus respectivos avances que se encuentran vinculados a nuestra investigación, como también reflejar la ausencia de elaboraciones en relación al enfoque teórico que proponemos desarrollar, y que nuestro trabajo tiene como objeto contribuir, con la finalidad de complementar el estudio de la temática a abordar, incorporando así otras dimensiones de análisis posibles para una mayor profundidad en la compresión de la materia.

Comenzamos desarrollando el periodo en cuestión, desde las publicaciones y producciones bibliográficas que caracterizan la etapa de la posconvertibilidad, para luego

exponer la fase contractiva del ciclo económico, en donde termina consolidándose el creciente contexto de restricción externa.

El contexto de posconvertibilidad nos proporciona un nuevo escenario macroeconómico, en donde se combina un tipo de cambio elevado con importantes mejoras en los términos de intercambio, dando lugar a un fuerte superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos, revirtiendo la tendencia de la etapa anterior, trayendo como consecuencia un comienzo en la recomposición de reservas (Santarcangelo y Perrone, 2013). Se debe remarcar que el costo inflacionario posterior a la devaluación fue inusualmente bajo a expensas del exiguo salario real (Amico, 2008).

El inicio del periodo sentó las bases para un nuevo patrón crecimiento, la nueva estructura de precios relativos impulsó el nivel de actividad, generando un ritmo de actividad económica a tasas elevadas e intensivo en la generación de empleo (Campos, González y Sacavini, 2010). La movilización de los recursos, de divisas acumuladas por el sector externo, fue un elemento importante para la reactivación de la inversión y, posteriormente, en la expansión de distintas actividades (Heymann y Ramos, 2010).

El sector industrial experimentó un crecimiento concomitante de la producción y el empleo. Se aprovecharon las capacidades instalada ociosas, la cuales fueron acompañada por inversiones tendientes a recuperar y ampliar el stock de capital. A partir de 2008, se muestra una desaceleración en el proceso inversor y un freno en la expansión del producto, como consecuencias de la crisis internacional, provocando también un freno de la demanda interna y externa, y su consecuente impacto en las actividades productivas.

Luego de esa fase moderadamente contractiva, se reinicia el crecimiento a un ritmo menor, siendo también inferior la generación de empleos, ya que el dinamismo económico es marcadamente descendente en comparación a la etapa inicial, 2003-2007 (Kulfas, Goldstein y Burgos, 2014).

Desde el año 2012 es notorio el menor crecimiento, generando que los aumentos salariales se muestren incompatibles con la expansión del producto, ya que producían un incremento en los precios, provocando una caída real de ingresos (Cortés y Marshall, 2011). La política macroeconómica entra en tensión con la política salarial, en un contexto de tensiones cambiarias por consecuencias de la restricción externa. El tipo de cambio nominal y la productividad del trabajo se mantenían constantes, provocando así una mayor tendencia de traslación de los costos salariales a precios (Pérez, 2011).

Ahora bien, podemos observar como la economía argentina aún presentaba características típicas de una Estructura Productiva Desequilibrada (EPD), en donde coexisten un sector primario, el agroexportador, altamente productivo con un sector industrial de una

productividad sustancialmente inferior (Diamand, 1972 y Pérez, 2011), exhibiendo así una tendencia a la restricción externa por el lado real de la economía.

En los inicios de 2014, la baja en los precios internacionales y la remisión de utilidades, se agudiza el contexto de restricción. Esto conlleva a una tensión cambiaria que termina forzando una política de estabilización y un salto devaluatorio, con efectos regresivos en materia distributiva (Gallo, 2014).

Como en experiencias anteriores, este proceso de crecimiento económico y de mejoras salariales de amplios sectores sociales, demandaba la importación de bienes de capital para continuar expandiendo el proceso productivo. Las exportaciones no acompañan esa demanda de modo que el proceso alcanza un punto de estrangulamiento externo, que lleva a una crisis de *stop & go* (Schvarzer y Tavosnanska, 2008).

Las estrategias de Industrialización por sustitución de importaciones (ISI) luego de haber completado con éxito su primera etapa, se agota porque habiendo alcanzado cierto desarrollo industrial, es preciso dotar al sector de orientación exportadora de competencia en el mercado internacional (Pereira, 2009). La capacidad instalada no aumenta al mismo ritmo de la demanda, por lo tanto, se busca la devaluación a fin de corregir la competitividad del sector externo (Eshag y Thorp, 1965).

Paralelamente, la industria no contribuye a la obtención de divisas que necesita para su crecimiento, y se inicia un proceso de divergencias entre el crecimiento del sector industrial consumidor de divisas, que no contribuye a generarlas, y la provisión de éstas a cargo del sector agropecuario. La expansión de la producción interno hace crecer las importaciones y una vez que se agotan las reservas, el país se ve forzado a una devaluación (Diamand, 1972).

En el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el impulsor de la actividad económica se sitúa en el mercado interno, y la restricción externa impuesta por la balanza de pagos determina el ritmo de crecimiento. La economía no puede expandirse más allá de lo que permitan las exportaciones.

Por lo tanto, la restricción externa fija el límite superior al valor del producto y al nivel de actividad, cuando la demanda por importaciones se excede, se genera un alza en el tipo de cambio, que deprime los salarios reales y consecuentemente se induce una recesión permitiendo regenerar la balanza de pagos (Canitrot, 1983).

La historia argentina se ha caracterizado por cambios bruscos y frecuentes en su política económica, que muestran una oscilación pendular entre corrientes antagónicas, la corriente expansiva-popular y la ortodoxia-liberal (Diamand, 1985). Según cual sea el momento del ciclo, los movimientos de este están determinados por la balanza de pagos y determina las alianzas sociales que se establecen en cada ocasión.

El “empate político” entre los distintos sectores se articula con una modalidad especifica de acumulación de capital, basada a su vez en una situación de poder económico compartido que alternativamente se desplaza (Portantiero, 1977).

Durante la mayor parte del periodo sustitutivo de la industrialización sustitutiva de importaciones, se enfrentan dos “bloques de poder”, el que engloba a los terratenientes, los grandes industriales extranjeros y nacionales y el gran comercio de exportación e importación; y el conformado por asalariados y los pequeños empresarios nacionales (Peña, 1974; Niosi, 1974; O’ Donnell, 1977).

En esas conformaciones sociopolíticas, podeos observar que la gran burguesía industrial se acerca al bloque de empresarios pequeños y a los sectores del trabajo en las etapas de reactivación y sólo se volvía hacia la burguesía pampeana en los momentos de crisis (O’ Donnell, 1977).

En este recorrido bibliográfico, advertimos que algunos de los aspectos que se pretende investigar en la tesis han sido tratados en diversas publicaciones. Si bien los trabajos de diferentes autores comportan antecedentes relevantes para esta investigación, se evidencia la ausencia de producciones que analicen el comportamiento de los actores políticos y sectoriales, y cómo estos movimientos pendulares generan articulaciones hegemónicas determinadas en cada coyuntura del ciclo económico.

Destacamos que, existe un punto de partida orientador en el estado de la cuestión que se presenta en las publicaciones de Marcelo Diamand (1972, 1985) y Guillermo O’ Donnell (1977), en donde se pone énfasis en las formaciones de alianzas políticas y sociales en cada coyuntura económica.

3. Organización de la tesis

La tesis se organiza en cinco capítulos seguidos de las conclusiones. En el primer capítulo, está destinado a desarrollar el marco teórico, presentando los conceptos centrales de para nuestra investigación. Desde incorporación del concepto hegemonía, elaborado por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, nos proporciona comprender el despliegue de los actores del capital y el trabajo, y como estos se configuran conformando distintos ordenamientos de carácter político.

Realizamos un desarrollo etimológico del concepto, en donde encontramos su origen en diferentes perspectivas de análisis del pensamiento marxista de comienzos del siglo XX, que procuraban dar respuesta a los acontecimientos históricos que contradecían lo teóricamente

esperable en las sociedades occidentales: la agudización de las contradicciones y la polarización de clases.

La concepción del marxismo mecanicista entra en crisis frente al "capitalismo maduro", que no se direccionaba hacia una creciente homogenización de la estructura social, refutando así las propias "leyes naturales". En su argumentación, el pensamiento mecanicista sostenía que, en el devenir de los acontecimientos futuros, el proletariado poseía por esencia el carácter de un particularismo concreto con tendencia universal.

La "lógica hegemónica" ocupará un lugar central en nuestro análisis, comprendiendo que las practicas articulatorias actúan sobre una relación abierta entre la estructura y superestructura, concibiéndola como una dependencia abierta sin demarcaciones previas, posibilitando emerger el carácter contingente del campo político y social.

Asimismo, en el segundo apartado del capítulo desarrollamos las diversas perspectivas de las teorías de la acción colectiva, que nos permiten comprender el desplazamiento de los actores sociales en el marco de la división dicotómica del entramado social.

Destacamos aquellas teorías que ponen énfasis en la construcción de las identidades colectivas, en de movilización de recursos, en donde es prioritario el proceso de formación y desarrollo de la acción, y en las teorías de las oportunidades políticas y los repertorios de la acción, que sustentan que el accionar colectivo surge de los cambios que se suceden en el entorno social y que brindan las posibilidades de movilización.

En el capítulo segundo, se aborda la crisis del régimen cambiario de paridad fija, la constitución del gobierno de transición hasta el ascenso a la presidencia de Néstor Kirchner. Comenzaremos caracterizando la crisis de 2001, remarcando las políticas económicas que llevaron al colapso de régimen de convertibilidad.

Comprendemos que, durante el periodo de finales de diciembre 2001 hasta la devaluación del tipo de cambio, a comienzos de 2002, cuando se abandona definitivamente el régimen de convertibilidad, se configura un momento de ruptura que se expresa en la dislocación del orden establecido, y se inicia así un proceso de desarticulación de la hegemonía neoliberal.

En ese contexto, nuestro enfoque se centrará en los distintos posicionamientos de los sectores empresariales y de las organizaciones del trabajo con relación a la política económica y su relación con el gobierno de transición. Al mismo tiempo, introducimos la incipiente conformación de un orden contrahegemónico, dando cuenta de la coyuntura de ruptura y dislocación, previa y posterior a la devaluación.

En el capítulo tercero, damos cuenta de la formación hegemónica que comienza articularse desde el primer gobierno kirchnerista. En ese periodo, se abre paso a un nuevo

patrón de crecimiento, en donde el Estado nacional desempeña un rol planificador de la política económica, desarrollando también un nuevo enfoque en materia de relaciones laborales. Destacamos el orden macroeconómico, en un contexto expansivo del ciclo a partir del aumento de los precios internacionales de los bienes primarios.

Paralelamente, el mercado interno se incorporará a la recomposición de la economía doméstica, debido a la política de incrementos salariales que logran reactivar la demanda. En ese contexto, haremos foco en el rol que cumplirán las agremiaciones empresariales y las organizaciones de trabajadores y rol que asume el gobierno nacional en promover y encausar institucionalmente la dinámica sectorial a partir de las negociaciones colectivas.

El periodo 2003-2007 lo denominaremos como la fase expansiva del ciclo, en la cual tendrá lugar la conformación de una nueva formación hegemónica, que se expresará en kichnerismo como identidad política y social.

En el capítulo cuatro, desarrollamos el segundo periodo de gobierno kirchnerista, que estuvo marcado por un contexto sumamente complejo en términos económicos a partir de la crisis financiera internacional y sus impactos a escala local. En este lapso, hacia el segundo semestre de 2008 y comienzos de 2009, el gobierno tomara la decisión de enfrentar ese contexto focalizándose en el sostenimiento de la actividad del mercado doméstico.

Al mismo tiempo, destacaremos la agudización de las tensiones con determinados actores locales vinculados al sector agroexportador. La Resolución N°125 provocó un conflicto de larga duración entre las entidades agropecuarias y el Ejecutivo Nacional. El eje central de la discusión será la apropiación del excedente por parte del Estado.

En el periodo 2008-2011, es cuando comenzaron a vislumbrarse los primeros problemas en el diseño macroeconómico, inaugurado durante la presidencia de Néstor Kirchner.

En el quinto capítulo, posee un lugar de relevancia en nuestro trabajo. Durante el periodo 2012-2015, comienzan a manifestarse desajustes en materia macroeconómica, en un contexto de tendencia a la baja de los precios internacionales de los bienes primarios y de desaceleración del crecimiento de la economía local. Al mismo tiempo, la situación de restricción externa erosionó la capacidad del gobierno nacional de sostener una política de carácter expansiva, ya que comenzaban a presentarse dificultades de orden cambiario y monetario.

El deterioro en el stock de reservas de la economía del país poseía entre sus orígenes en las crecientes importaciones de capital, que los propios actores económicos demandaban con el objetivo de producir para el mercado interno. Asimismo, ese contexto se caracteriza por la fuga de capitales de las empresas transnacionales, que remitían sus utilidades al exterior y por un creciente déficit energético que impactó negativamente su el balance comercial.

Durante el último periodo de gobierno kirchnerista, se reconfigura el marco de relaciones con los sectores del trabajo y los empresarios. El movimiento obrero organizado soportó tensiones hacia su interior, que desembocaron en una fractura de la CGT. Los sectores empresarios representamos en la Unión Industrial Argentina comenzaban a desplegar críticas hacia la gestión económica, exigiendo recuperar una mayor competitividad a partir de una devaluación del tipo de cambio.

En ese contexto, tiene lugar la emergencia de un escenario contrahegemónico, que se irá constituyendo a lo largo del periodo. Asumirá primeramente una "lógica diferencial" y de negatividad y, posteriormente, pasará a un estadio con la capacidad de articular un antagonismo que trascendería el simple rechazo, presentando un orden posible y diferente al dominante.

Finalmente, en el desarrollo de las conclusiones buscaremos realizar una evaluación de nuestro trabajo de investigación, señalando nuestros aportes en materia de análisis sobre el periodo 2003-2015. Nuestras conclusiones podrán su énfasis con relación a las dificultades que se presentan en sostener en el tiempo una articulación hegemónica en un contexto de contracción económica y de restricción externa.

Capítulo I

Una propuesta de análisis desde el concepto de hegemonía y las teorías de la acción colectiva

1.1. Actores y practicas subjetivas: un análisis sobre la disputa política y social

Con el objetivo de abordar la problemática de estudio presentada en la introducción, la tesis se construye desde un marco teórico que busca nutrirse, por un lado, de las perspectivas de análisis del concepto de "hegemonía" desarrollado por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe y, por otro lado, de las distintas perspectivas de las teorías de la "acción colectiva".

La incorporación del concepto de hegemonía nos proporciona una comprensión del despliegue de los actores sociales, y de cómo ellos mismos se constituyen y se configuran, formando ordenamientos de carácter político, en una dinámica de dicotomía y antagonismo, y de polarización de las relaciones sociales.

Entendemos que la "lógica hegemónica" articula distintas particularidades, que generan un entramado social que logra convertirse en una totalidad de diferencias, siendo esta misma abierta e incompleta, sin llegar a ser una finalidad universal completamente suturada, con una identidad permanentemente móvil y en constante resignificación, con desplazamientos que limitan y constituyen continuamente la división del campo político y social.

Asimismo, incorporamos las diversas concepciones teóricas que procuran comprender los comportamientos colectivos. Aquellas que ponen eje en la *identidad colectiva*, como Alain Touraine y Alberto Melucci, en las teorías de la *movilización de recursos*, en donde es prioritario el proceso de formación y desarrollo de la acción, considerando los aportes de John McCarthy y Mayer Zald y en las teorías de las *oportunidades políticas* y *los repertorios de la acción colectivas*, sostenidas por autores como Sidney Tarrow y Charles Tilly.

La lógica hegemónica ocupará un lugar central en nuestro análisis, incorporando además las teorías de la acción colectiva, como elementos que nos posibilitan comprender el movimiento y desplazamiento de los actores sectoriales en el marco de la división dicotómica del entramado social.

1.2. El concepto de hegemonía y sus antecedentes históricos

En los primeros apartados de la obra de Laclau y Mouffe, *Hegemonía y estrategia socialista* (1985), los autores se centran en realizar una etimología del concepto *hegemonía*, y para eso se sitúan en el debate teórico que tenía lugar en el marco de la Segunda Internacional, hacia comienzos del siglo XX, e incorporan de esa manera las diversas posiciones que tienen lugar en el seno del marxismo.

En ese contexto, los autores construyeron una caracterización de las crecientes dificultades que acarrea el pensamiento marxista de la época para dar cuenta de los acontecimientos históricos que contradecían lo teóricamente esperable: la agudización y la polarización de clases en las sociedades occidentales y el estallido de la revolución en Alemania o Inglaterra, por razón de su mayor desarrollo industrial (Errejón, 2012, pp.110-111).

El "capitalismo maduro" de la época no se direccionaba hacia una creciente homogenización de la estructura social, sino que, por el contrario, revelaba una mayor complejidad. En esa configuración histórica, quedaba claro que, si una "clase universal" habría de surgir, sería del resultado de una construcción política laboriosa y no de los movimientos automáticos y necesarios de una infraestructura determinada (Butler, Laclau y Žižek, 2011).

Frente a ese cuadro de situación, Laclau y Mouffe (2004, [1985]) reconstruyen tres posicionamientos y lecturas que buscaban, en aquel entonces, dar respuesta a esa crisis teórica: la "ortodoxia marxista", el "revisionismo" y el "sindicalismo revolucionario".

El exponente teórico principal de la "ortodoxia marxista" era Karl Kautsky, quién defendía la función científica del marxismo. En sus escritos e intervenciones, el teórico remarcaba que la unidad futura de la clase trabajadora estaba garantizada por las acciones propias de las leyes históricas del capitalismo.

En sus propias "leyes naturales", el devenir de los acontecimientos futuros de la sociedad capitalista, en su esencialismo intrínseco, le brindaba al proletariado el carácter de particularismo concreto, objetivo y con capacidad de despliegue universal.

> Kautsky nos presenta, de modo perfectamente explícito, una teoría de la creciente simplificación de la estructura social y de los antagonismos en el interior de la misma. La sociedad capitalista avanza hacia una creciente concentración de la propiedad y la riqueza en manos de unas pocas empresas; hay una rápida proletarización de los más diversos estratos sociales y categorías profesionales y una creciente pauperización de la clase obrera (p.40).

En ese contexto del capitalismo europeo, el "revisionismo", encabezado por Eduard Bernstein, comprendía que, en el espacio de la esfera política, particularmente en el marco de la disputa parlamentaria, la socialdemocracia alemana tenía la capacidad de ganar un espacio de mayor relevancia.

En la interpretación de Bernstein, se remarca una sobredeterminación y autonomía de la política por sobre las especificidades materiales y objetivas de un momento determinado de la historia. La introducción de la autonomía de lo político, respecto de la infraestructura, es la verdadera novedad de la intervención bernsteineana:

> Lo que enfrenta básicamente a revisionistas y ortodoxos no es, por tanto, la cuestión del reformismo. Tampoco lo es el problema de la transición pacífica o violenta del capitalismo al socialismo, punto respecto al cual, por lo demás, los «ortodoxos» estaban lejos de tener una posición clara y unánime. El punto central de divergencia es que, mientras para los ortodoxos la superación de la fragmentación y división propias de la nueva etapa capitalista había de ser la resultante de un movimiento de la infraestructura, para el revisionismo había de resultar de una intervención política autónoma (Laclau y Mouffe (2004 [1985], p.61).

En esa posición, en donde se hace referencia a la sobredeterminación de la política, pero separándola del "revisionismo" de Eduard Bernstein, podemos ubicar también a Rosa Luxemburgo, que sostenía la necesidad de una acción más audaz, postulando la necesidad de articular la huelga general, el partido y los sindicatos (Errejón, 2012, p.112).

En tercer lugar, respecto del "sindicalismo revolucionario", encontramos las argumentaciones de Georg Sorel, exponente del marxismo francés de ese momento. A partir de sus consideraciones determina una suerte de ruptura frente a la noción de estructuración de clases y su determinismo economicista, sin alcanzar plenamente la posición de "autonomía" de la esfera de "lo político" por sobre el "mecanicismo económico", representado en mayor medida por el pensamiento de Bernstein. Utiliza la noción de "polos de agregación", que posibilitarían la unicidad de diversos actores, comprendiendo la división dicotómica del entramado político y social:

> La posibilidad de disgregación de una forma de civilización está siempre abierta en su análisis. La *totalidad* como sustrato racional fundante se ha disuelto y lo que existe es "*mélange*". ¿Cómo concebir, en estas circunstancias, la posibilidad de un proceso de recomposición? A través de las clases sociales, que ya no ocupan el rol de localizaciones estructurales en un sistema objetivo, sino de polos de reagregación a los que Sorel denomina "*blocs*". La unidad que pueda existir en la sociedad es así referida a la voluntad de ciertos grupos de imponer su propia concepción de la

> organización económica. Esto supone, en primer término, que como el futuro es imprevisible y depende de la lucha, la filosofía de Sorel —que recibirá el impacto de Nietzsche y muy especialmente de Bergson— será una filosofía de la acción y la voluntad. Para Sorel, por tanto, la posibilidad de una división dicotómica de la sociedad no se da como dato de la estructura social, sino como construcción al nivel de los "factores morales" de los enfrentamientos entre los grupos (Laclau y Mouffe, 2004 [1985], pp.71-77).

Podemos sostener que la discusión teórica y política, que se presenta en el contexto de la Segunda Internacional, es un debate "a la defensiva". Esto por cuanto se trata de reconstruir la unidad de la clase obrera, que se encontraba en aquel entonces amenazada, como efecto y consecuencia de las diversas transformaciones políticas y económicas que tenían lugar en las sociedades capitalistas más avanzadas (Errejón, 2012, pp.112-113).

Laclau y Mouffe (2004, [1985]), luego de reconfigurar el debate que se desarrollaba en el pensamiento marxista de a principios del siglo XX y de contextualizar su correspondiente crisis, procuran indagar sobre el concepto de hegemonía rastreando su génesis. Eso los lleva a remitirse al escrito de Vladímir Lenin *Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática* (1986 [1905]).

En su desarrollo teórico previo a la revolución bolchevique, la concepción de hegemonía como fue formulada en el contexto ruso da cuenta de los límites de una civilización burguesa insuficientemente desarrollada. Esa situación obligó a la clase obrera a salirse de sí misma y realizar tareas que no le eran propias por su posición objetiva en el marco de las relaciones sociales.

Ahora bien, el problema ya no se presenta por cómo asegurar la unidad de la clase, sino por cómo dotar de un máximo de eficacia política a sus luchas, en un contexto histórico de debilidades estructurales de la burguesía para asumir sus propias tareas (Laclau y Mouffe, 2004 [1985], pp.79-80).

Lenin da cuenta de una anomalía, contrariamente a la secuencia esperable, un desajuste de la compresión "etapista" de las leyes históricas de Karl Marx. Por lo tanto, el proletariado se ve en la tesitura de realizar las tareas históricas de otra clase, de decidir si tomar el poder y llevar a cabo una alianza mayor que le exige integrar diferentes demandas, de los campesinos, militares, pequeños propietarios, y liderarlos políticamente (Errejón, 2012, p.113).

De esta manera, podemos comprender como para el leninismo la hegemonía es considerada una dirección política en el seno de una alianza de clases, siendo el campo de las relaciones de producción el terreno especifico de constitución de las clases. La presencia de estas en el campo político sólo puede concebirse como representación de intereses objetivos devenidos de su posición en la estructura material existente.

Esa interpretación enmarca una lógica de yuxtaposición de actores, en donde las clases se unen bajo el liderazgo de una de ellas. Se conforma una alianza contra un enemigo común y,

en esa unicidad circunstancial, en ningún momento se ven afectadas cada una de las identidades que constituyen la coalición (Laclau y Mouffe 2004 [1985], p.86).

En otras palabras, al asociarse con una pluralidad de intereses y reivindicaciones la clase obrera y su vanguardia política no se transforman ni sufren ninguna alteración en su propia identidad de clase. La alianza con otros actores es un paso necesario, y es considerada una "etapa transitoria" en la prosecución de sus propios intereses objetivos de clase.

Por lo tanto, la burguesía rusa había llegado tarde para asumir las tareas de la lucha contra el absolutismo. que históricamente le habrían correspondido. Entonces, estas fueron asumidas por el proletariado, que se transformó en el actor fundamental para su realización (p.86).

Debemos señalar que se presenta así un "desajuste" en el "paradigma etapista" de las leyes secuenciales de la historia presentadas por Karl Marx. La construcción hegemónica es concebida, entonces, como una yuxtaposición de actores, que deberán superar esa "anomalía" y reencauzar el camino "revolucionario", siendo liderado por la clase trabajadora, portadora ontológicamente de un carácter universal.

Todas las "soluciones" desarrolladas anteriormente, como la "ortodoxa marxista", el "revisionismo" y el "sindicalismo revolucionario", por más que sean diversas, compartían los grandes presupuestos en los que se basa la vía leninista. Ninguna renunciaba al principio de la determinación de lo político por lo económico ni tampoco al papel central que ocupa la "clase universal" que se representaba en el proletariado.

Por ejemplo, en el revisionismo, el acento está puesto sobre la conquista democrática del poder, y no es más que un medio encubierto de preparar el regreso a "lo económico". El carácter determinista se encuentra conservado, como también el rol del partido como herramienta para la lucha política, este representa siempre la manera de privilegiar los intereses de la clase obrera (Bollo, 2009, p.66).

Laclau y Mouffe, prosiguiendo su camino de indagación conceptual, analizan el pensamiento de Antonio Gramsci y su correspondiente noción de hegemonía. Este autor es considerado por los autores el punto de arranque, de partida para comenzar a transitar una reelaboración del concepto.

Gramsci comprende la hegemonía como una operación fundamentalmente cultural, a diferencia de Lenin, que la comprende en su aspecto puramente político, en donde el problema esencial es el desplazamiento, por la violencia, del aparato estatal de una clase determinada, siendo la sociedad política el objetivo.

En cambio, en Gramsci, podemos observar que la lucha política, el terreno principal de la disputa contra la clase dirigente, se sitúa en la sociedad civil. Cuando un grupo controla la

sociedad civil, se constituye como hegemónico, y la conquista de la sociedad política se sucede en la extensión de esa construcción hegemónica sobre el conjunto del Estado. Existe una primacía de la sociedad civil por sobre la sociedad política, mientras que en el análisis de Lenin la relación es a la inversa (Portelli, 1977 [1972], pp.70-71).

En términos históricos, por una parte, Lenin comprendía la hegemonía como una respuesta de carácter excepcional a una situación excepcional, es decir, la necesidad de que en Rusia el proletariado tomase en sus manos las transformaciones "burguesas", lo que generaba un solapamiento de etapas históricas, desordenando su sucesión "natural" y previsible. Por otra parte, para Gramsci, la hegemonía es la forma "normal" de la política en sociedades democráticas de masas, caracterizadas por sociedades civiles desarrolladas y mayormente complejas (Errejón, 2012, p.120).

La hegemonía en Gramsci se construye desde una visión de un proyecto histórico nuevo, de una tarea de articulación política de fuerzas sociales, que toma forma a partir de la capacidad intelectual propositiva, de seducción y de síntesis, creándose así una nueva identidad colectiva.

En relación con la supremacía de una clase en esa conformación hegemónica, no es una derivación del papel desempeñado en el proceso productivo, sino que ha de construirse en el terreno cultural y político. Esa misma tiene su lugar en el terreno de la sociedad civil, productora y generadora de un "sentido común" que naturaliza el orden social existente y, consecuencia, dominante (pp.120-122).

Gramsci define la hegemonía como "dirección política, intelectual y moral", el aspecto propiamente político consiste en la capacidad que tiene una clase dominante de articular sus intereses con los de los otros grupos. Así se convierte en el elemento rector de una "voluntad colectiva" y, en la dirección intelectual, subraya las condiciones necesarias para que dicha voluntad sea posible.

Para Gramsci, la hegemonía cohesiona, en un mismo bloque histórico, la sociedad civil y la política, teniendo los intelectuales el deber de contribuir mediante la difusión ideológica. Esta pasa por fases y tiempos diferentes (Rodríguez Prieto y Seco Martínez, 2007):

> (I) El cuerpo social se hace homogéneo y se reconoce en el terreno económico corporativo; (II) se amplía la solidaridad entre los miembros de la misma clase social. Desaparecen el aislamiento y la dimisión; y (III) los intereses corporativos sobrepasan sus límites y abarcan a otros grupos sociales […]. Hegemonía es hablar de imaginario social compartido. Si decimos que un determinado grupo social pierde hegemonía, lo que estamos haciendo es certificar que ya no cuenta con el respaldo del organismo social, que ya no es hegemónico (p.6).

Desde ese desarrollo de la concepción hegemónica en Gramsci, Laclau y Mouffe (2004 [1985]) subrayan la existencia de una ruptura con la teorización mecanicista y economicista del marxismo ortodoxo. Esa misma separación se visualiza en la comprensión entre la relación estructura y superestructura, en donde es concebida como una dependencia abierta, sin demarcaciones previas, posibilitando que emerja el carácter contingente del campo político y social.

Al mismo tiempo, al incorporar la articulación político-ideológica de fuerzas históricas dispersas y fragmentadas, se produce un desplazamiento al romper con la concepción reduccionista. Esa multiplicidad de voluntades, con objetivos heterogéneos, se incorporan en torno a un fin sobre la base de una común concepción del mundo (Giacaglia, 2002, p.154).

Laclau (2011) destaca como logro principal que Gramsci logra retomar y reconstruir un marco teórico en el cual la categoría de hegemonía vuelve a cumplir una centralidad distinguida en el proceso emancipatorio, desde una noción de "universalidad contingente". Esta se logra sólo a través de un "particular", por lo tanto, significa que requiere de la mediación y de las relaciones de representación.

La hegemonía entendida en sentido gramsciano, como articulación, amplía el campo de la contingencia histórica en el ámbito de las relaciones sociales, en tanto que los actores pierden la conexión esencial que los caracteriza en la concepción etapista. Y su sentido va a depender ahora de articulaciones desprovistas de la garantía que otorgan las leyes de la historia, careciendo así de toda identidad al margen de su relación con la fuerza que los hegemoniza (Giacaglia, 2002, p.154).

Ahora bien, la suposición del pensamiento gramsciano de la división del espacio social en dos campos presenta a la articulación hegemónica como una lógica de movilidad de la frontera que los separa. La existencia de dos campos puede ser, en ciertos casos, uno de los efectos de la articulación hegemónica, pero no la condición apriorística de la misma.

De esa manera, Gramsci se mantiene en la vieja concepción de que dicha construcción hegemónica opera siempre sobre la base de la expansión de la frontera interior de un espacio dicotómico.

En este punto, nos separamos de la concepción gramsciana, porque si suponemos la existencia de la unicidad del centro hegemónico, determinaríamos que "lo social" tiene un centro, pero nos resulta evidente que no es posible mantener la idea de unicidad, ya que entendemos la hegemonía como un tipo de relación política, no una "locación precisable" en el campo de una "topografía social" (Laclau y Mouffe, 2004 [1985], pp.181-183).

Asimismo, debemos comprender que el pensamiento de Gramsci, con relación al concepto de hegemonía, se presenta sólo como un momento de "transición" en la

deconstrucción del paradigma político esencialista del marxismo clásico, ya que el eje constituyente de toda articulación hegemónica continúa siendo una "clase social fundamental" (pp.181-182). Por lo tanto, en el pensamiento gramsciano, se sigue sosteniendo la concepción de existencia de un particularismo singularmente predestinado a desplegarse plenamente hasta conformarse en "universal".

Frente a esta situación, nos planteamos ir más allá de Gramsci, en pos de reconfigurar nuestra aprehensión teórica sobre la hegemonía y, al mismo tiempo, posibilitarnos iniciar un proceso de deconstrucción de la noción misma de "clase social".

En definitiva, conservaremos de Gramsci la "lógica articulatoria" y la "centralidad política" de los efectos de frontera, pero ponemos en cuestión en nuestro marco conceptual, desde la perspectiva de Laclau y Mouffe, el supuesto de la unicidad del espacio hegemónico y la concepción de los sujetos que se suscriben en el plano de las clases fundamentales.

Detrás del concepto de hegemonía, se esconde algo más que un tipo de relación política complementaria de las categorías básicas de la teoría marxista. A partir de él se introduce una lógica de lo social que es incompatible con estas últimas.

Frente al racionalismo del marxismo clásico, que presentaba a la historia y a la sociedad como totalidades inteligibles, constituidas por leyes conceptualmente explicitables, la lógica de la hegemonía se presentó como una operación suplementaria y contingente, requerida por los desajustes coyunturales respecto a un paradigma evolutivo cuya validez esencial o morfológica en ningún momento era cuestionada (p.27).

1.3. Hegemonía desde la perspectiva de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe

En el punto anterior hemos desarrollado los antecedentes del concepto hegemonía, realizando un breve recorrido histórico-teórico sobre sus orígenes en el pensamiento marxista. Ahora podemos avanzar en la perspectiva de Laclau y Mouffe, con la finalidad de precisar nuestro marco teórico, que guiará nuestra investigación a lo largo de esta tesis.

Es necesario comenzar señalando que, en el pensamiento de Antonio Gramsci, la hegemonía es producto y consecuencia de una articulación de diversos elementos sociales, en donde existe en ese entramado una clase social, un cierto particularismo con capacidad de despliegue "universal", que no es consecuencia íntegra de la práctica articulatoria o resultado de una lucha política determinada, sino que es un fundamento de carácter ontológico.

Este es el punto de partida y, al mismo tiempo, de quiebre y separación que nos posibilita resolver la distancia con relación al pensamiento de Gramsci, y así comenzar a precisar la comprensión de hegemonía que comenzamos a desarrollar (Laclau y Mouffe, 2004 [1985]).

El enfoque que nos proponen Laclau y Mouffe se funda en privilegiar el momento de la articulación política para la construcción y formación de una hegemonía. Y esa hegemonía, a partir de una relación entre entidades diferenciales, resulta posible cuando una fuerza social "particular" asume la representación de una "totalidad".

La hegemonía se nos presenta como construcción, siendo una forma de dominación política y social, a partir de que logra articular a una amplía cadena de equivalencias, de significados y una pluralidad de demandas sociales. Posee la capacidad de tendencia a universalizar determinadas ideas y valores particulares, de una manera que logra legitimarlas de forma exitosa. Entonces se alcanza a objetivar un nuevo sentido común (Fair, 2015, p.93).

Laclau (2011) establece a la hegemonía como una operación relacional, que se manifiesta en una totalidad significativa:

> Requiere la producción de significantes tendencialmente vacíos que, la inconmensurabilidad entre el universal y los particulares, permiten a estos últimos asumir la representación del primero […]. Para tener hegemonía necesitamos que los objetos sectoriales de un grupo operen como el nombre de una universalidad que lo trasciende, ésta es la sinécdoque constitutiva del vínculo hegemónico (p.64).

Desde esa perspectiva, asumimos que la relación hegemónica tiene una dimensión universalista, pero se trata de un particular universalismo, que posee rasgos distintivos:

> No es resultado de una decisión contractual, como en el *Leviatán* de Hobbes, puesto que el vínculo hegemónico transforma la identidad de los sujetos. No está necesariamente ligado al espacio público, como la noción hegeliana de "clase universal", puesto que las rearticulaciones hegemónicas comienzan al nivel de la sociedad civil. No se asemeja, finalmente, a la noción marxista del proletariado como clase universal, puesto que no resulta de una reconciliación humana final que conduciría a la extinción del Estado y al fin de la política; el vínculo hegemónico es, por el contrario, constitutivamente político (Laclau y Mouffe, 2004 [1985], pp.12-13).

La universalidad específicamente inherente a la hegemonía es el resultado de una dialéctica que denominamos "lógica de la diferencia" y "lógica de la equivalencia". Los actores sociales ocupan posiciones diferenciales en el interior de aquellos discursos que constituyen el tejido social, en tal sentido ellos son estrictamente hablando particularidades.

Ahora bien, cuando un conjunto de particularidades establece entre sí relaciones de equivalencia, sin que cada una de ellas pierda su particularismo, se transforma en la representación de una universalidad, es lo que denominamos "relación hegemónica" (p.13).

Por lo tanto, asumimos el carácter puramente relacional de toda identidad, y ella misma se construye a partir de su articulación en el interior de una formación hegemónica. Comprendemos que todo sistema de relaciones es inestable y no-fijo, es entonces que toda identidad se torna, consecuentemente, precaria, y, por lo tanto, provisoria y parcial (Giacaglia, 2002, p.155).

En el texto de Ernesto Laclau *Universalismo, particularismo y el tema de la identidad* (1995), el autor determina las diferentes formas históricas bajo las cuales ha sido pensada la relación entre universalidad y particularismo.

En primer lugar, subraya la concepción propia de la filosofía clásica antigua, en donde la relación se afirma en la existencia de una clara línea divisoria entre lo universal y lo particular, y que lo universal es enteramente comprensible por la razón. En tal situación es imposible la mediación entre universalidad y particularidad.

En segundo lugar, el cristianismo aparece como una posibilidad de pensar la relación entre cada uno. En él, la totalidad existe y pertenece a Dios, no a los seres humanos, por lo tanto, no es asequible a la razón humana. Lo universal es puro acontecer en una sucesión escatológica, que sólo se nos puede presentar a partir de la relevación.

Finalmente, durante la modernidad se interrumpe la lógica de Dios como fuente absoluta de todo lo existente, y entonces es sustituido en su función de garante universal por la Razón. Esta posee una lógica propia, muy diferente a la intervención divina, la principal diferencia consiste en que los efectos de un fundamento racional tienen que ser completamente transparentes para la razón humana.

En esta última relación, entre lo particular y lo universal, Laclau (1995) destaca:

> La última etapa de la hegemonía racionalista tuvo lugar cuando fue cerrada la brecha entre lo racional y lo irracional, a través de la representación del acto de su cancelación como un momento necesario en el autodesarrollo de la razón: ésta fue la tarea de Hegel y Marx, quienes postularon la total transparencia de la realidad para la razón gracias al saber absoluto (pp.42-43).

Laclau y Mouffe (2004 [1985]) argumentan que la relación hegemónica tiene como resultado una universalidad contaminada, ya que ella misma no puede escapar a la irresoluble tensión entre la universalidad y lo particular. En consecuencia, su función de universalidad hegemónica no está definitivamente adquirida, sino que, por el contrario, es siempre reversible.

Si concebimos que las identidades de los actores sociales son relacionales, y que la construcción universal plenamente suturada es un escenario imposible, nuestra perspectiva se desarrolla críticamente hacia las nociones de carácter esencialistas de la subjetividad.

Debemos destacar que nuestra cosmovisión se opone al racionalismo y al universalismo, intentando romper con toda forma esencialista que es determinista del ser. En donde se subraya que toda identidad social se encuentra predefinida de antemano en el proceso del devenir histórico. (Mouffe, 2007).

En ese sentido, Chantal Mouffe sostiene:

> Esta crítica del racionalismo y del universalismo, a la que a veces se califica de ´posmoderna´, es considerada por autores como Jürgen Habermas una amenaza al ideal democrático moderno. Afirman que existe un vínculo necesario entre el proyecto democrático de la Ilustración y su enfoque epistemológico y que, por consiguiente, criticar el racionalismo y el universalismo significa socavar los propios cimientos de la democracia. Esto explica la hostilidad de Habermas y sus discípulos hacia las distintas formas de posmarxismo, posestructuralismo y posmodernismo (2007, p.11).

Ahora bien, señalamos que lo universal emerge de lo particular, no como principio que fundamenta y explica lo particular, sino como un horizonte incompleto que sutura una identidad particular dislocada.

Destacamos que la constitución completa de una totalidad es imposible, porque la identidad de todo "sistema", que siempre es "espacial", tiene que referirse a un afuera constitutivo, el cual es la condición que la habilita e imposibilita su clausura completa y su identidad plena. La frontera excluyente es tanto condición de posibilidad como de imposibilidad de significado. Esa ambivalencia es denominada dislocación y se la describe como momento de negatividad, en donde un acontecimiento revela que las cosas podrían ser de otra manera (Marchart, 2009, pp.186-187).

Toda identidad es dislocada en la medida de que depende de un exterior que, a la vez que la niega, es su condición de posibilidad. Los efectos de la dislocación habrán de ser contradictorios, por un lado, amenazan las identidades, por otro, están en la base de la constitución de identidades nuevas (Laclau, 2000, p.55).

Laclau señala los efectos y consecuencias de una estructura dislocada:

> La dislocación de la que hablamos no es la de una máquina que ha dejado de funcionar por la falta de ajuste entre sus piezas, ya que se trata de una dislocación muy específica: aquella que resulta de fuerzas antagónicas […]. La dislocación abre la posibilidad de rearticulaciones múltiples e indeterminadas. Y la misma posibilidad de esta dislocación muestra el carácter de *mera posibilidad* del conjunto articulatorio que constituía la estructura anterior a la dislocación (2000, pp.56-59).

Esta explicación especifica un modo de concebir la relación entre lo universal y lo particular, y es aquí en donde señalamos los límites de la objetividad, al introducir los antagonismos no como relaciones objetivas, sino como un tipo de relación en la que se muestran los límites en la construcción de cualquier objetividad (Laclau, 1995, pp.45-46).

Desde el punto de vista de cada una de las fuerzas antagónicas, su oponente no es una presencia objetiva, que completa la plenitud de la propia identidad, sino que, por el contrario, representa aquello que hace imposible alcanzar semejante plenitud (Laclau, 2006, p.22).

Hay que destacar que el antagonismo se concibe como límite de toda objetividad, que impide la construcción de esa misma objetividad. Nos encontramos con un "exterior constitutivo" que bloquea la identidad del "interior" y que, a la vez, es condición para su constitución (Laclau, 2000, p.34).

En este último texto, Laclau suscribe, con relación al antagonismo, que la negación no procede del interior de la propia identidad, sino que viene en un sentido más radical, del exterior, y en tal sentido, es pura facticidad que no puede ser reconducida a ninguna racionalidad subyacente.

En este punto, avanzamos en la noción de antagonismo, y el autor se expresa sobre la compresión de su dimensión conceptual:

> En el caso del antagonismo […] lo que en él se expresa no es mi identidad sino la imposibilidad de construirla, la fuerza que me antagoniza niega mi identidad en el sentido más estricto del término […]. El "exterior" es por lo tanto un exterior radical, sin medida común con el "interior" […]. Nuestra tesis es que el antagonismo tiene una función revelatoria, ya que a través de él se muestra el carácter en última instancia contingente de toda objetividad (pp.34-35).

La teoría de antagonismo de Laclau y Mouffe, se constituye desde una concepción que apunta contra los postulados objetivistas del conflicto social que conciben los antagonismos como choques entre agentes sociales con identidades e intereses totalmente constituidos. Aquí, la tarea del analista político es describir las casusas, las condiciones y la resolución del conflicto (Howarth, 2008, p.322).

Ahora bien, Laclau y Mouffe (2004 [1985]) se preguntan ¿cómo tiene que ser una relación entre entidades para que una relación hegemónica sea posible? Subrayan que la condición inherente es que una fuerza social determinada, una particularidad, asuma la representación de una totalidad. Argumentan que la "universalidad hegemónica" es la única formación que una comunidad política puede alcanzar:

> Nuestro enfoque se funda en privilegiar el momento de la articulación *política*, y la categoría central del análisis político es, en nuestra perspectiva, la *hegemonía* […]. Su condición inherente es que una fuerza social *particular* asuma la representación de una *totalidad* […]. Nuestro análisis debe ser diferenciado de aquellos en los que la universalidad encuentra, en el campo social, una expresión directa, no mediada económicamente, y de aquéllos en los que las particularidades simplemente coexisten sin que sea pensable ninguna mediación, como en ciertas formas del postmodernismo […]. El posestructuralismo es el terreno en el que hemos encontrado la principal fuente de nuestra reflexión teórica y, dentro del campo posestructuralista, la deconstrucción y la teoría lacaniana […]. La noción de sujeto anterior a la subjetivización establece la centralidad de la categoría "identificación" y hace posible, en tal sentido, pensar en transiciones hegemónicas que son plenamente dependientes de articulaciones políticas y no de identidades constituidas fuera del campo político (pp.10-12).

En la noción de hegemonía que nos proponemos presentar, el contexto del entramado social es algo indeterminado y contingente. A diferencia de lo que anteriormente era dominado por una perspectiva estructuralista de las relaciones sociales, en donde existía una comprensión determinista del campo social, siendo este estático y plenamente constituido, con relación a una mediación económica en función de un modo de producción.

Laclau y Mouffe sostienen que el concepto de hegemonía supone un campo teórico dominado por la categoría *articulación*. Y esta misma presupone la posibilidad de especificar de forma separada la identidad de cada elemento articulado. La articulación es concebida como una práctica, y no como el nombre de un complejo relacional dado, implica alguna forma de presencia separada de los elementos que la práctica articula (pp.128-129).

Para ubicarnos firmemente en el campo de la articulación, Laclau y Mouffe expresan que debemos renunciar a la concepción de la sociedad como totalidad fundante de procesos parciales. Considerando así la apertura de lo social como constitutiva, como "esencia negativa" de lo existente, y a los diversos "ordenes sociales" como intentos precarios y, en última instancia, fallidos de domesticar el campo de las diferencias (pp.132).

Consideraremos articulación a toda práctica que establece una relación tal entre elementos, cuya identidad resulta modificada como producto de esa práctica. A la totalidad resultante de la "práctica articulatoria" la llamamos "discurso". Llamamos "momentos" a las posiciones diferenciales, en tanto aparecen articuladas en el interior de un "discurso". Llamamos "elementos" a toda diferencia que se articula discursivamente (pp.142-143).

Laclau (1993) señala la importancia de destacar como la tradición posestructuralista logró formular un enfoque sobre el poder político, centrado en la categoría de hegemonía.

Remarca la noción de “discurso” como una totalidad significativa que trasciende la distinción entre lo lingüístico y lo extralingüístico:

> Las luchas discursivas sobre las formas de fijar el significado de un significante como “democracia”, por ejemplo, son centrales para explicar la semántica política de nuestro mundo contemporáneo […]. Esta fijación parcial de la relación entre significante y significado es lo que se denomina, en estos trabajos, hegemonía […]. La configuración realmente existente es esencialmente contingente, que no puede ser explicada por la propia estructura, sino por una fuerza que tiene que ser parcialmente externa a la estructura. Éste es el rol de la fuerza hegemónica (p.15).

En esa concepción posestructuralista, los discursos no se reducen a los textos o intervenciones orales, sino que incluyen todas las prácticas que constituyen significado político a partir de determinados hechos sociales. Lo que buscamos es el marco de significación desde donde la realidad social es procesada, explicada y ordenada para generar determinados posicionamientos, y estos siempre parten de demandas o problemáticas sociales determinadas (Errejón, 2015, p.10).

La imposibilidad de una totalidad cerrada desliga la conexión entre significante y significado. En ese sentido, establece que hay una proliferación de “significantes flotantes” en la sociedad y la competencia política puede ser vista como intentos de las fuerzas rivales de fijar parcialmente esos significantes a configuraciones de significantes particulares. Esta fijación parcial de la relación entre significante y significado se denomina “hegemonía” (Laclau, 1993, pp.14-15).

Sobre el campo de lo discursivo podemos agregar que no se distingue entre prácticas discursivas y no discursivas. Todo objeto se constituye como objeto de discurso en la medida en que ningún otro objeto se da al margen de toda superficie discursiva de emergencia.

Toda distinción entre lo que usualmente se denominan aspectos lingüísticos y prácticos (de acción) de una práctica social, o bien son distinciones incorrectas, o bien deben tener lugar como diferenciaciones internas a la producción social de sentido, que se estructura bajo la forma de totalidades discursivas (Laclau y Mouffe, 2004 [1985], pp.144-145).

Laclau y Mouffe insisten en que la práctica de la articulación como el intento de fijación/dislocación de un sistema de diferencias tampoco puede consistir en meros fenómenos lingüísticos, sino que debe atravesar todo el espesor material de instituciones, rituales, prácticas de diverso orden, a través de las cuales una formación discursiva se estructura (p. 148).

Asimismo, las dos condiciones de una articulación hegemónica son la presencia de fuerzas antagónicas y la inestabilidad de las fronteras que la separan. Sólo la presencia de una vasta región de elementos flotantes y su posible articulación a campos opuestos –lo que implica la constante redefinición de estos últimos– es lo que constituye el terreno que nos permite definir a una práctica como hegemónica. Sin equivalencia y sin fronteras no puede hablarse estrictamente de hegemonía (p.179).

Construir el concepto de hegemonía no supone un mero esfuerzo especulativo en el interior de un contexto coherente, sino un movimiento estratégico más complejo, que requiere negociar entre superficies discursivas mutuamente contradictorias. El concepto de hegemonía supone un campo teórico dominado por la categoría de articulación (p.129).

La dimensión hegemónica de la política sólo se expande en la medida en que se incrementa el carácter abierto, no suturado, de lo social. La forma hegemónica de la política sólo se impone a comienzos de los tiempos modernos, en la medida en que la reproducción de las distintas áreas sociales se verifica en condiciones siempre cambiantes, que requieren constituir constantemente nuevos sistemas de diferencias, con los que se amplía inmensamente el área de las prácticas articulatorias. Se alejan así cada vez más las condiciones y la posibilidad de una pura fijación de diferencias, cada identidad social pasa a ser el punto de encuentro de una multiplicidad de prácticas articulatorias, muchas de ellas antagónicas (p.182).

Como habíamos señalado anteriormente, la universalidad que se constituye, y es inherente a una formación hegemónica, como el resultado de la dialéctica que se establece entre la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia, es una universalidad contaminada. Como ella no puede sortear la tensión irresoluble entre universalidad y particularidad, es entonces que su función de "universalidad hegemónica" no está nunca definitivamente adquirida, sino que es siempre reversible (p.14).

Una totalidad discursiva articulada, en la que todo elemento ocupa una posición diferencial, en la que todo elemento ha sido reducido a momentos de esa totalidad, toda identidad es relacional y dichas relaciones tiene un carácter necesario. Si la contingencia y la articulación son posibles, es porque ninguna formación discursiva es una totalidad suturada, y porque, por tanto, la fijación de los elementos no es nunca completa (p.144).

Nos parece interesante remarcar los aportes que señala Fair (2015), subraya las dimensiones de la hegemonía en los aspectos que hacen a la contingente y la precariedad:

> Debido a que no existe un orden "plenamente suturado", toda hegemonía presenta una dimensión contingente, que muestra su condición de "indecidibilidad" y de "historicidad" y, por lo tanto, su inherente "relatividad", "particularidad", "arbitrariedad" y "precariedad". En ese

> marco, junto a la existencia de antagonismos constitutivos, existe una subdimensión "incompleta" (Real) de lo social, vinculada al carácter "dislocado" y estructuralmente "desnivelado de lo social", que expresa su precariedad ontológica (p.96).

El mundo objetivo se estructura en secuencias relacionales que no tienen un sentido finalístico y que, en verdad, en la mayor parte de los casos tampoco requieren ningún sentido precisable. Basta que ciertas regularidades establezcan posiciones diferenciales para que podamos hablar de una formación discursiva (Laclau y Mouffe, 2004 [1985], p. 148).

Ahora bien, toda identidad es relacional pero el sistema de relación no consigue fijar un conjunto estable de diferencias, en la medida de que todo discurso es subvertido por un caso de discursividad que lo desborda. En tal caso la transición de los "elementos" a los "momentos" no puede ser nunca completa. El estatus de los "elementos" es el "significante flotante", que no logra ser articulado a una cadena discursiva. Y ese carácter flotante penetra finalmente a toda identidad discursiva, es decir social (p. 154). Una concepción que niegue todo enfoque esencialista de las relaciones sociales debe también afirmar el carácter de las identidades y la imposibilidad de fijar el sentido de los "elementos" en ninguna literalidad última (p. 132).

En el mismo texto, Laclau y Mouffe denominan "momentos" a las posiciones diferenciales, en tanto que aparecen articuladas en el interior de un discurso y llaman, por el contrario, "elementos" a toda diferencia que no se articula discursivamente. La práctica de la articulación consiste, por lo tanto, en la construcción de "puntos nodales" que fijan parcialmente el sentido. El carácter parcial de esas fijaciones procede de la apertura de lo social que, a su vez, es resultante del constante desbordamiento de todo discurso por la infinitud del campo de la discursividad (p.143).

Subrayamos que "la lógica relacional" es una lógica incompleta y está penetrada por la contingencia, la transición de los "elementos" a "momentos" nunca se realiza totalmente. En ese caso, no hay identidad que aparezca plenamente protegida de un exterior discursivo que la deforma y le impide suturarse plenamente (p.150).

Las relaciones, como conjunto estructural sistemático, no logran absorber a las identidades, pero como las identidades son puramente relacionales, estas no son sino otra forma de decir que no hay identidad que logre constituirse plenamente (p.150-151).

No obstante, creemos necesario comprender que toda lucha en un marco democrático emerge desde un conjunto de posiciones, de un espacio político relativamente suturado. Ese mismo espacio está formado por una multiplicidad de prácticas que no agotan la realidad referencial de los agentes del que forman parte. Asimismo, ese cierre relativo del espacio es necesario para la construcción de una discursividad antagónica, ya que la exclusión de una cierta

interioridad es requerida para la edificación de una totalidad que dicotomice el espacio social (p. 175-176).

En definitiva, para poder hablar de la existencia de una articulación hegemónica, hay dos condiciones necesarias: la presencia de fuerzas antagónicas y la consecuente inestabilidad de las fronteras que las separan. La posibilidad de elementos flotantes y su potencial articulación, en un campo opuesto, es lo que posibilita y permite definir a una práctica como hegemónica (p. 179).

En otras palabras, una formación hegemónica establece un tipo de orden que demarca el campo político y social, siempre en un estado de permanente de conflicto y contingencia. Las formas posibles de reproducción de ese orden se desarrollan en mecanismos discursivos, comprendiendo que el discurso es la práctica de construcción de significado político (Errejón, 2012, pp.2-3). Un actor se vuelve hegemónico cuando ha constituido un interés general que le permite presentar sus demandas y proyecto político como beneficio de toda la comunidad o de su gran mayoría (Errejón, 2015, p.9).

1.4. Las distintas perspectivas de las teorías de la acción colectiva

Desde las perspectivas de las Teorías de la Acción Colectiva, buscamos tener una lectura de la problemática asociativa desde un marco conceptual que nos posibilite encontrarnos con categorías que complejicen el análisis sobre las conductas de los actores y comprender qué los lleva a cooperar y actuar de forma colectiva.

El objetivo que nos trazamos en este apartado es el de reconstruir las diversas perspectivas que estudian los comportamientos asociativos.

En primer lugar, nos enfocaremos en aquellas teorías que se ubican en el estudio de la construcción de las *identidades*, que le brindan un fundamento y sentido a la acción. En segundo lugar, nos detendremos en aquellos enfoques que la comprenden como un medio para dirimir conflictos, localizándolas en aquellas que se orientan en la *movilización de recursos*. Por último, las teorías de las *oportunidades políticas* que sustentan que el accionar colectivo surge de los cambios que se suceden en el ambiente o el entorno social, y que brindan las posibilidades de movilización.

Desde las concepciones de las *identidades*, la acción colectiva es considerada resultado de intenciones, recursos y límites, con una orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones. Los actores colectivos "producen" la acción colectiva, porque son capaces de definirse a sí mismos y al campo de su acción (Melucci, 1991, p.358).

El reconocimiento de una “comunidad de intereses” constituye el ámbito en donde el vínculo entre los actores y su interacción se traduce en una organización potencial que puede derivar en acciones colectivas, explotando y estimulando los sentimientos de pertenencia (Tarrow, 1997, p.24).

La identidad de un determinado actor social resulta, en un momento dado, de una especie de transacción entre el autorreconocimiento y el heterorreconocimiento. La identidad concreta se manifiesta bajo configuraciones que varían según la presencia y la intensidad de los polos que la constituyen. Por lo tanto, la identidad no es una esencia, un atributo o una propiedad intrínseca del sujeto, sino que posee un carácter intersubjetivo y relacional (Giménez, 1997, p.12).

La unidad distinguible que se aborda está dada por actores sociales –individuales o colectivos– que entran en juego en el análisis de la polaridad constante que se establece entre los procesos de auto y heterorreconocimiento.

Los sujetos no sólo se distinguen de los demás por la enumeración de aquellos rasgos distintivos que, a partir de la autoidentificación, son capaces de establecer como fundamento de su identidad personal, sino que, paralelamente, deben contar con un reconocimiento intersubjetivo de estos elementos distintivos (Ruiz, 2014, p.176).

Al proceso mediante el cual los actores producen la unidad de un sistema de acción lo denominamos “identidad colectiva”. La identidad colectiva sería, entonces, una identificación interactiva y compartida-producida por individuos o grupos, y que se refiere a las orientaciones de la acción y al campo de oportunidades en el cual tiene lugar (Amparán, 2007, p.87).

Comprendemos desde esta perspectiva que las creencias y las motivaciones de los actores no son producto exclusivamente subjetivo, sino que se conforman hacia el interior de las colectividades en las cuales se constituyen un sistema de relaciones.

La ruptura de esquemas reduccionistas en la propuesta sociológica de Alberto Melucci lo ha conducido a pensar la acción colectiva como fruto de una compleja dinámica donde su edificación está anclada en un contexto social y cultural en el que la solidaridad, la construcción de sentido y la identidad son factores clave. De esa manera, nos ofrece una serie de puntualizaciones teóricas donde el eje central reside en entender que la identidad colectiva no es una simple entelequia subyacente a la acción colectiva, es necesario concebirla como un proceso (Pineda, 2016, pp.200-201).

La configuración identitaria engloba desde los procesos de identificación de los actores con una categoría de pertenencia, base necesaria para dar lugar a la acción, hasta la constitución de redes de conocimiento mutuo e interacción entre los miembros del colectivo y el mundo social (Schuster, 2011, p.19).

Al mismo tiempo, la forma organizativa de la acción es la manera a través de la cual el actor colectivo busca darle una aceptable y duradera unidad a un "nosotros", más o menos estable e integrado con el tipo de acción (Melucci, 1991, p.358).

Paralelamente, podemos comprender que las acciones que devienen de un marco organizativo no son un fenómeno empírico, y que su unidad, si existe, debe ser abordada como un resultado, no como punto de partida, no una evidencia sino un hecho que debe ser explicado (pp.357-359).

Con cierto contraste, Alain Touraine (1969) subraya que el análisis social, partiendo de la conciencia histórica de la propia praxis humana, debe aproximarse a la realidad observable a través del estudio de los sistemas sociales, de las conductas o de las decisiones tomadas por un actor, individual o colectivo, en un contexto determinado y de las expresiones simbólicas utilizadas por los actores (p.68).

Por lo tanto, se resalta el trasfondo cultural de la producción simbólica del individuo en su accionar colectivo y, al mismo tiempo, como su concepción se inserta en un campo de confrontación social. Al respecto, Pineda sostiene:

> El trabajo teórico de Alain Touraine constituye una referencia obligada al hablar de la movilización social en las sociedades contemporáneas […]. La elaboración de una teoría en la que se subrayan las dimensiones estructurales y culturales de la sociedad, y en segundo, una construcción teórica sobre la acción colectiva inserta en un campo de confrontación […]. Toda identidad nace del conflicto, el cual constituye y organiza al actor. De la misma manera, los actores colectivos son definidos a partir del campo de relaciones sociales […]. Todo actor colectivo, señala, está inserto en un campo de disputa por el sistema de acción histórica o principio de totalidad, lo cual significa que cuenta con una visión societal diferente a las dominantes (2016, pp.196-197).

Destacamos la idea de *identidad* no sólo para comprender la generación de frentes comunes sino también para comprender la manera en que las autorrepresentaciones impactan sobre las articulaciones políticas. La identidad ayuda a comprender la manera en que se van construyendo y manteniendo los posicionamientos y lineamientos políticos a lo largo del tiempo (Beltrán, 2012, p.85).

Desde la perspectiva de las teorías de la *movilización de recursos*, los intereses en juego son vistos como preexistentes a la acción. De esta concepción, tomamos específicamente las categorías de análisis vinculadas a la movilización de los actores, en función de sus capacidades de recursos, que les posibilitan posicionarse desde un lugar de fortaleza para la defensa de sus objetivos.

La teoría de la movilización de recursos postula que la acción colectiva se origina con relación a los propios recursos disponibles, sean estos materiales o no, para la organización y para llevar adelante la propia acción. Es así como se pone el acento en las cuestiones de índole organizativo y se atiende la formación y el desarrollo de la acción.

La comprensión social desde esta visión es que el proceso de movilización se conforma, por un lado, alrededor de individuos insatisfechos con un orden, que acumulan fuerzas y desarrollan estrategias para incrementarla y, por otro lado, por actores que defienden el orden y manejan el control social porque son ellos los que controlan los recursos que están en juego (Tarrés, 1992, p.745).

La movilización de recursos es la disputa por los propios recursos, sean materiales o no, por el cual los actores pugnan entre sí y generan diferentes tácticas con relación a posicionarse mejor en la controversia o conflicto.

Los teóricos de la movilización de recursos consideran a las organizaciones sociales como una prolongación de actuaciones institucionalizadas, restringiendo el campo de análisis a los actores que pretendan alterar o cambiar la estructura social y la distribución en las capacidades de operar sobre la realidad (McCarthy y Zald, 1973).

Por último, las teorías de las oportunidades políticas y los repertorios de la acción colectiva surgen de los procesos políticos y de los cambios en las oportunidades para la protesta que ofrece el contexto (Tarrow, 1998).

En esta perspectiva de análisis, Charles Tilly (2000) define cuatro aspectos de la acción colectiva: primero, siempre ocurre como parte de la interacción entre personas y grupos antes que como performance individual. Segundo, opera dentro de los límites impuestos por instituciones y prácticas existentes y los entendimientos compartidos. Tercero, los participantes aprenden, innovan y construyen historias en el propio curso de la acción colectiva. Cuarto, cada forma de acción colectiva posee una historia que dirige y transforma usos subsecuentes de esa forma.

Es así como se hace referencia a la existencia de históricas redes solidarias previas a la acción colectiva, en donde se puede observar un repertorio cultural previo a la organización y su acción posterior.

Sydney Tarrow (1998) sostiene que el poder de la acción colectiva procede de tres características potenciales: desafío, incertidumbre y solidaridad. Los desafíos a las autoridades pueden producir costos desconocidos, su poder procede, en parte, de la impredecibilidad de su resultado y de la posibilidad de que otros se sumen a ellos. La solidaridad interna sustenta el desafío y sugiere la posibilidad de una ulterior disrupción.

Por lo tanto, siguiendo la argumentación de Tarrow, los oponentes, y los propios aliados, los actores miembros de una organización determinada responden no sólo en función de la agresividad del desafío y la incertidumbre que este evoca, sino de la solidaridad que perciben en la acción que desarrollan. Siendo esta misma, la acción colectiva, el momento más activo en la interacción entre los propios actores de la organización.

Desde esta concepción, la cuestión de la acción colectiva es estrictamente social, no individual, y la organización que busca posicionar sus reclamos y demandas no se encuentra solamente desafiando la coacción o una autoridad determinada, sino que también se enfrenta a su propia supervivencia como actor, que dependerá de su capacidad de éxito frente a su oponente en el transcurso del conflicto.

Aquí es donde se presentan dos retos a superar, en primer lugar, la capacidad de la propia organización de llevar adelante la acción colectiva y, en segundo lugar, la aptitud de poder sostenerla en el tiempo que sea necesario, afín a sus intereses u objetivos planteados.

1.5. Sobre el objeto de estudio

El marco teórico elaborado a lo largo del capítulo incorpora las categorías necesarias para la construcción de nuestro objeto de estudio, con el propósito de abordar nuestra problemática en el desarrollado de los próximos apartados.

En ese sentido, la construcción de la periodización que realizaremos a lo largo de la tesis busca delimitar un espacio temporal determinado, posibilitando la reconfiguración de un proceso histórico, con el objetivo de poder articularlo con nuestra perspectiva teórica-conceptual.

Nos proponemos abordar el contexto de restricción externa, que comienza a manifestarse plenamente sobre la economía argentina hacia finales del período 2003-2015 y cómo este repercute de forma significativa sobre el campo sectorial -capital y trabajo- tendiendo agudizar las tensiones en torno a la puja distributiva y, por consecuencia, hacia el interior de la propia hegemonía constituida a comienzos de la etapa.

Por lo tanto, para atender la articulación política del kirchnerismo con los actores del empresariado y las organizaciones de trabajadores, incorporamos el concepto de hegemonía como instrumento de análisis, con el objetivo de comprender los distintos ordenamientos políticos y sociales que se constituyen durante el periodo.

Al mismo tiempo, la “lógica hegemónica” nos brinda la posibilidad de analizar la desarticulación de la hegemonía neoliberal, predominante durante el transcurso de la década de los noventa y que abre paso a un nuevo orden político. En ese escenario, el kirchnerismo se

presenta como una expresión antagónica, a partir de su propia composición social que le posibilita su sustento y en la orientación de sus políticas económicas.

Ese antagonismo cobrará mayor volumen y fortaleza durante el primer ciclo del periodo, en donde el kirchnerismo como fuerza política, logra desplegar un discurso que le permite articular una lógica equivalencial de demandas constitutivamente heterogéneas, cobrando así un sentido de oposición al orden neoliberal en descomposición.

En paralelo, las Teóricas de la Acción colectiva se introducen en nuestro marco teórico con el objetivo de analizar los comportamientos de las organizaciones representativas del empresariado como también de los trabajadores.

Nuestro enfoque pretende analizar los repertorios acción colectiva de los diversos actores del ámbito laboral, desde una interpretación que pone su énfasis en la construcción de identidad, en los procesos de formación y desarrollo de las acciones, y como estos mismo tienen lugar con relación al entorno y a ambiente social.

De esta manera, los aspectos teóricos y conceptuales de nuestra investigación ponen su foco de estudio en las prácticas subjetivas, habiendo resaltado para su análisis las categorías que constituyen el concepto de hegemonía y las teorías que abordan el accionar colectivo.

Capítulo II

Los inicios de la posconvertibilidad, contexto de crisis y proceso de dislocación (2002-2003)

2.1. Características generales de la crisis del régimen de convertibilidad

Desde finales de diciembre 2001 hasta la devaluación del tipo de cambio, a comienzos de 2002, cuando se abandona definitivamente el régimen de convertibilidad, se configura un momento de ruptura, que se expresa en la dislocación del orden establecido, y se inicia así un proceso de desarticulación de la hegemonía neoliberal.

Es entonces que la visualización de la contingencia de ese mismo orden posibilita el acontecimiento de una incipiente articulación contrahegemónica, que, irrumpiendo en el campo político y social, procurará estar en condiciones de disputar la conformación de un nuevo patrón de crecimiento.

El contexto de crisis de diciembre de 2001 fue el resultado de un conjunto de políticas que se basaron principalmente en un incremento considerable del endeudamiento externo, en la privatización masiva de las empresas públicas y el sistema de jubilaciones y pensiones.

Además, se estimuló el ingreso indiscriminado de las importaciones, por la conjugación del retraso cambiario y el desmantelamiento de aranceles y trabas no arancelarias. Esto último desarticuló gran parte del entramado industrial, que desembocó en un contexto de alto desempleo, de pobreza e indigencia.

La desregulación del comercio exterior, a partir de una apertura económica indiscriminada, erosionó las bases del aparato productivo y moldeó una nueva sociedad en donde el eje laboral perdía peso a instancias de un modelo basado en la valorización financiera.

El régimen de convertibilidad, que dominó a lo largo de la década de los noventa, representó un modo brutal de reprimir y erradicar por completo el conflicto distributivo, que se manifestaba en aquel entonces en la vertiginosa espiral de precios y salarios que condujo a la hiperinflación de 1989 y 1990 (Amico, 2008, p.40).

Luego de diez años, las consecuencias y el cúmulo de derivaciones y efectos de la política económica desembocarían en un estallido social sin precedentes en la historia moderna de la Argentina.

Denominar el periodo que comienza en enero de 2002 como “posconvertibilidad” nos permite delimitar un anclaje temporal, que está determinado por el inicio de una etapa de

cambios en materia de política económica. Significa un punto de quiebre, que nos servirá para nuestro desarrollo y análisis de los meses más próximos y posteriores al régimen fijo de paridad cambiaria que nos proponemos caracterizar en este capítulo.

Al mismo tiempo, creemos que luego del estallido de finales de diciembre de 2001, una vez renunciado el gobierno de la Alianza, comienzan a desplegarse con mayor notoriedad las diversas fracciones que pugnan por definir la política económica a seguir. Y también se evidencia como esos mismos sectores procuran tomar acciones que influyan en las decisiones del nuevo gobierno de transición de Eduardo Duhalde.

A partir de la devaluación de enero de 2002, y los consecuentes posicionamientos de los sectores empresariales y de las organizaciones del trabajo con relación a la política económica a seguir en ese periodo, se abre una instancia de conflictos entre las distintas fracciones del capital.

Buscamos dar cuenta en este capítulo, de cómo en ese contexto de crisis de hegemonía y, particularmente, en esa coyuntura de ruptura y dislocación, previa y posterior a la devaluación, que tiene como protagonista a la política cambiaria, los sectores del trabajo jugaron un rol de secundario, con escasa posibilidades de influir en las distintas lógicas articulatorias respecto de los sectores empresariales.

Destacamos que la exigua capacidad de despliegue político y de recursos de movilización para influir y presionar sobre las distintas fracciones del capital y sobre el gobierno de transición, encabezado por Eduardo Duhalde, se encontraban disminuidos como consecuencia de la política económica y laboral de la década anterior.

Hay que destacar que las orientaciones que se presentan como alternativas a las políticas desarrolladas por los gobiernos neoliberales nacen desde el interior de los propios partidos dominantes del sistema político, como es el caso del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, protagonistas de las políticas económicas que condujeron al estado de crisis.

Nos proponemos comenzar a analizar los respectivos posicionamientos y las distintas acciones colectivas que empiezan a desarrollarse en la arena política y social, por parte de las agremiaciones empresariales, de los sectores trabajadores y de las fuerzas político-partidarias durante la etapa del gobierno de transición.

Creemos necesario subrayar que el conflicto político se desarrollará desde un comienzo entre los sectores que se manifiestan a favor de sostener la convertibilidad, en pos de una futura dolarización de la economía, y los que incitarán a una devaluación del tipo de cambio. Esta confrontación es el eje característico del periodo desde un principio.

2.2. Los comienzos del gobierno de transición y el resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal

En el lapso que tiene lugar entre diciembre de 2001 y comienzos de 2002, empieza a tomar relieve y fuerza una crisis de hegemonía hacia el interior del consenso neoliberal, constituido sólidamente en el transcurso de la última década del siglo XX.

Ese consenso comienza a resquebrajarse por las discrepancias vinculadas con el régimen de convertibilidad, es decir, en función del tipo de cambio. Podemos observarlo con nitidez hacia el interior del sector empresarial, en donde comienzan a desplegarse distintos intereses que se tornan antagónicos por el modo de encarar la salida del régimen de paridad cambiaria.

Para comenzar a delinear esa periodicidad temporal, debemos sostener primeramente que la crisis de comienzos del siglo XXI se presenta con desequilibrios que son de carácter político-institucional, social y económico. Todos ellos se manifiestan en los turbulentos meses finales de 2001 y comienzos de 2002, teniendo lugar la irrupción y el surgimiento de diversas protestas por parte de diferentes sectores sociales.

Los acontecimientos sucesivos de aquellos días, que precipitaron la renuncia anticipada del presidente De la Rúa, presentaron la necesidad de dar una respuesta institucional al contexto de crisis y de convulsión social que existía en el país.

Finalmente, ante el fallido intento de Rodríguez Saá para afirmar su gobierno, se realizó un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios y comenzó a elaborarse un principio de salida a través de un gobierno de transición encabezado por Eduardo Duhalde.

Debido a la existencia de diversos intereses en pugna sobre cómo orientar la política económica durante el periodo siguiente a la convertibilidad, el ascenso del presidente Eduardo Duhalde –además de representar el acuerdo entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, con eje principalmente en la provincia de Buenos Aires– encarnaba las peticiones, presiones y demandas de las entidades empresarias que pretendían una devaluación en materia cambiaria.

Los intereses de los actores empresarios eran divergentes en torno a las propuestas de salida del régimen de convertibilidad (Basualdo, 2001, 2002; Castellani y Schorr, 2004; Gálvez, 2012; Varesi, 2014). Por un lado, estaban quienes presionaban por una devaluación, sectores vinculados a la industria y a la actividad agropecuaria, principalmente, que buscaban recuperar su rentabilidad y capacidad competitiva. Por otro lado, los sectores representantes del capital financiero internacional y de las empresas de servicios públicos se posicionaban a favor de la

dolarización interna de la economía, en pos de mantener sus ganancias y activos a valor internacional.

Creemos que el consenso empresarial que posibilitó el sustento y las bases necesarias para el desarrollo de las políticas neoliberales, con la consecuente política cambiaria del régimen de convertibilidad, encontró sus apoyos en los más amplios sectores empresariales locales, en las más diversas actividades económicas y en el fuerte respaldo del capital extranjero, vinculado principalmente a la especulación financiera. Esto nos posibilita comprender no solo la heterogeneidad de esos actores y sus intereses, sino también el proceso de articulación alrededor de un tipo de paridad cambiaria rígida que tuvo su desarrollo durante una década.

Los entramados políticos que se sucedieron a partir del mes de septiembre de 2001, con relación al manejo del tema cambiario, generaban agrupamientos de diversas agremiaciones empresariales en función de la defensa de sus intereses, frente a un modelo de valorización financiera, basado en el endeudamiento externo que era cada vez más difícil de sostener por del encarecimiento del crédito internacional y por las propias posibilidades de repago de la Argentina.

Las articulaciones entre distintos actores tenían como objetivo presionar sobre la política económica del gobierno nacional. Diversas acciones en materia de acción colectiva y de reacomodamientos tácticos desde el sector empresarial comenzaron a sucederse en el transcurso de los últimos meses de 2001.

Durante el mes de diciembre, la Unión Industrial Argentina (UIA) había elaborado una propuesta que buscaba recobrar la competitividad perdida del sector. Para ello, la entidad empresaria era partidaria de una devaluación, que le proporcionaría una recuperación en la rentabilidad industrial, a partir de la depreciación de sus precios en dólares, reduciendo así sus costos de producción, modificando los precios relativos de la economía y de esa manera lograr que los precios industriales crecieran por encima de los precios de los servicios (Salvia, 2015, p.182).

Como señalábamos anteriormente, la discusión alrededor del tipo de cambio en el sector empresario había motivado diversas disputas, y ese conflicto se había trasladado hacia el interior del Grupo de los Ocho[1], asociación que reunía a las principales entidades de diferentes actividades.

Entre sus representantes más destacados se encontraban Jorge Di Fiori, de la Cámara Argentina de Comercio; Julio Gómez, de la Asociación de Bancos de la República Argentina;

[1] Montenegro, M. y Cufré, D. (19 de agosto de 1999), "Reportaje exclusivo a Roberto Rocca, el industrial más poderoso de la argentina. 'El tipo de cambio no es un problema'", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/1999/99-08/99-08-19/pag03.htm (Fecha de acceso, 07/05/2017).

Claudio Sebastiani, de la UIA; Julio Macchi, de la Bolsa de Comercio; Gregorio Chodos, de la Unión Argentina de la Construcción; Eduardo Escassany, de la Asociación de Bancos de Buenos Aires; Enrique Crotto, de la Sociedad Rural Argentina, y Aldo Roggio, de la Cámara Argentina de la Construcción.

Posteriormente, los diferentes posicionamientos en el ámbito empresarial precipitaron la ruptura de la asociación patronal, lo que dio lugar a la conformación del denominado Grupo Productivo, compuesto por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Esas entidades patronales que se separaban del Grupo de los Ocho, revelando así una fractura en la cúpula empresarial, se pronunciaban de manera crítica respecto del "proyecto financiero", y argumentaban en contra de los pilares neoliberales, como la no participación del Estado en los asuntos económicos, las desregulaciones sobre las actividades de orden financiero y el desmantelamiento de la estructura productiva del país. Reclamaban proteger el mercado interno, impulsar el "compre nacional" y retomar un "proyecto productivo" (Merino, 2014, pp.10-12).

El escenario que se configura hacia diciembre de 2001, caracterizado por las tensiones de orden político y económico, da cuenta y hace visible la crisis de la fase neoliberal. El devenir de la situación social pone de manifiesto la incapacidad de resolver ese contexto a través de una recomposición del orden hegemónico prevaleciente en la década de los noventa.

Esa escisión hacia el interior del bloque empresarial, que hasta entonces había permanecido compacto en torno al régimen cambiario, en el denominado Grupo de los Ocho, a pesar de sus diversos intereses en la economía del país, ahora entraba en una situación de fractura. El Grupo Productivo ponía de relieve esa situación, aislándose de las fracciones del capital que defendían la continuidad del régimen cambiario y una futura dolarización.

A partir del contexto económico recesivo, que comenzó a extenderse con mayor notoriedad hacía finales de 1998, las asociaciones empresarias perjudicadas por las políticas económicas desarrolladas hasta entonces comenzaron a manifestar sus demandas de cambio de orientación presionando sobre las decisiones del gobierno. Es así como la "comunidad de negocios" (Cantamutto, 2015) que había sostenido el régimen de convertibilidad durante una década se disgregó con la aparición del Grupo Productivo.

Bajo el liderazgo de la UIA, surgió esa fragmentación en el ámbito empresarial, que se sostendría posteriormente en el transcurso del gobierno de transición, que tiene origen en enero de 2002. Ese grupo empresario tendrá un gran protagonismo e influencia en las políticas que se llevarán adelante y será participe también en la conformación del gabinete presidencial.

De esa forma, el sector que propiciaba la devaluación hacia finales de diciembre de 2001 sostenía posiciones críticas respecto de la convertibilidad y enfatizaba en sus intervenciones públicas la necesidad de direccionar la política económica hacia los aspectos vinculados a la producción, posicionándose en contra de los sectores financieros (Gálvez, 2012, pp.182-184).

Ahora bien, en el ámbito de los actores del trabajo, el protagonismo con relación a los posicionamientos en contra del régimen de convertibilidad y de oposición a las políticas económicas de la década del noventa estaba representado en mayor medida y en su capacidad de acción colectiva y presión por el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), conducido por Hugo Moyano, y en un segundo orden, podemos ubicar a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Víctor De Gennaro.

Estos dos nucleamientos, en el orden sindical de los trabajadores, tomarán distintas posturas y caminos en torno de como desplegar su oposición a las políticas desarrolladas en un primer momento por el gobierno de Fernando de la Rúa y, posteriormente, por la gestión de Eduardo Duhalde.

Sus disimiles acciones pueden fundamentarse a partir de sus respectivos apoyos y sus diferentes lógicas de acción. El MTA era una organización interna de la CGT, próxima al Partido Justicialista, y su concepción de acción involucraba a los trabajadores privados registrados, mayoritariamente.

En cambio, la CTA provenía de experiencias políticas diferentes, y su inserción gremial se daba principalmente entre los trabajadores del ámbito estatal, como es el caso de su principal gremio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y su vinculación con las organizaciones de desocupados, que le permitió además desarrollar una militancia territorial de gran presencia en los barrios de la provincia de Buenos Aires.

Se debe señalar que el MTA surge en 1994, conformado por un conjunto de gremios liderados por los trabajadores nucleados en las actividades de transporte, en particular por camioneros y colectiveros. Esa organización interna dentro del movimiento obrero tomó la decisión de conformar en un principio una nueva corriente interna de oposición, que no respondía a la conducción oficial, pero que se proponía disputar la jefatura de la CGT.

En un comienzo procuró mantener el principio de unidad y fortaleza (Palomino, 2005) del movimiento obrero, basándose en la concepción de que el mismo debe estar reunido bajo una sola central. Esta cuestión se puso finalmente en discusión con la ruptura del movimiento obrero que dio origen a diversas centrales de trabajadores.

El 16 de marzo de 2000, se dividió la CGT y quedó finalmente constituida la CGT disidente de Hugo Moyano, que realizará el primer paro nacional contra el gobierno de la Alianza el 5 de

mayo de ese mismo año, en contra de las políticas económicas neoliberales, el ajuste y la flexibilización laboral (Merino, 2012, p.93-94).

La profundización de las políticas de desindustrialización generó que los sindicatos de los mecánicos (SMATA) y de los metalúrgicos (UOM), que hasta entonces se encontraban por fuera del MTA, tomaran la decisión de fracturar la conducción de la CGT, desequilibrando las relaciones de fuerza a favor de la central conducida por "los disidentes" en una primera etapa.

Por otro lado, se encontraba la CGT oficial conducida por Rodolfo Daer, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), en conjunto con los denominados "gordos", representados por Armando Cavallieri, del Sindicato de Comercio, Carlos Ocampo, en representación de los trabajadores de la Salud y Oscar Lescano, de Luz y Fuerza.

Ese conjunto de gremios, que constituían la CGT oficial, poseía un alineamiento más cercano al Grupo Productivo (Merino, 2012, p.95). Mientras que la CGT disidente mantenía una relación distante con este grupo empresario, de cierto carácter táctico, compartían algunas posiciones, ya que ambos se oponían al "proyecto financiero", a la convertibilidad y a los intentos de dolarización de la economía.

A finales de 2001, la CGT oficial y el Grupo Productivo presentaban un documento en conjunto en el que mostraban su preocupación por la crisis económica y solicitaban distintas medidas que garantizaran la sostenibilidad en el empleo y la recuperación de la demanda interna, vía aumentos salariales y la recuperación de la competitividad perdida a causa del régimen cambiario. En el comunicado también se sumaba la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).[2]

En ese documento, presentado por el Grupo Productivo, la CGT oficial y las asociaciones de bancos, se traslucen las diferencias entre los distintos sectores representativos del capital, como también de los sectores del movimiento obrero organizado.

Esa solicitada en conjunto tenía como propósito conformar una mesa de diálogo común entre los distintos sectores empresariales, de las más diversas actividades, y los representantes de los trabajadores. El objetivo planteado era construir una concertación de carácter plural frente a la situación que atravesaba el país. Puede observarse así la difícil situación parar consensuar políticas comunes entre las distintas entidades representativas del capital y el trabajo.

Desde la posición de los trabajadores, se destacaba el eje sobre el consumo en pos de la reactivación de la actividad económica, mientras que el sector liderado por la UIA pretendía un cambio de orientación económica, que se dirigiera hacia la "productividad" y los sectores

[2] "Empresas y gremios, por la unidad" (1 de diciembre de 2001), *Clarín*. Disponible en https://www.clarin.com/economia/empresas-gremios-unidad_0_SJYzCvLlAte.html (Fecha de acceso, 20/05/2017).

representantes de los capitales financieros extranjeros y locales, por su parte, ejercían presiones para profundizar las políticas de ajuste fiscal y, al mismo tiempo, alcanzar una instancia de profundización de la convertibilidad, pujando en favor de la dolarización.

A partir de la asunción de Eduardo Duhalde a la presidencia de la Nación, y con la conformación de su gabinete de gobierno, se asume en gran parte la agenda política-sectorial representada por el Grupo Productivo, conducido por la UIA y que incluía, en una menor medida, las demandas llevadas adelante por la CGT oficial.

En el orden estrictamente de la representación en el ámbito laboral, podemos dar cuenta que la asunción de Alfredo Atanasof como ministro de Trabajo, un hombre ligado estrechamente a la CGT oficial se incorpora a ese sector del movimiento obrero dentro de la coalición de gobierno, recibiendo así el apoyo del grupo de los "gordos" (Merino, 2012, p.104). Una de las primeras medidas que se toman en materia de legislación sobre el mercado de trabajo es determinar la doble indemnización en los despidos sin causa, demanda reclamada por el sector de los trabajadores.

El gobierno nacional comenzaba articular políticamente de manera directa con las organizaciones sindicales, desde una posición mucho más cercana, ya que estas tenían un representante de su sector en el gabinete de ministros.

La CGT oficial, conducida por Rodolfo Daer, mostraba su apoyo como actor sectorial y parte del Grupo Productivo, mientras que la CGT disidente, encabezada por Hugo Moyano, mantenía su distancia, pero apoyando los ejes discursivos desarrollados por el gobierno en su orientación productivista y en contra de los sectores vinculados a la actividad financiera.[3]

Asimismo, en representación del sector empresario, y como miembro del Grupo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, líder de la UIA, se incorporaba también al gabinete de gobierno, ocupando el Ministerio de Producción.

Las ideas sobre cómo salir de la convertibilidad se sintetizaban en cuatro ejes fundamentales: la devaluación del peso, el congelamiento de tarifas de servicios públicos, la licuación de deudas mediante su pesificación y el establecimiento de derechos de exportación.

Desde un punto de vista estrictamente político-partidario, la conformación del gabinete del gobierno de transición de Eduardo Duhalde se configuró, predominantemente, con representantes del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y con la participación de dos radicales, en los ministerios de Justicia y Defensa. Esto reflejaba los correspondientes acuerdos establecidos en el marco institucional de la Asamblea Legislativa.

[3] "Reclamo de Daer y Moyano", (08 de enero de 2002), Clarín. Disponible en https://www.clarin.com/politica/reclamo-daer-moyano_0_ryenM8e0Fl.html (Fecha de acceso, 20/05/2017).

Desde el ámbito estrictamente sectorial, el Grupo Productivo representaba al empresariado con mayor preeminencia de los sectores productivos exportadores, encabezados por el gran capital industrial. Los sectores agroexportadores, si bien excluidos de la participación en la gestión de gobierno, fueron compensados con formidables ganancias, a causa del abandono del régimen cambiario y la posterior devaluación.

El 6 de enero de 2002 se eliminó el régimen de paridad cambiaria vigente desde 1991, llevándose a cabo la devaluación del tipo de cambio y la suspensión del pago de la deuda externa pública con los acreedores privados, no así con los organismos internacionales. La devaluación se llevó adelante con impericia técnica e inicialmente contribuyó a profundizar la situación de crisis, que amenazaba en aquel contexto con una hiperinflación, ya que no se habían tomado medidas complementarias con el objetivo de aplacar los efectos regresivos e inflacionarios que podía generar (Musacchio, 2015a).

La devaluación de la moneda no fue un hecho de carácter consensuado (Merino, 2014), sino el resultado de una puja en la que uno de los importantes bloques de poder –comandados por los grupos económicos locales, representantes del gran capital industrial, como es el caso de la UIA– logró imponer los lineamientos básicos de la política económica nacional.

Asimismo, para que la devaluación se concretara y se saliera del régimen de convertibilidad, se debió esperar a que diversas cuestiones propias del modelo de valorización financiera maduraran para que este encontrara su consecuente colapso.

El modelo encontró su crisis dentro de su propia lógica, ya que su basamento y cimiento principal era el endeudamiento externo, siendo este posible por la garantía de valorización que aseguraba el Estado, a través su política de tasas. Ese contexto no podía perpetuarse en el tiempo sin que estallase debido a una crisis de endeudamiento, profundizada por el tipo de cambio sobrevaluado, que ocasionaba un gran déficit fiscal y comercial (Merino, 2014, pp.18-19).

Además, con la ausencia de controles de cambio, por recomendación explícita del Fondo Monetario Internacional (FMI), con tarifas de servicios públicos en dólares por los contratos de privatización, con un gran porcentaje de depósitos bancarios en moneda extranjera, el movimiento del tipo de cambio sin medidas adicionales podía ocasionar mayores inconvenientes (Musacchio, 2015a, pp. 151-152).

Algunos bloques minoritarios de fuerzas políticas de oposición al gobierno de Duhalde alertaban que la iniciativa de derogación de la Ley 23.928, que había dado origen al régimen de convertibilidad, podía generar una “estampida inflacionaria”, y se oponían al proyecto del Ejecutivo.

El bloque de Acción por la República, partido que respondía a Domingo Cavallo, ex ministro de Economía y autor de la ley que disponía el régimen de paridad cambiaria en 1991 se abstuvo de votar en la sesión de diputados el 6 de enero de 2002.[4]

A partir de la devaluación se dispuso un desdoblamiento cambiario, y se estableció un tipo de cambio fijo para las transacciones comerciales con el exterior, de 1,40 pesos por dólar, y un mercado de cambio con cotización "libre", de flotación administrada. Ese desdoblamiento provocó tensiones con el FMI y no sirvió para contener la cotización del dólar "libre". Finalmente, hacia el mes de febrero de 2002, se creó un mercado único de cambios.

Para salir de la paridad de la convertibilidad, el desdoblamiento cambiario buscaba que la cotización del dólar fijo a 1,40 pesos por dólar generase una especie de "ancla" en las expectativas de los actores económicos sobre los precios internos. El peligro de esa decisión era que la cotización del dólar "libre" se elevase considerablemente y que finalmente se tomara de referencia.

El ministro de Economía, Remes Lenicov, comentaba a la prensa acerca de las presiones del FMI para que se escogiera un tipo de cambio único y destacaba: "El Fondo consideraba filosóficamente que lo mejor era ir directamente a la flotación, en lugar de un tipo de cambio dual. Les dijimos que queremos flotar y que tengan consideración. Si aceptaron 11 años la convertibilidad, bien puede aceptar 4 o 5 meses un tipo de cambio dual".[5]

La cotización de la divisa operó al alza durante el transcurso del primer trimestre de 2002, alcanzando el valor de 3 pesos hacia finales del mes de marzo, lo que significó una devaluación de la moneda de un 200% en menos de 90 días. Posteriormente, su cotización se aceleraría tocando su máximo durante el año en el mes de junio a 3,9 pesos.[6]

Asimismo, se debe agregar que con la sanción de la Ley 25.561, denominada "Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario", que ponía fin a la convertibilidad, se establecía la pesificación a la paridad cambiaria de 1 peso por dólar sobre las tarifas de los servicios públicos.[7] Además, se prohibía la indexación de las mismas y la renegociación del nuevo cuadro tarifario quedaba pospuesta para ser encarada por el próximo gobierno.

En ese contexto, en cuanto la congelación de las tarifas de servicios públicos, el gobierno nacional tuvo que enfrentar la oposición del FMI y de los países, como España y Francia, que concentraban las mayores inversiones en esas actividades.

---

[4] "Aprobaron el fin de la convertibilidad" (6 de enero de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/364601-aprobaron-el-fin-de-la-convertibilidad (Fecha de acceso, 07/05/2017).
[5] Montenegro, M. (7 de enero de 2002), "El peso finalmente cayó derrotado", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-562-2002-01-07.html (Fecha de acceso, 13/05/2017).
[6] Datos del BCRA. Disponibles: http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Tipos_de_cambios.asp
[7] Ley 25.561. Disponible: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/71477/norma.htm

En el transcurso del periodo, otras de las medidas dispuestas por el gobierno fueron la licuación de deudas a través de la pesificación asimétrica. Ante la profunda crisis financiera, en donde las entidades bancarias no podían hacer frente al retiro de depósitos de forma generalizada, la disposición de licuación de deudas de las empresas y las personas físicas implicaba una quiebra del sistema bancario o un despojo a los depositantes (Salvia, 2014, p.183).

La pesificación tuvo dos momentos, que evidenciaron el fuerte *lobby* de los agentes económicos financieros y productivos locales. En un principio, se dispuso un techo de hasta 100 mil dólares para la pesificación de créditos bancarios con el objetivo de aliviar la carga de los sectores medios y las pymes, posteriormente, el techo se derogó y se avanzó hacia una política de licuación masiva de deuda (Varesi, 2014, p.185).

De esa manera, en un acuerdo entre la Unión Industrial Argentina y la Asociación de Bancos de la Argentina, se decidió descargar el costo de la licuación de deudas sobre los ahorristas (Salvia, 2014, p.183). Los créditos de empresas y personas físicas en el sistema financiero fueron pesificados a una paridad de $1 peso por dólar y los depósitos de los ahorristas a 1,4 pesos por dólar (Becker *et al*, 2007, p.125).

Las medidas vinculadas con el comercio exterior fueron desarrollándose de forma progresiva. En el transcurso del mes de enero de 2002, se implantaron las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y, en el mes de marzo, se extendieron a las exportaciones industriales y las agropecuarias. Esto logró moderar los impactos inflacionarios de la devaluación y, al mismo tiempo, generar beneficios fiscales que eran de gran necesidad para un Estado endeudado en moneda extranjera, evitando que los ingresos públicos se devaluaran junto al peso (Musacchio, 2015a, p. 152).

El gobierno de Eduardo Duhalde se encontró desde un comienzo con una posición marcadamente confrontativa con el FMI, caracterizada por una muy baja aceptación de las políticas llevadas adelante por la gestión local en materia cambiaria y en tarifas de servicios públicos, particularmente; además de las exigencias de recorte del gasto fiscal en el orden nacional y provincial. El organismo representaba con los intereses de los acreedores, las empresas extranjeras concesionarias de servicios privatizados y el sector bancario (Nemiña, 2013, pp.15-16).

La recuperación salarial no fue una prioridad en la política desarrollada por el gobierno nacional, su lógica se centraba en la reactivación de la producción exportable, que produciría posteriormente una recuperación en el empleo, y solo en ese contexto se estaría dispuesto a discutir mejoras de orden salarial (Cantamutto, 2015, p.8). Al mismo tiempo, en esa coyuntura, era también importante volver a reconstruir los lazos con el Fondo Monetario Internacional.

Desde la concepción de la gestión económica del gobierno, la relación con los organismos multilaterales de crédito era una necesidad para hacer frente a las exigencias del contexto y como auxiliares en materia de recursos necesarios para el crecimiento. Esa noción de buscar y restablecer los vínculos con el FMI le generaba tensiones con algunos actores que, si bien no eran parte de forma estricta de su articulación política ni sostén necesario de estabilidad institucional, poseían capacidad de generar clima social en las calles y de presionar sobre las políticas públicas.

Frente a esa situación, de demandas sociales y laborales, teniendo como protagonistas a los actores más rígidos, a la CGT disidente y la CTA, el gobierno buscaba promover una concertación y un diálogo social, encabezado por la Iglesia Católica, en el cual participaban en ese marco los distintos actores económicos del país a través de sus respectivas agremiaciones.

El 14 de enero de 2002, el presidente Duhalde realizaba un llamado al diálogo social para "enfrentar el derrumbe de país" y sostenía: "Seré un trabajador más de esta convergencia que reúne a las principales fuerzas políticas, empresariales, laborales y sociales para enfrentar el derrumbe que nos pone en el límite de la anarquía y violencias fratricidas". Los obispos Jorge Casaretto, Juan Carlos Maccarone y Ramón Staffolani serían los representantes eclesiásticos para iniciar el proceso de concertación.[8]

Además, declaraba que no participaría de una próxima elección presidencial y renunciaría a todos sus cargos partidarios. De esa manera buscaba despejar el horizonte político para adelante, y no dar lugar a expectativas sobre su continuidad en el cargo, más allá de lo pactado en la Asamblea Legislativa. Esto le posibilitaba iniciar un proceso de acercamiento a ciertos sectores del Partido Justicialista, principalmente con los gobernadores, y de esa manera ampliar su base de sustentación política.

Desde un comienzo, una de las mayores preocupaciones del gobierno de transición fue la incorporación de gobernadores al gabinete nacional, para sortear y desarmar la imagen instalada sobre que el origen de su legitimidad se ubicaba estrictamente en la provincia de Buenos Aires, mediante un acuerdo entre el PJ y la UCR bonaerense. Por lo tanto, Duhalde necesitaba incrementar y extender sus apoyos, mostrando un gobierno federal, y de esa manera procuró encontrar el apoyo de los gobernadores de su partido.[9]

Por otro lado, y siempre para consolidar y ampliar su base de apoyo político, Duhalde realizaba constantes intentos para ubicarse discursivamente en contraposición a los sectores

[8] "Duhalde convocó al diálogo social para 'enfrentar el derrumbe' del país" (15 de enero de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/366773-duhalde-convoco-al-dialogo-social-para-enfrentar-el-derrumbe-del-pais (Fecha de acceso, 31/05/2017).

[9] Schurman, D. (8 de marzo de 2002), "Buscando la foto que no fue", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-2667-2002-03-08.html (Fecha de acceso, 31/05/2017).

financieros locales e internacionales, catalogándolos de representantes del "proyecto financiero", precursores del neoliberalismo y la apertura económica.

Asimismo, procuraba brindarle a su gobierno una impronta de carácter popular y de orientación productiva, haciendo hincapié en la necesidad del mercado interno. Eran los intentos de constituir una articulación política con los actores sectoriales, empresariales y del movimiento obrero.

A partir de las diversas demandas del sector empresario, particularmente de la UIA y del sector de los trabajadores representado en la CGT oficial, el gobierno buscó iniciar un proceso de lógica articulatoria con el objetivo de lograr desplegarse con vocación hegemónica, procurando hacer eje discursivo en las simbologías asociadas a la concepción de "desarrollo" y a la noción de "proyecto productivo", siendo su exterior constitutivo y, consecuentemente, antagónico el "proyecto financiero", en un contexto de dislocación de la hegemonía neoliberal, siendo la misma cuestionada y puesta en crisis hacia finales de diciembre de 2001.

Ahora bien, más allá de ese desarrollo discursivo del gobierno de transición, que hacía eje en lo "productivo", "nacional" y "popular", en contraposición al modelo de valorización financiera, o "el proyecto financiero", su permanente búsqueda de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con sus consecuentes implicancias sobre la economía nacional, generaba un fuerte sentimiento de oposición por parte de la CGT disidente.

En el transcurso de marzo de 2002, llegó al país una visita oficial de catorce miembros del FMI para interiorizarse de la política económica que el gobierno nacional estaba desarrollando. La posición del ministro de Economía, Remes Lenicov, era proclive a un acuerdo con el FMI y de esa manera, buscar la obtención de un nuevo préstamo del organismo, como también comenzar un dialogo en torno de las deudas que se mantenía con la institución crediticia.

La orientación económica del FMI sobre la economía argentina seguía siendo la misma que la anterior a la crisis de diciembre de 2001, la cuestión fiscal de las provincias y de la nación eran el eje fundamental. Desde el organismo multilateral, se le exigía al país reducir el déficit, una restructuración de la banca, suprimir las cuasimonedas que circulaban y, si era necesario, reducir el empleo público. En síntesis, se le solicitaba al país bajar el déficit provincial consolidado de $5.000 millones de pesos a 1.500 millones, en el transcurso de solo un año.[10]

A partir de esa situación, comenzó a desarrollarse un proceso de agudización de tensiones entre el gobierno nacional y el Grupo Productivo. Uno de los primeros intentos de

[10] "El FMI pide un ajuste de $ 3500 millones" (8 de marzo de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/379310-el-fmi-pide-un-ajuste-de-3500-millones (Fecha de acceso, 31/05/2017).

organización de una movilización masiva, política y sectorial fue sujeta a debate y discusión en el Comité Confederal de la central conducida por Hugo Moyano.

La propuesta consistía en convocar a una movilización por la "identidad nacional" en repudio al FMI y la subordinación de las políticas de gobierno a dicho organismo, con la finalidad particular de apuntar sobre el cargo del ministro de Economía, Remes Lenicov (Merino, 2012, pp.105-106).

En el Comité Confederal, en la sede de SMATA de la Ciudad de Buenos Aires, Hugo Moyano sostenía que "el enemigo está en los grupos financieros, el enemigo está en las empresas que se han beneficiado y presionan a los gobiernos para que no apliquen las políticas que hagan que esta crisis la paguen ellos y no nuestro pueblo",[11], y además agregaba: "Vamos a pelear contra Repsol-YPF, las telefónicas, la Sociedad Rural y las AFJP".[12]

Las diferencias dentro de la central disidente y los temores quedar en una posición aislada frente a las demás organizaciones sindicales hicieron que se desistiera de la movilización. Igualmente, el hecho de que la CGT disidente observara que el gobierno subordinara la política económica a un acuerdo con el FMI (Merino, 2012) hacía coincidir en la práctica al gobierno con las políticas de ajuste y las medidas reclamadas por los actores del proyecto financiero.

La situación era sumamente compleja, ya que el gobierno buscaba el acuerdo con el FMI, por lo tanto, toda demanda de índole reivindicativa en materia salarial, como la actualización de los salarios, luego de la devaluación, y la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y otras demandas en ese sentido, quedaban relegadas hasta llegar a un acuerdo con el organismo multilateral de crédito.

Al mismo tiempo, no hacer frente a esas demandas ponía en tensión las relaciones entre el gobierno y las organizaciones del movimiento obrero. Duhalde buscaba el apoyo de ambas centrales, la "oficial" y la "disidente", sumando a los más diversos actores en función de mejorar su correlación de fuerzas para negociar con el FMI (Merino, 2012, p.106).

El 29 de marzo de 2002, la CGT oficial, conducida por Rodolfo Daer, perteneciente al Grupo Productivo y cercano al gobierno nacional, saca a relucir unas series de críticas hacia el FMI mediante un documento público, en donde se señalaba que las políticas económicas estaban supeditadas a las posibilidades de un préstamo por parte del organismo financiero.

El documento especificaba los siguientes puntos:

---

[11] "Moyano amenazó con escraches a periodistas" (8 de marzo de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/379179-moyano-amenazo-con-escraches-a-periodistas (Fecha de acceso, 31/05/2017).

[12] "Volvió Moyano con nuevas amenazas" (8 de marzo de 2002), *Clarín*. Disponible en https://www.clarin.com/politica/volvio-moyano-nuevas-amenazas_0_BkfmnqHgAtx.html (Fecha de acceso, 31/05/2017).

> No es el FMI lo prioritario, ni quien debe condicionar las decisiones de la política económica financiera […] El Gobierno necesita un equilibrio y la CGT puede dárselo si se para a la izquierda […] Es ilusorio esperar ayuda del FMI, que durante años nos impuso las políticas que hoy nos sumen en esta crisis cuasiterminal.

Hacia mediados de abril, la tensión del gobierno con las distintas centrales sindicales iba en aumento ante la falta de respuesta sobre la recomposición salarial, sobre el reclamo de un aumento en los haberes jubilatorios, la creciente inflación y la suba de precios en los artículos de la canasta básica alimentaria. Una de las medidas que el gobierno tomó en ese tiempo, en función de los reclamos sociales y sindicales, fue la adopción del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupado (Merino, 2012, p.107-108).

Para financiar el desarrollo de los planes de asistencia social y, posteriormente, ampliar su cobertura, en el mes de abril se aumentaron las retenciones al sector agroexportador fijando un ajuste que alcanzaba el 20%. El objetivo era abordar la situación social de extrema pobreza, desactivar las continuas amenazas de estallidos sociales que podían poner en un lugar de extrema debilidad al gobierno y, al mismo tiempo, tener algún tipo de herramienta que sirviera de control y seguimiento en el desarrollo territorial de las organizaciones de desocupados.

El incremento de los derechos de exportación al sector agroexportador generó una agudización de las contradicciones con el sector agropecuario y el resquebrajamiento hacia el interior del Grupo Productivo, particularmente con Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) (Merino, 2014, p.468).

El gobierno nacional se había comprometido en un comienzo a exceptuar al sector del pago de retenciones. Pero frente a las dificultades en materia de cuentas públicas, la necesidad de financiamiento con destino a planes sociales y tratar de apaciguar el clima social, hizo que el Estado aplicara las medidas necesarias para captar una porción de la renta diferencial de la tierra, empujada notoriamente por la devaluación del tipo de cambio (Merino, 2014, pp.469-470).

Desde la visión de los sectores del movimiento obrero organizado, el gobierno había priorizado las medidas que beneficiaban a los actores empresariales del Grupo Productivo, dejando a un segundo plano y, en función de llegar a un acuerdo con el FMI, la situación de los trabajadores. Se habían pesificado las deudas beneficiando a las empresas y dolarizado los precios por la alta inflación, sin recomposición salarial, sin reactivación del consumo y del empleo (Merino, 2012, p.108).

En ese contexto, el ministro de Economía, Remes Lenicov, sostenía:

> El gobierno no puede ni siquiera pensar en un aumento de salarios en el sector público, ni hacer planteos generales de incremento para el conjunto de los trabajadores privados, desgraciadamente, en aras del bienestar general […] Argentina tiene que hacer un esfuerzo por armar una política macroeconómica consistente y reinsertarse en el mundo, que se logra a través del acuerdo con el FMI. Seguimos apostando a conseguir los recursos y el apoyo del Fondo, lo demás son especulaciones.[13]

El ministro de Economía procuraba contraer el gasto fiscal, para bajar el déficit de las cuentas nacionales y provinciales, en función de cumplir las exigencias del FMI para arribar a un acuerdo que posibilitase la habilitación de un nuevo préstamo. "El superávit es la única garantía de que la Argentina va a pagar la deuda", afirmaba Remes Lenicov. Las provincias y la nación se comprometían a reducir el déficit fiscal un 60% y a no emitir nuevos bonos, en función de las demandas del organismo multilateral de crédito.[14]

Desde la CGT "oficial" se apuntaba contra la política económica a causa de la no recomposición del salario. Rodolfo Daer sostenía: "El Ministerio de Economía tiene una estrategia fiscalista orientada hacia un posible acuerdo con el FMI. Hemos sido muy críticos de que la asignatura pendiente o lo que le falta a la política económica son políticas para la realidad diaria de los argentinos".[15]

Es así, entonces, como en el transcurso de los primeros días de abril de 2002, las tensiones alrededor del gobierno nacional y las presiones, específicamente del movimiento obrero, encarnadas en la CGT oficial y la disidente, en torno a la cuestión salarial hicieron que se iniciase un proceso de quiebre en la reciente articulación política que Duhalde había logrado desarrollar hasta aquí, de forma frágil y endeble.

Como habíamos sostenido anteriormente, ninguno de los sectores del movimiento obrero organizado poseía en esta etapa, post-diciembre de 2001, un rol protagónico y de conducción en la articulación de una nueva contrahegemonía. Sin embargo, a partir de la crisis del consenso alrededor de la convertibilidad, sus acciones reivindicativas lograron poner en una situación muy complicada al gobierno en su objetivo de arribar a un acuerdo con el FMI.

---

[13] Dellatorre, R. (16 de abril de 2002), "De aumentar salarios, ni hablemos", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-4053-2002-04-16.html (Fecha de acceso, 31/05/2017).
[14] "El FMI le puso plazo al ajuste en las provincias" (17 de abril de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/389452-remes-lenicov-postergo-para-manana-su-viaje-a-los-estados-unidos (Fecha de acceso, 31/05/2017).
[15] "Salarios: Duhalde dijo a la CGT que primero está el acuerdo con el FMI" (17 de abril de 2002), *Clarín*. Disponible en https://www.clarin.com/politica/salarios-duhalde-dijo-cgt-primero-acuerdo-fmi_0_Hkm7SrBxRFx.html (Fecha de acceso, 31/05/2017).

Mientras tanto, el gobierno enfrentaba una situación compleja en materia financiera ante la presentación de amparos en la justicia por parte de los ahorristas que habían perdido sus ahorros dentro del "corralito". Sin sentencia firme, el Poder Judicial aprobaba el retiro de dinero, y eso generaba una filtración significativa en el sistema financiero, alcanzando la suma total de 100 mil millones de pesos diarios.[16]

Frente a ese escenario, en un principio, el gobierno intentó frenar esa situación por decreto, prohibiendo la presentación de amparos a la Justicia, que autorizaba el retiro de dinero de los depositantes. En un comienzo, esa fue la opción que anunció el ministro de Economía Remes Lenicov, pero que el presidente Duhalde se negó a firmarla.

Luego, se inclinó por elaborar un proyecto de ley en donde se evaluaba devolver en bonos el dinero de aquellos que obtuvieran un fallo favorable de la Justicia para el retiro de sus depósitos. Asimismo, las distintas entidades bancarias nacionales e internacionales presionaban fuertemente al gobierno para que ese requisito se extendiera a todos los depósitos, no solamente a los que obtuvieran una sentencia a favor. Esa segunda opción era la que el FMI apoyaría para darle una salida definitiva al tema.[17]

En una nota publicada en un diario nacional se podía leer lo siguiente:

> El Gobierno todavía no accedió al reclamo de máxima del sector financiero, pero podría hacerlo en cualquier momento. En ese camino, Remes Lenicov ya encontró una salida para por lo menos satisfacer el pedido de mínima […] La iniciativa establece que, en lugar de pesos, los ahorristas que obtengan fallos favorables recibirán bonos.[18]

Ese contexto de incertidumbre –en relación con los depósitos de plazo fijo, frente a la sangría de pesos del sistema financiero generada por los amparos vía judicial, y un movimiento al alza de la cotización del dólar en el mercado de cambios– generó la alarma suficiente para que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolviera un feriado bancario y cambiario por tiempo indeterminado desde el 19 de abril de 2002 hasta que el Congreso de la Nación terminara de definir la situación.[19]

Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, y el presidente del BCRA, Mario Blejer, viajaban a Washington para proseguir las conversaciones con los diferentes

[16] "Batalla en el Gobierno por cerrar el corralito" (17 de abril de 2002), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-4107-2002-04-17.html (Fecha de acceso, 31/05/2017).
[17] "El Gobierno apuesta a un nuevo Bonex" (18 de abril de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/389650-el-gobierno-apuesta-a-un-nuevo-bonex (Fecha de acceso, 31/05/2007).
[18] "Una ley para enterrar el papelón del decreto" (18 de abril de 2002), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-4146-2002-04-18.html (Fecha de acceso, 31/05/2017).
[19] Zlotnik, C. (20 de abril de 2002), "La banca decretó el feriado", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-4227-2002-04-20.html (Fecha de acceso, 31/05/2017).

organismos multilaterales de crédito, como el FMI, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).[20] Procuraban obtener en un tiempo próximo la asistencia financiera que el gobierno buscaba desde su asunción, y esa persistente búsqueda era la que había orientado hasta entonces su política económica. El FMI se comprometía a realizar el desembolso de ayuda financiera solo cuando comenzaran las reformas solicitadas, entre las más salientes, bajar el déficit fiscal de las provincias.[21]

La estrategia confrontativa del FMI, que expresaba una posición negociadora muy poco flexible, era el resultado del apoyo y los intereses de diversos actores del plano internacional (Nemiña, 2013). Había quienes buscaban convertir el manejo de la crisis argentina en un ejemplo para cambiar las expectativas de los inversores financieros sobre los rescates, como los EE. UU., otros hacían sus reclamos en función de los intereses de los bonistas e instituciones financieras en default, como Italia y Japón, y también estaban los que promovían las demandas de las empresas concesionarias de servicios públicos afectadas por la devaluación y el congelamiento de tarifas.

Finalmente, desde el Ejecutivo nacional, más precisamente, desde el Ministerio de Economía, se envió al Congreso un proyecto de ley, el Plan Bonex, para que se aprobara la propuesta oficial de canje de plazos fijos, que sumaban $40 mil millones de pesos por títulos públicos en pesos y/o en dólares, quedando en opción de los ahorristas.[22] Además, se incluía una modificación en la organización de la banca pública, en donde se buscaba la privatización del Banco Nación. Los diputados y senadores rechazaron los proyectos de ley (Merino, 2012, pp.108-109). Ese suceso termino con la renuncia del ministro Remes Lenicov.

En ese contexto, el gobierno de Duhalde se encontraba en una posición de gran debilidad política y, para poder proseguir al mando de la administración, avanzó hacia un acuerdo con los gobernadores. En primer lugar, con los del Partido Justicialista, como el gobernador José Manuel de la Sota, de Córdoba, y Carlos Reutemann, de Santa Fe, con los cuales discutió los pasos a seguir en materia económica y la nueva elección del ministro de Economía.[23] En segundo lugar, atendería los requerimientos de los gobernadores radicales, en procura de mantener su coalición de gobierno en la Asamblea Legislativa.

---

[20] "Remes se reunió con los responsables de los organismos multilaterales" (20 de abril de 2002), *La Nación*. Disponible: http://www.lanacion.com.ar/390268-remes-se-reunio-con-los-responsables-de-los-organismos-multilaterales (Fecha de acceso, 01/06/2017).

[21] "El Fondo emplazó al país a concretar las reformas" (21 de abril de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/390471-el-fondo-emplazo-al-pais-a-concretar-las-reformas (Fecha de acceso, 01/06/2017).

[22] "Ni la Ley de Murphy previó este final" (23 de abril de 2002), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-4346-2002-04-23.html (Fecha de acceso, 01/06/2017).

[23] Schurman, D. (25 de abril de 2002), "Cuando se procura la fumata blanca", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-4430-2002-04-25.html (Fecha de acceso, 01/06/2017).

La reconstrucción del gabinete, la elección del ministro de Economía y los pasos a seguir en política económica fueron los distintos ejes que se pusieron en discusión en esa situación, frente al revés político que había recibido Duhalde en su intento de aprobar el plan de bonos para los plazos fijos del corralito y la privatización del Banco Nación. En esa discusión, los gobernadores del PJ comenzaban a tener cada vez más peso, siendo estos, posteriormente, los principales puntales del gobierno nacional.

Por otro lado, el conductor de la CGT disidente, Hugo Moyano, renovaba su malestar con las líneas seguidas por la gestión de gobierno y hacía explicito su alejamiento de la Mesa de Diálogo que encabezaba la Iglesia Católica, enfatizando sus diferencias con el presidente Duhalde en su vocación de lograr un acuerdo con el FMI, remarcando las grandes exigencias del organismo internacional sobre la gestión económica. Sostenía que "si el Gobierno insiste en aceptar las condiciones que pone el Fondo, sin que le aporte ningún préstamo, esto demuestra que hay una voluntad de dependencia indudable".

Esa confrontación con el gobierno se sustentaba en que la situación de los asalariados informales y formales era sumamente delicada debido a que, durante el transcurso de 2002, se generó una notable caída del salario real luego de la devaluación con su consecuente pase a precios. En el primer semestre del año, se llegó a una inflación superior al 28%[24] sin ningún tipo de recomposición vía paritaria o sumas fijas de incremento.

Indice de Precios al Consumidor
Base Abril 2008 = 100

Período	Nivel General (%) var.mensual	Nivel General (%) var.anual
dic-01	-0,1	-1,5
ene-02	2,3	0,6
feb-02	3,1	4,0
mar-02	4,0	7,9
abr-02	10,4	18,4
may-02	4,0	23,0
jun-02	3,6	28,4
jul-02	3,2	32,9
ago-02	2,3	36,5
sep-02	1,4	38,5
oct-02	0,2	39,4
nov-02	0,5	40,6
dic-02	0,2	40,9

Fuente: Secretaría de Política Económica con información del INDEC.

[24] Según datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas - Secretaría de Política Económica con información del INDEC.

La posición de la CGT disidente se comprendía como consecuencia de "el acuerdo de los catorce puntos" que los gobernadores justicialistas, en conjunto con el gobierno nacional, habían firmado en un encuentro en la quinta presidencial de Olivos. El documento incluía las exigencias determinadas por el FMI en materia fiscal y se establecía una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Esa serie de compromisos terminó por alejar a los "disidentes" del gobierno nacional.[25]

Las relaciones con la CGT oficial se sostenían, en función de la conformación del nuevo gabinete de ministros. Alfredo Atanasof, miembro del gremio de municipales bonaerenses, pasaba a la Jefatura de Gabinete y la diputada Graciela Camaño, representante del sindicato de gastronómicos, se ubicaba en el Ministerio de Trabajo.

En ese contexto, de conformación de un nuevo gabinete y de acuerdo entre los gobernadores del PJ y el gobierno nacional, en un documento que consistía en la elaboración de los principios a seguir, se suceden cambios dentro Grupo Productivo y en su lógica articulatoria.

En su incapacidad de imponerse y desplegarse hegemónicamente, los acuerdos entre los actores empresariales y la CGT oficial daban lugar a un mayor protagonismo al sector de los trabajadores (Merino, 2012, pp.110-111). En un escenario de débil articulación, los conductores de esa formación político-sectorial se apoyaban sobre las fracciones de los actores subordinados, buscando así compensar su debilidad en el ámbito empresarial en la vinculación político-partidaria de los sindicatos nucleados en esa central.

Desde el inicio, el presidente Duhalde busco impregnarle a su gestión un sesgo productivista, haciendo eje en el contexto laboral, procurando tomar distancia de la experiencia neoliberal asociada al denominado "proyecto financiero". Con el correr el tiempo, esa impronta no poseía un correlato cierto en su gestión económica, que estaba supeditada a la búsqueda de un acuerdo con los organismos multilaterales de crédito, que exigían determinadas medidas con hincapié en el orden fiscal a condición de un nuevo desembolso.

Ese accionar del gobierno debilitó políticamente al Grupo Productivo, que quedó en un lugar de mayor exposición frente al capital financiero. Además, José Ignacio de Mendiguren, titular de la UIA, ya había presentado su renuncia al gabinete, luego de haber terminado los objetivos propuestos por su gestión., que consistieron básicamente en la licuación de pasivos de las empresas del gran capital industrial y de otras ramas de la economía local mediante la pesificación asimétrica.

[25] "Duhalde firmó el acuerdo con los gobernadores" (24 de abril de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/391237-duhalde-firmo-el-acuerdo-con-los-gobernadores (Fecha de acceso, 01/06/2017).

Durante los días posteriores a la renuncia de Remes Lenicov, en el Ministerio de Economía, hacia el interior del gobierno de Duhalde y del propio peronismo, encarnado en los gobernadores, se debatía especialmente la postura a seguir con relación al FMI y sus exigencias para un futuro desembolso financiero.

En el acuerdo firmado en la quinta de Olivos, en donde se establecían catorce puntos, se concluía en proseguir en la búsqueda de un acuerdo con el organismo multilateral de crédito, acudiendo a las demandas planteadas. A partir de la asunción de Roberto Lavagna al frente del manejo de la economía, se mantendría el rumbo en esa dirección.

Las mayores preocupaciones de la nueva gestión económica pasaban por contener la cotización del dólar, brindar definitivamente una solución al tema del "corralito", comenzar a rediscutir las metas fiscales con el FMI y un futuro desembolso. Para eso, era necesario avanzar en dos de sus exigencias, la modificación de la Ley de Quiebra y la derogación de la Ley de Subversión Económica.

Con relación a la designación de Roberto Lavagna, Hugo Moyano, en representación de la CGT disidente, expresaba: "No crea ningún tipo de expectativas, Lavagna fue funcionario del gobierno radical (que encabezó Raúl Alfonsín) y por más que se diga que es de procedencia peronista, la mayoría del justicialismo está imbuido de un pensamiento liberal."[26]

En ese contexto, la CGT disidente había anunciado una fecha de paro y movilización para el 14 de mayo, un día antes la medida de fuerza fue suspendida. En primer lugar, existían diferencias dentro de la central obrera con relación a la convocatoria. Algunos sectores del movimiento obrero, que adscribían a esa central, observaban con resistencias algunas de las manifestaciones del líder de camioneros que eran interpretadas como demasiado duras para con un gobierno de origen peronista.

Moyano sostenía en aquel entonces:

> Son momentos decisivos y se está dando en la discusión del ser o no ser de los argentinos, creo que hemos llegado a una situación límite donde lamentablemente, si es que se votan estas dos leyes, de quiebras y subversión económica, que se ha sugerido desde el FMI, sería la claudicación total de la clase política.[27]

Algunas organizaciones, como la Unión Obrera Metalúrgica, se alejaban de la CGT disidente, aunque afirmaban que la decisión no estaba dirigida contra el accionar de Hugo Moyano, sino

[26] "Moyano se va del diálogo y se aparta del Gobierno" (27 de abril de 2002), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-4502-2002-04-27.html (Fecha de acceso, 01/06/2017).
[27] Hugo Moyano: "Duhalde está solo y no tiene coraje para cambiar el rumbo económico" (10 de mayo de 2002), *Los Andes*. Disponible en http://www.losandes.com.ar/noticia/un-282440 (Fecha de acceso, 03/06/2017).

en favor de la unidad de las dos CGT. En esa orientación se había embarcado la ministra de la cartera laboral, Graciela Camaño, y su marido, Luis Barrionuevo, que habían logrado abrir un frente de diálogo con el bancario Juan José Zanola, a quien promocionaban como el líder de una CGT unificada (Merino, 2012, pp.112-113).

Finalmente, la medida de acción gremial fue llevada adelante el 22 de mayo con un paro y movilización. Adhirieron a la medida los mecánicos, dragado y balizamiento, trabajadores del Poder Judicial, docentes privados, navales y molineros. Al no participar de la medida de protesta la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), el funcionamiento del transporte de colectivo de pasajeros fue normal, dándole un tono menor a la medida de fuerza.[28]

Asimismo, pocos días después, la CTA también convocaba a un paro de 24 horas con movilización. Los reclamos eran prácticamente los mismos, se repudiaba la política de gobierno, es decir, los catorce puntos acordados con la mayoría de los gobernadores provinciales y las exigencias del FMI.

Por otro lado, en el ámbito empresarial, y hacia el interior del Grupo Productivo, se daba lugar a la constitución de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). En su acto fundacional, la asociación se declaraba en contra del adelantamiento de las elecciones que impulsaba algunos sectores políticos asociados al sector financiero nacional e internacional.

Esa agrupación empresarial lograba agrupar a Amalia Lacroze de Fortabat (Loma Negra), Enrique Pescarmona (IMPSA), Paolo Roca (Techint) y Santiago Soldati (Comercial del Plata).[29] La nueva entidad era producto de la fusión entre el Consejo Empresario Argentino y la Fundación Invertir, y estaba presidida por Oscar Vicente, de Pérez Companc (Merino, 2014, pp.421-422).

En ese sentido, el Grupo Productivo, y su fracción hegemónica (Merino, 2014), nucleada en AEA, se oponía al sector empresario representativo de las entidades financieras, proclives a una dolarización de la economía y, en ese eje en particular, lograba la cooperación de los actores del movimiento obrero organizado, como era el caso de las dos CGT.

Desde un comienzo, el objetivo era el mismo, desplegar las diferentes acciones colectivas necesarias para sostener las articulaciones políticas que permitieran incrementar el nucleamientos de diversos actores. La búsqueda de un mayor peso político era imprescindible para lograr imponerle al gobierno de transición un conjunto de políticas públicas y, al mismo tiempo, brindarle un marco de sustentabilidad necesario.

[28] "Paro de la CGT disidente: Moyano criticó al FMI y a Duhalde" (23 de julio de 2002), *Rio Negro*. Disponible en http://www1.rionegro.com.ar/arch200205/e23g02a.html (Fecha de acceso, 06/06/2017).
[29] Candelaresi, C. (29 de mayo de 2002), "Vocación por tener la sartén por el mango", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-5690-2002-05-29.html (Fecha de acceso, 07/06/2017).

Por otro lado, los sectores proclives a una dolarización, articulados alrededor de los actores del ámbito financiero, buscaban que se adelantaran las elecciones presidenciales, sosteniendo la incapacidad del gobierno de llevar adelante un reordenamiento de la situación económica. Argumentaban, además, los peligros de una hiperinflación o un escenario de crisis cambiaria que hiciera disparar la cotización del dólar.

Ese mismo sector volvía a mostrarse públicamente en la Universidad del Salvador, en un encuentro convocado por la Fundación Gobierno y Sociedad, de Miguel Ángel Broda, y el Instituto de Planeamiento Estratégico, de Jorge Castro. En dicha convocatoria, participaban también Jorge Ávila, del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA) y el gobernador de la provincia de Salta, Juan Carlos Romero, alineado políticamente al menemismo dentro del Partido Justicialista.

En ese encuentro, el análisis que se hacía de la coyuntura era que al gobierno le quedaba poco tiempo frente a la negativa del FMI de firmar un nuevo acuerdo, y que, para frenar un escenario de crisis cambiaria, de una suba generalizada precios y para evitar un estallido social, era necesario generar un escenario que hiciera posible la dolarización de la economía doméstica.[30]

Ahora bien, debemos agregar a esa coyuntura las tensiones generadas por las diferencias entre el presidente del BCRA, Mario Blejer y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, en relación con la política a seguir en función de ir desarmando las restricciones bancarias sobre los depósitos.[31]

En ese escenario de confrontación, el funcionario Eduardo Levy Yeyati, miembro del equipo de Blejer en el BCRA, realizó una conferencia de prensa en donde recomendaba la renuncia de Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, y pronosticaba en esa misma alocución, un escenario de hiperinflación en caso de que el gobierno no aceptara la propuesta de los bancos privados para resolver la situación de los depósitos era través de la entrega obligatoria de un bono.[32]

La propuesta enunciada por el funcionario del BCRA, en línea con la postura de Blejer, y el FMI, era apoyada por la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), que aglutinaba a todas las entidades financieras extranjeras, que rechazaban públicamente el proyecto del ministro Lavagna. La postura de BCRA era reeditar el Plan Bonex del ex ministro Remes Lenicov, en

[30] Cufré, D. (16 de mayo de 2002), "Volver con el dólar como bandera", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-5209-2002-05-16.html (Fecha de acceso, 10/06/2017).
[31] Pisani, S. (19 de junio de 2002), "No hay fecha para salir del corralito", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/397913-no-hay-fecha-para-salir-del-corralito (Fecha de acceso, 10/06/2017).
[32] "Corralito: tregua entre el Banco Central y Economía" (21 de mayo de 2002), *Clarín*. Disponible en https://www.clarin.com/economia/corralito-tregua-banco-central-economia_0_BySzK-HxCte.html (Fecha de acceso, 10/06/2017).

oposición a la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), que formaban parte del Bloque Productivo.

La propuesta desde el Ministerio de Economía era confeccionar un bono optativo con la garantía de los propios bancos, para aquellos ahorristas que quisieran aceptarlo, con la posibilidad de utilizarlos en el mercado de bienes y así poder canjearlos en la compra de autos cero kilómetros e inmuebles. Se sostenía que esa medida proporcionaría liquidez al mercado interno, y se iniciaría un camino hacia una reactivación en el consumo y la actividad económica. En contraposición, desde el BCRA, se argumentaba que dotar de fluidez al mercado de bienes generaría expectativas para una hiperinflación.[33]

Al mismo tiempo, y en esa coyuntura de disputa entre el BCRA y el Ministerio de Economía con relación al sistema financiero local, en el mercado de cambios la divisa alcanzaba una cotización superior a los 3,5 pesos.[34] Las empresas exportadoras de actividades petroleras, cerealeras y alimenticias, en manos del capital transnacional, se negaban a liquidar la producción, reteniendo sus ingresos y procurando generar expectativas al alza en la cotización del dólar.[35]

Ahora bien, en una cumbre de gobernadores del Partido Justicialista, en la provincia de La Pampa, el gobierno de transición de Eduardo Duhalde buscaba los apoyos necesarios para llevar adelante las exigencias que el FMI reclamaba, la modificación de la Ley de Quiebras y la derogación de la Ley de Subversión Económica.[36]

Las exigencias de adelantamiento de las elecciones quedaban postergadas para otro momento, ninguno de los gobernadores con aspiración de suceder al entonces presidente pretendía asumir sin que antes se aprobaran las leyes demandas por el FMI y se resolviera la situación del sistema financiero. El cronograma electoral se acordaría una vez alcanzada las metas pactadas con el organismo internacional.

Finalmente, con el acuerdo de la mayoría de los gobernadores, el presidente Duhalde avanzaba en la modificación de la Ley de Quiebras, aunque el organismo multilateral de crédito consideraba que la normativa era excesivamente favorable a los deudores, y argumentaba que era una amenaza para las inversiones extranjeras en el país. Las demandas del organismo se centraban fundamentalmente en dos puntos, la modificación del artículo 15 y la inclusión del mecanismo de *craw down*.

---

[33] Zlotnik, C. (18 de mayo de 2002), "Dura pelea en la cubierta del Titanic", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-5289-2002-05-18.html (Fecha de acceso, 10/06/2017).
[34] BCRA, Datos disponibles en http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Tipos_de_cambios.asp
[35] Montenegro, M. (27 de mayo de 2002), "Una pulseada final con el establishment", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-5597-2002-05-27.html (Fecha de acceso, 10/06/2017).
[36] Schurman, D. y Yapur, F. (28 de mayo de 2002), "Primero el Fondo y las elecciones después", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-5650-2002-05-28.html (Fecha de acceso, 10/06/2017).

El FMI exigía la modificación del artículo 15 de la ley, que establecía que las entidades financieras gozaban de un plazo de noventa días para reestructurar, en el marco de la Ley de Emergencia Pública, N° 25.561, los créditos existentes al 30 de noviembre de 2001, debiendo previsionar el 100% de aquellos créditos respecto de los cuales no se hubiera llegado a un acuerdo con los deudores. Además, determinaba un periodo de exclusividad de 180 días al deudor para que formulase propuestas de acuerdo preventivo a sus acreedores, y suspendía también las ejecuciones hipotecarias por el mismo lapso.[37]

Otro punto que se requería en la modificación era la introducción del mecanismo llamado *craw down*, por el cual un acreedor o un tercero ante el incumplimiento de un deudor puede quedarse con la empresa como parte de pago, dejando abierta la posibilidad de que los acreedores externos se apropiaran de las empresas nacionales en dificultades (Peralta Ramos, 2007, pp. 390-391).

Asimismo, el pedido de derogación de la Ley de Subversión Económica consistía en el temor de que ese marco legal se usara para condenar delitos de índole económico, que recayera sobre el sector financiero, especialmente durante el último periodo de la convertibilidad. El sector financiero estaba preocupado por futuras citaciones en la justicia.

El impulso a la derogación de la ley por parte del gobierno nacional tensionó las relaciones entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, y sus correspondientes acuerdos parlamentarios, que hasta entonces habían servido de apoyo y de sustento al Ejecutivo.[38]

La sesión en la Cámara de Senadores debió ser desempatada por el presidente, Juan Carlos Maqueda. El oficialismo sufrió la pérdida de apoyo del bloque de la UCR y de algunos senadores de su propio bloque. “Si no se derogaba la ley […], la verdad es que yo no podía quedarme un minuto más en el Gobierno”, sostenía el presidente Duhalde.[39]

En función de seguir por el camino de las exigencias del FMI, el gobierno lograba sancionar en el Congreso Nacional la ley de acuerdo fiscal entre la nación y las provincias, esta vez con el acuerdo de todo el arco político. De esa forma, se estableció un recorte en los gastos de las diferentes jurisdicciones.[40]

---

[37] Marval O'Farrell & Mairal (08 de febrero de 2002), “Modificaciones a Ley de Concursos y Quiebras”. Disponible en http://www.marval.com/publicacion/modificaciones-a-ley-de-concursos-y-quiebras-4838/ (Fecha de acceso, 25/06/2017).

[38] Serra, L. (2 de junio de 2002), “Profundas fisuras entre la UCR y el PJ”, *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/401782-profundas-fisuras-entre-la-ucr-y-el-pj (Fecha de acceso, 03/06/2017).

[39] “Fue derogada la ley de subversión económica, en una dramática sesión” (31 de mayo de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/401164-fue-derogada-la-ley-de-subversion-economica-en-una-dramatica-sesion (Fecha de acceso, 03/06/2017).

[40] “Diputados convertirá en ley el pacto fiscal” (10 de abril de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/387581-diputados-convertira-en-ley-el-pacto-fiscal (Fecha de acceso, 03/06/2017).

Posteriormente, el presidente Duhalde avanzaba mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia[41] con el proyecto elaborado por el Ministro de Economía, Roberto Lavagna, en un principio de solución sobre el sistema financiero. El plan tenía como propósito otorgarles a los ahorristas la opción de canjear sus depósitos por un Certificado de Depósito Reprogramado (CEDRO) o por Bonos Optativos del Estado Nacional (BODEN), de los cuales dos serían en dólares, uno a diez años (BODEN 2012), otro a tres años (BODEN 2005), y otro en pesos a cinco años (BODEN 2007). Los títulos cotizarían en bolsa, con opción de venderlos y hacerse de efectivo.[42]

Con la oferta oficial de canje voluntario de depósitos, el Estado nacional asumía la deuda que los bancos mantenían con los ahorristas. Esto significó un aumento de más de 6 mil millones de deuda pública (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005). Esa medida generó un mayor acercamiento con el sector financiero internacional.

La gestión de Roberto Lavagna al frente del Ministerio de Economía se desarrolló en un marco favorable de correlaciones de fuerza hacia el interior del partido de gobierno. El apoyo de los gobernadores peronistas fue decisivo para alcanzar los objetivos necesarios que el FMI solicitaba para comenzar a negociar.

En un principio, el gobierno de transición se apoyó en la coalición formada en la Asamblea Legislativa, a partir de un acuerdo político entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, con eje exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Esto le permitió sostenerse en un principio, pero las capacidades de ese bloque político eran insuficientes en función de los objetivos que querían alcanzar.

Mediante la articulación político-sectorial –entre el Grupo Productivo y la CGT oficial, por momentos con la adhesión de la CGT disidente y, posteriormente, con el apoyo político de los gobernadores–, el gobierno de transición de Eduardo Duhalde logró consolidar una base de sustentación de mayores proporciones, que le posibilitó encarar los siguientes meses de gestión con ciertos niveles de estabilidad político-institucional.

No obstante, se debe señalar que, a lo largo del desarrollo de ese periodo, Eduardo Duhalde tuvo que realizar diversas concesiones con el fin de mantenerse en el gobierno, tanto hacia su propio partido como a sectores empresariales y al movimiento obrero organizado.

Su autoridad política, respaldada territorialmente en la provincia de Buenos Aires, no le bastaba para cimentar un liderazgo excluyente ni ser eje articulador de su propia sustentación,

[41] Boletín Oficial (1 de junio de 2002), Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 905/02. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/74773/texact.htm

[42] "La opción: reprogramado o embonado" (1 de junio de 2002), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-5791-2002-06-01.html (Fecha de acceso, 10/06/2017).

además, la propia legitimidad de origen, delegada por el Congreso Nacional, le proporcionaba escasos márgenes de maniobra.

2.3. El último periodo del gobierno de transición y el ascenso político de Néstor Kirchner

Luego de haber modificado la Ley de Quiebras, derogado la Ley de Subversión Económica, confeccionado un bono voluntario para los ahorristas con respaldo del Estado nacional y acordado con las jurisdicciones provinciales un recorte de las cuentas fiscales; el gobierno de transición de Eduardo Duhalde comenzaba de desplegar los movimientos necesarios para arribar a un acuerdo con el FMI.

Ahora bien, en el frente cambiario comenzaban a generarse algunas complicaciones, durante finales del mes de junio el tipo de cambio alcanzaría los 3,9 pesos por dólar, registrando el valor máximo en el transcurso de ese año. Los sectores exportadores estaban retardando la liquidación de sus divisas en una maniobra especulativa, apostando así a una nueva devaluación.[43]

El gobierno nacional había dispuesto en el transcurso del mes de mayo[44] que todas las exportaciones que sobrepasasen la suma de un millón de dólares deberían liquidar sus divisas ante el BCRA. Durante el mes de junio, se resolvió reducir el valor de las operaciones a medio millón de dólares, ajustando hacia abajo el monto obligatorio a liquidar ante la autoridad monetaria.[45]

El exportador debía vender sus dólares al BCRA sin la intermediación de las entidades financieras, que le entregaría a cambio pesos al tipo de cambio oficial y, posteriormente, la autoridad monetaria volcaría los dólares al mercado, rescatando de esa manera los pesos.

El nivel de reservas disponible para la entidad bancaria oficial había alcanzado una situación crítica, ya que se había inyectado en el mercado 4.500 millones de dólares tan solo en el transcurso de cinco meses, ubicándose en un volumen total de un poco más de 10.000 millones de dólares.

[43] Montenegro, M. (3 de junio de 2002), "Hay que proteger las reservas", Página 12. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-5854-2002-06-03.html (Fecha de acceso, 17/06/2017).
[44] BCRA (31 de mayo de 2002), Comunicación "A" 3619. Disponible en http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3619.pdf (Fecha de acceso, 27/06/2017).
[45] "Exportaciones: reducen el monto a liquidar a través del BCRA" (18 de junio de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/406399-exportaciones-reducen-el-monto-a-liquidar-a-traves-del-bcra (Fecha de acceso, 27/06/2017).

RESERVAS INTERNACIONALES DEL B.C.R.A (en millones de dólares)			
Año	Mes	Saldos	Promedio mensual
2002	Ene.	14.069	15.015
	Feb.	13.883	13.859
	Mar.	12.780	13.328
	Abr.	12.171	12.462
	May.	10.185	11.112
	Jun.	9.629	9.911
	Jul.	8.986	9.224
	Ago.	9.102	9.012
	Set.	9.404	9.373
	Oct.	9.883	9.558
	Nov.	10.022	9.884
	Dic.	10.476	10.420

Fuente: Gerencia de Estadisticas Monetarias - BCRA

Mientras tanto, en el orden estrictamente político, Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Cruz, resaltaba: "El gobierno no tiene marco de representatividad y presenta una debilidad muy grande […] que impide la resolución de la crisis como corresponde". Agregaba, además:

> O se gobierna para la Nación o se trabaja para el Fondo […] y las últimas extorsiones del gobierno nacional a los legisladores y a las provincias demuestran claramente que se privilegia obtener ayuda financiera del FMI a cualquier costo, antes que aportar a la construcción de un Estado que contenga a todos los argentinos.[46]

El gobernador había sido uno de los pocos mandatarios que se había negado a firmar el acuerdo de los catorce puntos que hacía referencia al recorte del gasto fiscal de las provincias que exigía el FMI y reclamaba el llamado a elecciones inmediatamente.[47]

Asimismo, el empresario Alfredo Coto, supermercadista y miembro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), resaltaba:

> Después del desastre de diciembre, yo veo que Duhalde está en un gobierno de transición. Pero no tengo dudas de que quien sacará a la Argentina adelante será el gobierno que viene. Lo único

[46] "Kirchner: Duhalde tiene que dejar de dilapidar los fondos de los argentinos" (7 de junio de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/403345-kirchner-duhalde-tiene-que-dejar-de-dilapidar-los-fondos-de-los-argentinos (Fecha de acceso, 17/06/2017).
[47] "Según Kirchner, Duhalde está débil" (3 de junio de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/402052-segun-kirchner-duhalde-esta-debil (Fecha de acceso, 17/06/2017).

> que debe hacer el gobierno actual es ordenar un poco y llamar a elecciones. Y los empresarios, como AEA, deben hacer movimientos para poner a los mejores a administrar […] Yo puedo no conocer los tiempos políticos, que no son iguales a los tiempos empresarios. La política tiene tiempos más lentos, más de debate y no respetarlos puede traer más problemas.[48]

Desde el sector del movimiento obrero organizado, se volvía a poner sobre la mesa la cuestión salarial. Desde la CGT oficial, conducida por Rodolfo Daer, se reclamaba la convocatoria a negociaciones colectivas, y un incremento generalizado de los salarios. Armando Cavalieri, en representación de los trabajadores de Comercio, sostenía que la CGT oficial había mantenido conversaciones con la CGT disidente, de Hugo Moyano, para comenzar a desarrollar un criterio unificado en la representación de los trabajadores del sector privado ante el gobierno y los empresarios.[49]

Ahora bien, para el gobierno de transición de Eduardo Duhalde el acuerdo con el FMI aún estaba distante, a pesar de haber avanzado en varias de sus exigencias. A comienzos del mes de junio, el gobierno de los EE. UU., a través del FMI, introducía nuevas peticiones para llegar a un acuerdo.

Desde el organismo internacional, disentían respecto de la política llevada adelante para ir desarmando de a poco el corralito, y volvían a reclamar un plan de emisión de un bono obligatorio para todos los ahorristas, como tenía pensando con anterioridad la gestión de Remes Lenicov. Además, se le demandaba sancionar una ley de inmunidad para el Directorio del BCRA y vetar los artículos de la Ley de Subversión Económica que fueron salvaguardados dentro del Código Penal (Merino, 2014, pp. 440-441).

El pedido de inmunidad para el directorio del BCRA, solicitado por Mario Blejer al presidente Duhalde, con el aval del FMI, volvía a despertar rispideces con el ministro de Economía, Roberto Lavagna.[50]

En ese marco de situación, Anne Krueger, sub-directora del FMI, argumentaba con relación a la deuda de la Argentina que "el incumplimiento de los pagos siempre es doloroso, tanto para los deudores como para los acreedores. Y así debe ser. Los países, como las empresas y los particulares, deben pagar sus deudas y sufrir cuando no lo hacen".[51]

---

[48] Candelaresi, C. (3 de junio de 2002), "Ahora somos el país agroindustrial más barato del mundo", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-5846-2002-06-03.html (Fecha de acceso, 17/06/2017).

[49] "Los Gordos se acordaron del sueldo" (5 de junio de 2002), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-5937-2002-06-05.html (Fecha de acceso, 17/05/2017).

[50] "Duhalde no definió la inmunidad al BCRA" (14 de junio de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/405231-duhalde-no-definio-la-inmunidad-al-bcra (Fecha de acceso, 17/06/2017).

[51] Krueger, A. (18 de febrero de 2002), "¿Deberían poder declararse en quiebra los países como Argentina?", Fondo Monetario Internacional, Boletín. Disponible en https://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/28/04/54/vc011802 (Fecha de acceso, 17/06/2017).

En ese sentido, nos parecen relevantes los comentarios de Walter Molano, economista y director del banco de inversión BCP Securities, que agregaba en relación con la situación del país:

> Estados Unidos está demorando tanto el acuerdo con Argentina para mostrar a todo el mundo el castigo que debe padecer todo aquel país que deje de pagar su deuda […] Los inversores en Nueva York se preguntan qué sucedería si la Argentina se desprende de su deuda y el próximo año muestra un crecimiento violento, en este caso, temen que todo el mundo trate de hacer lo mismo […] En Washington explican que eligieron a Anoop Singh para la Argentina por el gran trabajo y el gran esfuerzo que había hecho en Indonesia, que es considerado como un buen ejemplo en el Fondo.[52]

Asimismo, el embajador de EE. UU. en la Argentina, James Walsh, se vio obligado frente a los rumores a emitir un comunicado en el que sostenía:

> La embajada de los Estados Unidos de América ha recibido con desagrado recientes informes periodísticos que afirman que los Estados Unidos condiciona su apoyo a la firma de un acuerdo con el FMI a cambio de elecciones anticipadas. La embajada de Estados Unidos desmiente categóricamente esta información por considerarla falsa.[53]

Uno de los principales objetivos de la gestión de Mario Blejer frente al BCRA era preservar el nivel de reservas de la autoridad monetaria y no utilizarlas para intervenir en la cotización del mercado cambiario, en función de preservar las capacidades de repago del país en una futura renegociación de su deuda y para en un futuro restablecer un nuevo "anclaje" del peso, volviendo así a una paridad fija en materia cambiaria, con la intención moderar los precios internos y de iniciar un camino hacia una dolarización de la economía.

Ese interés de establecer nuevamente un "ancla monetaria", con capacidad de ser sostenible en el tiempo, era expresaba por el FMI en sus intervenciones públicas y en sus boletines informativos. El organismo de crédito resaltaba que ese era un eje clave en el diálogo con el gobierno argentino.[54]

Transitando un camino diferente, desde el Ministerio de Economía, Roberto Lavagna alentaba la participación del BCRA en la regulación del mercado de divisas con el objetivo de

---

[52] "Anoop, con ganas de repetir" (14 de junio de 2002), *Pagina 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-6296-2002-06-14.html (Fecha de acceso, 17/06/2017).
[53] Granovsky, M. (15 de junio de 2002), "Pollo y espinacas sin condiciones", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-6343-2002-06-15.html (Fecha de acceso, 27/06/2017).
[54] Krueger, A. (18 de febrero de 2002), Fondo Monetario Internacional, Boletín. Disponible en https://www.imf.org/External/Pubs/FT/SURVEY/spa/2002/081202S.pdf (Fecha de acceso, 02/07/2017).

aplacar las expectativas de una nueva devaluación, aplacar la cotización del dólar y moderar las subas de precio en el mercado interno.

Al mismo tiempo, se hacía público un documento de la banca de inversiones Goldman Sachs, titulado "Argentina padece el síndrome de Estocolmo", en donde se alentaban las expectativas de una nueva devaluación y se incitaba a una corrida cambiaria que hacía elevar el precio del dólar en el transcurso del mes de junio.

La entidad bancaria sostenía:

> El fracaso para moverse hacia un acuerdo con el Fondo Monetario, el permanente goteo de los depósitos del corralito y, contra las expectativas, la mala performance en el Mundial, continuarán presionando contra el peso […] Hoy la administración Duhalde parece no tener otra obsesión más fuerte que cerrar un acuerdo con el Fondo […] Por años, el señor Duhalde acusó al FMI de recomendar políticas equivocadas y lo culpó por la profundidad de la recesión que afecta al país desde 1998 […] Creemos que el camino hacia un acuerdo con el FMI continuará siendo, en el mejor de los casos, tortuoso, y no asignamos virtualmente ninguna posibilidad a esta administración de firmar un acuerdo que pueda cambiar sustancialmente las expectativas.[55]

Mientras tanto, Lavagna se encontraba en Washington negociando con el FMI y el Tesoro estadounidense para cerrar un posible acuerdo y, por otro lado, intentaba acordar con los intereses transnacionales angloamericanos reuniéndose con el CEO del Citigroup, William Rhodes. Tanto el FMI como Rhodes seguían exigiendo irrevocablemente un Plan Bonex compulsivo para canjear por títulos públicos los depósitos reprogramados, y que los costos del corralito lo pagasen, a través del Estado, el pueblo argentino (Merino, 2014, p. 441).

Con relación a los límites de tiempo que la Argentina poseía para arribar a un acuerdo con el FMI, Roberto Lavagna afirmaba: "Entre julio y setiembre hay 5.000 millones de dólares en vencimientos de la deuda, eso nos impone una fecha natural de finalización de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional".[56] Así dejaba claramente fijados los plazos que poseía el gobierno para encontrar una solución en la negociación.

Por otro lado, Eduardo Duhalde se reunía con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en Casa de Gobierno, y recibía el respaldo del presidente de la agrupación, Oscar Vicente, quien afirmaba que la entidad empresaria "apoya al Estado nacional a resolver los problemas, más allá del apoyo personal al presidente". Eran parte del cónclave Arturo Acevedo (Acindar), Luis

[55] Montenegro, M. (14 de junio de 2002), "Ahora, síndrome de Estocolmo", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-6293-2002-06-14.html (Fecha de acceso, 17/06/2017).
[56] "5000 millones de razones para convencer a Lavagna" (17 de junio de 2002), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-6408-2002-06-17.html (Fecha de acceso, 27/06/2017)

Bameule (Quick Food), Federico Brown (Compañía Exportadora Patagonia) Eduardo Eleztein (IRSA), Amalia Lacroze Fortabat (Loma Negra), Héctor Magnetto (Clarín), Juan Masjuan (Telecom) y Luis Pagani (Arcor).[57]

En esa misma reunión se puso en agenda la cuestión salarial de los trabajadores del ámbito privado, los empresarios eran proclives a entablar negociaciones sectoriales en lugar de avanzar en la discusión para otorgar una suma fija a la totalidad de los asalariados. La posición empresaria evidenciaba la gran debilidad del movimiento obrero organizado para entablar negociaciones por rama de actividad, ya que era un contexto desfavorable en materia de relaciones de fuerza para los sectores del trabajo. Encarar una negociación de forma general beneficiaba a los sindicatos de actividades de menor peso.

La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, señalaba la necesidad de los incrementos salariales para cubrir la canasta básica alimentaria, pero precisaba que la discusión debía posponerse hasta que el gobierno nacional lograra definitivamente un acuerdo con el FMI. La intención de la cartera laboral, cercana a la posición de la Unión Industrial Argentina (UIA), era establecer por decreto una suma fija de entre 50 y 100 pesos.[58]

El cuadro de situación a nivel regional, específicamente la crisis económica en Brasil y Uruguay, por cuestiones de carácter internas y por los efectos de la crisis argentina, ponía expectante al gobierno dado que la situación era de tal gravedad que un contagio en la región produciría un accionar mucho más rápido por parte del organismo multilateral y del gobierno estadounidense.

En ese sentido, el presidente Eduardo Duhalde argumentaba:

> La región tiene que insistir para que se entienda que debe ser apoyada y asistida por las dificultades que tiene […] Es evidente que los organismos internacionales han cambiado la forma de actuar y esta morosidad es también muy preocupante porque cuando un país tiene problemas, como el que tenemos nosotros o Brasil, hay que atacarlo muy rápidamente.[59]

Al mismo tiempo, el sector proclive a una dolarización de la economía seguía activo, desplegando su capacidad de influencia en los ámbitos del sector financiero local e internacional. Eduardo Levy Yeyati, ex miembro del equipo económico del ya renunciado

[57] "Salarios: empresarios se pronunciaron por una negociación sectorial" (19 de junio de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/406653-salarios-empresarios-se-pronunciaron-por-una-negociacion-sectorial

[58] "Descartan que esté listo el decreto de aumento salarial" (22 de junio de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/407559-descartan-que-este-listo-el-decreto-de-aumento-salarial (Fecha de acceso, 29/06/2017).

[59] "Duhalde preocupado por los vecinos globalizados" (23 de junio de 2002), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-6657-2002-06-23.html (Fecha de acceso, 29/06/2017).

presidente del Banco Central Mario Blejer se ocupaba de distribuir un documento con críticas a las medidas económicas que había llevado adelante hasta ese momento el gobierno de transición[60].

El documento distribuido a las entidades financieras se titulaba "La crisis financiera argentina: moneda flotante, bancos hundiéndose", llevaba la firma del ex funcionario del BCRA, Eduardo Levy Yeyati, de Augusto de la Torre y Sergio Schmukler, funcionarios del Banco Mundial.

El documento proponía la dolarización de todos los contratos financieros y mantener una pesificación para las transacciones cotidianas, que podían realizarse con la emisión de una nueva moneda o con la utilización de un bono. Las observaciones críticas más destacables del informe estaban dirigidas hacia la política económica desarrollada por Roberto Lavagna, señalaba la baja aceptación del plan de bonos optativos para los ahorristas que había dispuesto el ministro, y proponía un canje compulsivo de los depósitos por bonos, con respaldo del Estado nacional.

En uno de sus párrafos más salientes, se destacaba que la dolarización hubiera sido la medida con mayor viabilidad política y consistencia, dado que la convertibilidad era una pieza fundamental en el "contrato social argentino", ya que representaba el compromiso asumido de largo plazo de que un peso era igual a un dólar. El argumento central era que hubiera ocasionado saludables implicancias para la confianza de los depositantes (De la Torre, Yeyati y Schmukler, 2002, pp.19-20).

Al mismo tiempo, remarcaba que la opción de dolarizar probablemente habría limitado los costos de la crisis, en contraposición a la pesificación, aunque no se hubiera podido evitar un ajuste fiscal significativo en las cuentas públicas.

No obstante, el 25 de junio de 2002, el mismo día en que el ministro Lavagna viajaba Washington para negociar con el FMI, el dólar tocaba los 4 pesos. Previamente a la jornada cambiaria, Anoop Singh, jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo internacional, manifestaba su posición de que no se vendieran más reservas, transmitiendo su visión a los operadores del mercado. Esto provocó una marcada tendencia ascendente en la cotización del dólar, que también generó una presión sobre los precios internos.

Además, debemos sumar que, alrededor de las expectativas en la negociación con el FMI, en la jornada cambiaria previa, las empresas y bancos se volcaban masivamente a la compra de dólares para cubrirse ante una respuesta desfavorable por parte del organismo.[61]

[60] Montenegro, M. (23 de junio de 2002), "El plan dolarizador que colmó la paciencia del equipo de Lavagna", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-6663-2002-06-23.html (Fecha de acceso, 29/06/2017).

[61] Cufré, D. (26 de junio de 2002), "En la city crece una marea verde" *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-6776-2002-06-26.html (Fecha de acceso, 08/07/2017).

Al día siguiente, tendría lugar uno de los acontecimientos más trágicos del periodo, el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. El hecho ocurriría en la estación de tren de la ciudad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, durante el transcurso de una movilización de diversas organizaciones de desocupados. En el accionar de la policía, que consistió en evitar el corte del Puente Pueyrredón, se registraron disparos con municiones de plomo que ocasionaron la muerte de los dos militantes. Además, se registraron veinte heridos y decenas de detenidos.

El mismo presidente Eduardo Duhalde calificaría a los sucesos como una "atroz cacería", ordenando la detención del responsable del operativo policial. Pocos días después, Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires, desplazaría a los máximos jefes de la policía, y nombraría a un nuevo ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero.

Esos acontecimientos repercutieron de forma directa sobre el periodo de gobierno de transición del presidente Eduardo Duhalde, ya que agudizaron el escenario político e institucional. Los hechos también generaron consecuentes efectos sobre la dirigencia del Partido Justicialista, que comenzaba a repensar los tiempos del cronograma electoral, evaluando una posible anticipación.

Ante ese cuadro de situación, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, encontraba en sus negociaciones con el FMI una bocanada de oxígeno para el gobierno nacional. Se acordaba una prórroga por un año de los vencimientos con el organismo multilateral de crédito, por 980 millones de dólares, y que tenían fecha de término a mediados de julio. De esa manera el país evitaba caer en cesación de pagos, y el FMI optaba por una especie de moratoria en lugar de realizar un nuevo préstamo.[62]

El FMI se comprometía a enviar una nueva misión para lograr finalmente un entendimiento con las autoridades del gobierno nacional. Además, se acordaba abrir la discusión vinculada al programa monetario a una "comisión de expertos". Aunque su dictamen no sería vinculante, tendría como objetivo acercar las diferencias existentes.[63]

En síntesis, por un lado, el gobierno ganaba tiempo con la prórroga de los vencimientos, esto mantenía en pie y activas a las negociaciones. Por otro lado, conseguía el compromiso de que se seguirían extendiendo los plazos para pagar a los organismos de crédito mientras durasen las discusiones, como era el caso de las deudas con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

[62] Cufré, D. (29 de junio de 2002), "Una tregua para que no pierdan todos", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-6955-2002-06-29.html (Fecha de acceso, 08/07/2017).
[63] Rosales, J. (29 de junio de 2002), "El FMI aceptó postergar los vencimientos", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/409507-el-fmi-acepto-postergar-los-vencimientos (Fecha de acceso, 08/07/2017).

Durante la gestión de Lavagna, las negociaciones con el FMI fueron condicionadas a la protección de las divisas en moneda extranjera. A partir de julio, comenzó a detenerse el drenaje de dólares del BCRA, y se inició un ciclo de acumulación de reservas. Al mismo tiempo, se detuvo la fuga de depósitos, aunque no se logró recuperar los niveles anteriores. Los bancos comenzaron a recuperar liquidez, y disminuyó la salida de capitales privados (Godio, 2003, pp.248-249).

El gobierno procuró romper el círculo vicioso plateado por el FMI desde el arribo de Lavagna al Ministerio de Economía, para eso se conjugaban dos criterios, en primer lugar, se establecieron preferencias de políticas económicas menos ambiciosas, pero con capacidades reales de ser implementadas. En segundo lugar, se manifestaba una mayor receptividad a las propuestas del FMI (Nemiña, 2013, p.20). Para avanzar sobre estos dos pilares, se dejó a un lado la insistencia de recibir fondos frescos, y se avanzó en la estrategia de limitar las negociaciones a la refinanciación de los vencimientos (Nemiña, 2013, pp.20-21).

En la trama de la negociación no podemos perder de vista la situación del Brasil, ya que se planteaba un escenario en donde la crisis podía cambiar de estado y dejar de ser un problema exclusivo de la Argentina, pasando a configurarse como un problema de carácter regional.

Por lo tanto, se debía evitar la propagación, teniendo además en consideración los efectos políticos que pudieran causar en las próximas elecciones presidenciales en Brasil, y el correspondiente ascenso en las encuestas del Partido de los Trabajadores (PT), que llevaba como candidato a Luiz Inácio "Lula" da Silva.

A comienzos del segundo semestre de 2002, la economía argentina comenzaba a tener algunos síntomas de una tibia recuperación. La fuerte caída del costo salarial en dólares, con la modificación de los precios relativos por efecto de la devaluación, favoreció el crecimiento y la rentabilidad en el sector de bienes transables (Salvia, 2014, pp.185-186). Se comenzaron a registrar mayores ganancias en las grandes empresas industriales.

La prórroga otorgada por los organismos multilaterales de crédito y la cesación de pagos con los acreedores privados posibilitó al gobierno nacional capitalizarse en reservas de forma gradual. En la balanza de pagos, en el transcurso del año, lograba un superávit de la cuenta corriente al suspenderse el pago de servicios de deuda, y en la balanza comercial, debido a la caída drástica de las importaciones (Godio, 2003, p.251).

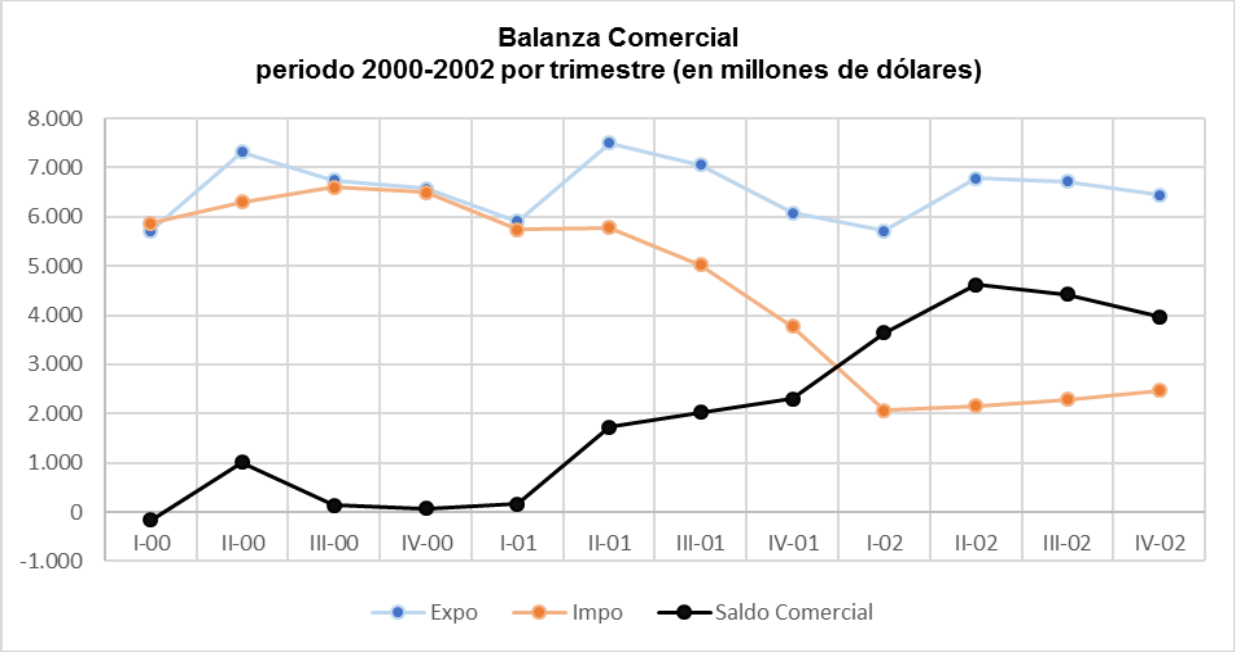
Ese proceso incipiente de recuperación económica se basaba en un tipo de cambio real, una modificación de los precios relativos a favor de la producción de bienes, una reducción del costo salarial medido en dólares y una expansión en la rentabilidad. En ese sentido, comenzó a operarse también sobre el sector externo, en donde se limitaron las transacciones en el mercado cambiario, buscando contener la suba de la cotización del dólar.

La política cambiaria, eje del esquema económico, constituyó un pilar fundamental, ya que fue una de las rupturas principales respecto de la convertibilidad. Formalmente implementado como un sistema de tipo de cambio libre, la intervención del Estado lo asemejó en la práctica a un sistema de *crawling peg*, con pequeñas adaptaciones regulares que trataban de evitar apreciaciones o devaluaciones súbitas y sostener la competitividad de los bienes transables (Musacchio, 2015a, p. 152-154).

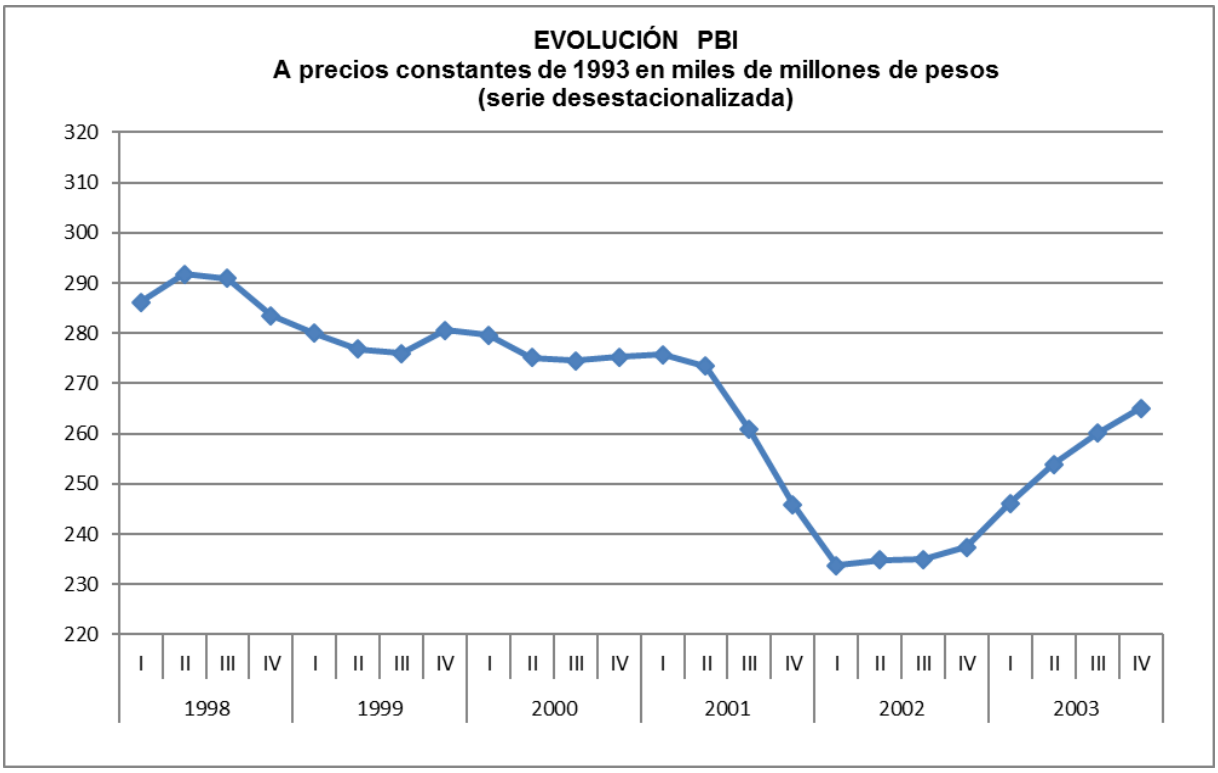
La superación de la crisis requería no solo de la estabilización del dólar, sino que el aumento de los precios de bienes y servicios fuera menor al aumento del dólar, de manera que hubiera una mejora efectiva del tipo de cambio real. En diciembre de 2002, el aumento de los precios internos alcanzó el 41%, muy por debajo del aumento de la cotización de la divisa. Esto significaba un tipo de cambio real más elevado, y con ello una mayor competitividad (Salvia, 2014, p.184).

Para finales de 2002 y comienzos de 2003, se configuraba un escenario en materia económica, en donde hasta tanto no se renegociase la deuda y se establecieran relaciones financieras internacionales, el crédito externo se encontraba interrumpido y el país debía vivir al contado con el resto del mundo (Godio, 2003, pp.251-252).

La novedad en aquel contexto es que la Argentina se encontraba con la posibilidad de hacerlo, sostenida en el superávit de balanza comercial y de pagos. El país había sufrido por el resultado de la depresión y la contracción de la economía un ajuste estructural de grandes magnitudes, originando posteriormente un escenario de crecimiento para adelante.



Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)



Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

Por otro lado, la situación política con relación al cronograma electoral aún era incierta, el gobierno de transición de Eduardo Duhalde poseía como objetivo maniobrar ordenadamente hacia el interior del Partido Justicialista las distintas corrientes internas, y de esa manera influir en la designación de su sucesor.

Luego del 26 de junio, a partir de los sucesos en Avellaneda, con el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki a manos de la policía de la provincia de Buenos Aires, el gobierno se encontraba políticamente disminuido. Con el correr de las semanas y a partir de los principios de acuerdo con el FMI, las capacidades de negociación del gobierno de transición se fueron reconstituyendo de a poco.

En ese sentido, en función de recuperar competencias en la negociación política, y con el objetivo de aplacar los ánimos reivindicativos de los sectores del trabajo, el gobierno auspiciaba el diálogo sectorial entre la CGT oficial, en representación de los trabajadores, y por el sector empresarial, se hacían presentes la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos Públicos y Privados y la Coordinadora de Actividades Mercantiles y Empresarias.[64]

[64] "Los salarios privados aumentarán 100 pesos" (3 de julio de 2002), *La Nación*. Disponible: http://www.lanacion.com.ar/410561-los-salarios-privados-aumentaran-100-pesos (Fecha de acceso, 08/07/2017).

A comienzos de julio, el gobierno buscaba los acuerdos necesarios para llevar adelante un aumento salarial general que beneficiara a los trabajadores del sector privado, con una suma fija de 100 pesos entre julio y diciembre, de carácter excepcional y no remunerativo para todas las actividades. Se estimaba que ese aumento beneficiaría a poco más de 3.100.000 trabajadores privados bajo convenio, que representaba un 50% de la fuerza laboral ocupada en el sector (Godio, 2003, pp.122-123). Recién a principios del mes de octubre, el aumento sería acordado definitivamente en el marco de la Mesa del Diálogo.

Finalmente, el presidente Duhalde renunciaba a cumplir con el periodo estipulado por la Asamblea Legislativa –hasta el 10 de diciembre de 2003– y decidía adelantar el llamado a elecciones, el nuevo gobierno electo asumiría el 25 de mayo. El propósito del duhaldismo, como expresión política interna del peronismo, ya no era sostenerse hasta cumplir el mandato, sino influir en la transición y en su potencial sucesor. Además, se establecían internas abiertas y simultáneas para todos los partidos.

Se presentaba de esa manera una lucha interna dentro del Partido Justicialista, en donde el Consejo Nacional del PJ era dominado por el menemismo, que pujaba por elecciones internas cerradas. Por otro lado, luego de que se retirase de la contienda el gobernador por Santa Fe, Carlos Reutemann, se había conformado una especie de coalición táctica entre el duhaldismo y los potenciales candidatos, como el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que emergía con mayores posibilidades, y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que exigían cambios en la composición del Consejo para acotar las posibilidades de maniobra del ex presidente Menem sobre las elecciones. A ese cuadro de situación, debemos sumarle la posibilidad de que se presentaran candidaturas por fuera del PJ, por ejemplo, las de Rodríguez Saá y Néstor Kirchner (Godio, 2003, p.148).

La situación se había complicado notablemente para el gobierno de transición encabezado por Duhalde, luego de la frustrada candidatura del gobernador de Santa Fe, Reutemann, que mostraba grandes posibilidades de unificar al peronismo y aislar de esa manera a definitivamente a Menem.

El plan del presidente Duhalde era construir un polo político de poder con anclaje en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, a partir de la inclusión del gobernador De la Sota. El duhaldismo apostaba a la fortaleza de los gobernadores que habían sido sostén durante la transición para constituir una candidatura capaz de superar y enfrentar al menemismo y a los sectores financieros trasnacionales. De esa manera pretendían constituir un gobierno con capacidad de sostenerse en el tiempo.

El 9 de octubre de 2002, la jueza María Servini de Cubría decide suspender las elecciones internas de los partidos políticos previstas para el 15 de diciembre de 2002. La jueza se apoyó

en el artículo 38 de la Constitución Nacional, que rige la vida interna partidaria, para decidir que los partidos políticos deben elegir a sus candidatos mediante elecciones internas y sin depender del financiamiento público (Godio, 2003, p.145).

El fallo beneficiaba directamente al presidente Duhalde, que se encontraba en una situación desventajosa para manejar la transición hacia las elecciones, en un contexto en donde se había quedado prácticamente sin candidato que rivalizara con Menem, ya que la candidatura del gobernador de Córdoba aún no había logrado tomar forma definitiva. Con esa medida, las negociaciones volvían a abrirse para las elecciones generales y se ganaba un poco más de tiempo para reconstruir el peronismo.[65]

En el transcurso de ese mismo mes, el duhaldismo convocaba al congreso del Partido Justicialista, logrando la participación de un tercio de los delegados, aunque con la ausencia del menemismo. Se determina una nueva fecha para las elecciones internas, se conforma una nueva junta electoral y se convocaba a elecciones para el Consejo Nacional, que era dominado por el menemismo. Persistían entre los representantes de diversas corrientes internas dudas acerca de la legalidad de la convocatoria y de las decisiones tomadas en el encuentro, por temor a una futura impugnación judicial.[66]

El congreso partidario, dominado por el duhaldismo, convocaba a los sectores internos de la provincia de Santa Fe, aún sin estar representados por el gobernador Reutemann, de la provincia de Córdoba, con la presencia del gobernador De la Sota, y de la provincia de Buenos Aires, contando con la asistencia del gobernador Felipe Solá. La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, en carácter de autoridad partidaria, y en representación de los delegados de Santa Cruz, fue la responsable de presidir el congreso.[67]

La incertidumbre política en la que se encontraba inmerso el país, a partir de la complejidad de la interna del peronismo, que dominaba la escena pública, afectaba las negociaciones con el FMI. En el diálogo con el organismo multilateral de crédito para arribar a un acuerdo definitivo en cuanto a la prórroga de los futuros vencimientos, comenzaban a interferir las capacidades de sustentabilidad de lo convenido en el tiempo, al no estar despejado el horizonte político sobre la dirección que asumiría el nuevo gobierno que sería electo el año siguiente.[68]

---

[65] Schurman, D. (10 de octubre de 2002), "Como si fuese pensado para Duhalde", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-11307-2002-10-10.html (Fecha de acceso, 09/07/2017).
[66] "Fuerte jugada contra el poder de Menem" (30 de octubre de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/445435-fuerte-jugada-contra-el-poder-de-menem (Fecha de acceso, 09/07/2017).
[67] Cibeira, F. (30 de octubre de 2002), "Un día para que Duhalde se sienta ganador", Página 12. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-12167-2002-10-30.html (Fecha de acceso, 09/07/2017).
[68] "En EE. UU. preocupa la política" (30 de octubre de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/445451-en-eeuu-preocupa-la-politica (Fecha de acceso, 12/07/2017).

En esa situación, el FMI procuraba integrar a las discusiones una cláusula de condicionalidad, de compromiso a futuro, para que las nuevas autoridades que asumieran ratificaran los compromisos alcanzados.

En los últimos días de octubre, el ministro Lavagna se hacía presente en Washington con el objetivo de seguir ajustando detalles en las negociaciones. El FMI ponía el eje en la cuestión política, la constitución de nuevo gobierno en mayo de 2003, la situación de los amparos que producían un goteo en el corralito, nuevas condiciones fiscales para las provincias, un incremento en los impuestos, una pronta desregulación del mercado de cambios y la suba de tarifas de los servicios públicos.[69]

La posición de Lavagna se contradecía con las obligaciones que demandaba el FMI, y los argumentos que esgrimía iban en dirección de sostener y seguir alimentando la incipiente recuperación económica que se visualizaba a partir de junio. Rechazaba de plano un ajuste de tarifas en los servicios públicos del orden de un 30%, se oponía a una mayor exigencia fiscal para las provincias y alertaba sobre el efecto recesivo de una suba en materia impositiva.

En estricta relación con el ajuste de tarifas de los servicios públicos, el gobierno se encontraba en una compleja disyuntiva, frente al reclamo de mejora de las rentabilidades de la compañía concesionarias de estos servicios, que habían gozado de un periodo extendido de beneficios extraordinarios, basado en la estructura monopólica u oligopólica de mercado, y la posibilidad de ajustar aumentos tarifarios en función de la inflación de EE. UU. (Nemiña, 2013, p.25). Pero, por otro lado, necesitaba el apoyo de los países del G-7, como era el caso de España, Francia, Italia y Alemania, lugar de origen de las casas matrices de las concesionarias, para arribar finalmente a un acuerdo con el organismo internacional de crédito.

Debemos sumar a ese escenario convulsionado, la VIII Conferencia Industrial Argentina, en donde se expresaban con unanimidad las preocupaciones sobre las internas políticas en el oficialismo. Héctor Massuh, titular de la Cámara de la Alimentación y vicepresidente de la Unión Industrial, en ese entonces ejerciendo la presidencia de la agremiación empresaria, por licencia del ex ministro de Producción, José Ignacio de Mendiguren, se encargaba de expresar las inquietudes del empresariado.[70]

En la inauguración de la conferencia empresaria, faltaron destacados dirigentes, de gran protagonismo cuando el Grupo de los Ocho se quebró y dio lugar a la conformación del Grupo Productivo. No fueron parte del encuentro las cámaras de calzado, de la madera, la siderurgia y

[69] "Todavía hay demasiados puntos abiertos" (31 de octubre de 2002), *Pagina 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-12185-2002-10-31.html (Fecha de acceso, 12/07/2017).
[70] "La UIA pide que el PJ termine con su interna" (31 de octubre de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/445733-la-uia-pide-que-el-pj-termine-con-su-interna (Fecha de acceso, 12/07/2017).

de las pymes. Tampoco asistieron Paolo y Roberto Rocca, ni Sergio Einaudi, todos del Grupo Techint, aunque la corporación estuvo representada por un alto ejecutivo, Luis Betnaza.[71]

La asociación empresaria transitaba sus propias internas después de varios años de predominio de la línea denominada Movimiento Industrial Nacional (MIN), encabezada por Paolo Rocca, de Techint, Guillermo Gotelli, ejecutivo de Alpargatas y de José Ignacio de Mendiguren, de textiles. Desde el otro sector, el Movimiento Industrial Argentino (MIA), aparecen Álvarez Gaiani, de la Cámara de la Alimentación, entonces vicepresidente de la entidad, Luis Spanggemberch, de Quilmes, Cristiano Rattazzi, de Fiat y Héctor Massuh, del Grupo Papelera Massuh.

La Unión Industrial Argentina debía constituir nuevas autoridades en abril de 2003, y no le era esquiva la situación por la cual atravesaba el peronismo y la conformación del nuevo gobierno para mayo del año entrante. Las diferencias políticas en el seno de la entidad reflejaban las internas políticas del Partido Justicialista, donde Álvarez Gaiani, del MIA, era cercano a la corriente interna que conducía el ex presidente Menem, mientras que Mendiguren y Gotelli, del MIN, fueron y eran parte del entramado del gobierno de transición de Duhalde.

En la VIII Conferencia Industrial Argentina, por iniciativa del MIA, protagonizado por Álvarez Gaiani, vicepresidente de la UIA, tenía lugar en el cónclave la participación de los ex integrantes del Grupo de los Ocho, articulación empresaria que había predominado durante la década de los noventa, y que había sido sustento político del gobierno de Carlos Menem y del régimen de convertibilidad.

Participaban de la conferencia de la entidad fabril, la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina. Solo faltarían la Asociación de Bancos de la Argentina y la Cámara Argentina de Comercio.[72]

Desde algunos sectores empresariales, se buscaba rearticular el viejo esquema dominante en la década anterior, con el objetivo de comenzar a dirimir ciertas cuestiones internas en el bloque empresario de cara a las elecciones presidenciales. Debemos señalar que ese viraje en el posicionamiento de las distintas entidades se sostenía por la necesidad de reagruparse con el objetivo de afrontar eventuales presiones salariales.[73]

[71] Cufré, D. (31 de octubre de 2002), "La UIA hace sus cuentas mirando al PJ", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-12187-2002-10-31.html (Fecha de acceso, 12/07/2017).
[72] Rebossio, A. (31 de octubre de 2002), "Buscan la unidad de los empresarios", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/445734-buscan-la-unidad-de-los-empresarios (Fecha de acceso, 12/07/2017).
[73] Cufré, D. (30 de octubre de 2002), "El retorno de los viejos conocidos", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-12151-2002-10-30.html (Fecha de acceso, 12/07/2017).

Eduardo Duhalde rechazó la invitación a la conferencia por parte de la entidad empresaria, suspendiendo así su discurso de clausura. La ausencia del presidente tuvo lugar en un contexto en donde la mayoría de la cúpula empresarial de la UIA se inclinaba por la candidatura de Menem para 2003.[74]

En relación con la heterogeneidad de la UIA, es necesario señalar que la propia entidad desde la década de los ochenta había tenido dos corrientes internas predominantes, el Movimiento Industrial Nacional (MIN), de tendencia mayormente heterodoxa, con características de privilegiar el mercado interno y de impulsar políticas proteccionistas, sus dirigentes se encuentran mayormente vinculados al pensamiento desarrollista. En contraposición, el Movimiento Industrial Argentina (MIA), poseía una visión asociada al liberalismo económico, ligado a los intereses exportadores y al sector agroindustrial (Schteingart, 2011, pp.7-9).

En cuanto al movimiento obrero organizado, y la puja por las candidaturas para las elecciones de presidenciales de 2003, la CGT oficial, conducida por Rodolfo Daer, se mantenía distante y sin pronunciamiento por ninguna fugara del peronismo. Su apoyo y cooperación al gobierno de transición no estaba en duda, pero buscaba no involucrase en la interna del Partido Justicialista. Los objetivos estaban puestos en las reivindicaciones salariales, de carácter estrictamente sectorial, manteniendo su identidad peronista, pero sin comprometerse con ningún lineamiento político-partidario (Godio, 2003, pp.195-196).

La CGT disidente, de Hugo Moyano, se definía públicamente a favor de la candidatura de Rodríguez Saá, ocasionando así resistencias internas dentro de la propia central y hacia el interior del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), en donde el diputado nacional Daniel Carbonetto, alertaba con un posible apoyo al gobernador Néstor Kirchner.

La Unión Obrera Metalúrgica, alejada ya finalmente de las dos centrales, incorporada a las 62 Organizaciones Peronistas, se encontraba divida. La seccional de la provincia de Buenos Aires, encabezada por el diputado nacional Francisco Gutiérrez, se movía entre apoyar la candidatura de Rodríguez Saá o la de Néstor Kirchner, mientras que la seccional de la Ciudad de Buenos Aires, liderada por Roberto Monteverde, se inclinaba decididamente por Carlos Menem.[75]

El comportamiento de las representaciones obreras en el transcurso del año 2002 fue defensivo, salvo el caso particular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), con

[74] Cufré, D. (2 de noviembre de 2002) "Pese a heridas y rencores, habrá un frente empresario", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-12265-2002-11-02.html (Fecha de acceso, 12/07/2017).
[75] "La puja del PJ divide a las CGT" (5 de noviembre de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/447344-la-puja-del-pj-divide-a-las-cgt (Fecha de acceso, 12/07/2017).

mayoritaria representación en el ámbito público. Se presentan dos causas de esa conducta (Godio, 2003), la primera fue el temor de esos trabajadores por perder sus puestos de trabajo, frente a un contexto sociolaboral sumamente complejo, con una tasa de desocupación que alcanzaba el 25%. La segunda causa que explica ese comportamiento político por parte de las dos CGT se circunscribe a no generarle mayores problemas al gobierno de transición de identidad peronista.

Ahora bien, volviendo a las negociaciones del gobierno con el FMI, y en función de los vencimientos de deuda con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, llegada la fecha límite para declarar el default, el 14 de noviembre de 2002, con los organismos internacionales; el ministro Lavagna resolvió, sin arribar a un cierre en las negociaciones, abonar con reservas el monto que hacía a los intereses de deuda con las entidades financieras. Se realizó un pago de 77 millones de dólares, y se solicitó una prórroga para cancelar el capital de deuda. El gobierno argumentaba que el nivel de reservas impedía el pago total.[76]

Poco tiempo después, el gobierno de transición convocaba a los gobernadores y legisladores nacionales con el objetivo de arribar a un acuerdo en el que se atendieran los reclamos del FMI. Para, de esa manera, brindarles previsibilidad y sustentabilidad a los compromisos asumidos posteriormente a las elecciones de 2003, ya que una de las preocupaciones del organismo internacional era si el próximo gobierno se haría responsable de los convenios alcanzados.[77]

Podemos observar cómo las preocupaciones del organismo de crédito internacional se trasladaban, en esta etapa final de las negociaciones, a la esfera político-partidaria en su exigencia de configurar un marco institucional de continuidad en materia económica. Es por eso que se impulsaba un gran acuerdo de la gran mayoría de la dirigencia política con responsabilidad de gobierno y con facultades legislativas. Muchos de ellos, posibles candidatos en la contienda electoral próxima. El objetivo del FMI era comenzar a la futura gestión de gobierno.

Es entonces que podemos comprender que la extensión en las negociaciones se debía, entre otras causas, a la necesidad de tener más tiempo para generar el amplio acuerdo político e institucional, que incluía a casi todo el arco político o, por lo menos, a todos los sectores partidarios con potencialidad de ascender a la conducción de los destinos del país.

---

[76] "Sólo se pagarán los intereses de los US$ 805 millones" (14 de noviembre de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/449896-solo-se-pagaran-los-intereses-de-los-us-805-millones (Fecha de acceso, 14/07/2017).

[77] "Respaldo de los gobernadores para acordar con el FMI" (18 de noviembre de 2002), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/450988-respaldo-de-los-gobernadores-para-acordar-con-el-fmi (Fecha de acceso, 14/07/2017).

La finalidad de la convocatoria, por parte del gobierno de transición, no era potenciar una posición de fuerza para enfrentar las exigencias del FMI, sino arribar a las exigencias presentadas por el organismo internacional, encuadrando las capacidades de maniobra de próxima administración.

Hacia finales del mes de noviembre de 2002, el gobierno de transición lograba aprobar una de las demandas del FMI en el Congreso Nacional: el cronograma electoral de 2003, iniciativa que había sido acordada con los gobernadores y legisladores nacionales previamente, en la reunión que había tenido lugar en la quinta presidencial de Olivos.[78]

Asimismo, se anunciaba un aumento del 9% en las tarifas eléctricas y un 7% en las de gas a cambio de asegurarse el apoyo decisivo de España, Francia, Italia y Alemania, lugar de origen de las casas matrices de las compañías concesionarias de la gran parte de los servicios públicos privatizados.

Finalmente, en enero de 2003, el FMI aprobó un acuerdo *stand-by* transitorio de ocho meses, poniendo fin a más de un año de negociaciones. Se establecía un esquema en donde no se determinaba el financiamiento neto positivo del organismo internacional, sino que sus desembolsos solo cubrirían los vencimientos de capital, debiendo el país cancelar los intereses (Nemiña, 2013, pp.25-26). Eso evitaba que el gobierno tuviera que enfrentar pagos por 3.000 millones de dólares que vencían hacia finales de agosto.

Ahora bien, en ese momento, las tendencias económicas –que se habían comenzado a demarcar a principios de julio de 2002– empezaban a consolidarse, la cotización del dólar se estabilizaba con ciertas tendencias a declinar, debido a la combinación de un superávit comercial importante y por el mantenimiento de los controles de cambio (Peralta Ramos, 2007, pp.410-411).

En camino a las elecciones del 27 de abril de 2003, la composición del escenario político electoral se caracterizaba por la fragmentación de todo el arco político. El peronismo, en particular presentaría tres candidaturas a presidente, como consecuencia de la incapacidad de realizar elecciones internas dentro del Partido Justicialista. Las opciones con mayor capacidad de alcanzar un triunfo se focalizaban en el candidato elegido por Duhalde, Néstor Kirchner, y en el ex presidente Carlos Menem.

El peronismo experimentaba una crisis de liderazgo que se expresaba en las tres candidaturas a presidente. Esta situación reflejaba la persistencia de una crisis de dominio, porque no existía una corriente interna con la capacidad de bloquear a las otras o de imponerse

[78] Tagliaferro, E. (22 de noviembre de 2002), "Ahora apenas falta lo más complicado", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-13235-2002-11-22.html (Fecha de acceso, 14/07/2017).

sobre las demás, y ninguna lograba articular políticamente a las diferentes fracciones para lograr su hegemonía hacia el interior movimiento político.

En los comienzos del año electoral, el FMI y el G-7 persistían en sus presiones sobre el gobierno de transición, y también las desplegaban sobre los candidatos a presidente con mayores chances de ganar la elección. Se ponía eje en el presupuesto de 2003, con la idea de que se alcanzara un superávit de 2,5% del PBI, por las desregulaciones cambiarias, un incremento aún más elevado en materia de tarifas y servicios públicos y la disminución de las cargas impositivas (Godio, 2003, pp.158-159).

Los sectores empresariales locales, representados principalmente por el Movimiento Industrial Argentino (MIA), de la UIA, expresaban en primer lugar su apoyo político a la candidatura de Menem, aunque observaban expectantes las capacidades electorales del candidato Ricardo López Murphy, proveniente de la Unión Cívica Radical. En la interpretación de esos sectores de la industria, más los sectores financieros internacionales y locales, esas dos candidaturas expresaban sus intereses económicos.

Cuanto más se acercaba la fecha electoral, mayores tensiones se acrecentaban en torno a los intereses particulares y sectoriales de los distintos actores de la economía, tanto a nivel local como internacional. La posibilidad de establecer nuevamente un "ancla cambiaria" sobre la cotización del dólar despertaba el plan de establecer nuevamente un nuevo régimen de convertibilidad y posteriormente una dolarización de la economía.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), fundada el 28 de mayo de 2002, expresaba sus posicionamientos con relación a la política económica a seguir, esgrimiendo sus intereses sectoriales y, de esa forma, intentaba marcarles la agenda a los candidatos presidenciales. En un principio, esa asociación había sido constituida por iniciativa de diversos actores empresariales, entre los que se encontraba la UIA, conducida por los sectores del Grupo Productivo, con la intención de enfrentarse a los intereses de los sectores financieros.

En esa nueva etapa, y con la conducción del MIA, línea interna de la entidad fabril, que había sido desplazada en el manejo de la UIA, los intereses de esos sectores empresarios comenzaban a cambiar sustancialmente. En un documento publicado por la asociación, denominado "Propuestas de AEA para el nuevo gobierno", se determinaban diferentes políticas a seguir.[79]

Se realizaba una crítica a la devaluación de comienzos de 2002, y a la posterior pesificación, argumentando que se debía contar con un marco económico e institucional previsible para lograr el desarrollo sostenible. También se hacía mención a la dolarización, en

[79]Scaletta, C. (3 de abril de 2003), "Libreto conocido y gastado", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-18354-2003-04-03.html (Fecha de acceso, 14/07/2017).

función de que se debía restaurar la confianza de los ciudadanos mediante el respeto a la ley y a los contratos públicos y privados. Así subrayaba una demanda de las empresas privatizadas, que pretendían cláusulas que les posibilitaran ajustar tarifas en vinculación con el dólar.

Las demandas de las asociaciones bancarias, expresadas en el documento, hacían hincapié en la recuperación del sistema financiero, siguiendo las exigencias del FMI, y en la reinserción en el mercado de crédito internacional. Se sostenía que el objetivo prioritario del próximo gobierno debía ser llegar a acuerdos duraderos con los organismos multilaterales de crédito.

El 22 de abril se realizaban las elecciones para conformar la nueva conducción de la UIA, la candidatura de Álvarez Gaiani –titular de Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) en representación de la lista "Consenso" y cercano al ex presidente Carlos Menem– se imponía sobre Guillermo Gotelli, de la lista Industriales, cuya postulación era impulsada por un sector encabezado por el grupo Techint.[80]

Luego del triunfo, Álvarez Gaiani sostenía: "Estas elecciones nunca debieron haber tenido lugar, porque no son el resultado de proyectos irremediablemente contrapuestos, sino el producto de la ruptura unilateral de los acuerdos". El presidente electo de la entidad hacía referencia a que el convenio que no se había respetado consistía en que la conducción de la UIA correspondía una vez al Movimiento Industrial Nacional (MIN) y la siguiente al Movimiento Industrial Argentino (MIA), del cual él formaba parte.[81]

Durante la campaña electoral, Néstor Kirchner confirmó a Roberto Lavagna como su futuro ministro de Economía, buscando enviar una señal clara respecto de que el orden económico desde junio de 2002 no sería alterado. Esa decisión contribuyó a brindar cierta estabilidad en las expectativas económicas, tanto en el marco local como en el internacional (Peralta Ramos, 2007, p.412).

En las elecciones del 27 de abril de 2003, Carlos Menem, con el 24% de los votos, alcanzó el primer lugar, seguido por Néstor Kirchner con el 22%. Luego de la primera vuelta electoral, que reflejaba la fragmentación de todo el sistema político, y del peronismo en particular, cuando Menem retiró su candidatura para la segunda vuelta, Kirchner accedió a la presidencia.

[80] Sainz, A. (22 de abril de 2002), "En comicios de final incierto, se elige hoy al titular de la UIA", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/490709-en-comicios-de-final-incierto-se-elige-hoy-al-titular-de-la-uia (Fecha de acceso, 14/07/2017).
[81] "No se fueron, pero vuelven" (23 de abril de 2002), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-19198-2003-04-23.html (Fecha de acceso, 14/07/2017).

2.4. Desarticulación del orden neoliberal y las capacidades de una nueva articulación

A lo largo del capítulo hemos podido dar cuenta de las controversias que tuvieron lugar hacia finales de 2001 con relación al régimen de convertibilidad. El consenso hegemónico empresario, alrededor del tipo de cambio, entró en crisis y perdió de esa manera su capacidad de sostenerse.

Como respuesta a esa situación, en algunos actores del empresariado local e internacional tomó relieve y protagonismo la alternativa de la dolarización de la economía nacional. Del otro lado y, en oposición, se encolumno el Grupo Productivo con un mayor protagonismo de los sectores de la UIA, de aquellos cuyos intereses se encontraban mayoritariamente en el mercado interno, y se posicionaban a favor de una devaluación con el objetivo de licuar sus pasivos en dólares y generar una baja en su estructura de costos.

A lo largo del periodo, y con posterior a la conformación de gobierno de transición de Eduardo Duhalde, esa disputa entre los diferentes actores empresariales se sostuvo. Podemos observarlo en las elecciones presidenciales de mayo de 2003, en donde los sectores proclives a la dolarización apoyaron la candidatura de Carlos Menem.

Señalamos que, la desarticulación del orden neoliberal comenzó a desplegarse en las disputas que se dieron lugar hacia el interior del Grupo de los Ocho. Posteriormente, ese conflicto tomó forma en la conformación de los ordenamientos partidarios.

El gobierno de transición de Duhalde es producto de la articulación incipiente de los sectores políticos, empresarios y sindicales que comienza a configurar los primeros cimientos de un nuevo orden. Primeramente, se logra desplegar un discurso de rechazo a las políticas desarrolladas durante la década de los noventa, sin componer un entramado equivalencial que trascienda la “lógica diferencial” y de negatividad.

Posteriormente, la lógica de articulación antagónica a la etapa neoliberal comenzará a tomar relieve con la candidatura de Néstor Kirchner y se desplegará con vocación hegemónica durante su periodo de gobierno, logrando articular una “lógica equivalencial” de heterogéneas demandas de forma estable en el tiempo. En esa etapa, las organizaciones de trabajadores recuperarán un mayor protagonismo, en un contexto de gradual fortalecimiento del mercado de empleo y recomposición salarial.

Capítulo III

La fase expansiva del ciclo, una nueva articulación hegemónica y el despliegue político del kirchnerismo (2003-2007)

3.1. Una breve caracterización general a comienzos del periodo

A partir de mayo de 2003, con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, comenzó un cambio de época en la Argentina, marcado por la crisis del proyecto neoliberal. Este periodo terminará abriéndole el paso a un nuevo patrón de crecimiento, en que el Estado nacional desempeñará un nuevo rol en la política económica, como también en el desarrollo de un nuevo enfoque en materia de relaciones laborales.

En la etapa anterior, signada por la hegemonía neoliberal, el desarrollo de la política pública estuvo impulsado hacia el desmantelamiento de las instituciones del mundo del trabajo, la flexibilización del mercado laboral y el disciplinamiento de la puja distributiva. Consecuentemente, esa serie de medidas, en compañía de muchas otras, llevaron a un contexto socioeconómico sumamente complejo con altos niveles de desocupación, pobreza e indigencia, que terminarán desembocando finalmente en la crisis de diciembre de 2001-2002.

El neoliberalismo, como proyecto hegemónico que se enmarca en la desregulación de la vida económica y social, en la esfera exclusiva de la política laboral procuró constituir un sistema caracterizado por la individualización de las relaciones del trabajo. Eliminó las prácticas vinculadas a la negociación colectiva, descentralizando esa herramienta a nivel de empresa, procurando constituir un contexto en donde las correlaciones de fuerzas debilitasen al actor sindical.

A partir del segundo semestre de 2002, luego de la devaluación, la economía argentina comenzó a marcar un cambio leve de tendencia, dando lugar a los primeros síntomas de recuperación que se manifestaron en el Producto Bruto Interno. La recomposición de los precios relativos –con una licuación de los salarios, la consecuentemente baja de los costos en dólares para las empresas, con un traslado a precios que impactó levemente en el índice inflacionario por escases de demanda interna– inició un ciclo de repunte de la actividad económica.

En un principio, el leve repunte de la actividad se apoyó en un tipo de cambio elevado, que le devolvió a la economía una mayor competitividad en materia comercial, como consecuencia de la modificación en los precios relativos. Esta situación generó en los productos del sector agroexportador un registro de mayor dinamismo.

Al mismo tiempo, la política cambiaria posibilitó un freno a las importaciones, que fue llevando a la sustitución de las mismas en algunas actividades o bienes específicos. Así generó un mayor superávit de la balanza comercial y una recapitalización en reservas por parte de la autoridad monetaria.

Ahora bien, la devaluación generó un principio de rediseño en el orden macroeconómico respecto de la etapa anterior, así el sector externo se posicionó desde un lugar de mayor competitividad, en un contexto de creciente aumento de los precios internacionales de bienes primarios.

Posteriormente, el mercado interno se incorporará a la recomposición de la economía nacional, debido al despliegue de políticas de incremento salarial que se irán desarrollando gradualmente, en función de las posibilidades del gobierno para incentivar la demanda, con el cuidado de no caer en el riesgo de un aumento generalizado de los precios internos.

Es entonces que, para llevar adelante una política de recomposición de salarios, será sumamente importante tanto el rol que cumplirán los actores sectoriales, las agremiaciones empresarias y el movimiento obrero organizado como también el Estado, en su capacidad de promover y encausar institucionalmente las diversas negociaciones, imponiendo una restricción a la discrecionalidad salarial.

De esa manera, podremos observar la conformación de un escenario de amplitud y consolidación de las capacidades de coordinación estatal, derivadas de su recuperación en materia de competencias de arbitraje, que tienen su origen y sustento en la orientación económica.

En definitiva, nos detendremos en el desarrollo de la política económica del gobierno de Néstor Kirchner con la pretensión de comprender la recomposición de las distintas variables macroeconómicas y la recuperación del mercado doméstico, que posibilitaran la construcción de un nuevo patrón de crecimiento.

Al mismo tiempo, prestaremos atención al avance en materia de políticas laborales, que se encaminarán hacia la recuperación del mercado de trabajo, ocasionando la revitalización de los diversos actores sectoriales. Esto nos posibilitará analizar los diferentes repertorios y lógicas de acción colectiva desarrollados por cada uno de estos actores con relación al gobierno nacional para obtener mayores grados de influencia en la orientación de las decisiones de políticas públicas.

El periodo que compone el presente capítulo tiene lugar desde principios de 2003 hasta finales de 2007, etapa que denominaremos como la fase expansiva del ciclo económico, en la cual tendrá lugar la conformación de una nueva formación hegemónica.

Esta se expresará paulatinamente a partir del desarrollo del kirchnerismo como identidad política y social, y que será identificado como aglutinador de diversas demandas, cumpliendo así la articulación de éstas a partir de la lógica equivalencial de cadenas constitutivamente heterogéneas. En función de dar cuenta de esa propia lógica articulatoria, nuestra perspectiva de análisis se sitúa en los posicionamientos de los actores sectoriales, representativos del capital y el trabajo, y en la capacidad del gobierno nacional de desplegarse hegemónicamente.

3.2. La configuración de un nuevo diseño macroeconómico

Posteriormente a la crisis de 2001 y 2002, en el transcurso de los primeros años de la fase expansiva del ciclo, comenzó a configurarse un nuevo diseño macroeconómico, que fue posible a partir de la recuperación de la política monetaria y cambiaria, luego del colapso del régimen de convertibilidad.

Hubo dos condiciones iniciales que propiciaron un escenario favorable al crecimiento y que impactarían fundamentalmente en los sectores productores de bienes transables: un tipo de cambio real positivo y un aumento de la demanda global que posibilitó un movimiento al alza de los precios internacionales. Ese contexto comenzaba a tomar forma y relieve hacia finales de 2002 y lograba consolidarse a comienzos del año 2003.

En comparación con experiencias anteriores en la historia económica argentina, la posterior devaluación cambiaria tuvo un reducido traslado a precios internos, ocasionando que los costos del mercado doméstico no aumentaran considerablemente. Debemos subrayar que, para el segundo semestre de ese mismo año, la cotización del dólar registraba un aumento del 300% y la inflación acumulada registraba valores levemente superiores al 30 por ciento%.[82]

Esa situación solo fue posible gracias de la depresión económica en la que estaba sumergido el país, en un escenario de escaza de demanda interna y nula resistencia salarial por parte de los actores sindicales. Esto era acompañado por un cuadro social que, para finales de 2002, señalaba un ascenso de la indigencia a un 27,5%, mientras que por debajo de la línea de pobreza se registraba un 57,7%[83] del total de la población urbana.

A diferencia de otros casos históricos, las pautas distributivas emergentes de los procesos posteriores a la devaluación no lograban estabilizarse, porque el mecanismo de ajuste intrínseco colisionaba con la presencia de una poderosa resistencia salarial. De allí el magro

[82] Ministerio de Hacienda - Subsecretaría de Programación Macroeconómica.
[83] INDEC, Encuesta Permanente de Hogares (octubre 2002).

resultado de la “inflación cambiaria” (Diamand, 1978), en donde las capacidades de lograr el ajuste externo tenían un costo altísimo en términos de inflación y producto, y por esa razón la visión heterodoxa de la devaluación siempre fue contractiva (Amico, 2008, pp.35-37).

Las reiteradas devaluaciones que se sucedieron a lo largo del siglo XX se generaban a partir de la expansión de la actividad industrial, gran proveedora de empleo, pero a su vez consumidora de cuantiosas divisas (Diamand, 1972; Gerchunoff, 2006). De este modo, cuando esta se expandía generaba las condiciones para una futura contracción de la economía, poniendo en una situación deficitaria a la balanza de pagos.

Cuando una crisis de esa característica tenía lugar, terminaba siendo inevitable el ajuste cambiario, así se retomaba el ciclo de *stop and go* que provocaba consecuentemente una caída del salario real. En definitiva, el tipo cambio real que equilibraba el sector externo era a larga inconsistente con el salario real que equilibraba el mercado de trabajo (Gerchunoff, 2006).

En contextos de gran demanda de importaciones, el tipo de cambio puede cumplir un mecanismo de control. Un movimiento al alza en la cotización del mercado de cambios deprime el salario real y, en consecuencia, el poder adquisitivo de los asalariados, induciendo a una recesión que permite regenerar la cuenta corriente (Canitrot, 1983).

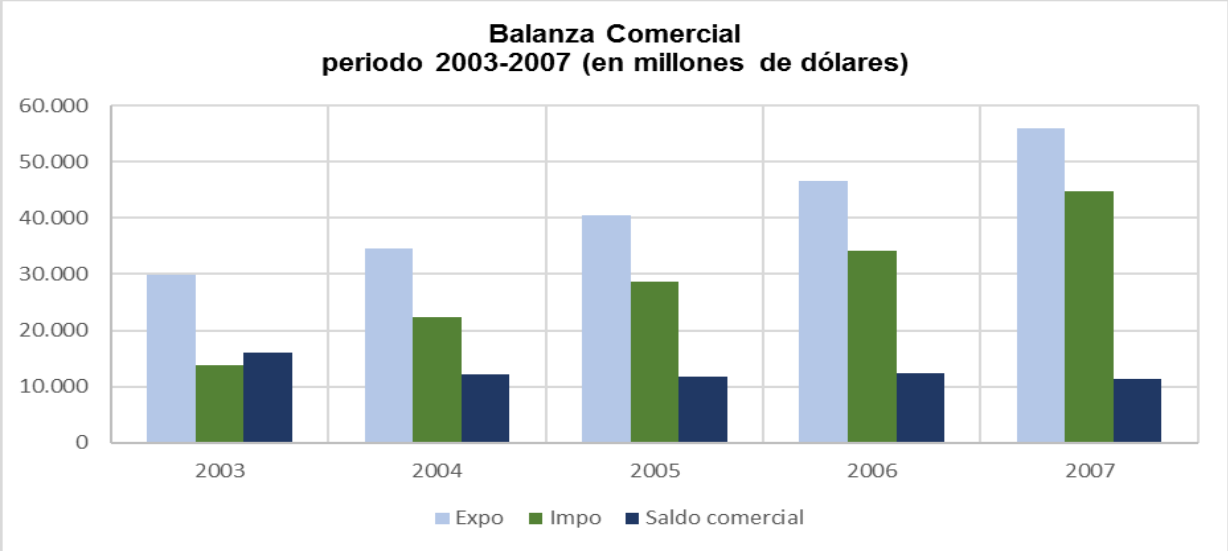
De esa manera, podemos determinar un salario real de equilibrio y compatible con el balance de cuenta corriente. Si el salario real tiende a ser mayor que el de equilibrio, se nos presenta un déficit en el sector externo, que se corrige a partir del alza del tipo de cambio y, al mismo tiempo, provoca una caída del salario real. Determinamos así una dependencia de largo plazo entre el salario real y los niveles de productividad, de las exportaciones de bienes primarios y de la inversión en las industrias sustitutivas de importaciones (Canitrot, 1983).

Debemos destacar que, en las estructuras productivas desequilibradas, en donde el sector industrial posee un crecimiento a precios relativos mayores que el sector exportador de bienes primarios, un tipo de cambio capaz de igualar los precios del sector exportador con los internacionales es incapaz de igualar con ellos los precios industriales, ya que el sector industrial funciona en un nivel más alto en materia de costos (Diamand, 1972).

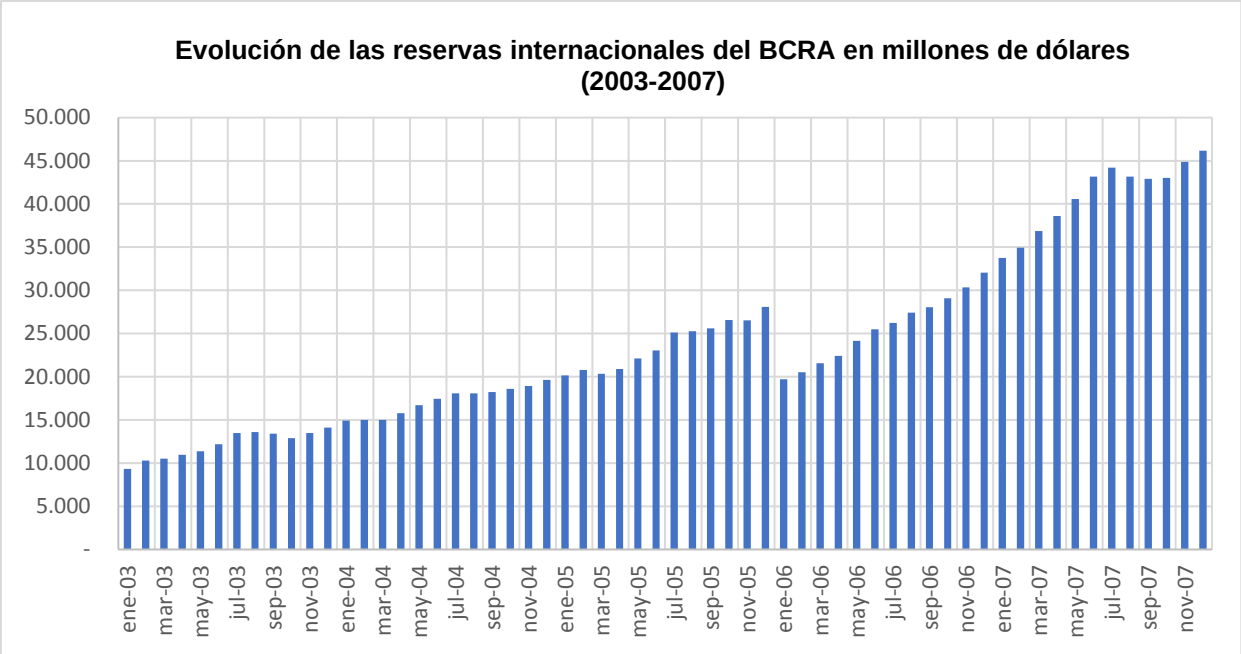
Por lo tanto, el tipo de cambio único no puede armonizar el funcionamiento entre cada sector, ya que no logra coincidir con todas las paridades necesarias. En esa situación, un posible principio de solución es la conformación de un sistema de cambios múltiples, en donde se establece un tipo de cambio nominal que es coincidente con una de las paridades y otro de forma paralela, en donde cada uno proporciona una adecuación de paridad a la productividad del sector de actividad al que pertenece (Diamand, 1972).

Ahora bien, para la conformación y sostenimiento de ese tipo de cambio real positivo posterior al régimen de convertibilidad, además de la gran incidencia de los niveles bajos de consumo durante los primeros años, podemos agregar los altos porcentajes de capacidad ociosa en las diversas ramas productivas, como también el mantenimiento del cuadro tarifario de los servicios públicos, que posteriormente brindarán la posibilidad de una readecuación en las estructuras de costos a favor de los bienes transables (Gallo, 2014; Amico, 2008).

En esa coyuntura, favorable para el sector agroexportador, comenzó de manera progresiva a acrecentarse el superávit de la balanza comercial, lo que posibilitó una recomposición de reservas vía derechos de exportación y, consecuentemente, un incremento en las capacidades de administrar el mercado cambiario.



Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)



Fuente: Elaboración propia en base a Gerencia de Estadísticas Monetarias – BCRA

Hacia comienzos de 2003, ya bajo el gobierno de Néstor Kirchner, el BCRA intervenía comprando divisas y esterilizaba parcialmente la emisión monetaria producida por la propia intervención. Es entonces que colocando papeles de deuda a corto plazo se procuraba mantener acotado el crecimiento de dinero circulante (Damill y Frenkel, 2013, p. 12).

Podemos destacar, entonces, las operaciones de la autoridad monetaria (el BCRA) y el Tesoro Nacional en pos de mantener acotadas las fluctuaciones del precio del dólar. De esa manera, se sostenían una política administrada del tipo de cambio y, de forma conjunta, un diseño monetario mediante el cual se establecían metas cuantitativas.

Al mismo tiempo, frente a un contexto inicialmente recesivo del mercado interno, a causa de una contracción aguda de la actividad económica (Musacchio, 2015a, pp.151-152), se presentaba la gran necesidad de recaudar recursos fiscales para un Estado nacional que además se encontraba endeudado en moneda extranjera, las retenciones podían mitigar esa situación, además de significar ingresos que evitaban devaluarse junto al peso.

La depreciación de la moneda, que acompañaba el dinamismo del comercio internacional, brindándole la competitividad necesaria al sector exportador y los primeros indicios alentadores en los niveles de actividad económica del mercado doméstico, comenzaron a facilitar la corrección de las cuentas fiscales.

El sector público consolidado alcanzaría un superávit equivalente a 5,2 del PBI para 2004 y para comienzos de 2005; con la reestructuración parcial de la deuda pública con una quita importante, contribuiría de manera significativa a consolidar la mejora fiscal alcanzada durante

los primeros años del ciclo económico. Nos parece relevante remarcar que a lo largo del quinquenio se mantuvieron los superávits fiscal y externo (Damill y Frenkel, 2013, pp. 5-11).

El tipo de cambio alto, con una economía abierta, generaba el mejoramiento de la recaudación fiscal (Gerchunoff, 2006), ya que la participación de los bienes transables en la recaudación era mayor que en el gasto público. A ello hay que agregar que el Estado se había asociado compulsivamente, a través de las retenciones, a la revalorización del principal activo, la tierra.

Como consecuencia de lo expuesto, la posibilidad de constituir balances positivos, tanto en las cuentas fiscales como en el comercio exterior, brindó la posibilidad de un aumento en las reservas internacionales. Así se pudo sostener una estrategia de crecimiento definida en la búsqueda de una mayor autonomía respecto de los organismos de crédito y el *establishment* financiero internacional (De Angelis, Calvento y Roark, 2013, pp.44-45).

Ese escenario fue propicio para comenzar a desarrollar y acrecentar las capacidades de autonomía de la política económica, en donde el Estado comenzaba a visualizarse en el rol de planificador de las diversas estrategias que hacían posible el nuevo patrón de crecimiento, lo que lo colocaba en un lugar de fortaleza para la toma de decisiones.

Creemos necesario subrayar que, en ese marco de situación, al asumir el nuevo gobierno, tuvo que enfrentarse a las presiones de las empresas de servicios públicos de capital extranjero, que presionaban por una suba de las tarifas luego de la corrección cambiaria. La preocupación de la nueva gestión era sostener la recuperación económica. Por ese motivo, sostuvo la estrategia de postergar el ajuste en los precios, con el objetivo de reactivar el mercado interno (Gerchunoff y Aguirre, 2004, pp.7-9).

La nueva administración se vio condicionada desde un comienzo por la comunidad financiera internacional, que planteaba una abierta oposición a las políticas económica desarrolladas. El FMI, el Banco Mundial y los países del G-7, todos ellos acreedores de la Argentina, poseían diversas críticas a la implementación de una política cambiaria de flotación administrada y de regulación el comercio exterior. Las entidades financieras multilaterales de crédito y los países centrales concentraban su preocupación en las capacidades de pago de capital e interés en concepto de deuda pública.

Ahora bien, la fase expansiva del ciclo económico que comenzamos a desarrollar, en un principio se apoyaba, por un lado, en el dinamismo del sector agroexportador y, con posterioridad, en el incremento de la actividad industrial, sostenido por el aumento de la demanda en el mercado doméstico, a partir de la recomposición del empleo y los incrementos salariales. Mientras que, por otro lado, los derechos de exportación atenuaban los consecuentes efectos internos de la suba de los precios internacionales en los productos de primera necesidad.

En relación con la reactivación del mercado interno, señalamos que los tres principales sectores que alimentaron el crecimiento en el transcurso del periodo fueron la construcción, la agricultura y la manufactura industrial (Peralta Ramos, 2007; Wylde, 2012; Bezcinsky, 2007). El dinamismo de esas actividades la vemos reflejada tanto en la formación bruta capital fijo (FBCF) como en las importaciones de capital.

La característica sobresaliente de ese nuevo patrón de crecimiento, que comenzó a consolidarse a partir de los primeros años posteriores a 2003, se sustentaba en el manejo de la economía del país por el propio gobierno nacional y su consecuente cambio de orientación política, en contraposición a la década de los noventa.

Esa nueva dirección se concentraba en fomentar la producción de bienes transables, con especial énfasis en el sector industrial. Es entonces que se reconfigura y, por lo tanto, se transforma la matriz de crecimiento heredada del neoliberalismo, en donde se ponía énfasis en la valorización financiera (De Angelis, Calvento y Roark, 2013; Wyczykier 2015; Wylde, 2012).

Una de las variables de suma relevancia, para el fortalecimiento de la inversión a lo largo del periodo, fue el sostenimiento de un tipo de tasa de interés real negativa. Esa política generó un desincentivo al ahorro y logró conformar un gran estímulo a la inversión, provocando así una retroalimentación y expansión del mercado interno.

Debemos señalar como contrapartida el bajo incentivo al ahorro, pero en una economía en vías de recuperación desde 2002 los efectos fueron positivos. Además, en un esquema de políticas de tasas negativas y encarecimiento de las importaciones, como consecuencia de un tipo de cambio elevado, llevaba a que muchas de las firmas del sector transable encontraran incentivos inequívocos para producir y aquellos que importaban pasaban a sustituir importaciones por producción local (Kulfas, 2009, pp.12-13).

Es entonces que, el encarecimiento de los productos importados favorecía un cambio en la composición de la demanda agregada (Damill y Frenkel, 2013) a favor de los bienes producidos en el país, acompañando de esa forma la recuperación de los niveles de actividad en el mercado interno.

De esa manera, tuvo lugar un dinámico proceso de reindustrialización y reactivación de la capacidad productiva, que pasó a ser parte del nuevo motor del crecimiento económico, sumado a medidas de gobierno de carácter distributivo, que fortalecieron paulatinamente el poder adquisitivo del salario.

A un contexto de fuerte apreciación real en materia cambiaria, que constituyó un escenario de mayores rentabilidades para las actividades ligadas a la industria, se debe sumar la nula disponibilidad de crédito barato, en un sistema financiero (Kulfas, 2009) en proceso de

recuperación. Por lo tanto, las opciones de inversión se canalizaban en mayor volumen hacia la productividad, el comercio y el consumo.

En un comienzo, el gobierno optó por realizar aumentos remunerativos a partir de sumas fijas, luego fue incrementando los salarios nominales de forma gradual y controlada, expandiendo las negociaciones colectivas de trabajo por rama de actividad en el ámbito privado. De esa manera, utilizó a la propia herramienta como articuladora de la política distributiva, además de introducir en las mesas de negociaciones otros ítems con relación a la práctica laboral.

Debemos subrayar que existían ciertos temores en la gestión de gobierno sobre no generar nuevas expectativas inflacionarias vía aumentos de sueldo. A partir de que la actividad interna iba cobrando mayor dinamismo, esa preocupación fue creciendo. Agregamos, además, a ese marco, el cuidadoso manejo de las cuentas fiscales.

Desde los organismos de crédito internacional se presionaba para que el país adoptara un mecanismo de meta de inflación, eso significaba desarrollar una política de regulación de la oferta monetaria (Kulfas, 2009). El gobierno se oponía a establecer un régimen de esa característica por las consecuencias negativas que hubiera podido producir en materia de empleo y crecimiento. Además, no existía un convencimiento de que el manejo de la tasa de interés, para regular la potencial demanda de dinero, evitaría tensiones inflacionarias a futuro.

Agregamos que, en los canales de transmisión en un mercado financiero incompleto, como es el caso de la Argentina, con bajos porcentajes de bancarización y ahorro, son débiles las capacidades de respuesta a las consecuencias derivadas de un incremento de la tasa de interés en un contexto de alza en los niveles de precios (Abeles y Borzel, 2004; Frenkel, 2004; Kulfas, 2009).

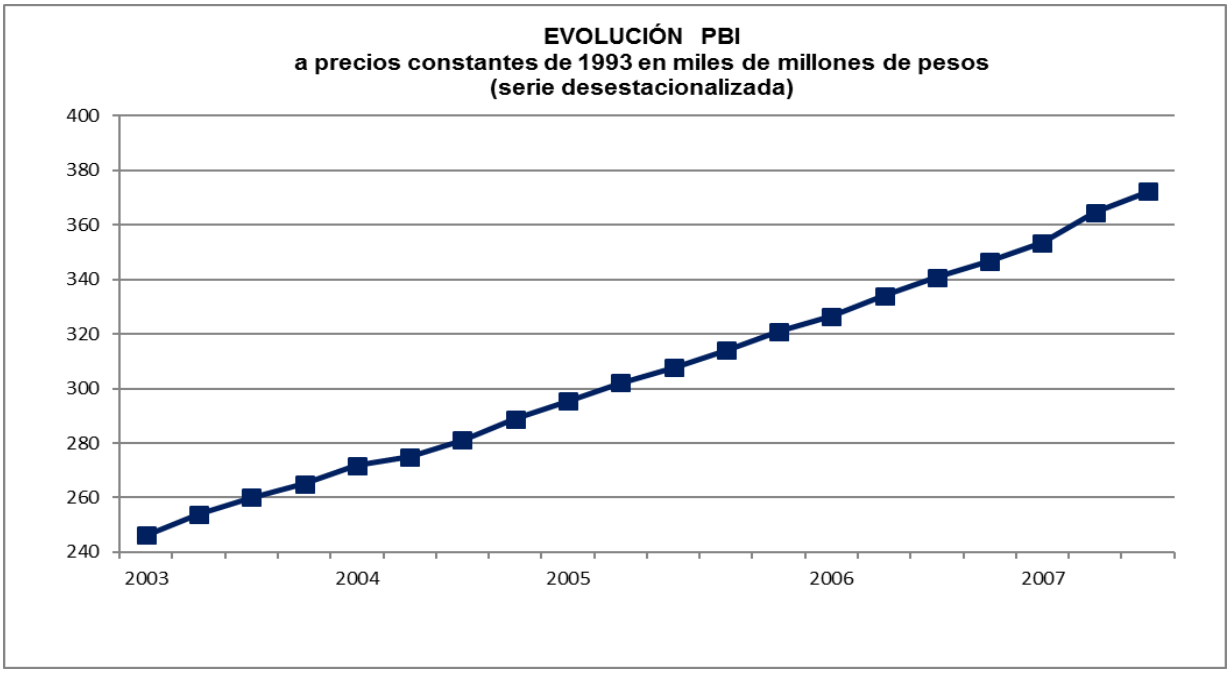
Ahora bien, volviendo a las condiciones favorables del contexto internacional, podemos distinguir tres elementos esenciales: precios internacionales elevados, tasas internacionales bajas y un fuerte crecimiento global (Grottola, 2010). Esas variables exógenas, que iban acompañadas por políticas económicas que dinamizaban el mercado interno, haciendo sostenible la demanda y la ampliación del consumo, generaban las condiciones necesarias para la expansión del producto bruto a lo largo del periodo 2003-2007.

Una característica destacada de la conducción económica fue la expansión en materia de regulaciones con la finalidad de corregir desequilibrios y reorientar la inversión desde los sectores más dinámicos hacia aquellos que precisaban mayores incentivos. Esto nos remite a comprender que durante esa etapa el Estado pretenderá ocupar un rol de centralidad y ser un actor dinámico y activo en el desarrollo del mercado, acrecentando y ampliando sus capacidades de intervención.

Desde comienzos del periodo, la solidez fiscal posibilitó la intervención eficaz en los mercados de bienes y servicios, sosteniendo así los precios relativos (Musacchio, 2015a). Particularmente mediante la introducción de subsidios a servicios esenciales como transportes, energía, gas y agua, lo que permitió mantener congelados sus precios, favoreciendo de esa forma la demanda y la rentabilidad empresaria industrial.

El impulso desde el gobierno nacional al desarrollo de las potencialidades del mercado interno provocó una regeneración del entramado industrial y, al mismo tiempo, del tejido productivo (Wyczykier, 2015). El Estado marcó una lógica política de carácter diferente en oposición a la etapa anterior al activar una orientación de los recursos económicos hacia los sectores del trabajo.

La expansión del Producto Bruto Interno logró tasas interanuales de 8,8% en 2003, de 9% en 2004, de 9,2% en 2005, de 8,5% en 2006 y de 8,6% en 2007. Alcanzó, de esa manera, un promedio de más de 8% de crecimiento durante el periodo.[84] Esto se debió principalmente al crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores registrados del sector privado, la expansión de las exportaciones y de la inversión, que contribuyeron al crecimiento de la economía.



Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

[84] INDEC – Cuentas Nacionales

Asimismo, el gobierno nacional procuró desplegar en el transcurso del periodo políticas monetarias y fiscales expansivas, incorporando además un rol activo en función de aumentar los niveles inversión, financiación y empleo, mientras ejecutaba una política social que primero apuntó a la situación de extrema vulnerabilidad, posteriormente fue tomando un carácter más estructural (Musacchio, 2015a, p.155).

La recuperación de las capacidades productivas y de una mayor acción estatal aumentó considerablemente los grados de autonomía, en un marco en donde el frente externo fue de considerable influencia en el desempeño económico (Kulfas, 2016).

El nuevo diseño macroeconómico, que se constituye a comienzos de la fase expansiva del ciclo, permitió dirigir el patrón de crecimiento hacia una mayor inclusión de los sectores rezagados, a partir de la generación de nuevos puestos de trabajo. El empleo pasó a considerarse desde una nueva concepción, no como un problema de mercado, sino como un articulador entre las diferentes esferas de lo económico y lo social, y principalmente como eje de cohesión (Novick, 2006, pp.61-62).

El proceso de transformación del sector industrial tuvo su limitación más allá de su recomposición en su aporte absoluto al crecimiento y repunte de la economía durante el transcurso del periodo (De Angelis, Calvento y Roark, 2013; Azpiazu y Schorr, 2010). Podemos señalar el resurgimiento de un número importante de pequeñas y medianas empresas, importantes generadoras de puestos de trabajo y orientadas principalmente a consolidar una dinámica expansiva del mercado interno.

No obstante, al mismo tiempo, persistió la fuerte concentración de la estructura productiva heredada de la etapa neoliberal, protagonizada por actores líderes del mercado en cada rama industrial. La recomposición salarial inducida por la recuperación económica (Kulfas, 2009), e impulsada por el propio gobierno, más un cuadro de tendencia al alza de los precios internacionales, de origen agrario, industrial y energético, provocaba un derrame de traslado de costos hacia los eslabones más débiles, consolidando y ampliando la brecha sobre las rentabilidades, provocando como resultado un efecto concentrador en los diversos eslabones de la cadena.

Mas allá de los limites alcanzados, resaltamos especialmente las capacidades estatales en pos de sostener la dinámica de expansión del crecimiento en el marco del ciclo económico, y la predisposición a configurar un esquema de carácter virtuoso para lograr constituir un nuevo patrón de crecimiento (Palomino y Pastrana, 2013). Este consideraba al mismo tiempo las tendencias hacia la integración regional y las exigencias de una inserción internacional de carácter autónoma, contrarrestando a las propias fuerzas internas y externas que presionaban por un tipo de adaptación heterónoma en el marco de la globalización.

3.3. Reestructuración de la deuda pública y pago al Fondo Monetario Internacional

En agosto de 2003, con la llegada de la misión del FMI al país, se da inicio a las negociaciones formales entre el organismo multilateral de crédito y el gobierno nacional por la suscripción de un acuerdo *stand-by*. El objetivo del presidente Néstor Kirchner era renovar el programa transitorio que se había alcanzado a comienzos de ese mismo año.

De esa manera, se procuraba arribar a un acuerdo que abarcara los siguientes tres años, con la finalidad de despejar el frente externo durante la totalidad del periodo de gobierno, sosteniendo así un esquema de financiamiento "flujo cero" para comenzar a encarar la renegociación de la deuda pública con los acreedores privados con una menor presión sobre las cuentas externas. Ese esquema aseguraba que los desembolsos del FMI cubrieran los vencimientos de capital, teniendo la Argentina que cancelar con reservas los intereses (Nemiña, 2011, pp.97-98).

Desde un comienzo, las negociaciones se desarrollaron en una acentuada confrontación, tanto por el presidente Néstor Kirchner como por el FMI. Esa situación llevó a que el gobierno nacional no abonara un vencimiento de 2.900 millones de dólares con el organismo multilateral de crédito.[85]

El FMI, consciente de la situación de debilidad financiera y externa del país, demoraba la firma del acuerdo como estrategia para que el gobierno nacional otorgara concesiones sobre los puntos de mayor conflictividad en la negociación. Mientras, el presidente Kirchner, mantenía su inflexibilidad y no abonaba el vencimiento, así complicaba también al organismo de crédito que sufría un impacto sobre sus finanzas (Nemiña, 2011, pp.100-101).

Dado el apoyo de los EE. UU., el actor internacional con mayor capacidad de influencia sobre el FMI, a la postura argentina motivó que la gerencia suscribiera el acuerdo y aceptara la posición del gobierno incluso en los puntos más conflictivos (Nemiña, 2011, p.102). El director gerente señalaba que hubiera preferido incluir en el programa metas más exigentes, como un mayor ajuste en las cuentas fiscales y una suba de las tarifas de los servicios públicos, pero no pudo lograrlo debido a las presiones recibidas, en clara alusión a la administración de George W. Bush.[86]

El apoyo de los Estados Unidos tenía en principio dos objetivos: en primer lugar, generar el marco suficiente para que la Argentina pudiera encarar una renegociación de su deuda pública

[85] Montenegro, M. (20 de septiembre de 2003), "Acá nadie habló de sacar la billetera", *Página 12*. Disponible: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-25280-2003-09-10.html (Fecha de acceso, 21/08/2017).
[86] "Bush se comunicó con Kirchner" (12 de diciembre de 2003), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/526862-bush-se-comunico-con-kirchner (Fecha de acceso, 21/08/2017).

con los acreedores privados de la manera más beneficiosa, dando así espacio también a las presiones de los países del G-7. En segundo lugar, la cuestión regional poseía su peso específico ante el ascenso de diversos gobiernos populares que ponían en cuestión las políticas neoliberales de la etapa anterior.[87]

Posteriormente, durante el transcurso del mes de septiembre, luego de haber logrado el acuerdo con el organismo, tuvo lugar en Dubai la reunión anual conjunta entre el FMI y el BM, donde el gobierno argentino presentó los principales lineamientos de su propuesta de reestructuración de la deuda pública con los acreedores privados (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005, pp.219).

Con anterioridad al encuentro, el FMI había desarrollado una serie de publicaciones donde enfatizaba que la deuda externa de los países emergentes ponía en peligro el futuro crecimiento y la estabilidad política mundial. Advertía además que esos países, entre ellos la Argentina, debían procurar contener el crecimiento de sus deudas, a partir de diversas reformas impositivas y restricciones fiscales.[88]

Los comienzos del proceso de negociación (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005) con los acreedores privados, con el objetivo de alcanzar una reestructuración de la deuda, tuvo lugar en un momento de alta tensión entre el gobierno nacional y el FMI, que coincidían con los cambios en la ubicación del organismo en el sistema financiero internacional.

La Argentina procuraba ubicar el desarrollo de las negociaciones en un marco en donde el FMI se encontrará en dificultades de intervenir, debilitando de esa forma su injerencia. En ese sentido, aprovechaba un contexto en el que el organismo multilateral de crédito se encontraba deslegitimado como un actor global. Es decir, en su capacidad de contribuir al orden monetario internacional, y de evitar las crisis financieras, luego de haber realizado fallidas intervenciones en las crisis de México, el Sudeste Asiático, Rusia y, posteriormente, Argentina (Nemiña, 2011, p.99-100).

La "propuesta Dubai" que presentó Argentina, establecía una oferta que se dirigía a todos los tenedores de bonos y de títulos públicos emitidos hasta diciembre de 2001. Se reconocía un stock de deuda de aproximadamente 87.000 millones de dólares, dejando afuera un importante volumen de intereses vencidos y no pagados. Sobre ese monto, se fijaba una quita del 75%, los nuevos títulos alcanzarían un valor máximo de 21.750 millones de dólares, se

[87] "Desde Estados Unidos llegan apoyos como también presiones conocidas" (11 de abril de 2004), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-32524-2004-03-11.html (Fecha de acceso, 21/08/2017).
[88] "FMI: la deuda de los países en desarrollo amenaza a la economía mundial" (12 de septiembre de 2003), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/526889-fmi-la-deuda-de-los-paises-en-desarrollo-amenaza-a-la-economia-mundial (Fecha de acceso, 21/08/2017).

emitirían tres bonos de libre elección, el Par, cuasi-Par y Discount (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005, pp.218-219)

La oferta de reestructuración incluía la incorporación de títulos que se ajustarían a un cupón que establecía un pago adicional en el caso de que la actividad económica se encontrara por sobre una tasa determinada. La propuesta realizada por el gobierno argentino (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005; Musacchio, 2015a) era compatible con el superávit primario pactado con el FMI, que establecía una meta del 3% del PBI.

De esa manera, la oferta de reestructuración que realizaba el gobierno de Néstor Kirchner (Kulfas, 2016) poseía como idea central que los inversores debían asumir los riesgos y, por lo tanto, las pérdidas de haber adquirido en su momento bonos que pagaban tasas de intereses cada vez más altas.

No obstante, la oferta realizada en el encuentro de Dubai fue rechazada por los distintos acreedores, el FMI sostenía que el país debía realizar un esfuerzo aun mayor, y que para lograr ese objetivo debía ajustar sus cuentas fiscales.

En ese contexto, el rol de los Estados Unidos fue de gran importancia (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005), ya que, frente a las exigencias del FMI, demandaba una menor intromisión del organismo en las relaciones entre los países y sus prestamistas privados, tanto en condiciones normales como luego de un *default*.

La visión expresada por la administración Bush consistía en que las crisis y los *defaults* eran el resultado de excesos de endeudamiento, y la culpabilidad debía recaer también en la irresponsabilidad de los prestamistas. El gobierno argentino se adaptó rápidamente a la línea argumental desarrollada por la Casa Blanca, y solicitaba la no ingerencia del FMI, remarcado que la propuesta de reestructuración no requería de financiamiento adicional (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005, p.229).

Ahora bien, poco tiempo después de que la Argentina realizara su primera oferta de reestructuración de deuda pública, los ministros de finanzas de los países pertenecientes al G-7 (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005) se manifestaban en un comunicado en conjunto. En el mismo, hacían hincapié en su posición con respecto a la oferta del gobierno nacional, señalando que debía ser mejorada.

Para comienzos del mes de junio de 2004, el presidente Néstor Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, ultimaban los detalles de la segunda propuesta del Estado argentino a los acreedores privados.[89]

[89] Cufré, D. (2 de junio de 2004), "Gesto para seducir a los bonistas", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-36162-2004-06-02.html (Fecha de acceso, 21/08/2017).

La "propuesta Buenos Aires" constituyó una oferta en la que el gobierno buscaba acercar posiciones con los acreedores. El stock de deuda a reestructurar alcanzaba a 81.800 millones de dólares y, a cambio de ese stock de deuda impaga, se emitirían bonos por un total de 38.500 millones de dólares, en el caso de que la adhesión al canje fuera igual o inferior al 70% y de 41.800 millones de dólares en caso de que superara el 70% (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005, pp.220).

Durante el transcurso del mes de junio de ese mismo año, tuvo lugar en el Hotel Plaza, en el barrio de Retiro de la ciudad de Buenos Aires, un encuentro entre la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el presidente Néstor Kirchner. En aquella oportunidad, la asociación empresaria expresaba su apoyo a los lineamientos de la política oficial en materia de negociación con los acreedores privados en *default*.

Al mismo tiempo, el jefe de Estado advertía que esta era la última oferta que realizaría su gestión de gobierno y argumentaba que el objetivo era construir un proyecto nacional inclusivo, integrado al mundo, pero con sustentabilidad interna.[90]

La propuesta realizada por el gobierno nacional contaba con el apoyo de la Unión Cívica Radical y algunos sectores de centroizquierda con representatividad parlamentaria. También manifestaban su apoyo los sectores empresarios industriales, los vinculados al comercio, y las entidades del agro, como también los sectores del movimiento obrero organizado.

No era el caso de las empresas privatizadas de servicios públicos, debido a que sus reclamos no eran atendidos totalmente, ya que el gobierno condicionaba la revisión de los contratos y tarifas a la suspensión de las demandas en los tribunales internacionales y al mantenimiento de los precios de las tarifas residenciales (Nemiña, 2011, pp. 100-101).

Por otro lado, desde el Tesoro de los Estados Unidos, se resaltaba que una exitosa reestructuración de la deuda requería una amplia participación de los acreedores en la oferta, cumpliendo así los compromisos asumidos en el programa del FMI. El Tesoro advertía sobre el alcance de la oferta y, al mismo tiempo, señalaba el malestar de los acreedores de no haber sido consultados antes de presentar la propuesta públicamente.[91]

La administración de gobierno se manifestaba en consonancia a lo anunciado en la "propuesta Dubai", es decir, se mantendría la quita del 75% sobre el valor nominal de la deuda, aunque en esta oportunidad se reconocía el 100% de los intereses vencidos y no pagos (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005, pp.220).

[90] "Kirchner: Esta es la última oferta" (2 de junio de 2004), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/606744-kirchner-esta-es-la-ultima-oferta (Fecha de acceso, 21/08/2017).
[91] "El Tesoro de EE. UU. abogó por el consenso" (2 de junio de 2004), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/606687-el-tesoro-de-eeuu-abogo-por-el-consenso (Fecha de acceso, 21/08/2017).

Al mismo tiempo, la mejora de la oferta mantuvo los tres instrumentos anunciados en la anterior propuesta, el Par, el cuasi-Par y el Discount. Los mismos bonos se emitirían con fecha de 31 de diciembre de 2003, comenzando a devengar intereses a partir de esa fecha (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005, pp.220-221).

La propuesta sostenía las unidades ligadas a crecimiento del PBI, se anunciaba que los títulos Par y Discount podían ser emitidos, en función de cuál fuera la moneda de origen del instrumento a canjear, en pesos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), en dólares estadounidenses, en euros y en yenes. Se establecía la emisión de los cuasi-Par en pesos y ajustados por CER únicamente.

En el ofrecimiento consistía (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005) en la emisión del bono Par en 10.000 millones de dólares en el caso de que la aceptación no lograra superar el 70% y de 15.000 millones en caso de que superara ese porcentaje de aprobación. Se reconocería el valor nominal original del título, estableciendo un plazo de 35 años con tasa fijadas en dólares, elevándose a 1,33% anual en los primeros cinco años y, posteriormente, en 5,25% en los restantes diez.

En el caso del Discount, la emisión representaba 20.170 millones de dólares en el caso de una menor aceptación de los acreedores, y de unos 18.470 millones en el escenario de mayor adhesión, la quita aplicada sobre el valor nominal original del título representaba un 66,3 por ciento. El plazo sería de 30 años, con un interés fijo. Para el cuasi-Par, el diseño del título estaba orientado a los tenedores locales, como las AFJP, con una quita del 30,1%. La emisión alcanzaba los 24.300 millones de pesos, estableciendo un plazo de 42 años con una tasa de interés fija de 3,31 por ciento.

En un comienzo, los mercados internacionales de capitales rechazaron la propuesta (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005), pero a partir de finales de 2004 comenzaban a reevaluar la oferta realizada por el gobierno nacional. Se argumentaba que la mayor liquidez en el nuevo escenario global incentivaba la toma de nuevos riesgos, lo que generó una demanda de bonos y títulos de deuda de países emergentes.

El 14 de enero de 2005 comenzó la apertura de canje de bonos, los pedidos se canalizaban por la Caja de Valores, que funcionaba como receptor de las solicitudes que llegaban desde los bancos. En la plaza local, la oferta era encauzada por los bancos Galicia, Francés y Nación; mientras que en el exterior lo hacían el Merrill Lynch, la Unión de Bancos Suizos y Barclays. Posteriormente, las solicitudes recibidas por las entidades financieras serían remitidas

al Bank of New York (BONY), que actuaría como agente de canje y asignador de los nuevos títulos.[92]

Finalmente, el jueves 3 de marzo de 2005, el gobierno nacional anunció que el grado de aceptación del canje de deuda pública en *default* alcanzaba el 76,15%, lo que significaba el retiro de 62.300 millones de dólares a cambio de 35.300 millones de dólares en nuevos instrumentos con unidades ligadas al PBI por un valor nocional de aproximadamente 62.300 millones de dólares. Se emitían bonos Par por 15.000 millones de dólares, de cuasi-Par por 8.330 millones de dólares y unos 11.900 millones de dólares en bonos Discount (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005, p.224-226).

El proceso de reestructuración de deuda encarado por la Argentina marcó un hecho de singulares características para el sistema financiero internacional, ya que debilitaba la posición del FMI en torno a su participación en las negociaciones entre los estados y los acreedores privados.

El organismo internacional de crédito quedaba desplazado en su poder de injerencia sobre las políticas económicas de los países emergentes, como consecuencia de su deslegitimación durante el transcurso de la década de los noventa, signada por el "Consenso de Washington" y la visión ortodoxa-neoliberal.

El caso de la crisis de la Argentina, además de significar el fracaso de las decisiones políticas domésticas, demostraba la ineficiente actuación del FMI en su rol de garante y promotor de un régimen económico que privilegió la especulación financiera por sobre la actividad productiva y que se evidenció insostenible a partir de la convertibilidad (Nemiña, 2011, pp.99-100).

Por otro lado, la propuesta del gobierno argentino, con un alto nivel de adhesión de canje de deuda por parte de los acreedores privados, sentaba un precedente en materia de reestructuraciones de títulos en *default* para aquellos estados que se encontraran en condiciones similares. La relevancia residía en el volumen récord de deuda reestructurada y en la magnitud de la quita.

No obstante, el G-7 y el FMI hacían público su reclamo en apoyo a los bonistas que no habían ingresado al canje, afirmando que el país debía comportarse de "buena fe", además, el organismo internacional de crédito condicionaba las próximas negociaciones con el gobierno nacional a partir de solicitar la reapertura de la operación.[93]

---

[92] "Las AFJP aceptaron la propuesta de canje" (14 de enero de 2005), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/671159-las-afjp-aceptaron-la-propuesta-de-canje (Fecha de acceso, 22/08/2017).
[93] "El G-7 y el FMI piden por los bonistas que no adhirieron al canje" (4 de marzo de 2005), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/684673-el-g-7-y-el-fmi-piden-por-los-bonistas-que-no-adhirieron-al-canje (Fecha de acceso, 23/08/2017).

Creemos necesario destacar que, en el proceso reestructuración de deuda el gobierno tuvo que negociar con firmeza con las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), ya que estos poseían cerca del 50% de la deuda pública en moneda extranjera y su ingreso al canje le significaba un alto nivel de aceptación. El Ejecutivo Nacional las intimido con una posible reestatización, eso las llevó a que ratificaran la propuesta de canje (Musacchio, 2015b).

Ahora bien, debemos tener en consideración que en el momento en que el FMI debía realizar la evaluación de las cláusulas de condicionalidad (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005), establecidas para el primer año, la Argentina se encontraba en plena presentación pública de su propuesta de canje. En esa situación, el organismo internacional podía haber decidido dar por caído el acuerdo, argumentando que el país incumplía las metas o resolviendo que el gobierno nacional no negociaba de "buena fe" con los acreedores privados.

Esa situación no sólo hubiera representado un problema serio para el país, sino también para el FMI, ya que la Argentina (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005; Nemiña, 2011) era uno de los grandes deudores del organismo y existía la posibilidad que dejara de otorgar prioridad a la deuda multilateral y entrara en *default*. Y eso podía interpretarse como una interferencia del FMI en las negociaciones con los acreedores privados, contradiciéndose a sí mismo en su propia doctrina.

El gobierno retomaba las negociaciones con el FMI a los pocos días de cerrar la negociación del canje de deuda. Los dos grandes ejes en los cuales el organismo internacional centraba su atención eran la reapertura de la reestructuración y las tarifas de las empresas de servicios públicos privatizados. Esa situación afectaba los intereses de los países miembros del G-7.[94]

Debemos tener en cuenta que luego del canje la Argentina poseía a su favor un número importante de poseedores de nuevos bonos interesados en que el FMI tenga una actitud positiva que mejorará la valuación del riego de los nuevos papeles. Por otro lado, el FMI se veía presionado por los gobiernos del G-7 para actuar con mayor dureza, eso lo colocaría en una incómoda situación porque se vería en contraposición con la actitud de aceptación de la quita por parte de los tenedores privados, que son quienes estaban directamente involucrados (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005, p.229-231)

[94] Alconada Mon, H. (6 de marzo de 2005), "Reforzado por la alta adhesión al canje de la deuda, el Gobierno se apura para comenzar la batalla con el Fondo", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/685091-reforzado-por-la-alta-adhesion-al-canje-de-la-deuda-el-gobierno-se-apura-para-comenzar-la-batalla-con-el-fondo (Fecha de acceso, 23/08/2017).

El 20 de junio de 2005, en el acto del Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, el presidente Néstor Kirchner sostenía: "El FMI se dedica a atacarme, solo porque defiendo los intereses de la Patria y no hago de cortesano de los intereses que nos han hundido permanentemente…". El jefe de Estado hacía alusión a un documento del organismo que se había publicado en un periódico argentino, en donde el FMI advertía que Kirchner buscaba tensar la relación en el transcurso de las negociaciones para aumentar sus niveles de popularidad.[95]

En su informe del artículo IV de 2005, el FMI analizaba las circunstancias políticas de la crisis de 2001 y 2002, en el que realizaba una evaluación de las perspectivas económicas del país y las reformas estructurales que creía necesario implementar (Brenta, 2013; Godio, 2006). El organismo internacional argumentaba que el aumento de la demanda y de la inversión eran la base de la reactivación y, en menor medida, el alza de los precios internacionales, impulsadas por la depreciación del peso (Brenta, 2013, p.324).

Este informe subrayaba que los salarios reales se habían recuperado gradualmente en el transcurso de los primeros dos años del gobierno de Néstor Kirchner, y que las reservas internacionales comenzaban a crecer, en un contexto en donde las exportaciones crecían, las importaciones se contraían y las restricciones a las cancelaciones externas se desmantelaban paulatinamente (Brenta, 2013).

Frente a esa situación, el FMI recomendaba al gobierno nacional una política fiscal y monetaria contractiva, el BCRA debía administrar la oferta de divisas para apreciar el tipo de cambio con el objeto de cancelar los vencimientos de deuda.

La publicación de informe del artículo IV de 2005 incluyeron las objeciones del gobierno nacional (Brenta, 2013; Godio, 2006) por pedido expreso de la Argentina. Estas resaltaban la dinámica virtuosa de las políticas económicas desarrolladas, que generaban –vía comercio exterior– las reservas necesarias para cancelar los vencimientos que debía asumir el país, la creciente ampliación del mercado doméstico y el crecimiento de las exportaciones.

Finalmente, el 15 de diciembre de ese mismo año, el presidente Kirchner anunció en Casa de Gobierno la anticipada cancelación total de la deuda con el organismo internacional de crédito: el Tesoro Nacional pagaría al FMI con reservas prestadas del BCRA, el desembolso alcanzaba los 9.810 millones de dólares. El pago no amenazó la solvencia de la autoridad monetaria ni puso en riego la liquidez de externa, como tampoco dificultó su balance de pagos (Brenta, 2013, pp.328-330).

[95] Réplica de Kirchner al FMI: "Me ataca porque defiendo a la Patria" (21 de junio de 2005), *Clarín*. Disponible en https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/replica-kirchner-fmi-ataca-defiendo-patria_0_r1AbP9_JCFl.html (Fecha de acceso, 23/08/2017).

La cancelación total de la deuda con el organismo significaba eliminarlo como factor de presión en el diseño de las políticas económicas nacionales, rol que ocupó activamente en la década anterior, durante la etapa signada por hegemonía neoliberal. De esa manera, se ponía término al FMI en su influencia y monitoreo sobre las decisiones de la Argentina.

3.4. La revitalización de la negociación colectiva y los marcos institucionales en la relación entre capital y trabajo

A partir de la consolidación del nuevo patrón de crecimiento, en el transcurso de los primeros años del ciclo expansivo, se fueron reconstruyendo paulatinamente las instituciones de las relaciones del trabajo, dando comienzo a una política activa en materia salarial y una recuperación sostenida del empleo.

Durante el año 2004, se pone nuevamente en funcionamiento el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, constituido por los sectores del movimiento obrero organizado, las cámaras empresariales y el gobierno nacional. El órgano tripartito retomaba nuevamente la responsabilidad de reestablecer los marcos de negociación colectiva con el objetivo de actualizar la remuneración mínima.

Desde agosto de 1993, en el periodo dominado por el régimen de convertibilidad, el salario mínimo se había estancado en 200 pesos, marcando así un congelamiento que duró diez años (Basualdo, 2012; Palomino y Trajtemberg, 2006). Recién en 2003, el gobierno dispuso unilateralmente un ajuste escalonado del mínimo salarial entre julio y diciembre, alcanzando para el último mes del año los 300 pesos (Lafleur y Szretter, 2004).

El objetivo inmediato de restablecer la institución del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil era determinar un piso salarial efectivo para los trabajadores en general y para los de menor calificación en particular.

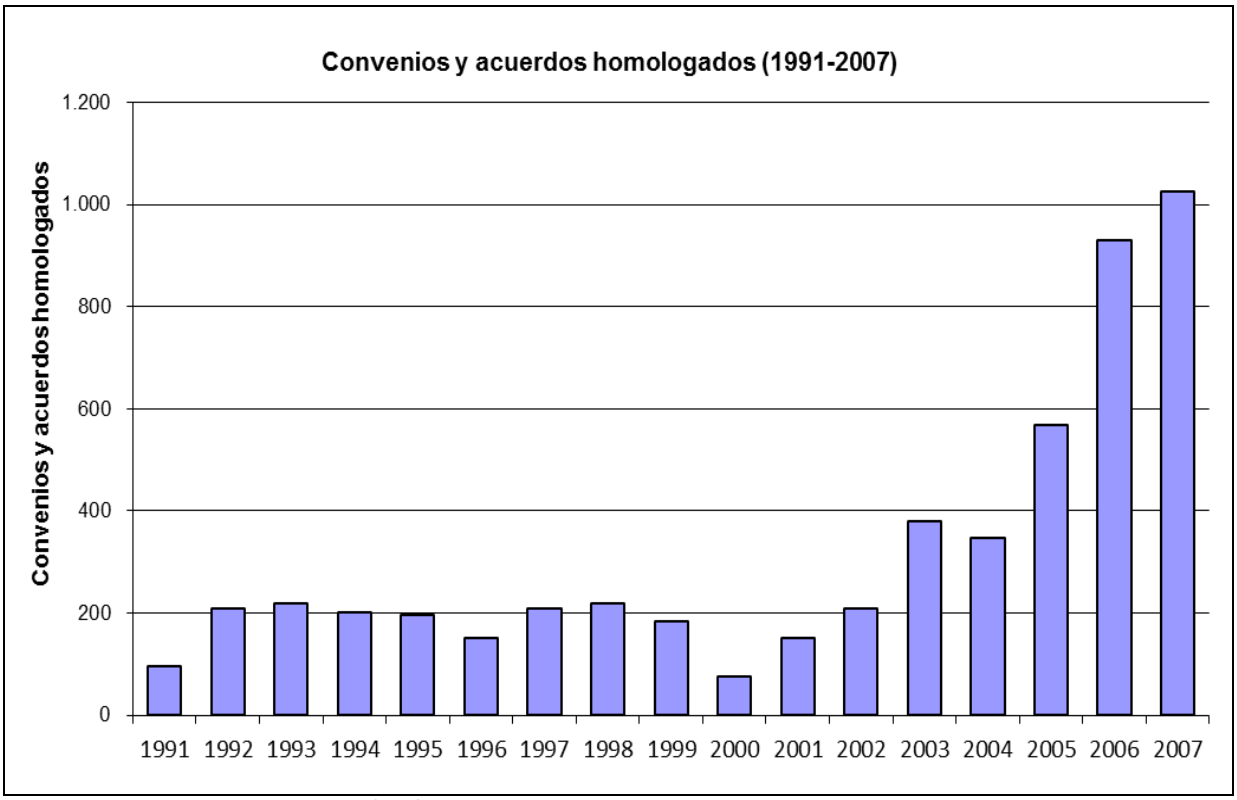
De esa manera, se procuraba cimentar una base mínima de remuneración (Groisman, 2012), como mecanismo de protección para los trabajadores con limitado poder de negociación. Debemos argumentar que la aplicación de la política de salario mínimo generaba facilidades en el logro de mayores niveles de equidad social, ya que tendió a comprimir las estructuras salariales y constituyó un instrumento de influencia sobre el consumo doméstico y la producción. Desde ese nuevo valor remunerativo, se empujaba hacia arriba la base de discusión salarial entre los sindicatos y los empresarios.

El repunte de la negociación colectiva fue progresivo, en una primera instancia impulsado por el gobierno nacional en procura de articular las políticas salariales con la

promoción del tripartismo. Por otro lado, comenzando el ciclo político (Basualdo, 2012; Barattini, 2013; Palomino y Trajtemberg, 2006), se dispuso que los aumentos de suma fija no remunerativos a los trabajadores del ámbito privado, que se habían otorgado desde 2002, fueran incorporado en los básicos de los convenios colectivos, induciendo de esa manera a la conformación de paritarias entre las empresas y los sindicatos.

La conversión de los incrementos en remunerativos (Palomino y Trajtemberg, 2006; Lafleur y Szretter, 2004) implicó que el trabajador recibiera los beneficios sociales legales y convencionales de los cuales poseía derecho y, al mismo tiempo, cuando estos mismos intervinieron sobre los básicos generó incrementos adicionales de remuneraciones en las diversas escalas salariales.

En el periodo dominado por el régimen de convertibilidad, el promedio de convenios y acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) fue de 177 negociaciones, mientras que a lo largo de todo el 2004 se registraron 348, duplicando prácticamente el promedio anual de la década anterior en solamente un año (MTEySS, 2004).



Fuente: Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales - MTEySS

La baja predisposición a la negociación colectiva, adoptada por la gran mayoría de los sindicatos, durante el periodo de hegemonía neoliberal, constituía una acción de carácter defensiva, ya que los actores del trabajo eran reacios a acordar en condiciones que asumían como desventajosas.

El contexto del mercado de empleo antes mencionado se caracterizaba por ser significativamente adverso por las altas tasas de desocupación que superarían los dos dígitos a partir de 1994, con un creciente aumento del trabajo no registrado, que provocaba quedar por fuera de la esfera de influencia sindical y, por lo tanto, de la cobertura de las negociaciones colectivas (Palomino y Trajtemberg, 2006, 48-51). En otras palabras, en un entramado sociolaboral adverso, en donde las correlaciones de fuerza eran desfavorables para los trabajadores, sus organizaciones representativas optaban por no negociar "a la baja" frente al empresariado.

El crecimiento del desempleo y la difusión de formas precarias de empleo debilitaron notoriamente la posición de los sindicatos para negociar salarios y condiciones de trabajo en todos los sectores, pero sobre todo en los más vulnerables a la presión del excedente de fuerza de trabajo (Marshall y Perelman, 2004, p.411).

La revitalización de las instituciones laborales (Palomino y Trajtemberg, 2006; Novick y Trajtemberg, 2000), en particular en lo que hace al auge de la negociación colectiva en el lapso entre 2003 y 2007, difiere marcadamente de la década anterior, en la cual los convenios firmados eran en su gran mayoría a nivel de empresas.

Durante la década de los noventa, entre los contenidos vinculados a la negociación colectiva, se destacaba la flexibilidad referida a las modalidades de contratación por tiempo determinado, la flexibilidad interna en las empresas y locaciones fabriles, que se expresaba en cambios de la jornada de trabajo, la organización propia de la actividad laboral y la modalidad en materia de remuneraciones (Palomino y Trajtemberg, 2006, pp.50-51).

El modelo característico en materia de negociación colectiva, que comenzó a desplegarse en Argentina durante el periodo de industrialización por sustitución de importaciones, se irá desmantelando posteriormente con el auge de las políticas neoliberales en el transcurso de la década del noventa, con su orientación hacia la flexibilización de las condiciones de trabajo.

Durante el periodo de convertibilidad, confluyeron diversos factores que erosionaron las capacidades del sistema de relaciones laborales (Marshall y Perelman, 2004) en su función de regular e intervenir en los aspectos que hacen a las problemáticas del ámbito del trabajo.

Entre esos factores se encuentran desde pérdida de poder de negociación sindical, como resultado de una situación crecientemente desfavorable en el mercado de empleo, hasta las

normativas que llevaron a negociar por productividad y el consecuente disciplinamiento de la puja distributiva a partir del régimen de paridad cambiaria.

Ahora bien, debemos considerar que, en economías abiertas y desreguladas comercialmente (Senén González, Medwid y Trajtemberg, 2011), los actores del sector empresario se inclinan a demandar una mayor descentralización de las negociaciones colectivas. En un contexto de apertura del mercado interno a la competencia de los productos extranjeros, el costo de la mano de obra se convierte en una variable determinante de la competitividad.

Mientras que, en el marco de una economía cerrada y con intervenciones de regulación de las instituciones estatales, la centralización de la negociación desde la perspectiva empresaria se relaciona con el objetivo de eliminar la competencia salarial dentro y entre cada una de las distintas ramas de actividad.

Durante el periodo de convertibilidad, la demanda de flexibilización del mercado de empleo iba en línea con la política de apertura económica, posibilitando de esa manera que las empresas negociasen sus propias condiciones de contratación. Se constituía así un contexto propicio para que a nivel de empresa se intentasen determinar individualmente los salarios de los trabajadores en función de los precios de los productos importados y de sus propios niveles de productividad (Senén González, Medwid y Trajtemberg, 2011, p.156-157).

En ese contexto, en donde la dinámica del mercado de empleo se orientaba a favorecer la mercantilización de la mano de obra, a partir de la flexibilización de los sistemas de contratación, se erosionaba consecuentemente la protección sobre los asalariados comprendidos en las negociaciones colectivas que se habían conservado hasta entonces (Palomino y Trajtemberg, 2006, p.49).

Además, hacia mediados de la década del noventa, en la casi totalidad de los convenios que habían sido homologados (Senén González, Medwid y Trajtemberg, 2011) se introducía al menos una clausura de flexibilidad. Uno de los elementos más negociados fueron las normativas que hacían referencia a la asignación del tiempo de trabajo.

Asimismo, los contenidos que dominaban las negociaciones colectivas eran los acuerdos que surgían de los procedimientos preventivos de crisis (Palomino y Trajtemberg, 2006). Un instrumento creado en 1991 por la Ley de Empleo que obligaba a las empresas a informar con anterioridad a las autoridades laborales la aplicación de medidas de despidos, suspensiones o modificaciones con relación a la jornada laboral.

Los procedimientos de crisis impulsaron las negociaciones por empresa, mientras que las negociaciones colectivas por rama de actividad siguieron estancadas y descendían a sus niveles mínimos.

Posteriormente, cuando colapsó el régimen cambiario de paridad fija y comenzó a resquebrajarse la hegemonía neoliberal, la tendencia hacia la descentralización de las negociaciones colectivas con objeto de profundizar la individualización de las relaciones laborales encontró finalmente su límite.

Desde la recuperación de la actividad económica, acompañada en un comienzo por moderados incrementos salariales y con la generación de puestos de trabajo, el gobierno nacional se orientaba a propiciar los espacios necesarios para rediseñar las instituciones laborales. El propio movimiento dialéctico entre el conflicto y la negociación marcaría la recuperación de esas instancias de mediación.

En un contexto de reciente salida de la crisis de 2001-2002, las demandas de los sectores trabajadores, a través de sus representaciones sindicales (Palomino y Trajtemberg, 2006), en una primera instancia se orientaban a recuperar el poder adquisitivo con respecto a los niveles previos a la devaluación. Posteriormente, con el transcurso de los primeros años del ciclo expansivo, tendieron a prevalecer las reivindicaciones de reajustes salariales con relación a los precios y por un aumento en la participación del ingreso nacional.

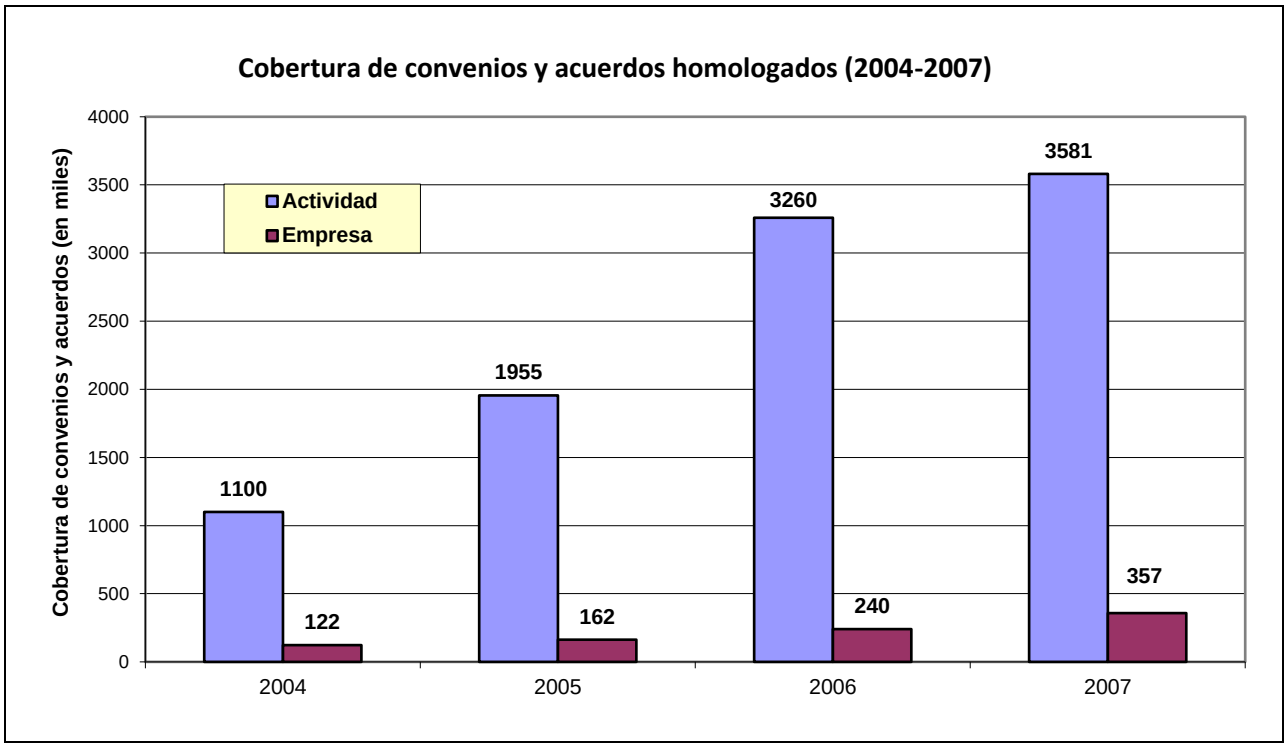
La dinámica sociolaboral incorporada entre 2003 y 2007 se observa en la magnitud de las homologaciones alcanzadas durante el periodo, en la renovación periódica de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. Además, debemos considerar el progresivo incremento de la conflictividad laboral a medida que el mercado de trabajo se recuperaba en términos de remuneraciones y empleo.

Conflictos Laborales. 2006-2007

	2006	2007
Conflictos con paro	776	843
Huelguistas	1.185.076	1.119.272
Jornadas individuales no trabajadas	6.328.956	8.215.064

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- MTEySS

Conforme los actores sindicales y empresariales fueron incorporando a sus prácticas de acción la lógica de la negociación colectiva, las homologaciones ascendieron notablemente. También aumentó el número de trabajadores comprendidos en los convenios colectivos, experimentándose una notable amplitud en la capacidad de cobertura (Trajtemberg, 2007, pp.57-58).



Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo- MTEySS

En materia de remuneraciones, la reactivación de la negociación por rama de actividad generó un cambio en la relación estructural entre los salarios declarados y los de convenio, dada la paulatina eliminación de la brecha entre unos y otros que había prevalecido hasta 2001-2002. Esa brecha fue parte de la estrategia empresarial de individualización de la relación salarial, ya que los niveles de salarios abonados en algunos casos se situaban por encima de los sueldos de convenio (Palomino, Szretter, Trajtemberg y Zanabria, 2006, p.115).

No obstante, en ese punto debemos incorporar la combinación del congelamiento del salario mínimo y la ausencia de negociaciones colectivas (Palomino y Trajtemberg, 2006), que buscaba generar las condiciones propicias para fragmentar y atomizar las relaciones laborales en el mercado de trabajo.

Posteriormente, durante 2003 y 2007, la significativa brecha entre ambos salarios estuvo marcada por un cambio de tendencia, con una propensión a confluir paulatinamente. De esa manera, los salarios negociados por convenio recuperaron su capacidad de norma salarial a diferencia de la década anterior.

El protagonismo de la negociación colectiva, que se extendió a la gran mayoría de las ramas de actividad económica, que incluían a los más diversos actores sindicales y empresariales, consiguió conformar un sólido crecimiento de los salarios por convenio.

Asimismo, el gobierno nacional recobraba para sí las capacidades de arbitraje entre los actores del ámbito laboral mediante la recuperación de los instrumentos institucionales

necesarios para regular y determinar la relación salarial. De esa manera, lograba incentivar el diálogo social y sectorial para la resolución de los conflictos derivados de la puja distributiva.

El desarrollo de la conflictividad laboral durante el periodo refleja tanto el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de los trabajadores como la efectiva canalización y procesamiento de las diversas demandas por parte del gobierno nacional. La reactivación de las instituciones laborales se encontraba enmarcada en la configuración de un nuevo patrón de crecimiento, con la orientación a recomponer el tejido productivo y promover la participación de los asalariados en la distribución del ingreso.

En ese sentido, señalamos que, hacia finales de 2005 los salarios promedios de los trabajadores registrados en la seguridad social habían logrado recuperar los niveles de poder adquisitivo previos a la devaluación de enero de 2002. Lo cual implicó que a partir de 2006 la negociación salarial comenzara a establecerse cada vez más sobre la distribución de los frutos del crecimiento económico (Palomino y Trajtemberg, 2006, p.59).

La reducción de la desocupación y el crecimiento del empleo reforzaba el papel protagónico de la negociación colectiva (Senén González, Medwid y Trajtemberg, 2011), en el sentido que empresarios y sindicatos comenzaban a adquirir mayores grados de autonomía para determinar los salarios en las comisiones paritarias desarrolladas anualmente. El gobierno nacional desde su rol de mediador procuraba alinear los intereses de los diversos actores con la finalidad de enmarcar el conflicto distributivo.

Principales indicadodes del mercado de trabajo - EPH aglomerados urbanos (2003-2007)

Periodo	Tasa de actividad	Tasa de empleo	Tasa de desempleo
I.03	45,6%	36,3%	20,4%
II.03	45,6%	37,4%	17,8%
III.03	46,3%	38,8%	16,1%
IV.03	46,3%	39,7%	14,4%
I.04	46,1%	39,6%	14,3%
II.04	46,7%	39,9%	14,7%
III.04	46,7%	40,6%	13,1%
IV.04	46,5%	40,9%	12,0%
I.05	46,1%	40,1%	12,9%
II.05	46,0%	40,5%	12,0%
III.05	46,7%	41,5%	11,1%
IV.05	46,5%	41,8%	10,0%
I.06	46,4%	41,2%	11,3%
II.06	47,0%	42,1%	10,3%
III.06	46,7%	42,0%	10,1%
IV.06	46,4%	42,4%	8,6%
I.07	46,6%	42,1%	9,7%
II.07	46,4%	42,5%	8,3%
III.07	46,2%	42,4%	8,1%
IV.07	45,6%	42,2%	7,5%

Fuente: Elaboración en base a INDEC

Comenzaba a plantearse un contexto de diferente naturaleza, ya que anteriormente las demandas se centraban en la recuperación salarial, marcada en un principio por la salida de la convertibilidad, y en la ampliación de las asignaciones para los trabajadores sin empleo. El conflicto se desarrollaba en forma de protesta social, protagonizado por las organizaciones de desocupados, desplazando en mayor medida al actor sindical.

En los primeros años posteriores a 2003, el resurgimiento del conflicto sectorial-gremial (Etchemendy y Collier, 2008) tuvo un carácter singular, ya que los trabajadores que lo promovían no eran los más afectados por la crisis, es decir, los desempleados o trabajadores del sector informal que tomaron las calles durante 2001-2002.

A continuación, hacia comienzos de 2006 y principios de 2007, el escenario fue cambiando y cobró un mayor contraste, dando lugar a un conflicto de características de orden distributivo, pero que, al mismo tiempo, desbordaban el marco estricto de la discusión salarial, ya que se comenzaba a traducir en presiones de incrementos de precios.

Frente a esa situación, las negociaciones colectivas se establecían sobre bases más moderadas (Palomino y Trajtemberg, 2006). Estas mismas se situaban entre las expectativas de los empresarios, que eran en mayor medida proclives a aceptar incrementos de salarios en función de la suba de los precios, y las expectativas sindicales, de mejora por encima de los incrementos esperados.

En el transcurso de los dos últimos años de la fase expansiva del ciclo, el actor sindical volvió a escena con mayor protagonismo y revitalización, a causa del desarrollo de diversas medidas de acción colectiva, con las que irrumpieron con fuerza en el ámbito laboral. Las organizaciones de trabajadores (Etchemendy, 2010) aumentaron su militancia activa en las ramas industriales, específicamente en las actividades ferroviarias, transporte, automotriz y de alimentación.

Ahora bien, el ascenso en los niveles de conflictividad laboral y una activa predisposición del gobierno nacional a canalizar los reclamos de los sectores del trabajo posibilitaron que se abrieran los caminos necesarios para enmarcar las diversas discusiones en el seno de las instituciones de las relaciones del trabajo.

La articulación tripartita, oficiada por el Estado nacional en su rol de coordinador entre las cámaras empresariales y los sindicatos de trabajadores, logró consolidar una práctica de negociación que brindó la posibilidad de reconstruir las capacidades de acuerdo entre los diversos actores.

Los cambios desarrollados en materia de política económica (Palomino y Pastrana, 2013), que constituyeron un patrón de crecimiento sostenido en el tiempo, volvieron a colocar

en primer lugar la dinámica de las relaciones entre capital y trabajo. Así se restableció la matriz de carácter estructural de la puja por la distribución del ingreso.

En la Argentina posterior a la hegemonía neoliberal, el gobierno administró la puja distributiva, en un contexto donde los trabajadores lograban obtener aumentos reales de salario, en compatibilidad con las metas inflacionarias. Esa situación tuvo lugar con una administración proclive (Etchemendy y Collier, 2008) a atender los intereses de los actores sindicales, a partir de cambios en la legislación laboral, designaciones de obras sociales controlada por los sindicatos y beneficios particulares dirigidos hacia las distintas organizaciones, como subsidios al transporte o designaciones en las comisiones internas.

Asimismo, las nuevas prácticas en materia de negociación colectiva (Etchemendy y Collier, 2008), entre los diversos actores sindicales y empresariales, tanto a instancias de cúpulas como a niveles de rama de actividad, se apartaba definitivamente del modelo neoliberal y de las anteriores modalidades de representación de intereses.

La recuperación de la capacidad de la autonomía estatal (Palomino y Trajtemberg, 2006), en su rol de articulador del ámbito laboral, es un eje central y distintivo de esta etapa. Esto difiere radicalmente del periodo anterior, en donde la heteronomía propia de la acción gubernamental se manifestaba sobre el conjunto de las distintas áreas de gestión. Podemos tomar como ejemplo la relación con los organismos de crédito internacional, los acreedores externos y el sector financiero, entre otros.

Hay que destacar que los factores que hicieron posible la revitalización de las instituciones de las relaciones laborales se sustentaban previamente en las capacidades del nuevo orden hegemónico de configurar una etapa de crecimiento, a partir de un nuevo diseño macroeconómico, que terminaría impactando notablemente en la generación de empleo y en las remuneraciones.

Por otro lado, el resurgimiento del tripartismo en las negociaciones colectivas, incentivado por el gobierno nacional, es un mojón histórico puesto que ha sido efectivo para otorgar una mejora en el salario real en el sector formal y para moderar la puja salarial en una economía en crecimiento (Etchemendy, 2010, p.202).

No obstante, la activa participación en las negociaciones salariales (Etchemendy, 2010) por parte de los sectores empresarios es un dato novedoso, como también la contribución y patrocinio dado por las propias cámaras y asociaciones sectoriales en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Debemos señalar que la consolidación de las instituciones de las relaciones laborales desde 2003, conforma un escenario de características inéditas, tanto por la cantidad de

convenios y acuerdos colectivos homologados anualmente en este periodo como por su ininterrupción.

En conclusión, las políticas económicas y laborales que fueron desplegándose durante esos años posibilitaron el fortalecimiento de los actores que componen las relaciones del trabajo, incentivando la dinámica del conflicto y la negociación consecuentes de la puja distributiva.

3.5. La relación política del gobierno nacional con los sectores empresariales y los trabajadores en el marco de la puja distributiva

Al transcurrir la crisis de 2001-2002, y posteriormente al ascenso del nuevo gobierno en mayo de 2003, los actores representativos del empresariado y de los trabajadores, particularmente aquellos nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), mantenían sus propias disputas internas en sus respectivas organizaciones gremiales. El contexto de fragmentación del sistema político poseía su correlato en las entidades representativas del ámbito laboral.

La reorganización de los actores sectoriales, en función de comenzar a rediseñar un esquema de articulación política y, al mismo tiempo, para reestablecer los marcos institucionales de las relacionales laborales, desde un comienzo, fue una preocupación para el gobierno nacional de Néstor Kirchner.

Asimismo, hay con considerar que el gobierno, desde sus comienzos, no poseía el apoyo decidido de ninguna de las centrales sindicales. Sus vínculos con esas organizaciones eran inorgánicos, expresando así la ausencia de una línea sindical con apoyo al presidente (Godio, 2006, pp.109-110).

Desde comienzos de 2003, el mapa sindical se encontraba configurado por dos agrupamientos mayoritarios. Por un lado, la CGT oficial, conducida por Rodolfo Daer, que nucleaba a los gremios de mayor representación, denominados “gordos”, como Oscar Lescano de Luz y Fuerza, Armando Cavalieri del Sindicato de Comercio y West Ocampo de Sanidad. Por otro lado, los sectores provenientes del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), que luego conformarían la central disidente conducida por Hugo Moyano de Camioneros, que habían ocupado un rol de mayor oposición a las políticas desarrolladas durante la etapa anterior.

Durante el periodo de hegemonía neoliberal, la estrategia sindical de los “gordos”, que representaban a la mayoría de los sindicatos de servicios, y los denominados “independientes” de la UOCRA y UPCN consistió en practicar un tipo de sindicalismo empresarial.

Estos dos agrupamientos sindicales tomaron estrategias que perseguían el sostenimiento de sus capacidades organizacionales mediante políticas de acuerdo con el gobierno nacional (Fernández y Iglesias, 2013). Argumentaban que las mismas se llevaban a cabo para morigerar los costos del ajuste entre los trabajadores. Ambos sectores, los "gordos" y los "independientes", fueron condescendientes con los cambios relacionados al proceso de reforma del Estado y la flexibilización del mercado de empleo.

En los primeros meses del gobierno de Kirchner, se les brindó un reconocimiento a los directivos de la CGT oficial como actores relevantes, de peso (Lucca, 2014), pero estaban lejos de ser considerados como los interlocutores predilectos, un aspecto que diferenciaba a la actual administración del gobierno de transición de Duhalde. Con relación a la CGT disidente de Moyano, si bien existía un mayor diálogo, este no era todavía lo suficientemente sólido y maduro para avanzar en conjunto con ese sector gremial.

En un principio, los interlocutores del gobierno fueron la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y las organizaciones de desocupados, preferentemente la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD).

Ahora bien, el proceso de reunificación de las CGT era un interés tanto del gobierno nacional como de la propia dirigencia sindical. Las organizaciones de los trabajadores procuraban comenzar a desplegar una política de unidad con el propósito de recuperar el protagonismo perdido y, al mismo tiempo, comenzar a coordinar fuerzas para las futuras disputas con los sectores empresariales.

En ese sentido, el gobierno nacional comprendía que era necesaria la reorganización del movimiento obrero para procesar institucionalmente las distintas demandas sectoriales y encausar la conflictividad laboral (Diez, 2016; Lucca, 2014), que comenzaba su marcada tendencia ascendente hacia finales de 2004 y durante 2005. Además, una cuestión a destacar es que la recomposición de la CGT se relacionaba directamente con el futuro del armado político del gobierno.

Desde esa orientación, es decir, entablar vínculos más estrechos con la dirigencia sindical, el gobierno nacional tuvo la iniciativa de derogar la reforma laboral sancionada durante el gobierno de la Alianza.[96]

El 2 de marzo de 2004, el Congreso Nacional anula la ley sancionada durante el gobierno de Fernando De la Rúa, sospechada de sobornos y que profundizaba aún más la tendencia hacia la flexibilización del mercado de trabajo. Se asentaban así las bases para comenzar un

[96] Tagliaferro, E. y Yapur, F. (3 de marzo de 2004), "La ley Pontaquarto deroga la ley Banelco", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-32199-2004-03-03.html (Fecha de acceso, 19/9/2017).

acercamiento principalmente con el sector de Moyano con la finalidad de debilitar a los "gordos".

Es entonces que, el presidente Kirchner decide intervenir e instalar a Moyano para liderar el proceso de reorganización sindical. Su afinidad con el ideario peronista, su disidencia con la CGT oficialista durante la década del noventa y su defensa del modelo sustitutivo de importaciones y de un Estado fuerte, lo convertirían en el candidato necesario y privilegiado del gobierno (Iglesias, 2012, p.138-139).

En un principio, la puja desatada por la Secretaría General de la CGT se presentaba en un escenario que parecía irreconciliable entre los moyanistas y, particularmente, los dirigentes Carlos West Ocampo y Armando Cavalieri, de Sanidad y de Comercio, respectivamente. Esto sectores amenazaban con la posibilidad de frenar la asistencia de los congresistas al plenario de la CGT para vaciar de consenso la convocatoria sindical (Diez, 2106, pp.43-44).

Finalmente, el 14 de julio de 2004 se dispuso la convocatoria al congreso de la CGT, en donde en un principio todo parecía indicar que se arribaría a una unidad de las diferentes fracciones sindicales, con Moyano ocupando la Secretaría General. No obstante, los "gordos" comenzaron a reclamar una conducción colegiada, pero, al mismo tiempo, no vetaban al líder camionero ni buscaban reemplazarlo, ya que él les podía garantizar un mejor acercamiento con el gobierno nacional.[97]

Los distintos agrupamientos sindicales que conformaban la central obrera, luego de meses de intensas negociaciones, permitieron que los sectores conducidos por Moyano ocupasen una conducción colegiada, conformada por un triunvirato. La reunificación colocaba como secretarios generales al dirigente camionero, a Susana Rueda del sindicato de Sanidad, en representación de los "gordos" y a Luis Lingieri de Obras Sanitarias, cercano al menemismo. La duración del mandato se estableció por un año.[98]

Debemos tener presente que, el movimiento sindical que recuperaba su protagonismo del pasado no era el mismo que lo había perdido (Benes y Milmanda, 2012). Aunque hubiera logrado mantener ciertos recursos institucionales, las transformaciones sucedidas en la estructura productiva durante la década anterior, como consecuencia de la desregulación de los mercados y la apertura económica, desbalancearon las capacidades de los sindicatos ante los sectores empresarios en las más diversas actividades.

[97] Schurman, D. (13 de julio de 2004), "A los gordos, oídos sordos", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-38013-2004-07-13.html (Fecha de acceso, 19/9/2017).
[98] "Se unificó la CGT" (14 de julio de 2004), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/618429-se-unifico-la-cgt (Fecha de acceso, 19/9/2017).

Las reconversiones productivas que pusieron un freno al modelo sustitutivo de importaciones configuraron una economía que benefició en mayor medida a los sindicatos de servicios en detrimento de los industriales, y en los de la rama industrial se privilegió a aquellas actividades con inserción en el mercado internacional en detrimento de los que se orientaban al mercado interno (Benes y Milmanda, 2012, p.34-35).

Ahora bien, el 25 de agosto de 2004, mediante el Decreto 1095, el presidente Néstor Kirchner convocaba a reconstituir el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Se proponía reconciliar las demandas de las organizaciones de los trabajadores con las entidades empresarias, y comenzar a transitar un periodo de concertación mediante el restablecimiento de las negociaciones colectivas entre ambos sectores.[99]

Hacia el interior de la UIA, existían con anterioridad al cónclave posiciones disimiles respecto de cómo abordar las negociaciones con los representantes de los trabajadores. Lo sectores más cercanos a las actividades de exportación –representados en su mayoría por el sector interno asociado en la "Celeste y Blanca", ex Movimiento Industrial Argentino (MIA), representados por Daniel Funes de Rioja– no observaban en sus prioridades una suba en los salarios y lo consideran un costo innecesario.

Mientras que los sectores agrupados en "Industriales", ex Movimiento Industrial Nacional (MIN), con orientación al mercado interno, consideraban que se trataba de una forma de comenzar a incentivar el consumo doméstico.[100]

La propuesta oficial fue establecer un salario mínimo de 450 pesos, algunos sectores empresariales se resistían a esa suma, ya que la misma se encontraba en niveles superiores de algunos básicos de convenio. Lo que buscaba provocar el gobierno nacional, además de elevar el mínimo salarial, era reimpulsar desde el Consejo las discusiones colectivas por rama de actividad.[101]

Paralelamente, Federico Poli, subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, tenía un encuentro público con los sectores del grupo "Industriales" de la UIA. En esa reunión, el funcionario expresó sus quejas a los empresarios por su escaso apoyo a las políticas del gobierno y sostuvo que los reclamos no se correspondían con la realidad económica.[102]

---

[99] Cufré, D. (26 de agosto de 2004), "Una discusión salarial a venas abiertas", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-40212-2004-08-26.html (Fecha de acceso, 20/9/2017).
[100] Dellatorre, R. (26 de agosto de 2004), "Proyectos en disputa", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-40211-2004-08-26.html (Fecha de acceso, 19/9/2017).
[101] Dellatorre, R. (31 de agosto de 2004), "Cuando 424 pesos es demasiado", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-40411-2004-08-31.html (Fecha de acceso, 20/9/2017).
[102] Cufré, D. (26 de agosto de 2004). "Una discusión salarial a venas abiertas", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-40283-2004-08-28.html (Fecha de acceso, 20/9/2017).

Por ese sector de la entidad fabril, conducido por el Grupo Techint, se presentaron Manfredo Arheit, presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas (ADIMRA); Norberto Taranto, de la autopartista Taranto; Carlos Bueno, presidente de la Cámara del Calzado; Eduardo Guerra, de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) y Luis Ureta Sáenz Peña, presidente de Peugeot Citroën Argentina.

El grupo "Industriales", liderado por Guillermo Gotelli, sostenía que el aumento remunerativo no resolvía los problemas económicos. Para ellos, la cuestión debía centrarse en agrandar la masa salarial a medida que se fuera incrementando la generación de puestos de trabajo, recién entonces la discusión salarial podría tener lugar.[103]

Hacia comienzos de diciembre de 2004, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, lograba consensuar entre las asociaciones empresarias y de trabajadores una remuneración mínima de 450 pesos. Desde el sector empresario estuvieron ausentes la Sociedad Rural Argentina (SRA), mientras que la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) y la Federación Agraria Argentina (FAA) se abstuvieron en la votación. Por su parte, la CGT acompañó en unanimidad mientras que los miembros de la CTA votaron en contra.

El gobierno nacional lograba finalmente su propósito, fijar un mínimo remunerativo alcanzando los dos tercios el Consejo, con el apoyo de los sectores empresarios y sindicales mayoritarios, sin necesidad de resolver la discusión por decreto.[104]

En el cálculo del grupo "Industriales", se planteaba que los sectores de la CGT representaban un eslabón fundamental para encarar un proceso de fomento de la producción y de generación de valor que hiciera eje en los aspectos de la economía real, y que el gobierno debía fomentar la articulación entre los actores (Schteingart, 2011).

En esa situación, el problema se situaba en el proceso distributivo, ya que el gobierno nacional comprendía que posteriormente a la devaluación de enero de 2002, los costes laborales habían alcanzado mínimos significativos, proporcionando una baja notable en la estructura de productiva. Además, desde la visión oficial, se incluía la necesidad de recuperar la dinámica interna del mercado doméstico vía remuneraciones.

En esa situación, a los sectores del movimiento obrero organizado se les presentaba una decisión importante a dirimir. Si la CGT tomaba la decisión de sobrepasar el reclamo estrictamente sectorial, y entrar así en la escena política, podrían generar que una parte numerosa de los pequeños y medianos empresarios, pero también a sectores de las grandes

[103] "Más trabajo para más salario" (28 de agosto de 2004), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/631418-mas-trabajo-para-mas-salario (Fecha de acceso, 20/9/2017).
[104] Dellatorre, R. (3 de diciembre de 2004), "Gordos y poderosos movieron el piso", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-40546-2004-09-03.html (Fecha de acceso, 20/9/2017).

empresas locales y extranjeras interesadas en salir de la economía de la renta, de la valorización financiera del capital, se colocasen del lado de una solución económica de características productivas (Godio, 2006, p.115).

Ahora bien, volviendo a la disputa intersectorial, entre fines de 2004 y comienzos de 2005, la UIA buscaba encontrar los acuerdos convenientes con la CGT para establecer futuros aumentos salariales en función de los incrementos de la productividad laboral (López y Cantamutto, 2013).

La posición de los sectores del trabajo era no aceptar esas condiciones, y demandaban que los ajustes de salarios se realizaran por inflación. En ese sentido, para morigerar las demandas salariales, el gobierno impulsaba acuerdos con empresas formadoras de precios (López y Cantamutto, 2013, p.65-66).

En el transcurso del año 2005, las tensiones se agudizan hacia el interior de la CGT, entre los "gordos" y los que acompañan el liderazgo de Moyano. El rol protagónico del dirigente camionero y su afinidad con el presidente Kirchner precipitaba el contexto de fractura del triunvirato de la organización obrera.[105]

A comienzos de junio de ese mismo año, los "gordos" no habían participado del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, como señal de disconformidad con el gobierno nacional y, al mismo tiempo, esa actitud anticipaba el enfrentamiento interno.

Debemos destacar que, la renovación de las autoridades de la CGT para mediados de julio y las elecciones legislativas de octubre de ese mismo año constituirían un punto de inflexión para el gobierno nacional como fuerza política, tanto en su relación con el peronismo como con la central obrera (Iglesias, 2012, p.140-141).

El 14 de junio de 2005, el Consejo Directivo de la CGT, con una mayoría que respondía a Hugo Moyano y en alianza con los denominados "independientes", consagró al dirigente camionero al frente de la central.

En el acto de asunción como secretario general, Hugo Moyano hacía referencia a la situación por la que atravesaba la interna del peronismo, específicamente en territorio de la provincia de Buenos Aires, entre la disputa de Duhalde y Kirchner:

> Hacemos un llamado que anida en nuestro pecho: la necesidad de que este movimiento que nació para darles soluciones a los que menos tienen, a los trabajadores, no pueden los hombres

[105] Schurman, D. (2 de junio de 2005), "Los 'Gordos', más cerca de la fractura que de Moyano", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-51861-2005-06-02.html (Fecha de acceso, 20/9/2017).

> del movimiento nacional y popular estar divididos, desde el pensamiento de todos los trabajadores argentinos debemos unirnos para fortalecernos.[106]

Asimismo, aprovechaba la ocasión para dirigirse a las declaraciones del ministro de Economía Roberto Lavagna con relación al aumento de los salarios y la inflación. Desde el Palacio de Hacienda, se argumentaba la intención de monitorear las paritarias entre los trabajadores y empresarios, aduciendo que el incremento de las remuneraciones generaba una mayor presión sobre los precios internos.[107]

El líder de la CGT, sin hacer mención al ministro ni a los empresarios, sostuvo que era mentira que los salarios provocaran una suba en la inflación y sugirió buscar los motivos de dichos incrementos en los formadores de precios.[108]

Asimismo, desde los sectores de la entidad fabril se sumaron a las expresiones de Lavagna. El titular del Departamento legal de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, dejaba en claro las intenciones de un sector de la UIA con relación a las negociaciones salariales, argumentando: "Si queremos crecer con empleo, lo tenemos que hacer con racionalidad que haga que este crecimiento siga".[109]

Hay que resaltar que, desde la asunción de Moyano a la conducción de la CGT, como único secretario general (Iglesias, 2012), quedaba finalmente sellada la alianza de Néstor Kirchner con el líder camionero, en un contexto de alta agitación dentro del peronismo en dirección a las elecciones legislativas.

Con una CGT unificada, los sindicatos recuperaban sus capacidades de negociación y visibilidad pública, en un contexto en el que el mercado de empleo proseguía su recuperación, la protesta social iba dejando lugar a la conflictividad laboral.

La supremacía de los liderados por Moyano en la estructura de oportunidades económicas dentro del mundo sindical se tradujo además en una creciente fortaleza en la estructura de oportunidades políticas, dentro de la CGT como también con relación al gobierno (Lucca, 2014, p.39-40).

La unificación de la CGT a nivel nacional permitió una renovación de autoridades regionales en todo el país. La característica singular de ese cambio en las distintas regionales es que esa nueva capa de dirigentes, provenientes en su mayoría del MTA, venían de experiencias

---

[106] Schurman, D. (15 de julio de 2005), "La silla es mía, mía, mía", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-53725-2005-07-15.html (Fecha de acceso, 20/9/2017).
[107] "Economía controlará los acuerdos salariales" (12 de julio de 2005), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/720754-economia-controlara-los-acuerdos-salariales (Fecha de acceso, 20/9/2017).
[108] Schurman, D. (15 de julio de 2005), "La silla es mía, mía, mía", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-53725-2005-07-15.html (Fecha de acceso, 20/9/2017).
[109] "El sector empresario tomó nota del guiño de Lavagna" (14 de julio de 2005), *Página* 12. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-53676-2005-07-14.html (Fecha de acceso, 20/9/2017).

militantes de oposición a las políticas neoliberales de la década anterior. Además, ese recambio de dirigencia se presentaba más compacto a la conducción de Moyano.

Ahora bien, creemos que es necesario remarcar los orígenes que posibilitaron las capacidades de acción colectiva del sindicato de camioneros y que dieron lugar a su fortaleza como organización sindical.

Los cambios sucedidos en la economía nacional durante el periodo de hegemonía neoliberal, con la incorporación de técnicas *just in time,* favorecieron a los transportes de carga ante la flexibilidad que se demandaba en la circulación de mercadería (Benes y Milmanda, 2012). De esa manera, los sindicatos ligados al sector lograron incrementar sus capacidades de negociación, dada su ubicación estratégica dentro de la cadena productiva (Benes y Milmanda, 2012, p.35).

Podemos señalar que las condiciones que hicieron posible el surgimiento de este liderazgo gremial fueron el proceso de reconversión productiva, en donde la circulación de mercadería demandaba una mayor flexibilidad y la estrategia horizontal de encuadramiento, ante grupos de trabajadores sin organización gremial en distintas subramas de actividad relacionadas al transporte de carga (Benes y Milmanda, 2012).

Hay que destacar que la necesaria reorganización de la CGT se enmarca en un año electoral, de gran significancia para el gobierno nacional, y la conformación de su propia fuerza política independientemente del duhaldismo.

Para arribar de la mejor manera a las legislativas de 2005, la administración de gobierno necesitaba manejar con cuidado los roces relacionados a la puja distributiva. Para eso, había logrado un acuerdo con la UIA y con empresas estratégicas, como Repsol, Techint y Aluar. Sin embargo, persistía entre algunos empresarios la preocupación por la política oficial de estimular las negociaciones colectivas, que resultaban en aumentos salariales que ellos consideraban excesivos, además de generadores de inflación (Godio, 2006, p.251).

Asimismo, la cuestión salarial pasó a generar roces hacia el interior del gabinete nacional, la postura del ministro Lavagna generó una disputa con el titular de la cartera de Trabajo, Carlo Tomada. Las declaraciones del Ministerio de Economía sobre el monitoreo de la paritarias fueron interpretadas como una intromisión a la política laboral en materia de negociación colectiva.[110]

Posteriormente, el ministro Roberto Lavagna insistió nuevamente en la cuestión salarial y su correlato inflacionario, por lo que anunciaba una serie de medidas frente al temor de que

[110] "Intentan bajarle decibeles a la disputa oficial por los salarios" (14 de julio de 2005), *Clarín*. Disponible en https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/intentan-bajarle-decibeles-disputa-oficial-salarios_0_SyRGIIdy0Ye.html (Fecha de acceso, 22/9/2017).

las negociaciones entre sindicatos y empresarios se complejizaran con el peligro de que se generase una espiral general de precios.

Entre esa serie de medidas, se encontraban aquellas que se consideraban "indirectas" para contrarrestar la suba generalizada de precios, con el verdadero propósito de buscar una baja en los costes laborales. Por un lado, la reducción de la doble indemnización por despido y, por otro lado, una modificación a la Ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).[111]

Nuevamente desde el Ministerio de Economía se asumían competencias propias de la cartera laboral, agudizando las tensiones hacia el interior del gabinete. Además, los proyectos y medidas anunciadas se orientaban a satisfacer los reclamos empresariales, generando una oposición de los sectores del trabajo, desde la CGT se quejaban de la unilateralidad de los anuncios y la falta de consulta.[112]

Más allá de las disputas con relación a las competencias ministeriales, existían diferencias en el gabinete de gobierno sobre cómo desarrollar la dinámica de distribución del ingreso, impulsada por las negociaciones entre sectores del ámbito laboral y su relación con un aumento en los precios domésticos.

Existían críticas hacia la orientación sostenida por el Ministro de Economía que hacían foco en la cuestión de los incrementos salariales como causa inflacionaria. Contrariamente a ese enfoque, algunos sectores argumentaban que la estructura oligopólica en diversas actividades provocaba una falta de competencia en algunos mercados, incentivando la formación y cartelización de los precios.[113]

Frente a esa situación, en un principio el presidente Néstor Kirchner iniciaba una serie de políticas con el objetivo de generar los marcos institucionales necesarios para conformar un espacio de diálogo social, en pos de logar acuerdos entre la UIA y la CGT.[114]

Los sectores de la entidad fabril, vinculados mayormente al mercado interno, presentaban una serie de propuestas vinculadas al incremento de salarios y a cómo aplacar sus efectos inflacionarios. La UIA planteaba que, en materia de remuneraciones, los aumentos debían registrarse en función de la inflación pasada, que lo ideal era recomponer el poder adquisitivo después de conocer el índice de precios, argumentando que si eso no ocurría podría

[111] Cufré, D. (11 de noviembre de 2005), "Nace el plan de la sintonía fina", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-59090-2005-11-11.html (Fecha de acceso, 22/9/2017).
[112] Laugé, L. (11 de noviembre de 2005), "Reclamos de los sindicalistas", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/755319-reclamos-de-los-sindicalistas (Fecha de acceso, 22/9/2017).
[113] Dellatorre, R. (16 de julio de 2005), "El papel de los monopolios", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-18020-2005-07-16.html (Fecha de acceso, 22/9/2017).
[114] "Lavagna y Kirchner analizaron un posible acuerdo salarial" (25 de octubre de 2005), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/750590-lavagna-y-kirchner-analizaron-un-posible-acuerdo-salarial (Fecha de acceso, 22/9/2017).

registrarse una escalada general de aumentos en el mercado doméstico.[115] Expresaban, también, la intención de congelar los montos en alimentos y bebidas a cambio de que los sindicatos resignasen posiciones en sus reclamos.[116]

Además, los empresarios proponían que el gobierno nacional debía comenzar a desplegar una política de metas de inflación, con una implementación restrictiva en el gasto público y elevar las tasas de intereses para que se registrasen positivas en términos reales. Sostenían que de esa manera se incentivaría el ahorro en pesos, quitando de esa forma circulante del mercado de dinero.

Ahora bien, en muchos casos, las propuestas de la UIA iban en sintonía con algunos lineamientos esgrimidos por el propio ministro Lavagna, por ejemplo, en avanzar con cierta cautela en los incrementos salariales y desacelerar gradualmente el gasto estatal.[117] Esas ideas no eran compartidas por la CGT, que no coincidía en el análisis de un correlato directo entre el aumento de los precios a causa de las subas salariales, sino más bien de una réplica empresaria a la recomposición del poder adquisitivo.

En ese contexto, se suscitaban los debates en torno a los orígenes de la inflación, en donde existían y se expresaban distintas lecturas. Una de las posiciones que sobresalían argumentaba que el problema estaba en la restricción de oferta y no en la sobreestimulación de la demanda, y que la cuestión era expandir la tasa de inversión para ajustar de esa forma la oferta a la demanda. Esta perspectiva de análisis enfatizaba la necesidad de aumentar necesariamente la inversión, con el objetivo de sostener el ritmo de crecimiento en un mediano y largo plazo.[118]

En ese sentido, desde el Ministerio de Economía se desarrollaron diversas políticas con el propósito de moderar los efectos inflacionarios, entre ellas se destacan los acuerdos de precios con los sectores de la industria alimentaria y los supermercados. En el desarrollo de las negociaciones con el sector, se generaron diversas controversias con la principal entidad gremial empresaria, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).[119]

---

[115] Olivera, F. (25 de octubre de 2005), "La UIA propuso un acuerdo para contener la inflación", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/750513-la-uia-propuso-un-acuerdo-para-contener-la-inflacion (Fecha de acceso, 22/9/2017).

[116] Cufré, D. (13 de noviembre de 2005), "El pacto social pide un salvavidas", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-59164-2005-11-13.html (Fecha de acceso, 22/9/2017).

[117] Obarrio, M. (28 de octubre de 2005), "Kirchner apoya un acuerdo social para frenar los precios", *La Nación*, Disponible en http://www.lanacion.com.ar/751403-kirchner-apoya-un-acuerdo-social-para-frenar-los-precios (Fecha de acceso, 22/9/2017).

[118] Bein, M. (19 de noviembre de 2005) "Momento de decisiones ante la inflación", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/757780-momento-de-decisiones-ante-la-inflacion (Fecha de acceso, 22/9/2017).

[119] Dellatorre, R. (19 de noviembre de 2005), "Con toda la carne al asador", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-59433-2005-11-19.html (Fecha de acceso, 24/9/2017).

Las mayores tensiones entre la entidad empresarial y el gobierno nacional se sucedieron a partir de que el ministro Lavagna tomara la decisión de disminuir los reintegros por exportación en general y aumentar las retenciones al sector frigorífico en la comercialización de carnes. En esa disputa, los sectores vinculados a otras actividades, y pertenecientes a la UIA, no dieron su respaldo al sector agroalimentario frente a las medidas del gobierno.

No obstante, el entonces titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, se expresó en oposición a un aumento del 300% en los derechos de exportación de carnes. Sostenía que la decisión generaría un fuerte freno en la inversión y paralizaría las capacidades productivas.[120]

Para finales de noviembre de 2005, el presidente Kirchner decide el reemplazo de Roberto Lavagna frente al Ministerio de Economía y nombra en su lugar a Felisa Miceli. El ex funcionario había mantenido una tensa relación con algunos ministros del gabinete nacional y había presentado algunos desacuerdos sobre las políticas a seguir.

El recambio en el Palacio de Hacienda no generó mayores dudas entre los sectores empresariales sobre el sostenimiento del rumbo, las primeras reacciones daban cuenta de que se confiaba en que se conservaría los lineamientos económicos de su antecesor. Igualmente, se expresaban preocupaciones por la inflación y la inversión.[121]

Hay que destacar que el gobierno nacional no lograba sólidas adhesiones del mundo empresarial, y si bien tampoco existía una disconformidad sobre la política económica en general, se temía que el poder sindical fuese en aumento a partir del impulso dado por el propio presidente Kirchner.

La estrategia desplegada por el gobierno era demostrar a aquellos dirigentes sindicales que gozaban de su confianza que serían recompensados, además de demostrarle al empresariado que era capaz de controlar la conflictividad laboral, manteniendo los aumentos salariales dentro de topes compatibles con la tasa de inflación anual prevista (Godio, 2006, pp.334-335).

Desde comienzos de su mandato, el presidente Kirchner había comenzado a recrear las relaciones con el sindicalismo peronista, en un comienzo en mayor medida con la CGT disidente conducida por Hugo Moyano. El gobierno nacional tuvo un rol protagónico en reestablecer la

[120] "La Rural expresó preocupación por las retenciones a la carne" (19 de noviembre de 2005), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/757813-la-rural-expreso-preocupacion-por-las-retenciones-a-la-carne (Fecha de acceso, 24/9/2017).
[121] Cabot, D. (2 de diciembre de 2005), "Para los empresarios, Miceli seguirá con la línea de Lavagna", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/761293-para-los-empresarios-miceli-seguira-con-la-linea-de-lavagna (Fecha de acceso, 24/9/2017).

unidad del movimiento obrero, su objetivo era encontrar en esos actores los apoyos necesarios para llevar adelante su política económica orientada a recomponer el mercado doméstico.

Mientras que, por el lado de los sectores empresariales, específicamente las cámaras nucleadas en la UIA, surgieron disidencias sobre cómo enfrentar distintos problemas de la economía nacional. Eso ocasionó, en muchos casos, rispideces entre ambos, aunque tampoco existía una actitud de beligerancia contra la gestión de gobierno.

3.6. Un análisis de la articulación hegemónica del kirchnerismo

El despliegue político del gobierno nacional, en su relación con las entidades empresarias y los sindicatos de trabajadores, tuvo como propósito fundamental la reconfiguración de su existencia y de sus identidades políticas como actores sectoriales en el nuevo contexto posterior a la crisis de 2001-2002.

En ese sentido, fue necesaria la decisión de reconstituir los ámbitos institucionales de las relaciones laborales con la finalidad de articular los intereses sectoriales de las diversas organizaciones sindicales y patronales, estableciéndose de esa manera un reordenamiento del espacio sociolaboral.

A medida que la economía doméstica comenzaba a evidenciar signos de recuperación, los propios actores del ámbito laboral, tanto las cámaras empresarias como los sindicatos de trabajadores, recobraban su fortaleza y capacidad de accionar en el mercado de trabajo, volviéndole a brindar su dinámica interna.

En ese escenario, el gobierno nacional inició una política de reconstrucción de vínculos con esos sectores, en un comienzo, desde un plano institucional con el restablecimiento de las relaciones del trabajo y, posteriormente, con la intención ampliar su base de sustentación y fortalecer de esa manera su fuerza política.

Desde un principio, el kirchnerismo emprendió la tarea de construir su identidad desde acciones que buscaban suturar el orden social abierto luego de la crisis de 2001-2002 a través de nuevas prácticas articulatorias. En su discursividad posibilita desarrollar una cadena equivalencial de demandas que definen al neoliberalismo como su antagonismo, delimitándolo de esa manera como su exterior constitutivo.

Es aquí donde aparece en escena el Estado, en toda su capacidad de responder a esas demandas y, al mismo tiempo, como el instrumento que brinda la posibilidad de devolver la integridad a una sociedad dislocada desde finales de 2001 (Muñoz y Retamozo, 2008, pp.139-140).

El Estado nación, que ha sido el espacio central de la política en la modernidad, debe ser considerado como el campo de disputa en que los actores políticos se encuentran en pugna y negociación permanente por la distribución de los recursos de la sociedad. El conflicto, que está en el origen de la política, es también la razón de ser del Estado, que se mueve en la paradoja siguiente: nace para mitigar y regular el conflicto que es, no obstante, su razón de ser última, sin la cual no existiría (Errejón, 2011, pp.6-7).

Ahora bien, la acción de reparación que realiza el Estado (Varesi, 2014) está estrechamente relacionada con la articulación de elementos que componen la construcción de la formación hegemónica que busca constituirse desde los actores empresariales vinculados a la esfera productiva y a los trabajadores.

En ese sentido, comprendemos que las identidades políticas, los alineamientos que marcan el orden del campo político y social (Errejón, 2011), no derivan de condiciones de carácter estructurales u objetivas, sino que son el resultado de prácticas en construcción.

En oposición, podemos ubicar la hegemonía neoliberal de la década de los noventa, que se constituía en su capacidad de establecer un orden político y social en donde la centralidad residía en la lógica del mercado como principal asignador de recursos, bajo el protagonismo del capital financiero.

El kirchnerismo realiza un cambio de carácter radical en uno de los preceptos y concepciones centrales que constituyó la hegemonía neoliberal: el privilegiar el mercado por sobre la política.

De esa forma, logra descomponer la noción de que nada podía cambiar el rumbo de las cosas, porque nada podía hacerse en contra de las “leyes naturales” del mercado. En el fundamento de aquella concepción prevalecía que la intervención política provocaba distorsión y resultaba nociva a largo plazo, en la medida que operaba en contra del libre juego de la oferta y la demanda (Biglieri, 2010, pp.142-143).

El quiebre de esa concepción hegemónica posibilitó que el kirchnerismo, desde su política pública, lograse reconfigurar el rol de las instituciones estatales, brindándole un sentido de regulación y de medicación social. En otras palabras, si el neoliberalismo proponía “liberar” al individuo de las mediaciones y observaba al “mercado” como el ámbito propicio para su realización, el kirchnerismo emerge desde la restitución de las mediaciones vulneradas, reposicionando la acción del Estado (Varesi, 2014, p.65-66).

El kirchnerismo consigue colocar a las instituciones estatales en un papel fundamental, mediante su capacidad de accionar de intermediario entre los actores colectivos del trabajo, oficiando los estímulos necesarios para la concertación entre los sindicatos de trabajadores y las entidades empresarias.

Hay que destacar que, en esa situación, el gobierno recobra para sí su legitimidad en el accionar de sus capacidades de regulación en el marco de las relaciones laborales, ya que los mismos actores aceptan su intervención y reconocimiento.

A medida que el gobierno nacional se iba involucrando en la aplicación y desarrollo de políticas laborales, la agenda pública estatal incorporaba un fluido proceso de negociaciones con las organizaciones empresariales y sindicales (Godio, 2006, pp.99-100).

En un comienzo, las capacidades de maniobra política del presidente Néstor Kirchner se encontraban reducidas, como consecuencia de su propio entramado político, el mismo que hizo posible su triunfo electoral y que le posibilitó la oportunidad de formar gobierno. El peronismo de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Eduardo Duhalde, era su sustento principal y, al mismo tiempo, su principal obstáculo.

El kirchnerismo ensayó diversos movimientos destinados a sobrepasar los límites propios del Partido Justicialista con el objetivo de crear su propia fuerza política. Buscaba reconfigurar principalmente su relación asimétrica con el peronismo bonaerense, en base a un nuevo equilibrio de poder.

En un principio, en lo estrictamente político-partidario, el gobierno orientó sus esfuerzos hacia una política de la "transversalidad", con la finalidad de encontrar ejes de articulación con sectores provenientes de otras fuerzas. Algunos de ellos de procedencia radical, socialista y otros de organizaciones políticas con experiencia de gestión a nivel local o municipal.

Simultáneamente, el gobierno nacional procuraba tender puentes con los sectores sindicales nucleados en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y en las organizaciones de desocupados como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD).

Ahora bien, el kirchnerismo articuló las diferentes demandas de las organizaciones de desocupados, con quienes estableció una relación de acercamiento desde su llegada al gobierno. Esos movimientos fueron actores emergentes de las políticas económicas bajo la hegemonía neoliberal, que se constituyeron identitariamente desde la protesta social durante a finales de la década de los noventa.

En contraste, el actor sindical arribaba sumamente debilitado a la escena poscrisis de 2001-2002, por las propias características del contexto laboral. Las organizaciones del trabajo renacieron como actores protagónicos al calor de la recuperación del crecimiento y la recomposición del mercado interno.

Al mismo tiempo, los actores empresarios, orientados mayormente al consumo doméstico, se reencontraron en el cuadro sociolaboral al ritmo que marcaba la actividad económica.

En los primeros meses, el presidente Néstor Kirchner mantuvo una distancia de origen con los actores sindicales. Los sectores provenientes de la CGT disidente y la CTA manifestaron públicamente su adhesión al gobierno una vez que pasaron las elecciones, durante el transcurso de la campaña ninguna central obrera había manifestado ningún tipo de apoyo. En tanto que la CGT oficial se mantenía alineada con el duhaldismo, adhiriendo así de forma "indirecta" a la nueva gestión.

En definitiva, el contexto para el nuevo gobierno era sumamente complejo, ya que tenía que comenzar lidiando con una débil vinculación sindical, un incipiente apoyo de las organizaciones de desocupados y una distante relación con el ámbito empresarial. Además, debemos tener en consideración la debilidad electoral y su dependencia del apoyo duhaldista (Lucca, 2014)

Desde la concepción reparadora de Estado poscrisis, el kirchnerismo se planteó el desarrollo de un programa político que se enmarcaba en contraposición al ideario neoliberal, haciendo hincapié en el "capitalismo nacional", en la reivindicación de lo "nacional-popular" y en la "recuperación de la dignidad de los trabajadores" (Muñoz y Retamozo, 2008; Varesi 2014).

En el desarrollo de las políticas sociales y laborales, con el propósito de atender y recomponer el contexto social y comenzar a delinear un patrón de crecimiento, el gobierno priorizó en el dialogo sectorial a determinadas expresiones empresarias y sindicales.

En el plano estrictamente sindical, priorizó un mayor acercamiento con la CGT disidente y realizó las gestiones necesarias para que su líder, Hugo Moyano, se encontrara al poco tiempo en la conducción de la central obrera.

En relación con el ámbito empresarial, el camino fue más dificultoso, ya que los sectores vinculados a la UIA, principalmente con los miembros de la línea interna "Industriales", ex Movimiento Industrial Nacional (MIN), poseían ciertas dudas sobre el rumbo económico y, sobre todo, en cuanto a la política laboral, en lo vinculado estrictamente al costo laboral.

Al mismo tiempo, debemos considerar que hacia el interior de la entidad empresaria se sucedieron tensiones con relación a la conducción de la organización, que derivaron en disputas y conflictos entre sus distintas expresiones políticas.

Los ejes de controversia giraron alrededor de si ampliar o no la representación de las pequeñas y medianas empresas, sobre el tipo de cambio y la modalidad de acercamiento con el gobierno nacional (Wyczykier, 2015, p.174).

Analizando el ámbito político-partidario, las elecciones legislativas de 2005, marcaron el inicio de la expresión del kirchnerismo como dominante hacia el interior del peronismo. El triunfo de Cristina Kirchner sobre Hilda "Chiche" Duhalde en la provincia de Buenos Aires,

suprimió definitivamente el poder supeditado del presidente Kirchner con relación al duhaldismo.

Hay que destacar que, desde ese escenario electoral, el gobierno nacional lograba fortalecerse como fuerza política, con mayor peso y con volumen propio que le brindaba una posibilidad de maniobra que a comienzos de su gestión no poseía. El dato sobresaliente y a destacar es que Néstor Kirchner conquistaba definitivamente la conducción del peronismo.

El acto realizado en 2006, con motivo del aniversario del 25 de Mayo, en el cual participaron las más diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas, fue de una gran relevancia por el poder de convocatoria que mostró el gobierno nacional.

Además, debemos resaltar que la composición sociopolítica de la Plaza de Mayo reflejaba una resignificación de la identidad clásica del peronismo, dado que le bridaba la posibilidad de sobrepasar sus históricos límites sociales, sustentándose de diversas tendencias y tradiciones populares.

Los elementos articulados en la lógica equivalencial de demandas excedían los marcos del "peronismo clásico", ya que se incorporaban hacia el interior del kirchnerismo no sólo actores reconfigurados, como el sindicalismo, sino también emergentes propios del periodo anterior de hegemonía neoliberal, como las organizaciones de desocupados.

Ahora bien, el proyecto político kirchnerista retomaba algunos elementos del armado político de su antecesor, durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, en su identidad antagónica al periodo de valorización financiera. Sin embrago, se diferenciaba en la decisión de mantener su capacidad de autonomía estatal al no incorporar en su gabinete a sectores representativos del empresariado local.

La orientación de la política económica, que ponía eje en la expansión del mercado interno, generaba estrechos vínculos con empresarios de actividades productivas. Sin embargo, esa situación no desembocaba en la designación de funcionarios vinculados con esos actores en áreas de gestión pública, ya que se procuraba mantener la independencia en la conducción de las instituciones estatales.

En ese sentido, las relaciones políticas que tenían como objetivo articular una nueva conformación hegemónica que contuviera a determinados actores empresarios y sindicales, evidenció una necesaria coordinación estatal para constituirla.

Desde 2003 en adelante, la revalorización de la acción del Estado en el desarrollo de la política económica, orientada hacia el mercado interno y la reindustrialización, sumado además a un constante ejercicio retórico con un sentido productivista, motivaba una recurrente interpelación por parte del kirchnerismo a los trabajadores organizados en la CGT y a los empresarios agremiados en la UIA (Wyczykier y Anigstein, 2015, p.180-181).

El kirchnerismo procuraba reducir las brechas sociales a través de sus políticas económicas y laborales, que se orientaban a recomponer las necesarias condiciones para satisfacer las promesas de plenitud en el horizonte. La dimensión de la crisis que se buscaba conjurar contenía la negación de la idea de movilidad social ascendente, que se había arraigado desde el "peronismo clásico" (Varesi, 2014, pp.65-66).

La resignificación del Estado como garante de la inclusión y, al mismo tiempo, como el reparador de los daños sociales de las políticas neoliberales de la etapa anterior, enmarcados en la evocación de lo "nacional-popular", lograba reactivar en el imaginario social la reconstrucción de símbolos e imágenes del "peronismo originario". Esas políticas enmarcadas en la reparación del daño dieron forma a una comunidad política que antes era reservada para unos pocos (Muñoz y Retamozo, 2012, pp.3-4).

Desde la perspectiva de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2004, [1985]), podemos sostener, en el marco de la dimensión interpelativa, que toda hegemonía presenta una dimensión performativa, que es capaz de transformar y reformar determinadas ideas, prácticas, creencias e imaginarios sociales, modificando en diferente grado las identidades políticas y culturales que asumen como propios y validos los sectores interpelados.

Desde el desarrollo de una política económica que reactivó la dinámica del mercado doméstico, en base a la creciente generación de puestos de trabajo e incrementos salariales, el kirchnerismo consiguió resignificar las identidades de los actores sindicales y de las agremiaciones empresariales, posteriormente a la crisis de 2001-2002.

De ese modo, el gobierno nacional volvía a reposicionar a las instituciones de las relaciones laborales, reubicando el diálogo sectorial en el marco de las negociaciones colectivas, procesando y mediando de esa manera en la puja distributiva.

Capítulo IV

La crisis internacional, sus impactos en la economía local y el inicio de movimientos contrahegemónicos (2008-2011)

4.1. El segundo gobierno kirchnerista: una aproximación al contexto general del periodo

El segundo periodo de gobierno, encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estuvo marcado por un contexto sumamente complejo en términos económicos, a nivel global por la crisis financiera internacional y, a nivel nacional, por la agudización de las tensiones con determinados actores locales vinculados al sector agroexportador.

Hacia finales de 2007, el contexto internacional había generado que los capitales especulativos que habían participado de la oferta crediticia de "hipotecas basuras" buscaran refugio en los derivados de los bienes primarios. Eso ocasionó que los precios internacionales subieran drásticamente, causando una repercusión sobre los precios de los alimentos a nivel de la economía local.

Debemos señalar que, las primeras manifestaciones de la crisis internacional tienen su origen en los Estados Unidos, cuando el sistema financiero se sumerge en un contexto de desconfianza por las hipotecas *subprime*. Posteriormente, en el transcurso de 2008, la crisis se expandirá a los países del continente europeo y llegará a su cúspide con la quiebra de Lehman Brothers hacia finales de ese año.

Frente a ese contexto, la respuesta del gobierno nacional fue elevar el nivel de retenciones para algunos cereales y oleaginosas, aplicando un esquema móvil en materia de derechos de exportación. El aumento consistía en que las alícuotas se incrementaran al ritmo de las subas en los precios internacionales.

La Resolución N°125 provocó un conflicto de larga duración entre las entidades agropecuarias y el Ejecutivo Nacional. El centro de la discusión era la apropiación del excedente por parte del Estado.

En este lapso, la situación internacional iba impactando en la economía local con mayor notoriedad hacia el segundo semestre de 2008 y comienzos de 2009. El gobierno tomaría la decisión de enfrentar ese contexto focalizándose en el sostenimiento de la actividad del mercado doméstico.

El capítulo se desarrollará entre los años 2008 y 2011, bajo el segundo periodo de gobierno kirchnerista, cuando comenzaron a vislumbrarse los primeros problemas en el diseño macroeconómico diseñado durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Al mismo tiempo, fueron las gestiones realizadas por la administración de gobierno durante 2003-2007 las que brindaría una amplia capacidad de maniobra para sortear los embates externos.

En primer lugar, abordaremos los aspectos vinculados a la política económica del gobierno nacional para evitar los impactos locales de la crisis financiera internacional. En segundo lugar, realizaremos una caracterización del conflicto suscitado por el esquema de retenciones móviles, que ocasionó un cambio en la configuración del campo político y social, dando lugar a las primeras manifestaciones de una articulación contrahegemónica.

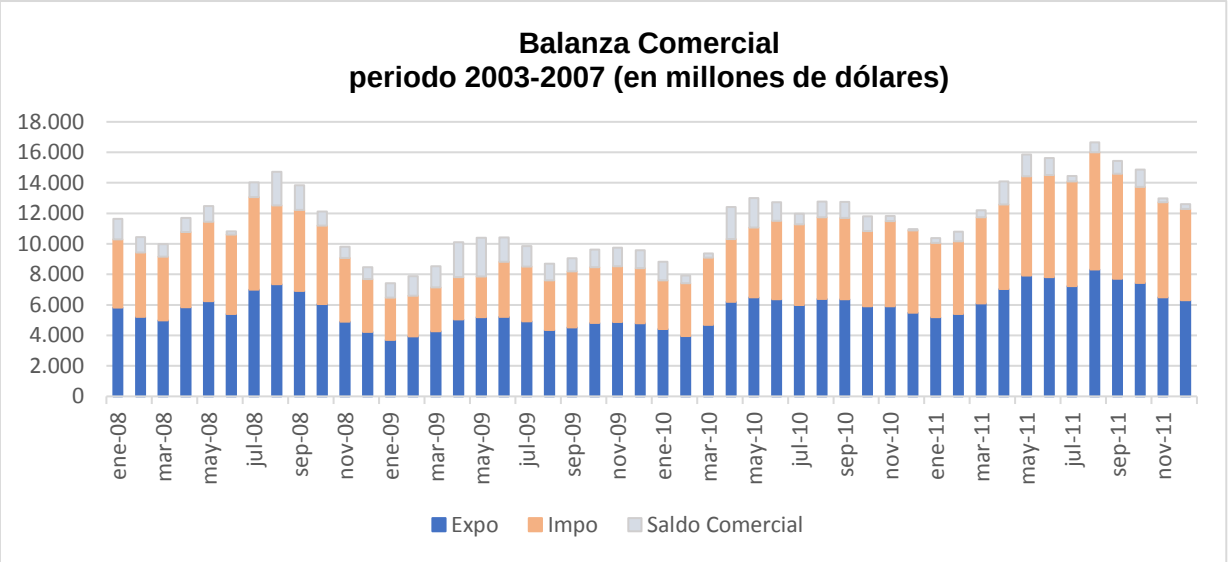
4.2. El impacto de la crisis internacional en la economía local y su pronta recuperación

Luego de la fase expansiva de 2003-2007, que se caracterizó por un alto nivel de crecimiento de la actividad económica, una recuperación del mercado interno y una importante acumulación de divisas, como consecuencia del comercio exterior, comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de la crisis internacional a escala local.

Entre el cuarto trimestre de 2008 y el primero de 2009, se desarrollaría el periodo más agudo de la crisis, que encontró a la Argentina en una posición de relativa solidez externa para enfrentar los impactos que tuvieron lugar a nivel global durante esa etapa. El margen de maniobra del Banco Central (BCRA), la autoridad monetaria, para hacer frente a las complicaciones del contexto internacional era de una amplitud significativa.

Debemos señalar que, como consecuencia de la política económica desarrollada por el gobierno nacional durante el periodo anterior, se había logrado consolidar un importante excedente en la cuenta corriente y un superávit financiero en las cuentas públicas (Damill y Frenkel, 2013, p.17).

Ese cuadro de situación de la economía doméstica posibilitó que los impactos a nivel local de la crisis internacional se circunscribieran principalmente al flujo comercial y que no se presentaran como una típica situación de falta de divisas o de restricción externa (Abeles, 2009). Por lo tanto, uno de los factores explicativos de la contención de los efectos externos se vincula estrechamente con la inédita solidez financiera de la Argentina.



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Sin embargo, y a pesar de la situación holgada del sector externo de la economía nacional, el escenario de incertidumbre a nivel global demandaba atender los consecuentes impactos que se pudieran ocasionar, teniendo en consideración los dos principales canales de transmisión: el financiero y los flujos de comercio (Abeles, 2009; Damill y Frenkel, 2013).

Hay que destacar que, en el trascurso de 2007, la situación financiera global dominante sacudió la economía doméstica con anterioridad a la quiebra de Lehman Brothers, acaecida en 2008. Dicha quiebra comenzó a impactar en el mercado interno un año antes, desde la interrupción de la burbuja inmobiliaria de las *subprime* en los Estados Unidos.

En ese contexto, los fondos financieros especulativos tendieron a dirigir su inversión hacia los derivados de los bienes primarios, provocando de esa forma una suba significativa en los precios de los alimentos en el mercado local (Abeles, 2009, 184-186). Esto generó que el gobierno nacional tomara medidas con el objetivo de moderar los efectos inflacionarios internos.

Posteriormente, desde de marzo de 2008, se acelera el ritmo de los movimientos de fuga de capitales privados, inducidos primeramente por el conflicto entre el gobierno nacional y el sector agropecuario y, a continuación, como consecuencia del contexto de incertidumbre a escala internacional.

En ese cuadro de situación, el gobierno nacional focalizó sus esfuerzos en la estabilidad financiera, relegando a un segundo plano las capacidades competitivas derivadas del tipo de cambio real.

Dese octubre de 2008, el mercado de divisas se encontraba bajo una considerable presión de demanda, la política llevada adelante por el BCRA consistió en no acompañar los

consecuentes efectos de ese movimiento en el mercado cambiario. Con ese objetivo se tomaron medidas de intervención, ampliando la oferta necesaria de divisas para que su precio se sostuviera en el tiempo (Damill y Frenkel, 2013).

En esa situación, el gobierno nacional desechaba atender mediante una abrupta devaluación las presiones sobre el mercado de cambios en términos de demanda y, al mismo tiempo, rechazaba responder de manera efectiva a los intereses que reclamaban sostener los niveles competitivos mediante la depreciación de la moneda.

Ahora bien, con relación a la dimensión financiera de la crisis internacional, la negociación con los acreedores externos que se había llevado adelante con anterioridad se presentó como un aspecto clave y relevante en ese contexto, y que consideramos necesario remarcar.

El proceso de desendeudamiento, iniciado desde la renegociación con los acreedores externos, es uno de los factores que incidió notablemente sobre las capacidades de acumulación de reservas por el canal comercial, brindando amplios márgenes para enfrentar posibles embates externos.

Se debe señalar que, hacia finales de 2008 y principios 2009, el escenario estaba dominado por los efectos de la crisis global. La Argentina se encontraba excluida del mercado de crédito, ya que persistían las objeciones a la reestructuración de la deuda pública por parte de los acreedores que no habían ingresado al canje.

Estas oposiciones persistieron aún luego de 2010, cuando tuvo lugar una reapertura de las negociaciones e ingresaron a la reestructuración el 92,4% del total de los tenedores de títulos argentinos. Detrás de esa posición de intransigencia de algunos acreedores que optaron por no aceptar nuevamente la oferta del Estado nacional se encontraba el objetivo de litigar en un futuro cercano.

Otras cuestiones irresueltas en el frente externo, y que colocaban al país en un lugar relegado en el mercado de crédito internacional, eran la deuda que aún sostenía con el Club de París, los litigios que aún persistían en el CIADI y las controversias con el FMI.

En relación con el Club de París, la Argentina aún mantenía su incumplimiento en el pago de deuda con los acreedores del foro, institución que nucleaba a una gran cantidad de países europeos y extraeuropeos que poseían títulos soberanos de países emergentes.

En las negociaciones con el Club de París, las posiciones más duras las sostenían en su momento Alemania y Japón, que requerían la intervención del FMI para comenzar a negociar. La posición del gobierno argentino era incorporar en esa controversia a otros organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y/o al Banco Mundial (BM).

La normalización de las relaciones con el FMI estaba supeditada a la admisión de una misión técnica del organismo en el marco del artículo IV.

En ese marco de situación, la Argentina presentaba una caída significativa de los indicadores de endeudamiento y, a pesar de que el gobierno nacional había reacomodado su situación con sus acreedores externos, el país continuó en un aislamiento financiero internacional en donde las calificadoras de riesgo sostenían primas entre las más elevadas a nivel global (Damill y Frenkel, 2013, p.18).

En ese contexto de crisis internacional, debemos considerar que algunas singularidades de la economía local –que podían ser vistas como fragilidades, como el aislamiento de los mercados de capitales y la escasa intermediación financiera– hicieron posible que los impulsos negativos provenientes del exterior se transmitieran tenuemente hacia las variables macroeconómicas internas (Damill y Frenkel, 2013, pp.20-21).

Ahora bien, esa situación en donde la baja incidencia del capital financiero jugó a favor de la economía local tuvo su contraparte en el canal de transmisión comercial (Kulfas, 2016). Avanzada la crisis, la demanda global había disminuido y ocasionaba una baja en los saldos exportables tanto en volumen como en sus precios. Además, se registraba un aumento en las importaciones de combustibles, de autopartes y de artículos electrónicos.

Frente a un escenario de tendencia declinante de la demanda internacional, la preocupación del gobierno argentino se centró en una posible contracción de la economía de Brasil. Sus consecuencias sobre la actividad del mercado interno podían poner en riesgo el crecimiento y el empleo.

En contraposición con la política cambiaria de la Argentina, la tendencia a nivel regional fue la devaluación de las monedas domesticas frente a las presiones de demanda en los mercados de cambio, como el caso de Chile, Uruguay y Brasil. Eso presentaba una dificultad para el gobierno argentino en relación con sus socios en el intercambio comercial.

Particularmente, la mirada del gobierno nacional se focalizaba en el desarrollo de las políticas económicas del gobierno de Brasil en el contexto de la crisis internacional, ya que se trataba de un socio comercial vital. La relevante relación en materia de intercambio con el país vecino lo colocaba como la principal polea de transmisión en esa situación a escala global, incluso antes que EE. UU. y la Unión Europea (EU).

Hay que remarcar que, el gobierno del presidente Lula da Silva había desarrollado una política de mayor acercamiento a los mercados financieros, alcanzando la categoría de *investment grade* (grado de inversión), que lo colocaba como destino posible para los capitales especulativos. Esto alertaba al gobierno nacional, ya que cualquier efecto de la crisis global que

recibiera Brasil podía poner en peligro el principal mercado de exportaciones industriales de la Argentina.[122]

Considerando el panorama regional e internacional, el gobierno argentino interpretaba que si se diera una la combinación de una contracción de la economía de Brasil y una devaluación del tipo de cambio doméstico, eso ocasionaría una contracción de carácter aún mayor del mercado interno.

En esa situación, a los negativos efectos comerciales con el país vecino habría que sumarle las consecuencias de un salto cambiario sobre el poder adquisitivo de los salarios y las capacidades de sostenimiento del empleo a nivel local.

Una vez consolidado el escenario de baja demanda global, la política económica del gobierno argentino poseía su flanco vulnerable en la balanza comercial, donde había encontrado con anterioridad, su fortaleza para evitar turbulencias en el sector externo y también una de las fuentes vitales de la recaudación (Musacchio, 2009, p.163). De esa manera, comenzaba a presentarse una complejidad en materia de comercio, ya que la dinámica del intercambio había sido alcanzada por los efectos de la crisis.

En ese cuando de situación, y cuando los efectos de la recesión global se hicieron sentir internamente, el gobierno nacional tomó la decisión de ampliar de agresivamente su política anticíclica, con el objetivo de sostener la dinámica de la actividad interna.

La política económica se orientó principalmente a sostener la actividad del mercado doméstico, poniendo foco principalmente en el consumo. Se utilizaron diversas herramientas para sostener el poder real de los salarios: la apreciación cambiaria, los aumentos remunerativos vía negociación colectiva y el incremento del gasto público fiscal.

Fuente: Elaboración propia en base INDEC

[122] Cufré, M. (6 de octubre de 2008), "La mirada puesta en Brasil", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-112859-2008-10-06.html (Fecha de acceso, 17/10/2017).

En este cambio de escenario, en donde la demanda internacional poseía una marcada tendencia declinante, el gobierno nacional comprendía que era necesario incentivar con mayor agresividad las potencialidades endógenas del mercado local para alimentar una dinámica contracíclica frente a un contexto de características adversas a escala global.

En la fase expansiva de 2003-2007, se procuró sostener un determinado tipo de cambio en función de mantener el dinamismo del sector agroexportador y, al mismo tiempo, robustecer el mercado doméstico en materia de empleo y remuneraciones, estimulando constantemente la demanda interna.

De esa manera, podemos sostener que la gestión económica durante el periodo anterior sentó las bases necesarias para maniobrar en el contexto de crisis internacional (Pastrana, Toledo y Villafañe, 2012). No sólo para atender los efectos adversos en los canales externos de transmisión, sino también para sostener los niveles de actividad interna.

La orientación de la expansión del gasto público fiscal se orientó al financiamiento de obra pública e implementación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), destinado a sostener el empleo en empresas que comenzaban a padecer los efectos de la caída del nivel de actividad mediante subsidios parciales al pago de salarios (Kulfas, 2016, p.135)

En ese marco nacional e internacional, es relevante señalar una decisión estratégica que tomó el gobierno argentino: reemplazar el sistema de capitalización gestionado por las Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) por un único régimen público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).[123]

Esa resolución le proveyó los recursos necesarios para ampliar su cobertura de liquidez, con un aporte adicional de esos recursos y dirigirlos hacia el despliegue de una política contracíclica frente al contexto internacional, en una situación de desaceleración en la expansión de los recursos disponibles debido a la caída de la actividad económica.

Existen dos elementos que nos permiten entender la efectividad de la política fiscal en el transcurso de 2008-2009 durante el contexto de crisis internacional (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017). Por un lado, las reservas internacionales se mantenían en importantes niveles más allá de los movimientos de fuga de capitales asociada a la situación económica global. Por otro lado, las capacidades de expansión en el gasto aumentaron marcadamente tras la estatización de las AFJP, posibilitando un aumento en las inversiones para financiar el consumo, obras públicas y proyectos productivos.[124]

[123] "Con críticas a las AFJP, Cristina Kirchner firmó el proyecto para poner fin a la jubilación privada" (21 de octubre de 2008), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1061801-con-criticas-a-las-afjp-cristina-kirchner-firmo-el-proyecto-para-poner-fin-a-la-jubilacion-privada (Fecha de acceso, 19/10/2017).
[124] Cufré, D. (24 de octubre de 2008), "Vamos a crear un comité de fiscalización", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-113905-2008-10-24.html (Fecha de acceso, 19/10/2017).

Desde el ámbito financiero local aparecían las críticas a la estatización del manejo del fondo de jubilaciones y pensiones, sosteniendo que provocaría consecuencias negativas sobre las finanzas domésticas, impactando negativamente en las expectativas de los inversores, y que provocaría una merma en el crédito para las empresas.[125]

En una nota de opinión del diario *La Nación*, con relación a la política económica y, en particular, a la estatización de los fondos de pensión y jubilaciones se remarcaba:

> En los últimos años la tendencia hacia un Estado regulador de las relaciones económicas avanzó a paso arrollador. Se cambió aquel esquema de los noventa en el que la oferta y la demanda de bienes funcionaba con más libertad y en el que los precios estaban dominados por el comportamiento del mercado […] El último zarpazo a los fondos previsionales de alrededor de cuatro millones de ciudadanos le da la posibilidad de generar negocios de la mano de la obra pública y de intervenir con una fuerza inusitada en el mercado bursátil y cambiario […] El Estado ha vuelto. Y a los funcionarios que lo representan se los ve encantados de poder sentarse en cada vez más mesas de directorios a las que antes no entraban.[126]

Se construía de esa manera una caracterización negativa de las regulaciones estatales sobre el funcionamiento del mercado, colocando al poder púbico como un intruso en la participación de la vida económica de las empresas.

En un contexto internacional sumamente complejo, con sus implicancias a nivel local, el Estado nacional asume con mayor centralidad sus capacidades de regulación sobre espacios económicos que durante la década anterior había sido marginado. Las capacidades de márgenes de intervención potenciadas por la estatización de las AFJP provocaron fuertes disgustos en el ámbito empresarial.[127]

Posteriormente a la estatización de las AFJP, el gobierno incorporó como activos públicos una importante participación accionaria en compañías líderes, lo que provocó un estado de perturbación en los sectores financieros locales e internacionales.

Durante el transcurso del segundo semestre de 2008, la discusión en el sector empresarial giró alrededor de la política cambiaria realizada por el BCRA de apreciación de la moneda, cuyo objetivo era sostener los precios internos y el valor del poder adquisitivo.

---

[125] Juegue, F. (22 de octubre de 2008), "Jubilaciones: advierten sobre el impacto en las expectativas y en el financiamiento de las empresas", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1062170-jubilaciones-advierten-sobre-el-impacto-en-las-expectativas-y-en-el-financiamiento-de-las-empresas (Fecha de acceso, 19/10/2017).

[126] Cabot, D. (9 de noviembre de 2008), "La economía, manejada por el Estado", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1068039-la-economia-manejada-por-el-estado (Fecha de acceso, 19/10/2017).

[127] Zaiat, A. (16 de noviembre de 2008), "La centralidad del Estado", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-115143-2008-11-16.html (Fecha de acceso, 19/10/2017).

El gobierno nacional sostenía que un tipo de cambio con dólar alto podía favorecer a los empresarios que producían para el mercado interno, pues eso ocasionaría una baja en sus costos y, para el sector exportador en términos de competitividad. Sin embargo, también estaba el riesgo de que empujara en forma ascendente el proceso inflacionario, repercutiendo negativamente sobre los salarios (Wyczykier, 2015b, p.123-124).

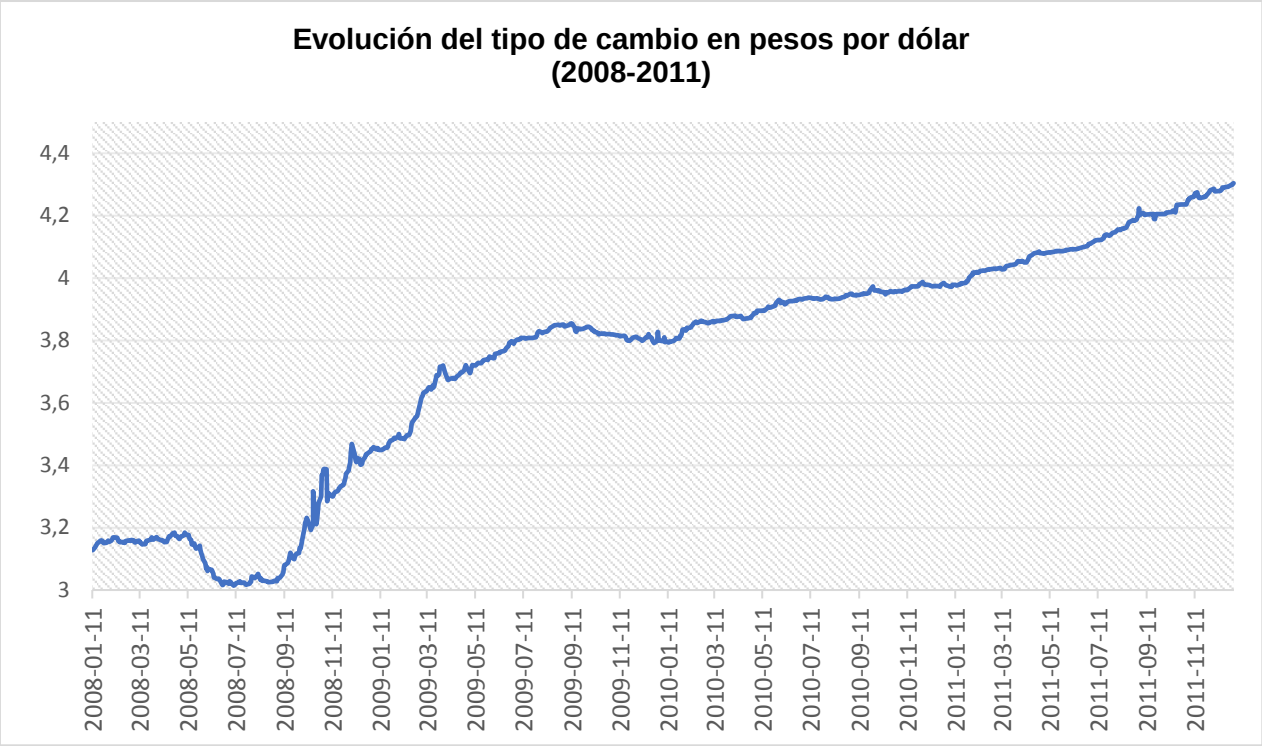
Mediante la publicación de un comunicado, la Unión Industrial Argentina (UIA) advertía sobre la devaluación con relación al dólar estadounidense y el "atraso" cambiario en nuestro país. Sostenían que de persistir esa situación se comprometía la competitividad de la economía local y se ponía el peligro el empleo.[128]

El presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, se manifestaba sobre el tipo de cambio que se debía seguir y la posición del gobierno al respecto:

> El modelo que nosotros apoyamos del Gobierno tiene tres patas: son los superávits gemelos (fiscal y de cuenta corriente) y el tipo de cambio competitivo. Evidentemente esta baja del tipo de cambio entendemos que es un problema coyuntural […] El Gobierno ha manifestado que quiere seguir con este modelo, que se basa en un tipo de cambio competitivo, por eso entendemos que es coyuntural.[129]

Hacia mediados del mes de noviembre de 2008, la política cambiaria comenzó lentamente a revertir el sesgo hacia la apreciación relativa que se registró a lo largo de 2008.[130] El BCRA pasaba a impulsar una lenta y progresiva alza de la divisa, intervenía comprando dólares en el mercado local con el objetivo de recomponer el stock de reservas y evitar que el peso se nivelase en relación con las otras monedas de la región, que habían proseguido con una devaluación de mayor magnitud que afectaba la competitividad local.

[128] "La UIA advirtió sobre consecuencias en el empleo y pidió un dólar más alto" (23 de octubre de 2008), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1062512-la-uia-advirtio-sobre-consecuencias-en-el-empleo-y-pidio-un-dolar-mas-alto (Fecha de acceso, 19/10/2017).
[129] "Para la UIA, la baja del dólar es coyuntural" (31 de julio de 2008), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1035105-para-la-uia-la-baja-del-dolar-es-coyuntural (Fecha de acceso, 19/10/2017).
[130] Blanco, J. (19 de noviembre), "Ahora es el BCRA el que hace subir el dólar con sus compras", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1071673-ahora-es-el-bcra-el-que-hace-subir-el-dolar-con-sus-compras (Fecha de acceso, 22/10/2017).



Fuente: Elaboración propia en base a Gerencia de Estadísticas Monetarias - BCRA

La depreciación hizo que el tipo de cambio retornara en junio de 2009 a niveles similares a los del periodo 2003-2007. En lo inmediato, este movimiento tuvo débil efecto inflacionario debido a la fuerte caída del precio de las materias primas (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017, p.120).

De esa manera, la política económica del gobierno permitió una devaluación ordenada, muy suave, al estilo *crawling peg*, que contrastó con las maxidevaluaciones de habituales crisis anteriores, de fluctuaciones violentas que alteraban negativamente el mercado doméstico (Musacchio, 2009).

Paralelamente, se realizó una suba de las tasas de intereses con el objetivo de retener positivos, en procura de restar liquidez en pesos que pudiera presionar sobre el mercado de cambios. Además, el Banco Nación y otras entidades financieras del ámbito público, se deshacían de posiciones en letras y de títulos en Lebac y Nobac, emitidos por BCRA, para destinarlos a incrementar la liquidez del crédito del sector privado (Kulfas, 2016).

Ahora bien, entre los días 24 y 25 de noviembre de 2008 tenía lugar la Conferencia Industrial, que se presentaba bajo la consigna: "Crisis internacional: las necesidades de la coyuntura y la oportunidad del desarrollo nacional".

Además de estar presente en la agenda del conclave empresario la cuestión que hacía a la política cambiaria, cobraba un lugar de preponderancia la situación del mercado de trabajo,

que estaba marcada por situaciones vinculadas a despidos, salario, recortes de horas extras y suspensiones de personal.

En el transcurso de los días previos al encuentro, tomaron relieve público diferencias con relación al tema salarial y su vinculación con la contracción económica interna. El vicepresidente de la entidad fabril, Osvaldo Rial, miembro de la agrupación Celeste y Blanca, ex Movimiento Industrial Argentino (MIA), sostenía que de la crisis "se sale con producción y consumo y no bajando salarios […] La baja de salarios no es la forma de solucionar la crisis, porque termina afectando indefectiblemente al mercado interno, que junto al tipo de cambio competitivo fueron las claves del éxito del modelo económico".[131]

Mientras que Héctor Méndez, ex presidente de la entidad, miembro de la agrupación "Celeste y Blanca", contraargumentaba: "Yo prefiero que la gente tenga un ingreso menor, pero que tenga un ingreso. Si no le buscamos una solución a esto, el trabajador se va a quedar sin el pan y sin la torta".[132]

En aquellos meses comenzaban a manifestarse las disputas en torno al excedente, a través de la puja distributiva entre los diferentes actores (Wyczykier, 2015b). Los industriales oponían resistencia a la reapertura de las negociaciones colectivas con el objetivo de discutir aumentos salariales frente a una baja de sus rentabilidades.

Asimismo, otras de las preocupaciones del gobierno pasaban por los despidos y suspensiones, las cuales poseían lugar en el mercado de trabajo por una caída en la actividad, como consecuencia de los impactos de la crisis internacional. La CGT y la CTA demandaban al gobierno nacional una serie de medidas que atendieran esa problemática, entre ellas se encontraba el pedido de doble indemnización en caso de despidos injustificados.[133]

Frente a la amenaza directa de despidos, acción empresaria que se emplea en forma habitual para realizar un ajuste de costos, las organizaciones sindicales respondían reclamando la doble indemnización. En ese contexto, la demanda de incremento indemnizatorio buscaba encarecer esa práctica común entre el empresariado, quitándole así atractivo y efectividad en el mercado de trabajo.[134]

---

[131] "Industriales abogan por un tipo de cambio alto y niegan promover una baja salarial" (24 de noviembre de 2008), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1073697-industriales-abogan-por-un-tipo-de-cambio-alto-y-niegan-promover-una-baja-salarial (Fecha de acceso, 19/10/2017).

[132] "Los industriales no se ponen de acuerdo" (24 de noviembre de 2008), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-115532-2008-11-24.html (Fecha de acceso, 19/10/2017).

[133] Premisi, S. (18 de noviembre de 2008), "Si no lo cura el G-20, se remedia indemnizando", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-115216-2008-11-18.html (Fecha de acceso, 19/10/2017).

[134] Dellatorre, R. (18 de noviembre de 2008), "Conductas en la crisis de débiles, poderosos y chantajistas", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/115216-36669-2008-11-18.html (Fecha de acceso, 19/10/2017).

Desde de la presidencia de la UIA, Juan Carlos Lascurain, se oponía a los reclamos de la CGT, sostenía que su secretario general, Hugo Moyano, observaba la realidad desde el plano sectorial y que ellos, como entidad fabril, poseían una visión que contemplaba la situación nacional e internacional.[135]

Se admitía por parte de la UIA una situación de cierta complejidad del mercado de trabajo, pero que tenía un alcance limitado en el recorte de horas extras y en algunas suspensiones, desestimando de esa manera la cantidad de despidos.

En ese escenario, los actores empresariales achicaban su estructura de costos, descendían sus proyecciones de producción y procuraban bajar sus niveles de inversión frente a un contexto contractivo del mercado interno. Ese accionar atentaba sobre el sostenimiento del empleo, situación que observaban con inquietud los sectores trabajadores.

El comportamiento empresario terminaba generando, en un contexto de incertidumbre, que las mismas expectativas negativas de contracción se cumplieran como consecuencias de sus propias decisiones. Reducir sus estructuras de costos significaba una menor reinversión, que poseía su correlato en la baja actividad económica doméstica.

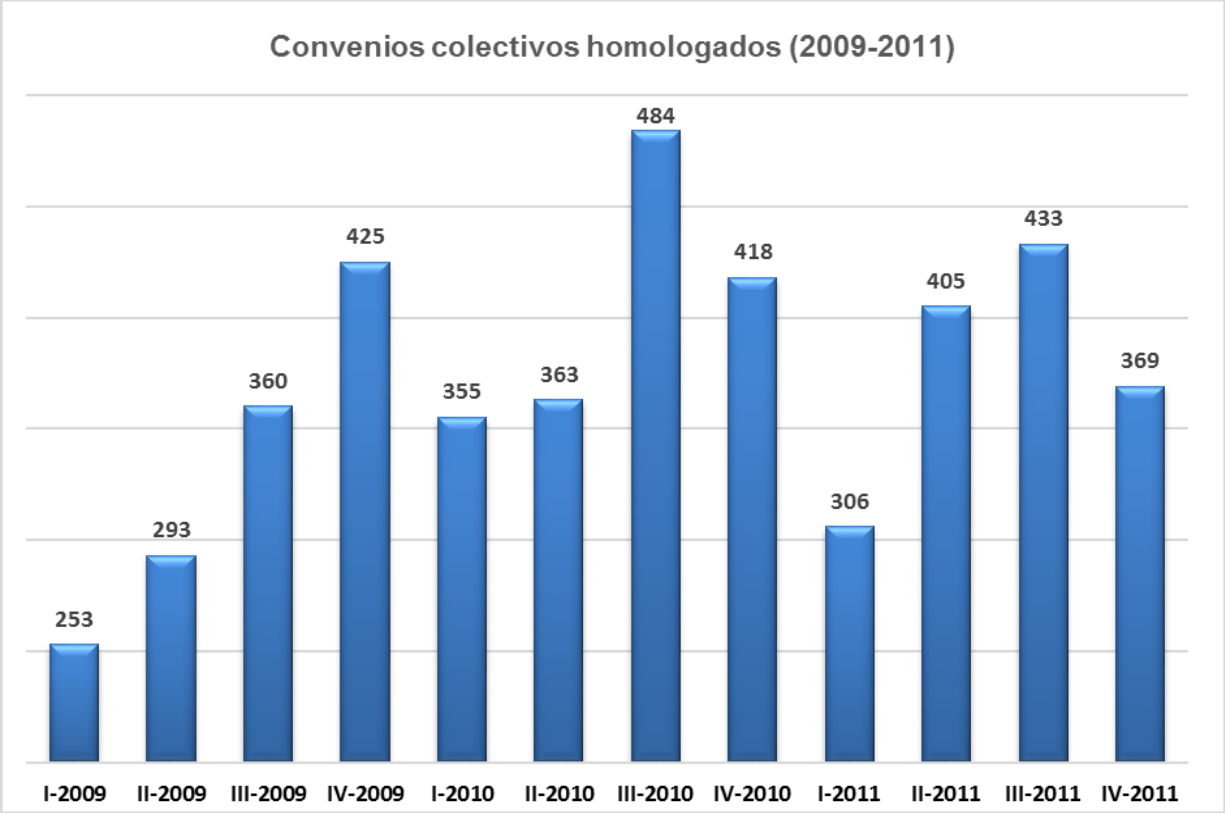
Mientras tanto, desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) se desarrollaban los procedimientos preventivos de crisis, que implicaban que por cualquier situación de despido las empresas debían entregar a la cartera laboral sus últimos tres balances para ser evaluados. De no hacerlo se aplicaba automáticamente la conciliación obligatoria.[136]

Asimismo, el MTEySS mantenía activamente la política de REPRO, que brindaba a las empresas que lo solicitasen una suma fija mensual remunerativa que alcanzaba a cubrir la totalidad de los salarios de cada trabajador. El Ejecutivo Nacional, en general, y la cartera laboral, en particular, desarrollaron una activa política sobre el mercado de trabajo con el objetivo de sostener los puestos de empleo.

Entre las medidas desarrollas en política laboral, el papel de la negociación colectivas cumplió un papel contracíclico (Palomino y Trajtemberg, 2012), ya que continuaron acordándose mejoras salariales para incrementar el poder adquisitivo y sostener el consumo.

[135] "Lascurain se opuso al reclamo de la CGT" (17 de noviembre de 2008), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1071046-lascurain-se-opuso-al-reclamo-de-la-cgt (Fecha de acceso, 19/10/2017).
[136] Premici, S. (19 de noviembre de 2008), "Poner más trabas a despidos", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-115273-2008-11-19.html (Fecha de acceso, 19/10/2017).

Esto demostró por primera vez que, más allá de las circunstancias económicas externas y ante situaciones adversas en el ciclo económico, la herramienta tripartita de negociación poseía una capacidad adaptativa que le posibilitó desarrollarse en actividades y empresas de diversas ramas que se encontraban en un estado de gran complejidad (Palomino y Trajtemberg, 2012).



Fuente: MTEySS – SSPTyEL – Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo

El ministro de Trabajo, Carlos A. Tomada, hacía referencia a la crisis internacional señalando sus efectos sobre la economía real y el mercado de trabajo, destacando también el desarrollo de políticas laborales de prevención para sostener los puestos de empleo:

> Cuando la presidenta dice que recién ahora empezamos a ver algún reflejo de la crisis internacional en la economía real es absolutamente cierto. Otros países llevan seis meses de pérdida de empleo, que se cuentan de a miles, y en Argentina todavía ni siquiera ha empezado una destrucción neta de puestos de trabajo […] No me gusta hacer pronósticos, pero la desocupación en este trimestre quedará estable.[137]

[137] Cufré, D. y Miguez, D. (7 de diciembre de 2008), "Antes de despedir, hay que pedir permiso", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-116289-2008-12-07.html (Fecha de acceso, 22/10/2017).

Debemos destacar que, en el contexto de crisis internacional, específicamente durante el transcurso de 2008-2009, la negociación colectiva encarada por las distintas cámaras y sindicatos se orientó a conservar las fuentes de empleo y de salarios, e incluso a impulsar incrementos de remuneraciones (Palomino y Trajtemberg, 2012, p.268).

Ahora bien, el actor central que procuró desarrollar una política cuyo objetivo era mantener la dinámica interna, frente a un sector externo en contracción, fue el gobierno nacional desde el financiamiento de créditos para el consumo, automotores, textiles, línea blanca y electrónicos de producción local. El Banco Nación se ocupaba de destinar créditos a pymes y apoyaba la inversión en bienes de capital.[138]

Luego de experimentar una etapa de contracción –desde finales de 2008 hasta comienzos del año siguiente– la actividad económica comenzó a estabilizarse en el tercer trimestre, para despegar definitivamente en los últimos meses de 2009. La respuesta al marco externo se desarrolló desde una serie de políticas de impulso fiscal que permitieron una rápida y acelerada recuperación económica en 2010 y 2011, con tasas de crecimiento similares a las del periodo 2003-2007 (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017).

Las políticas aplicadas mostraban una importante eficacia para amortiguar los impactos de la crisis global sobre el empleo y el marco institucional de las relaciones laborales, atenuando sus efectos sobre la actividad económica en general.

Esta situación permitía sostener la hipótesis de que el gobierno argentino, luego de haber aprendido a gestionar la crisis de 2001-2002, poseía una experiencia que le posibilitó poseer una comprensión y un diagnóstico certero del contexto internacional y sobre el tipo de medidas requeridas para sortear sus efectos locales (Palomino y Trajtemberg, 2012, pp.259-260).

El gobierno, desde el manejo y dirección de las instituciones estatales, actuaba sobre el mercado local con el propósito de desplegar una política contracíclica, buscando como resultado el sostenimiento de las remuneraciones, el empleo, el crédito al consumo y a la producción para las pymes.

Por otro lado, entre las medidas de orientación contracíclica y de atención a la situación social como consecuencias de la tendencia a la baja de la actividad doméstica, se instauró por decreto presidencial la Asignación Universal por Hijo (AUH). Una medida que destinaba cerca de

[138] Navarro, R. (16 de noviembre de 2008), "Si no lo hacen los privados, que lo haga el Estado", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-115114-2008-11-16.html (Fecha de acceso, 19/10/2017).

100 dólares a los jefes y jefas de Hogar que se encontraban desocupados y en trabajos no registrados.

La interpretación oficial consistía en que, frente a los impactos negativos de la crisis internacional por el canal comercial, había que incrementar las capacidades de la demanda interna, con el objetivo de mantener los cimientos de la economía nacional.

4.3. El conflicto de la Resolución 125 y la reconfiguración del campo político y social

El 10 de marzo de 2008, con la publicación de la Resolución N°125 en el Boletín Oficial,[139] el gobierno nacional establecía un esquema móvil de derechos de exportación sobre la comercialización de granos, con el objetivo de eliminar los efectos internos de los aumentos en los precios internacionales.

La aplicación de esa medida generó rápidamente una respuesta de las principales entidades patronales agrarias. La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) llevaron adelante un lockout en repudio de la decisión del Ejecutivo, y establecieron un cese de comercialización de grano, carnes y leche, en un principio durante 48 horas y, posteriormente, se extendería en el tiempo.[140]

El entonces ministro de Economía Martín Lousteau cuestionó la protesta de la dirigencia empresaria del sector agropecuario y argumentó que el sector gozaba de una rentabilidad de gran magnitud, como consecuencia de un contexto internacional significativamente favorable y por una política económica gubernamental que había apuntalado las capacidades del sector.[141]

En oposición, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, se expresaba sobre la situación de las retenciones móviles y daba respuesta a las declaraciones del ministro Lousteau:

> Cree que la soja es el enemigo de la Argentina […] tienen mala memoria y eso molesta mucho a los productores agropecuarios […] Muchas de las mejoras que tuvo el país en los últimos años se debieron al avance de la agricultura, en momentos en que la industria no estaba y el país tenía un déficit enorme […] El campo soportó políticas que han hecho que se maten los vientres […]

[139] Resolución N°125, disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/138567/texact.htm (Fecha de acceso, 29/10/2017).
[140] "Al paro para protestar contra el Gobierno" (13 de marzo 2008), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-100590-2008-03-13.html (Fecha de acceso, 29/10/2017).
[141] Krakowiak, F. (13 de marzo 2008), "Lousteau golpeó con el rebenque", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-100644-2008-03-14.html (Fecha de acceso, 29/10/2017).

> Hoy se come carne sin duda de mala calidad […] Se consume vaca, que se la vende como novillo.[142]

Las medidas de protesta de las entidades agropecuarias, enfocadas en el cese de comercialización, incluyeron una serie de movilizaciones en diversos puntos del país. La acción colectiva del sector se desarrolló en los cortes de rutas en el área del "núcleo sojero" de la Pampa Húmeda, como Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. El conflicto se agudizó, y se presentaba la amenaza de desabastecimiento en los centros urbanos.[143]

El desacuerdo comenzó a desplegarse con mayor intensidad y, a medida que transcurría las primeras semanas, se configuró como un punto de inflexión en la política argentina durante el periodo kirchnerista.

Asimismo, la coyuntura generó sus consecuentes efectos sobre el crecimiento de la economía local en el corto plazo, que se cristalizó en una fuerte puja por la apropiación de la renta y el excedente, entre los actores del sector agropecuario y el gobierno nacional, en una etapa de elevados precios de los bienes primarios, de aumento del PBI y de una reorientación del papel distributivo del Estado (Wyczykier, 2015b, pp.115-116).

La rápida respuesta de las entidades patronales y el conjunto de actores con vinculación a la actividad del circuito sojero fue conformando velozmente –durante el mes de marzo– la gestación de un antagonismo que a lo largo del conflicto tomó dimensiones que trascendieron lo específicamente reivindicativo.

Al traspasar el grado gremial, la controversia tomó un carácter político, que comenzaba a poner en cuestión el propio patrón de crecimiento de la economía nacional y la hegemonía vigente (Varesi, 2014b).

La histórica disputa intrasectorial por la apropiación de la renta agraria entre terratenientes, pequeños productores y arrendatarios giró hacia una nueva estrategia de cooperación, con la decisión de desplazar a un segundo orden el plano de las disputas hacia el interior del sector (Pucciarelli, 2017).

La decisión de los diversos actores del agro de encolumnarse hizo posible, que en el transcurso del conflicto se fuera articulando una nueva formación social que logró cristalizase, en un comienzo, en la conformación de la Mesa de Enlace.

---

[142] "Se profundiza el enfrentamiento entre el Gobierno y el campo", (13 de marzo de 2008), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/995239-se-profundiza-el-enfrentamiento-entre-el-gobierno-y-el-campo (Fecha de acceso, 29/10/2017).

[143] Dellatorre, R. (15 de marzo de 2008), "Si hay una solución, será para las Pascuas", *Pagina* 12. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-100750-2008-03-15.html (Fecha de acceso, 29/10/2017).

La conducción del conflicto con el gobierno nacional fue asumida por ese órgano colectivo que contenía a los cuatro actores de mayor representación del sector: la SRA, la FAA, las CRA y Coninagro. En conjunto buscarían avanzar contra la política de derechos de exportación en su versión móvil, con el objetivo de impedir la apropiación del creciente volumen de renta que estaba generando el mercado internacional por parte el Ejecutivo Nacional (Pucciarelli, 2017, pp.353-354).

A medida que el conflicto se iba extendiendo, la Mesa de Enlace iba reconfigurando el tema de la disputa. Si al comienzo se trataba de torcer una política económica estatal focalizada en la comercialización y la exportación de algunos bienes de valor internacional, luego, ampliaron el cuestionamiento hacia otras regulaciones estatales.

Frente a la disputa sobre la apropiación del excedente del sector agropecuario en materia de bienes primarios, el entonces secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, argumentaba en contra de la postura de no intervención por parte del Estado en materia económica:

> Esa es una filosofía que tiene el sector, pero tiene una incongruencia, porque también le dice al Estado "yo quiero que vuelquen más plata en infraestructura, que me mejore la sanidad del país para que pueda ganar mercados, yo quiero que me dé competitividad" […] Si no interviniera el Estado, no tendríamos un tipo de cambio de 3,17. Entonces, ahí es cuando a veces se producen las asimetrías en las distintas posiciones […] A veces les cuesta entender que aparecen situaciones de cambio, en las que no hay forma de que no aparezca un Estado interviniendo cuando ocurren fenómenos económicos como el actual. Si nosotros dejáramos que estos valores internacionales se volcaran al mercado interno, sobre todo en productos tan específicos como son los alimentos, donde somos un país productor, consumidor y exportador, estamos en dificultades. El incremento de los commodities en los últimos cuatro meses, de octubre a febrero, fue impresionante: la soja registró un incremento de casi el 70 por ciento, el girasol, un 75 por ciento y el maíz un 78 por ciento. Este es el aporte que se le ha pedido al campo para que todos estemos incluidos en este modelo. Pero manteniendo rentabilidad.[144]

La aplicación de un esquema de retenciones móviles, sobre un conjunto de cereales y oleaginosas, se comunicaba desde el gobierno nacional como un instrumento que buscaba contrarrestar los efectos negativos en materia de precios internos sobre el conjunto de la población.

[144] Navarro, R. (19 de marzo de 2008), "Medidas para después de levantado el paro", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-100955-2008-03-19.html (Fecha de acceso, 29/10/2017).

Al mismo tiempo, la justificación de la medida procuraba resolver la confrontación clásica entre productores y consumidores internos de alimentos básicos por la apropiación de la renta diferencial agropecuaria, disputa que había recorrido gran parte de la historia argentina del siglo XX (Pucciarelli, 2017; Kulfas, 2016).

Desde el sector patronal y productor, consideraban a la política gubernamental en materia de derechos de exportación como una herramienta confiscatoria, y alertaban que el gobierno estaba estatizando la producción.

David Lacroze, productor agropecuario y ex presidente de la Asociación Maíz Argentino (Maizar), dejaba entrever que el conflicto había tomado una conformación de carácter política dejando el plano gremial-sectorial:

> El objetivo del plan de lucha que han proclamado las cuatro entidades del campo no puede agotarse en la protesta. Debemos lograr los cambios de política económica necesarios para que la actividad agropecuaria pueda expresar todo su potencial en uno de los momentos más excepcionales de los mercados y vuelva a ser el interior de nuestro país la meca de los emprendedores del mundo, deseosos de correr el riesgo empresarial. Nuestras hacinadas urbes también lo agradecerán.[145]

Al mismo tiempo, al presentar la medida del gobierno respecto de los derechos de exportación como "confiscación a la producción agropecuaria, de neto corte fiscal", que buscaba castigar al sector, los actores del agro se presentaban a sí mismos como perjudicados por una política excesiva por parte del Ejecutivo, y lograban de esa forma legitimar su reclamo (Varesi, 2014b, p.8).

Durante el transcurso del conflicto, que tuvo una duración de cuatro meses, se fueron definiendo y redefiniendo diversas solidaridades y confrontaciones alrededor del gobierno y de la Mesa de Enlace, protagonistas de las demandas. En torno a ello, el arco de alianzas sociales y políticas de uno y otros se fue reorganizando al calor de los acontecimientos (Wyczykier, 2015b, p.119).

El conflicto entre el gobierno nacional y el empresariado agrario generó una dinámica de polarización en el entramado político y social, que llevó a la movilización y a un despliegue de repertorios de acción colectiva por parte de los distintos actores involucrados.

Cuando el lockout y el corte de rutas de los productores agropecuarios puso en peligro el abastecimiento de los alimentos en el mercado interno, el gobierno nacional amenazó con

[145] Lacroze, D. (17 de marzo de 2008), "El agro debe ejercer sus derechos", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/996319-el-agro-debe-ejercer-sus-derechos (Fecha de acceso, 29/10/2017)

cerrar por completo las exportaciones de carne, lácteos y granos. El objetivo era trasladarle la presión sobre las consecuencias que podía alcanzar la protesta a la Mesa de Enlace, señalándolos como los responsables de esa situación, y así lograr que cesara la medida de fuerza.[146]

Las capacidades disuasorias del gobierno nacional frente a la protesta no tuvieron efecto, el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, detallaba las diversas decisiones que se habían tomado para la prosecución del conflicto:

> Se aprobaron las siguientes mociones: No dejar pasar camiones con cereal a puerto, ganado en pie ni productos lácteos elaborados; no molestar a turistas y ciudadanos comunes en tránsito; reforzar los piquetes en los anillos de los puertos, y tratar de persuadir a los camiones para que vuelvan y no queden estacionados frente a los piquetes.[147]

Ahora bien, en relación con el sector industrial de la economía nacional, podemos sostener que la UIA no sería neutral ni saldría indemne de ese conflicto (Wyczykier, 2015b), ya que fue emplazada tanto por el gobierno nacional como por los sectores de las patronales agrarias para tomar una posición política en solidaridad con uno de los dos sectores.

El presidente de la entidad, Juan Carlos Lascurain, trataba de realizar un prudente equilibrio en su posición sobre el conflicto, e incitaba al sector agropecuario a tender puentes de diálogo con el gobierno.

Por otro lado, el dirigente fabril remarcaba que la situación de cortes de ruta estaba afectando la actividad industrial, ya que ocasionaba problemas para el tránsito de las mercancías: "Tengo dos equipos para entregar en Bolivia desde hace una semana, y está todo parado en fábrica. Eso me ocasiona problemas y también multas por atrasos en la entrega".[148]

Al mismo tiempo, el gobierno nacional seguía desarrollando sus argumentos con el objeto de sostener las retenciones móviles, ubicándolas en el contexto de una política económica destinada al fortalecimiento del mercado interno y sus respectivos actores.

En ese sentido, nos parecen interesantes las palabras de la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, quien marcaba los objetivos que buscaba la medida llevada adelante por el gobierno nacional:

---

[146] Krakowiak, F. (21 de marzo de 2008), "Si falta carne en la mesa, cerrarán exportaciones", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-101084-2008-03-21.html (Fecha de acceso, 29/10/2017).
[147] Crettaz, C. (21 de marzo de 2008), "El agro prepara más cortes y podrían faltar alimentos", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/997559-el-agro-prepara-mas-cortes-y-podrian-faltar-alimentos (Fecha de acceso, 29/10/2017).
[148] "La UIA les pide a los productores agropecuarios que levanten el paro" (22 de marzo de 2008), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/997832-la-uia-les-pide-a-los-productores-agropecuarios-que-levanten-el-paro (Fecha de acceso, 29/10/2017).

> Hay componentes importantes de la Canasta Básica de Alimentos que dependen del valor de los commodities. El primer objetivo de las retenciones móviles es desacoplar los precios internacionales de los precios internos. Un segundo aspecto es el aporte de la recaudación por retenciones al superávit, que permite redistribuir ingresos a través de la orientación del gasto público. El tercer objetivo es aportar a la configuración de una matriz productiva, al permitir el acceso a materia prima barata para utilizarla como insumo en la cadena agroindustrial. Si todos esos productos primarios se cotizan a precio internacional, su único destino va a ser la exportación y queda comprometida toda la industria que debe abastecerse de ellos. Por todas estas razones se justifica que el Estado tome partido en el reparto cuando se genera una renta extraordinaria, por suba de precios y no por mayor eficiencia o por inversiones del productor.[149]

Desde una postura dialoguista, la UIA buscó respaldar la política gubernamental, y mantener su relación con el gobierno. Al mismo tiempo, manifestaba su preocupación respecto de los efectos que estas medidas de protesta comenzaron a ocasionar a la propia actividad de los sectores industriales del interior del país y los principales centros urbanos (Wyczykier, 2015b, p.120).

Desde comienzos de 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner y, posteriormente, desde la gestión de Cristina Kirchner, se inició una política económica que ubicó nuevamente en escena, desde un marco de revitalización, a los actores sindicales y empresariales, en particular a aquellos ligados al medio local, correspondientes a actividades urbano-industriales (Wyczykier, 2015b, pp.110-111).

Es aquí donde se entreteje una relación entre el patrón de crecimiento y la reemergencia nacional-popular. El kirchnerismo, en su articulación hegemónica, se reafirma desde su accionar como actor político en la arena partidaria y en el desarrollo de la gestión del Estado.

En un primer momento, podemos remarcar que la UIA tomó una posición de acercamiento y apoyo a las políticas del gobierno. Esa aproximación, adoptada en los primeros meses del conflicto, estaba fundamentalmente sujeta a la política cambiaria que el Ministerio de Economía estaba dispuesto a desarrollar. Mientras se mantuviera un tipo de cambio depreciado y competitivo, los industriales mantendrían su sustento a la gestión de gobierno.

Ahora bien, hacia finales del mes de marzo, la Mesa de Enlace anunciaba un lockout por tiempo indeterminado con cortes de rutas. De esa manera, se iniciaba una pulseada que reconfiguraría significativamente el campo político y social. El conflicto comenzaba a transitar un camino que desbordaba no solamente lo estrictamente gremial y sectorial, sino que

[149] Dellatorre, R. (21 de marzo de 2008), "La película que Felisa ya vio", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-101083-2008-03-21.html (Fecha de acceso, 29/10/2017).

comenzaba a englobar a los habitantes de sectores urbanos que se incorporaban a la protesta en oposición a la administración nacional.

Asimismo, la unidad en torno a la demanda central, los derechos de exportación, revestía una doble cualidad, por un lado, aportaba a unificar las diferencias y, por otro lado, colocaba en la radicalización de la demanda –la exigencia de la eliminación de las retenciones– el debate por el proyecto económico. Así reforzaba la mutación del reclamo sectorial a una demanda de carácter política (Varesi, 2014b, pp.9-10).

En ese contexto, el gobierno interpretaba la situación como una impugnación a su política económica y entendía que los actores empresariales involucrados en el conflicto buscaban una crisis institucional. La presidenta Cristina Kirchner señalaba al respecto:

> Puedo entender sus intereses, pero sepan que tengo que gobernar para los intereses de todos los argentinos. Algunos sectores insisten con las prácticas de siempre y se niegan a cambiar y a comprender. Volvieron los piquetes más violentos y por el sector que tuvo la mayor rentabilidad en los últimos cuatro años y medio o cinco. Hace poco venían a pedir por favor políticas de crédito bancario para que no les remataran sus campos. Cuando hay pérdidas, la sociedad debería absorberlas; es una suerte de socialización de las vacas flacas; cuando las vacas vienen gordas, las vaquitas para ellos y las penitas para los demás.[150]

Las entidades patronales del sector agropecuario habían logrado articular una lógica equivalencial de demandas, en donde sectores urbanos, algunos vinculados a la producción agropecuaria y, otros, por oposición a la política del gobierno, mostraron la capacidad de desplegar amplios repertorios de acción colectiva (Varesi, 2014b).

Hay que señalar que las movilizaciones urbanas del 25 de marzo modificaron notablemente el aspecto y fisonomía del conflicto, ya que ampliaba el escenario social y territorial. Cuando la confrontación también se abrió paso hacia las zonas urbanas, si bien no estaban ligadas directamente con el origen de la controversia, se generó un cambio y la alteración de las estrategias de los actores en conflicto (Pucciarelli, 2017, p.354-355).

En aquellas movilizaciones, se pusieron en evidencia dos nuevos grandes fenómenos relacionados con la politización: la búsqueda de protagonismo de amplios sectores de clase media acomodada, que pretendían transformar la protesta rural en un amplio movimiento de oposición. Dentro de este grupo, aparecía el renovado activismo de un núcleo mucho más

[150] "Incidentes tras el discurso presidencial" (26 de marzo de 2008), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/998777-incidentes-tras-el-discurso-presidencial (Fecha de acceso, 29/10/2017).

exacerbado, constituido por partidarios de la dictadura y férreos opositores a la política de derechos humanos del kirchnerismo (Pucciarelli, 2017, p.355).

Posteriormente a las protestas en las zonas urbanas, el gobierno nacional llevó a cabo un acto en el predio deportivo del Sindicato de Empleados de Comercio, en Parque Norte en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de mostrar capacidad de movilización en respuesta a las realizadas por el otro sector los días previos.

En el escenario se encontraban los principales funcionarios de gobierno, gobernadores, senadores nacionales, diputados nacionales, intendentes de la provincia de Buenos Aires y dirigentes sociales del Partido Justicialista y otras fuerzas aliadas. La presidenta Cristina Kirchner señalaba:

> Este es un momento para dialogar, debatir, discutir. Pero eso no se puede hacer con una pistola en la cabeza. Mucho menos en democracia […] En nombre del pueblo argentino les pido humildemente que levanten el paro que extorsiona a los argentinos y entonces sí vamos a sentarnos a dialogar democráticamente. Pero entiendan que esta presidenta no se puede sentar a dialogar mientras siga un paro como este […] Los convoco al diálogo en serio. Las puertas de la Casa de Gobierno están abiertas, pero por favor levanten la medida contra el pueblo.[151]

Los dirigentes de la Mesa de Enlace valoraban el llamado al dialogo, pero advertían que exigían medidas concretas por parte de gobierno para levantar las protesta. La dirigencia del sector decidió continuar con los cortes de ruta en distintos puntos del país. Esa misma noche, en varios centros urbanos, se sucedieron movilizaciones en contra del gobierno (Comelli, Castro García, Godfrid, Schvartz, Ciccolella y Negro, 2009, pp.46-47).

En el transcurso de lo meses en que se sucedía el conflicto, el concepto "campo" obtuvo la suficiente polisemia como para incluir diversos actores, de distintas procedencias sociales, que se manifestaron notoriamente y con una gran concurrencia el 25 de mayo en la ciudad de Rosario, con motivo de celebrar la Revolución de Mayo. Aun cuando la raíz del enfrentamiento giraba claramente en torno a la distribución de la renta de la tierra, la convocatoria tomaba un tinte de carácter ciudadano, logrando ampliar su sustento y legitimidad, ubicándose en el plano del "interés general" (Giarracca y Palmisano, 2009)

El eje de la controversia comenzaba a desplazarse, gravitando sobre las distintas concepciones y construcciones de país. Se sostenía que el "campo" era el principal generador de riqueza, al tiempo que se señalaba que las retenciones debían ser reducidas, porque eran los

[151] Piqué, M. (28 de marzo de 2008), "'Convoco al diálogo en serio'", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-101470-2008-03-28.html (Fecha de acceso, 29/10/2017).

agentes económicos quienes poseían una mayor capacidad para manejar correctamente los recursos producidos. Consecuentemente, se demandaba la liberación de trabas "distorsivas" impuestas por un Estado, al que ligaba a características de corrupción e ineficiencia, lo cual implicaba la restauración de distintos componentes de la idea neoliberal de Estado mínimo (Varesi, 2014b, p.8-9).

En el acto oficial por el 25 de Mayo, en la ciudad de Salta, la presidenta Cristina Kirchner evitó pronunciarse de manera directa sobre los dirigentes patronales de la Mesa de Enlace. En su discurso, se dedicó a señalar los logros en materia de gestión y puso el foco en la convocatoria al Acuerdo del Bicentenario:

> Convoco a todos los argentinos que crean que es necesario seguir construyendo un país con redistribución del ingreso, a todos los que quieran ser parte de este país, donde hay lugar para hombres y mujeres de distintas historias: trabajadores, empresarios, estudiantes, comerciantes, productores. El único requisito es querer a esta Argentina. La otra condición es que aprendamos que antes que el sector, antes que nuestra propia individualidad, están los intereses de la Patria […] El desafío que tenemos es grande. Pero la historia está de nuestra parte. La historia la construyen los pueblos y las sociedades que se deciden a ser progresistas y solidarias.[152]

Ahora bien, mientras el conflicto seguía agudizándose, la UIA procuraba seguir mostrando su colaboración con el gobierno nacional, pero con el cuidado de no mostrar un antagonismo con los sectores empresarios de la actividad agropecuaria.

Aunque el discurso del Ejecutivo era coincidente con los intereses de la entidad, haciendo énfasis en la productividad y en las actividades industriales, la entidad buscaba mantenerse al margen de la disputa (Wyczykier, 2015b, p.121).

El 30 de mayo el gobierno anunciaba una serie de cambios en las retenciones móviles y en el sistema de reintegros a los pequeños y medianos productores, dos de los principales reclamos que venían realizando las entidades patronales del sector. El Ejecutivo había comprendido y reaccionado tarde sobre la necesidad de modificación de la Resolución N°125.

Era necesario enmendar una serie de desaciertos y errores cometidos por el ex ministro de Economía Martín Lousteau. Por un lado, se buscaba corregir la aplicación de una herramienta que actuaba de manera homogénea sobre un conjunto de actores heterogéneos, se trataba de subsanar el error de no haber tenido en cuenta una política de segmentación. Por otro lado, al establecer una curva elevada en las alícuotas de retención sobre el precio de la soja, anulaba la

[152] Piqué, M. (26 de mayo de 2008), "'El país no reconoce propietarios'", *Página12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-32982-2008-05-26.html (Fecha de acceso, 29/10/2017).

posibilidad de los mercados a futuros, dado que generaba que el precio se mantuviera constante cuando llegaba a determinado nivel.

Los cambios en la movilidad del sistema consistieron básicamente en bajar la curva de las retenciones. Por ejemplo, si la soja superaba los 600 dólares por tonelada, del monto que estuviera por encima de ese precio el Estado se quedaba con el 95 por ciento. De ese modo, el precio de la soja quedaba planchado en 600 dólares y se anulaba la posibilidad de los mercados a futuro. Anunciada la modificación, la curva se aplanaba de tal forma que, si el precio alcanzaba los 750 dólares la tonelada, la retención alcanzaba el 52,6% (Giarracca y Palmisano, 2009, p.121).

Los anuncios realizados por el gobierno nacional no desactivaron el conflicto con el sector, ya que para la dirigencia empresaria la flexibilidad del gobierno aún no lograba alcanzar sus plenas aspiraciones. Eso hizo que el conflicto continuara, con un incremento de la protesta.

Las correcciones realizadas a la Resolución N°125 no lograban bajar los niveles de intensidad de la controversia. Eso alimentaba las dudas que poseía el gobierno en las verdaderas intenciones de la Mesa del Enlace para que el conflicto se encauzara definitivamente y tuviera una resolución final.

Al mismo tiempo, el gobierno persistía en su propuesta de establecer un acuerdo económico y social, denominado Pacto del Bicentenario, en donde se determinaban metas y objetivos para el desarrollo económico.

En el medio del conflicto con el sector agroempresarial, el objetivo del Ejecutivo Nacional era que la UIA aceptara ingresar al acuerdo, su presencia lo mostraría fortalecido políticamente. No obstante, los dirigentes de la Mesa de Enlace esperaban una deserción de la dirigencia industrial en el marco de las disputas en curso. Finalmente, la UIA no aceptaría integrar el acuerdo sin las entidades representativas del sector agropecuario (Wyczykier, 2015b, p.122).

El martes 17 de junio, a través de la cadena nacional de radio y televisión, la presidenta Cristina Kirchner anunciaba el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley sobre los derechos de exportación. Las entidades rurales parecían mostrar satisfacción por la decisión, aunque decidieron permanecer con las medidas de protesta. Consideraban que la mayoría en ambas cámaras por parte del oficialismo no los beneficiaría, y expresaban que el Parlamento actuaba como una especie de escribanía del Ejecutivo Nacional (Comelli, Castro Garcia, Godfrid, Schvartz, Ciccolella y Negro, 2009, pp.46-47).

En la Casa Rosada, la presidenta subrayaba los siguientes lineamientos políticos en el marco del anuncio de la presentación el proyecto de ley:

> La democracia se defiende con más democracia y las instituciones se defienden con más instituciones […] Esta medida de las retenciones móviles que tanto revuelo ha causado a un sector que hace 90 días corta rutas, voy a enviarla al Parlamento como proyecto de ley por si no les basta con esta presidenta, que hace seis meses obtuvo el 46 por ciento de los votos […] La clave está en presentar los modelos de país de cada uno ante la ciudadanía, y cuando esta elige y vota, si ese voto no nos ha sido favorable, a mejorar la propuesta y esperar el próximo turno electoral […] Aquellos ciudadanos que están en desacuerdo con esas políticas (de los poderes institucionales), porque creen afectados sus intereses, pueden recurrir a la Justicia, pero si además quieren cambiar el modelo económico de país, lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas.[153]

Posteriormente, el 5 de julio la Cámara de Diputados de la Nación ratificaba las retenciones móviles con el acompañamiento de ciento veintinueve votos. El kirchnerismo, con un conjunto de bloques aliados, lograba darle media sanción al proyecto.

Con anterioridad a que sesionara la Cámara de Senadores de la Nación, tendrían lugar el 15 de julio en la Ciudad de Buenos Aires dos grandes actos. Uno, organizado por la Mesa de Enlace en el Monumento de los Españoles y, otro, en Plaza del Congreso, convocado por el gobierno nacional. Aquella jornada estuvo marcada por una gran muestra de movilización por parte de ambos sectores.

En el barrio de Palermo, cercano al predio de la Sociedad Rural Argentina, la dirigencia empresaria del sector agropecuario mostraba un poder de convocatoria de gran significancia. Los movilizados provenían de las más diversas provincias, de ámbitos y pueblos rurales, como también de sectores urbanos, de la Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe y demás lugares vinculados al circuito del núcleo sojero.

Se encontraban entre la multitud movimientos sociales opositores, dirigentes de diversos partidos políticos no pertenecientes al oficialismo, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Partido Comunista Revolucionario (PCR), el Movimiento Socialista y de los Trabajadores (MST), la Juventud Socialista, la Unión Cívica Radical y el PRO.[154]

En el escenario, en representación de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, presentaba la postura en contra de las retenciones móviles y el proyecto del oficialismo:

> Esta medida [por las retenciones] no va a poder continuar […] No venimos acá a apretar a nadie ni condicionar la voluntad de ningún legislador. Simplemente solicitamos a los senadores que

[153] Miguez, D. (18 de junio de 2008), "Las retenciones, en manos del Congreso", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-106229-2008-06-18.html (Fecha de acceso, 29/10/2017).
[154] Pasquini Durán, J. M. (16 de junio de 2008), "Manifestaciones", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-34064-2008-07-16.html (Fecha de acceso, 29/10/2017).

> voten a conciencia […] Quiero hablarles como tantos hombres de campo que trabajamos y nos cuesta comprender la razonabilidad de la ley 125 que resulta confiscatoria, antidemocrática e irracional […] Hubiéramos preferido que este conflicto nunca se haya producido o que no haya llegado a esta instancia.[155]

Mientras tanto, en Plaza del Congreso, el ex presidente Néstor Kirchner encabezaba el acto organizado por el gobierno nacional. En la convocatoria estaban presentes el Movimiento Barrios de Pie, Libres del Sur, Movimiento Evita, Movimiento Segundo Centenario, la Federación Tierra y Vivienda, la agrupación Tupac Amaru, el Frente Transversal Nacional y Popular. De las organizaciones sindicales estaban presentes la Unión Obrera de la Construcción, el Sindicato de Choferes de Camiones, trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y otros actores gremiales (Comelli, Castro Garcia, Godfrid, Schvartz, Ciccolella y Negro, 2009, p.186).

Asimismo, la CGT publicaba días antes un comunicado llamando a un cese de actividades en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, para movilizarse hasta Plaza del Congreso, bajo la consigna: "La CGT convoca a la marcha en defensa de la democracia y del gobierno popular".[156]

En la nota editorial del diario *La Nación* se podía leer una caracterización de ambas movilizaciones y una lectura sobre el discurso del ex presidente Kirchner:

> Los chacareros y los representantes de la clase media urbana que se dieron cita en el acto del campo son tan argentinos como las personas de extracción más humilde que acompañaron el mensaje del presidente del Partido Justicialista. Pese a todo lo que se dijo, no hubo un solo enfrentamiento entre unos y otros manifestantes, y esa es una señal favorable en momentos de tanta crispación alentada desde la fracción gobernante […] No debería haber divisiones entre esos argentinos. Más allá de la lamentable prédica del ex presidente Néstor Kirchner por demonizar a los dirigentes ruralistas, ni estos ni quienes se sumaron a sus reclamos buscan desestabilizar al gobierno nacional ni tampoco encarecer la mesa de los argentinos, como suele apuntar el ex mandatario.[157]

[155] "Masivo apoyo al campo en el Monumento de los Españoles" (16 de junio de 2008), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1030372-masivo-apoyo-al-campo-en-el-monumento-de-los-espanoles (Fecha de acceso, 29/10/2017).
[156] Comunicado de prensa de la Confederación General del Trabajo (11 de julio de 2008) Disponible en http://espacioperonista.blogspot.com.ar/2008/07/comunicado-de-la-cgt.html (Fecha de acceso, 3/11/2017).
[157] "Dos plazas, una misma nación" (16 de julio de 2008), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1030548-dos-plazas-una-misma-nacion (Fecha de acceso, 3/11/2017).

Finalmente, en el Senado de la Nación la votación terminó en un empate, con treinta y seis votos a favor y en contra, y de esa manera el vicepresidente Julio Cobos se vio obligado a definir el resultado, su decisión terminaría siendo contraria al proyecto oficial.

En cuestión de pocos días, el gobierno nacional resolvía mediante el Decreto 1176/2008 la anulación de las retenciones móviles. En uno de los párrafos más salientes el Ejecutivo sostenía:

> Que aquel uso legítimo de facultades constitucionales y legales ejercido por un gobierno constitucional electo en elecciones libres y sin proscripciones, fue pretexto para un violento lock out, que inició una escalada de cortes de rutas, desabastecimiento, encarecimiento de alimentos, coacciones, amenazas, agresiones verbales y físicas, y ha querido presentarse ante el pueblo de la Nación como una manera de menoscabar la participación del Honorable Congreso de la Nación.[158]

Nos parece interesante resaltar las reflexiones del ex diplomático y académico Abel Posee, en una nota publicada por el diario *La Nación*, en la que señalaba sus apreciaciones sobre el conflicto entre el gobierno nacional y el sector agropecuario, haciendo uso del término "transición" para definir los tiempos políticos futuros:

> El campo nos trajo su bocanada de aire fresco, de verdad argentina. Más allá de su reclamo ante la obstinación confiscatoria, descubrió el hartazgo ante un autocratismo absurdo que sumía a nuestra patria en un lugar de atraso y desilusión […] La patología agresiva segregada por el doctor Kirchner creó conflictos sin intentar siquiera diálogos. En lo nacional, cultivó alejamientos con la Iglesia, las Fuerzas Armadas (hasta poner hoy a nuestro país en situación de indefensión) y la diplomacia, ya que eligió casi invariablemente los aficionados en lugar de los profesionales […] Hoy es imprescindible que la Presidenta y sus sectores más aptos contribuyan con el peronismo, con los gobernadores y con las figuras políticas más importantes, para establecer una salida del enconamiento estéril al diálogo, programando las respuestas más urgentes que exige esta Argentina que no sabemos cuidar.[159]

Ahora bien, el conflicto alrededor de la Resolución N°125 puso de manifiesto el alejamiento de relevantes conglomerados de sectores medios urbanos de las políticas del gobierno nacional (Pucciarelli, 2017). Además, la significación desplegada en la articulación hegemónica delineada por el kirchnerismo, que ponía el acento sobre los actores vinculados al ámbito industrial,

[158] Decreto 1176/2008. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/142613/norma.htm (Fecha de acceso, 5/11/2017).
[159] Posee, A. (19 de julio de 2008), "Un estilo declinante", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1031565-un-estilo-declinante (Fecha de acceso, 5/11/2017).

fortalecía la delimitación de un espacio social antagónico conformado por los sectores agroempresariales (Varesi, 2014b).

En la controversia que tuvo lugar entre marzo y julio de 2008, alrededor de los derechos de exportación, se presentaba una disputa de carácter mucho más extensa y de un mayor volumen conceptual. Ese conflicto tuvo su basamento en las atribuciones del Estado para utilizar sus capacidades de intervenir en la apropiación del excedente económico, en función de reorientarlo hacia otras actividades de la economía.

De esa manera, comienza a un periodo de reconfiguración del campo político y social, en donde se puede observar la construcción de un principio de articulación contrahegemónica, que logra visualizarse con mayor nitidez en el escenario electoral de las legislativas de 2009.

Las entidades del sector agropecuario en un repertorio de acciones de protesta y negociación lograban delinear una estrategia político-partidaria colocando en las listas de fuerzas políticas opositoras a candidatos representativos del sector.

El resultado electoral de junio de 2009 consolidaba una situación de cambio en materia de correlaciones de fuerza que el gobierno nacional lograría revertir durante el transcurso de los años 2010 y 2011, como consecuencia de la reactivación económica interna.

Capítulo V

La fase contractiva del ciclo, crisis de hegemonía y restricción externa (2012-2015)

5.1. Una aproximación al contexto general del periodo

Durante el transcurso del periodo 2012-2015, comenzaron a manifestarse desajustes en materia macroeconómica, en un contexto de tendencia a la baja de los precios internacionales de los bienes primarios y de desaceleración del crecimiento de la economía local.

Creemos necesario remarcar que la crisis financiera internacional, con origen en 2007-2008, aún sobrevolaba sobre el mercado doméstico, operando negativamente sobre el balance comercial, ya que los países emergentes y centrales se encontraban en una posición vendedora y no demandante de productos en el mercado mundial.

Al mismo tiempo, la situación de restricción externa de la Argentina erosionaba la capacidad del gobierno nacional de sostener una política de carácter expansiva, ya que comenzaban a presentarse dificultades de orden cambiario y monetario.

El deterioro en el stock de reservas de la economía del país tenía entre sus orígenes a las crecientes importaciones de capital, que los propios actores económicos demandaban con el objetivo de producir para el mercado interno.

Asimismo, ese contexto se agudiza por la fuga de capitales, que consistía en que las empresas transnacionales remitían sus utilidades al exterior y también por las crecientes importaciones de combustibles, que provocaban un déficit en materia comercial.

Este escenario llevó al gobierno a tomar medidas de control sobre el mercado de cambios. Estas disposiciones provocaron un gran malestar, no solamente en el ámbito empresarial sino también entre los ahorristas de medianos y altos ingresos. La situación en materia cambiaria derivó en una devaluación de la moneda hacia comienzos de 2014.

Ahora bien, durante el último periodo de gobierno kirchnerista, se sucedió una reconfiguración en el marco de relaciones con los sectores del trabajo y los empresarios. El movimiento obrero organizado soportó tensiones hacia su interior, que desembocaron en una fractura de la CGT.

En cuanto a los sectores empresarios, la Unión Industrial Argentina (UIA) comenzaría a desplegar críticas hacia la gestión económica. Exigían recuperar competitividad a partir de un

salto devaluatorio, poniendo el foco de su preocupación en la ausencia de dólares y advertían sobre las consecuencias de la desaceleración del crecimiento.

En primer lugar, abordaremos las dificultades y desajustes en el diseño macroeconómico, en donde la restricción externa se presenta como una dificultad para proseguir por el sendero del crecimiento.

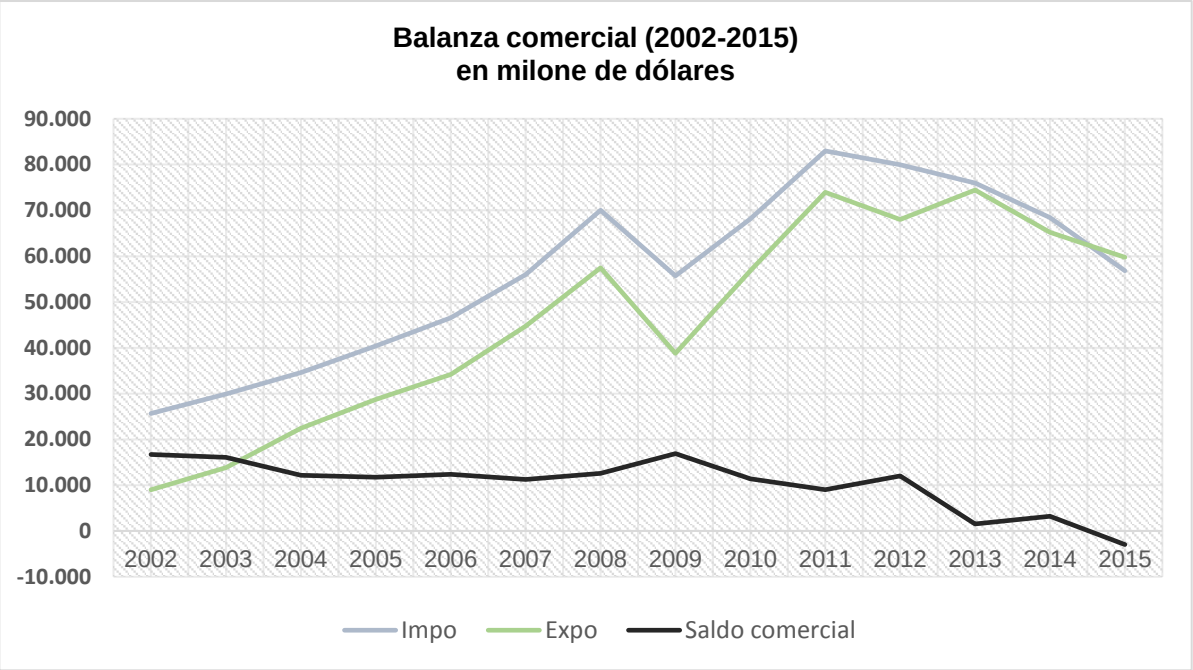
En segundo lugar, realizaremos una caracterización de la reconfiguración en el marco de relaciones entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores nucleadas en la CGT, como también con los empresarios nucleados en la UIA.

Finalmente, caracterizaremos la emergencia de un escenario contrahegemónico, que se irá constituyendo a lo largo del periodo. Primero, asumirá una lógica diferencial y de negatividad y, posteriormente, pasará a un estadio con la capacidad de articular un antagonismo que trascendería el simple rechazo, presentando un orden posible y diferente al dominante.

5.2. Dificultades, desajustes y restricciones en el diseño macroeconómico

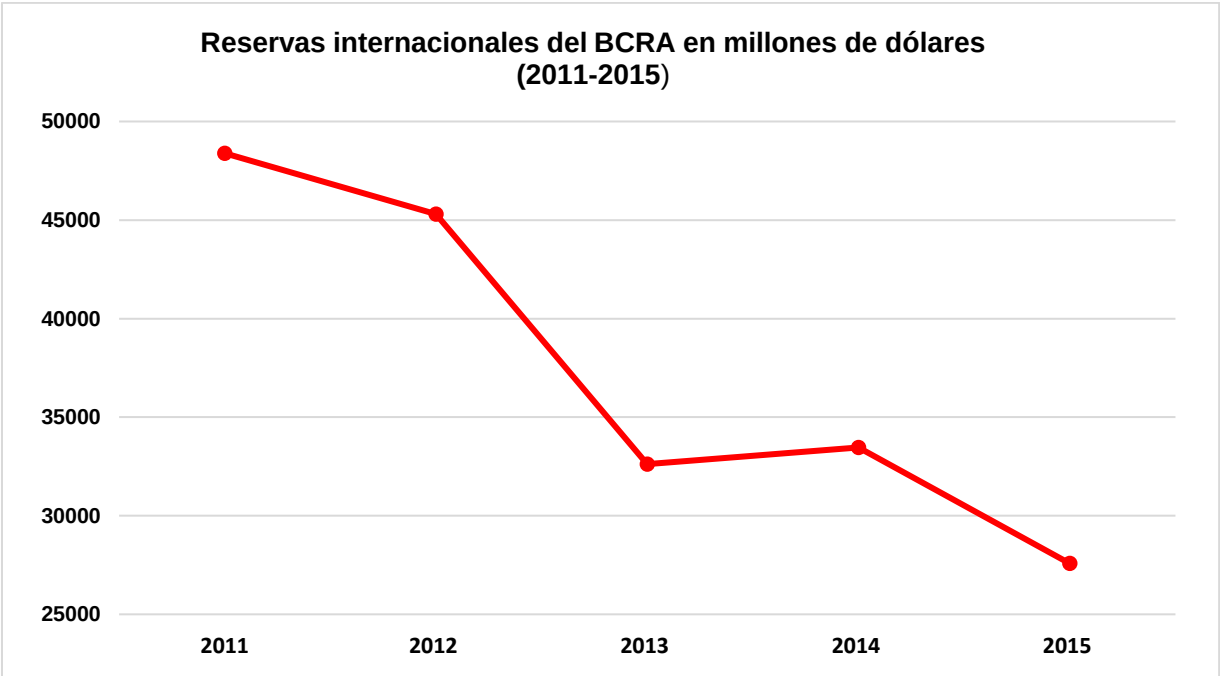
Hacia finales de 2011, la macroeconomía del país evidenciaba un conjunto de problemas y desajustes que amenazaban el sostenimiento del crecimiento económico experimentado en los años anteriores. En ese marco de situación, es necesario subrayar que a lo largo del periodo precedente el tipo de cambio se había devaluado escasamente, con movimientos muy suaves, mientras que los precios internos comenzaban a ascender con una dinámica acelerada.

Asimismo, además de la apreciación cambiaria, se presentaban una serie de problemas como un déficit energético considerable y creciente, un significativo deterioro de la balanza comercial, el déficit fiscal que paulatinamente se iba ampliando y una caída del nivel de reservas internacionales (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017; Kulfas, 2016).



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

La tendencia declinante en el stock de reservas tenía sustento en la fuga de capitales, mediante la cual las empresas transnacionales remitían sus utilidades al exterior y por las crecientes importaciones de combustibles.



Fuente: Elaboración propia en base a Gerencia de Estadísticas Monetarias – BCRA

Las importaciones habían manifestado un incremento significativo en materia de energía. Las debilidades de la política energética del gobierno durante los periodos previos presentaban un déficit con relación al incremento de la demanda y la oferta disponible. Por ello se debió recurrir a crecientes y costosas importaciones para hacer frente al consumo doméstico (Kulfas, 2016).

Posteriormente, con mayor notoriedad entre los años 2012 y 2014, el crecimiento del producto comenzaba a manifestar signos de desaceleración, la dinámica del mercado interno se fue contrayendo gradualmente.

Debemos considerar un factor exógeno en ese contexto, puntualmente, la economía de Brasil presentaba signos a la baja en su expansión económica. Esto agravaba aún más la situación de la balanza comercial argentina, que comenzaba a reducir su superávit.

Ahora bien, las dificultades para administrar el mercado de cambios no tardaron en llegar y se manifestaron rápidamente. Se presentaba un contexto en donde la demanda marcaba una tendencia alcista y la oferta disponible de reservas era cada vez menor. Frente al incremento de las compras de particulares para atesoramiento y por parte de las empresas, el gobierno nacional debió tomar medidas.

Hacia finales del mes de octubre de 2011, el gobierno procuró regular con mayor rigurosidad la adquisición de divisas. Por aquel entonces, el ministro de Economía, Amado Boudou, explicaba el nuevo sistema en el que las personas y empresas debían demostrar su capacidad económica para hacerse de dólares.

El gobierno buscaba verificar mediante las bases de datos de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) si lo ingresos eran acordes a la compra solicitada. En ese sentido, el ministro Boudou argumentaba cuáles eran los objetivos del nuevo mecanismo de adquisición de moneda extranjera:

> Buscamos que todas las operaciones cambiarias se canalicen a través del mercado formal, es una medida que apunta a la equidad, la transparencia y a evitar el lavado de dinero […]. Detectamos más de 100 CUIT y CUIL cuyos ingresos no se condicen con los dólares que compraron. Por eso, desde el lunes, el que compre divisas extranjeras será automáticamente auditado por la AFIP, que deberá avalar la compra.[160]

Durante el transcurso del mes de agosto hasta mediados de diciembre de 2011, el gobierno nacional tuvo que hacer frente a una salida de depósitos en dólares del sector privado. El

[160] Lukín, T. (29 de octubre de 2011), "Sin margen para coleros y prestanombres", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-180062-2011-10-29.html (Fecha de acceso, 11/11/2017).

anuncio de la implementación de nuevos controles en el mercado de cambios alimentó aún más la corrida cambiaria que ya venía manifestándose previamente a las elecciones a presidente que tuvieron lugar el mes de octubre de ese mismo año.

En el transcurso del último trimestre, solo en el lapso de tres días, se registró una fuga de 95.000 millones de dólares.[161] La presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, hacía referencia a ese cuadro de situación:

> Lo que uno no puede ignorar es que hubo una operación desestabilizadora respecto del tipo de cambio, bajo la excusa de que el dólar estaba barato, pero los que la llevaron a cabo no se dan cuenta de que la Argentina cambió, por eso fracasaron […]. La corrida no derivó de la decisión de coordinar entre el Banco Central y la AFIP mayores controles a las operaciones, sino que se inició mucho tiempo antes, con el tema del tipo de cambio atrasado […]. El principal problema era que la gente se estaba yendo al dólar, impulsada deliberadamente por los grandes grupos económicos.[162]

Una de las complicaciones que implicaba la apreciación del tipo de cambio era el alza en las importaciones, que provocaba consecuentes efectos en las cuentas externas. La respuesta a esa situación fue la aplicación de restricciones cuantitativas, profundizando medidas para a administración del comercio (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017, pp.126-127).

A comienzos de 2012, se establecieron las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), como exigencia para el ingreso de mercancías desde el exterior. Con la coordinación de la AFIP, la Secretaría de Comercio y el BCRA, se implementó un nuevo registro de importaciones que obligaba a las empresas y operadores a anticipar sus intenciones de compra al exterior. Luego de la presentación, debían esperar a ser autorizados y habilitados para comprar las divisas necesarias y así realizar la operación.[163]

Ese esquema de administración del comercio exterior poseía como finalidad ejercer un mayor control sobre las operaciones cambiarias, con el objetivo de preservar los stocks de divisas en el BCRA y procurar sostener así la capacidad de pago de los vencimientos de deuda.

En ese sentido, debemos señalar que la Argentina se encontraba retirada del mercado de crédito internacional, y sus posibilidades de pago se hallaban en su capacidad de sostener sus ingresos mediante su intercambio comercial.

---

[161] "La corrida se desinfló" (17 de diciembre de 2011), *Pagina 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-183583-2011-12-17.html (Fecha de acceso, 11/11/2017).
[162] Carrillo, C. (24 de diciembre de 2011), "La aspiradora funciona de nuevo a pleno", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-184107-2011-12-24.html (Fecha de acceso, 11/11/2017).
[163] Blanco, J. (11 de enero de 2012), "Busca el Gobierno un control total de las importaciones", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1439537-busca-el-gobierno-un-control-total-de-las-importaciones (Fecha de acceso, 11/11/2017).

Frente a ese nuevo sistema, distintas cámaras empresariales presentaron objeciones al proyecto que imponía mayores regulaciones al comercio exterior, como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). La UIA, como entidad fabril que nucleaba a las distintas agremiaciones, solicitaba la postergación de ese nuevo régimen hasta que no se terminase de negociar ciertas cuestiones que hacían a las importaciones de bienes de capital.[164]

La implementación de las DJAI tuvo un efecto contrapuesto. Si, por un lado, protegió el nivel de actividad y de empleo en algunos sectores industriales muy expuestos a la apreciación cambiaria, por otro lado, generó escasez de insumos y dificultades para sostener la producción en algunos otros (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017, pp.126-127).

Posteriormente, el BCRA dispuso una restricción a las empresas para acceder al mercado de cambios si el objetivo era girar al exterior el pago de dividendos y regalías. Las transacciones debían ser aprobadas previamente por la autoridad monetaria y luego contar con la aprobación de la Secretaría de Comercio.

Los controles sobre el mercado de cambios no habían generado en un comienzo dificultades para los ahorristas. Sin embargo, en mayo de 2012, a pesar de que las reservas habían dejado de caer, la AFIP endureció los requisitos, aunque sin precisar su alcance ni condiciones, lo que generó mucha más confusión a la operatoria (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017, p.126). Desde ese momento, la AFIP comunicó la extensión de las restricciones a la compra de divisa, permitiendo destinar el 25% del sueldo para la comprar dólares.[165]

Las distintas políticas de restricciones en el mercado de cambios derivaron en la constitución de un mercado paralelo, que comenzó a funcionar con una brecha considerable y con una tendencia creciente respecto del mercado oficial de la divisa.

El endurecimiento de las medidas en materia cambiaria comenzó a generar un malestar entre los sectores medios y altos con capacidad de atesoramiento. Al mismo tiempo, la creciente brecha cambiaria comenzó a afectar el normal funcionamiento de las actividades económicas y a generar un clima propenso a la especulación financiera (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017, p.126).

---

[164] Galak, O. (21 de enero de 2012), "Pidió la UIA que se postergue el nuevo régimen para importar", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1442210-pidio-la-uia-que-se-postergue-el-nuevo-regimen-para-importar (Fecha de acceso, 11/11/2017).

[165] "La AFIP reduce el límite para la compra de dólares y endurece el corralito cambiario" (9 de mayo de 2012), *La Nación.* Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1471725-la-afip-reduce-el-limite-para-la-compra-de-dolares-y-endurece-el-corralito-cambiario (Fecha de acceso, 11/11/2017).

En ese contexto, distintos actores económico-financieros aprovechaban la disparidad de precio para adquirir moneda extranjera en operaciones validadas por AFIP y luego se volcaban al mercado paralelo para aprovechar el diferencial entre las cotizaciones. El gobierno buscaba presionar los controles sobre el mercado ilegal, pero no poseía la capacidad de fiscalizar debidamente los movimientos especulativos.

Asimismo, el dólar paralelo despertaba expectativas de una devaluación en el mercado de cambios, provocándole una dificultad al gobierno nacional que desestimaba un salto del precio del dólar oficial a causa de sus efectos contractivos sobre la economía local y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios.

Algunas propuestas, en el sentido de subir la tasa de interés para incentivar las colocaciones en pesos y quitar presión al mercado de cambios, fueron desechadas por el riesgo potencial que podía ocasionar en el encarecimiento del crédito (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017, pp.126-127).

El presidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, marcaba con preocupación la brecha entre el mercado del dólar ilegal y el oficial, y alertaba sobre las consecuencias e impactos que podría conllevar para la actividad económica:

> Es cierto, como dicen los economistas, que ese mercado (el informal) es muy pequeño, pero ante la abstinencia (que genera la compra de dólares en el mercado oficial) y con la historia argentina se crea un clima complicado cuando no debería ser así […]. Lo que creo es que hay que resolver esta situación lo antes posible. Si esto es un pico que después se normaliza es una cosa, pero si se va extendiendo en el tiempo, entonces la gente empieza a especular y aquel que tiene que comprar insumos se pregunta "¿a cuánto voy a reponer lo que tengo?, ¿va a estar en este valor o no?". Entonces empiezan a convalidar o tener en cuenta ese tipo de cambio (el informal) para las operaciones de la economía real. Ahí entonces uno empieza a notar los perjuicios.[166]

En una dirección similar, el economista Héctor Valle, presidente de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), se expresaba sobre las tensiones cambiarias, y sobre qué políticas se debían seguir para enfrentar a aquellos actores de la economía que buscaban instalar expectativas proclives a una devaluación de la moneda:

> La administración cambiaria es una pieza central de la política económica. La tenencia de dólares para pagar los servicios de la deuda, para disponer de un nivel razonable de reservas con que atender los compromisos de importaciones, de remisión de utilidades y servicios es un

[166] "En el centro de la escena" (28 de mayo de 2012), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-195057-2012-05-28.html (Fecha de acceso, 11/11/2017).

> prerrequisito para que este modelo funcione. Hay que descartar absolutamente que el Gobierno pueda y menos que quiera salir de un sistema de administración cambiaria como el actual […]. Lo peor que podemos hacer es dilapidar las reservas del Banco Central tratando de combatir la especulación contra el peso. Es preferible utilizar las herramientas que da la ley para castigarla. Intentar "sincerar" el tipo de cambio del mercado negro tendría un efecto devastador en términos de inflación y en términos de redistribución del ingreso en favor de los sectores más concentrados de la economía.[167]

Ahora bien, frente al problema vinculado al déficit energético que provocaba la necesidad de importar y que influía negativamente en el stock de reservas de la economía, el gobierno –en otra de sus medidas más significativas– estatizó por ley la principal empresa petrolera del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017, p.127).

Frente al déficit energético, la principal respuesta del gobierno fue la reestatización del 51% del paquete accionario de la empresa YPF. Dicha reestatización demandó al Estado nacional el desembolso de unos 5.000 millones de dólares mediante la emisión de bonos para compensar a la compañía española Repsol (Kulfas, 2016, p.162). El acuerdo se alcanzaría en abril de 2014, con el arbitrio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Cuando el Estado nacional volvió a tomar la conducción de la compañía, YPF logró revertir con rapidez el proceso de declinación productiva que había experimentado durante la etapa previa a la estatización.

Además, el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta posibilitó un escenario propicio para la explotación de hidrocarburos no convencionales (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017; Kulfas, 2016). Desde comienzos de 2013, la empresa recuperó su participación en el mercado y logró un mayor protagonismo como actor económico en el sector.

Debemos señalar que la cuestión energética no sólo preocupaba al gobierno por el déficit externo, sino también por su impacto fiscal a partir de la aplicación de subsidios a los servicios públicos que absorbían una parte creciente del gasto público (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017, p.128).

Cuando comenzaba a visualizarse una desaceleración de la actividad económica, la política de baja en los subsidios en las tarifas de servicios públicos, que el gobierno venía estudiando hacía un tiempo, quedó pospuesta ya que creían que complicaría aún más la dinámica del mercado interno.

[167] Cufré, D. (23 de enero de 2013), "'No hay que dilapidar las reservas del Central'", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-212447-2013-01-23.html (Fecha de acceso, 11/11/2017).

Promediando el segundo trimestre de 2013, la tensión en el mercado de cambios volvió a intensificarse, y la brecha entre el valor oficial y el ilegal alcanzaba valores cercanos al 50% (Kulfas, 2016, p.164). Durante el mes de mayo, las reservas del BCRA habían descendido a 39.000 millones, su valor mínimo desde abril de 2007.[168]

Frente a esa situación, la política cambiaria no tuvo grandes modificaciones pero, hacia comienzos del mes de septiembre, el tipo de cambio comenzó a acelerar de manera suave su movimiento alcista. Entonces, se optó por una política cambiaria de correcciones progresivas y controladas –*crawling peg*- con la finalidad de dominar la inflación y, al mismo tiempo, preservar un nivel de reservas considerable.

La decisión de transitar una política cambiaria de minidevaluaciones despertó comportamientos no buscados en los sectores importadores y exportadores. Distintas firmas buscaban acelerar todo lo posible sus pagos en el exterior, mientras que los exportadores ralentizaban sus liquidaciones esperando una cotización futura más favorable (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017; Kulfas, 2016).

Esa situación agudizó los problemas en relación con la restricción externa, ya que el gobierno no poseía los niveles necesarios de divisas para frenar esas prácticas especulativas. Las entradas de divisas por comercio internacional ya no representaban la magnitud de años anteriores, como consecuencia de una tendencia a la baja de los precios internacionales de los bienes primarios.

También debemos considerar que el país no tenía acceso al crédito internacional para solventar esa coyuntura, ya que aún no había resuelto su situación con el FMI ni con el Club de París, y se encontraba en una disputa con los fondos buitre, como se llamó a los acreedores que no habían ingresado al canje de deuda de 2005 y 2010. Por lo tanto, la situación en el frente externo se presentaba sumamente compleja.

En ese contexto, la presidenta Cristina Kirchner focalizaba sus críticas en aquellos sectores de la economía que alentaban las expectativas de una devaluación y señalaba:

> Mientras yo sea presidenta, los que pretenden ganar plata a costa de una devaluación que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar a otro gobierno […]. Se vuelve a hablar de devaluación para asustar a la gente, para lograr títulos escandalosos […]. Están volviendo con esto porque están en periodo electoral; cada vez que hay elecciones aparecen con la economía o los escándalos, ya es típico […]. Y no se trata solamente de una cuestión de sensibilidad social,

[168] Gerencia de Estadísticas Monetarias - Banco Central de la República Argentina

> ni nada, simplemente de inteligencia y de lectura correcta de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos cincuenta años con los procesos devaluatorios recomendados e impulsados.[169]

Desde otra perspectiva, el economista Nicolás Dujovne argumentaba con relación a la presión sobre el tipo de cambio y sus consecuencias en un futuro cercano:

> De mantenerse el esquema actual, las presiones sobre la moneda en el mercado paralelo continuarán. Pero además el ritmo de crecimiento nominal de los depósitos en los bancos seguirá cediendo, lo que llevará indefectiblemente a un alza en las tasas de interés como forma de balancear su liquidez. Como con las naftas y las carnes, el ajuste en la cantidad de dinero llegará igual. Diez años no han bastado para que las autoridades comprendan que se pueden controlar los precios eventualmente y las cantidades a veces. Pero nunca ambos y para siempre.

Una de las respuestas a esta situación por parte del gobierno nacional fue implementar una emisión de nuevos instrumentos financieros. Se crearon por ley el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Certificado de Depósitos para la inversión (CEDIN). Se buscaba incentivar el blanqueo de capitales mediante esa emisión de títulos, que finalmente no alcanzarían a cubrir las expectativas esperadas por el Ministerio de Economía.

Ahora bien, la resolución de esta coyuntura puede ser abordada desde visiones que responden a diferentes intereses. Desde el empresariado agroexportador y los sectores que dominaban la Unión Industrial Argentina, las presiones para una devaluación habían sido constantes y reiteradas, con el objetivo de provocar una brusca transferencia de ingresos y la generación de una baja general de salarios. Desde el sector de la banca, en representación de los intereses del capital financiero local e internacional, se proponía la vuelta al mercado de crédito y al endeudamiento externo.

Frente a la situación de escases de divisas, se acrecentaban las dificultades para proseguir por un camino delineado por la expansión del crecimiento, con una redistribución del ingreso nacional y fortalecer de esa manera la dinámica del mercado interno.

En ese marco, nos parece relevante destacar los señalamientos del ingeniero y empresario Marcelo Dimanad (1985), que argumentaba sobre los reiterados desequilibrios externos de la economía del país:

> Hasta ahora el advenimiento de la corriente popular al poder en Argentina coincidió siempre con una acumulación circunstancial de las reservas del Banco Central debido a una coyuntura

[169] Dellatorre, R. (7 de mayo de 2013), "'Hablan de devaluación para asustar a la gente'", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-219484-2013-05-07.html (Fecha de acceso, 11/11/2017).

> internacional favorable o a una recesión previa. La expansión económica que se operaba se alimentaba con esas reservas. Pero para poder seguir con ella, en cada caso había que actuar enérgicamente a fin de contrarrestar la tendencia de la estructura productiva al desequilibrio externo. En vez de ello, la corriente popular generalmente, mientras podía, ignoraba el problema e, incluso, frecuentemente, contribuía a agravarlo.

A lo largo del siglo XX, la economía argentina experimentó reiterados desequilibrios externos entre importaciones y exportaciones, que se producían debido a razones de carácter estructural, entre las cuales las composiciones de las exportaciones jugaban un rol central. La diferente elasticidad de ingreso y la alta volatilidad de los precios de las materias primas generaban fuertes variaciones cíclicas en la capacidad de importación, así como una fuerte inestabilidad cambiaria (Amico, 2013, pp.43-44).

El gobierno nacional debía enfrentar un contexto de restricción externa, que se había agravado a medida que los precios internacionales tendían a la baja. En esa situación, si se procuraba dinamizar el mercado interno desde una política fiscal expansiva, se corría el riesgo de que esta se manifestara en mayores importaciones, provocando que se contrayera aún más el superávit comercial. Al mismo tiempo, las exportaciones no crecían y las capacidades para impulsar el consumo eran exiguas por el bajo stock de reservas.

La presidenta del BCRA, Mercedes Marcó Del Pont, en la apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias, seminario organizado por la autoridad monetaria, ponía de relieve la necesidad de buscar fuentes de financiamiento alternativas y remarcaba:

> Si las divisas no entran por el comercio, las vamos a buscar en el frente financiero. No queremos los capitales especulativos que dependen de los humores del mercado, tenemos que esforzarnos para lograr financiamiento de largo plazo para el desarrollo […]. Los desafíos para garantizar la continuidad de este proceso son enormes. Sin dogmatismos, vamos a tomar todas las decisiones que sean necesarias.[170]

La posición que expresaba la presidenta del BCRA se aproximaba a la ya plateada por el ex ministro de Economía Amado Boudou hacia finales de 2011, cuando proponía como solución para sortear las restricciones el retorno al crédito internacional.

[170] Lukin, T. (16 de noviembre de 2013), "'Sin dogmatismos, tomaremos todas las medidas necesarias'", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-233746-2013-11-16.html (Fecha de acceso, 11/11/2017).

Para ello, había que comenzar a desplegar una serie de políticas con el propósito de arribar a una serie de acuerdos con el Club de París y, al mismo tiempo, encarar las resoluciones necesarias para hacer frente a los diferendos que aún persistían en el CIADI (Kulfas, 2016).

En este punto, creemos necesario destacar que ese enfoque le valió numerosas enemistades hacia el interior del propio gabinete de gobierno. Finalmente, en un principio se impuso la posición de seguir sosteniendo la administración de la balanza de pagos con una regulación del comercio exterior, para atender los desajustes macroeconómicos sin acceder al crédito internacional.

Hacia finales de 2013 y comienzos de 2014, las condiciones de la economía nacional se caracterizaban por un reducido superávit de cuenta corriente, un déficit fiscal creciente y un tipo de cambio que fue utilizado como un ancla de precios. Asimismo, la inflación superaba ampliamente el ritmo de la devaluación, por lo que fue reduciéndose el tipo de cambio real (Heymann y Ramos, 2015, p.47).

El 22 de enero de 2014, el peso argentino se devaluó un 9,5% y hacia el final de la jornada cambiaria, el BCRA intervenía vendiendo un total de 120 millones de dólares para sostener el tipo de cambio, el stock de reservas caía a 29.000 millones.[171]

Si bien las versiones oficiales, destacadas por los medios de comunicación, argumentaban que la devaluación no había sido alentada por el gobierno nacional, el deslizamiento cambiario permitió descomprimir la abultada demanda de divisas. Al día siguiente, la autoridad monetaria al cierre de la jornada fijaba en el mercado de cambios el valor de 8 pesos por dólar, estimando una intervención oficial de 100 millones de dólares.[172]

De esa manera, El BCRA aceleraba el ritmo de devaluación sin modificar las tasas de interés, con lo cual agravaba aún más la situación. El mercado de cambios tenía una oferta mínima y la demanda era creciente, con un dólar ilegal con una fuerte tendencia al alza. La corrida cambiaria amenazaba con convertirse en una crisis financiera (Kulfas, 2016, p.168).

En una nota de opinión del diario *La Nación*, se destacaba la jornada cambiaria de la semana, subrayando las consecuencias sobre el stock de reservas y se ponía el foco en el ritmo de la devaluación en el tipo de cambio:

> Hasta ahora, el BCRA convalidaba devaluaciones graduales, que no superaban los cinco centavos diarios. Muchos economistas criticaban esa estrategia, al considerar que sólo contribuía a exacerbar el déficit cambiario: los importadores tenían más alicientes para anticipar sus compras

[171] Gerencia de Estadísticas Monetarias - Banco Central de la República Argentina

[172] "Otra devaluación lleva al dólar a $8 y es la mayor desde la salida de la crisis de 2001" (23 de enero de 2014), *La Nación.* Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1657832-otra-devaluacion-lleva-al-dolar-a-8-y-es-la-mayor-desde-salida-crisis-2001 (Fecha de acceso, 13/11/2017).

> de divisas, porque preveían que más tarde les sería más caro, mientras que los exportadores retenían sus ventas a la espera de mejores precios. El resultado fue que este mes el BCRA tuvo que ceder US$ 1156 millones de reservas (ayer cerraron en US$ 29.443 millones), y el cambio oficial perdió 10%, lo que arroja un ritmo anualizado de devaluación de 375%.[173]

Posteriormente, el ministro de Economía Axel Kicillof argumentaba respecto de la compra de dólares para atesoramiento de algunos sectores sociales y sobre las tensiones cambiarias que tuvieron lugar previo a las elecciones de 2011:

> El dólar fue durante mucho tiempo una mala inversión en relación con los plazos fijos, los títulos y la Bolsa, pero la gente de ingresos medios y bajos tuvo una necesidad permanente de adquirir. Si la gente presiona permanentemente para tener dólares, el valor de la divisa, además de estar asociado a factores de la economía real, tiene una presión cultural correspondiente a la voluntad de tenencia masiva de dólares. […] Entre agosto y septiembre de 2011 decían que el Gobierno iba a perder las elecciones, o que si las ganaba tomaría medidas desesperadas. Me refiero a notas de diarios y otros mecanismos de desinformación como las redes sociales, que decían que se iba a instalar un corralito o avanzar con una pesificación de depósitos. Incluso llegaron a decir que se estaban comprando aparatos de rayos X para abrir las cajas de seguridad. Es en ese momento que se decidió inhabilitar paulatinamente la compra de dólares para tenencia de particulares.[174]

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó una de las decisiones más resistidas en su gestión cambiaria, la devaluación del tipo de cambio. Entre los argumentos esgrimidos en contra de esa medida podemos encontrar las consecuencias regresivas y de contracción económica que podían ocasionar, con su consecuente traslado a precios.

En un análisis del periodista económico Raúl Dellatorre, del diario *Página 12*, se destacaba la devaluación como una pulseada entre las autoridades oficiales y algunos actores económicos con orientación exportadora que poseían la capacidad de fijar el precio en el mercado de cambios y, al mismo tiempo, de otros jugadores propios del mercado interno que habían transformado sus activos en divisas:

> Lo primero, la devaluación, fue el resultado de una prolongada y sangrienta (medida por el drenaje de reservas) pulseada con poderosas corporaciones económicas y financieras que

[173] Donoban, F. (23 de enero de 2014), "El Gobierno permitió la mayor devaluación del peso en 12 años", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1657716-el-gobierno-permitio-la-mayor-devaluacion-del-peso-en-12-anos (Fecha de acceso, 13/11/2017).
[174] Lukin, T. y Krakowiak, F. (26 de enero de 2014), "Tenemos las herramientas para hacerles frente", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-238550-2014-01-26.html (Fecha de acceso, 14/11/2017).

> desarrollaron, de todos los modos posibles, su artillería para acorralar a las autoridades […]. Lo segundo, la decisión de no abandonar los objetivos de política es el eje de la disputa que se le abre ahora al Gobierno, en una previsible puja con los mismos sectores del poder económico en torno de cómo se distribuirán los costos y beneficios de la corrección cambiaria […]. Está claro que el Gobierno enfrentó presiones de sectores exportadores por lograr ventajas en su rentabilidad a través de una devaluación. Pero también de otros que, sin tener a la exportación como actividad principal, han obtenido grandes ganancias en el mercado interno en todos estos años y esa acumulación de utilidades la han transformado en activos en dólares.[175]

Ahora bien, los empresarios de distintas actividades de la industria local consideraban la devaluación y las flexibilizaciones sobre el mercado de cambios como positivas. Héctor Méndez, presidente de la UIA, afirmaba: "Es una muy buena señal y un punto de partida para hacer más cosas en beneficio del crecimiento con desarrollo e inclusión social".[176]

Los sectores empresariales observaban la modificación del tipo de cambio como una oportunidad de recuperar competitividad interna y externa. En primer lugar, la suba del dólar abarataba las estructuras de costos y, en segundo lugar, propiciaba mayores ganancias para los que poseían la capacidad de exportar. Paralelamente, para que ello sucediera había que tomar medidas antiinflacionarias para que el salto cambiario brindara los efectos buscados.

En esa sintonía argumentaba José Ignacio de Mendiguren, secretario de la UIA:

> Si junto con estas medidas no hay una señal clara, explicitada, de que vamos dar una lucha contra la inflación, la medida corre el riesgo que pierda efectividad […]. Aislada, sola, no garantiza que se mejore la competitividad de la economía, […] el conjunto de decisiones económicas debe empezar por cambiar la tendencia inflacionaria, reducir los precios y realizarlo en un camino gradual que permita elevar al mismo tiempo los niveles de crecimiento y confianza de la economía.[177]

El traslado a precios internos de la devaluación pasó a ser la primera preocupación del gobierno nacional. El objetivo era sostener la competitividad lograda con el movimiento cambiario y que no se generase un espiral inflacionario que afectase el poder adquisitivo.

---

[175] Dellatorre, R. (25 de enero de 2014), "Obstáculos y objetivos", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-238495-2014-01-25.html (Fecha de acceso, 13/11/2017).
[176] "Sonrisa en los sectores empresarios" (25 de enero de 2014), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-238485-2014-01-25.html (Fecha de acceso, 13/11/2017).
[177] "Desde la Unión Industrial piden también medidas para bajar la inflación" (25 de enero de 2014), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1658548-desde-la-union-industrial-piden-tambien-medidas-para-bajar-la-inflacion (Fecha de acceso, 13/11/2017).

En ese sentido, el ministro de Economía Axel Kicillof analizaba la relación entre el tipo de cambio y los efectos inflacionarios de una devaluación, además, aprovechaba el contexto para enviar una señal al empresariado local con relación a la remarcación de precios:

> El Producto Bruto Interno está cerca de los 500 mil millones de dólares y las importaciones son 75 mil millones de dólares, de los cuales los insumos que están directamente en dólares son mucho menos. Con esto quiero decir que el efecto de un cambio del valor de la divisa sobre los bienes producidos en el país no es ciento por ciento. Nadie puede esperar que un cambio en el valor de la divisa impacte linealmente en los precios internos […]. Además, antes, la mayoría de los diarios decía que se estaban poniendo todos los precios en base al dólar blue. Ahora que el dólar oficial subió a 8 pesos, ¿los precios los van a bajar a un dólar de 8 pesos? […]. Si algún proveedor tuvo un cambio en sus costos, lo puede demostrar y no tiene suficiente margen como para no traducir esos costos en precios, se discutirá y se consensuará un cambio de precios, pero esto no ocurrió ni jueves ni viernes. Nosotros vamos a ser durísimos con el mantenimiento de los precios.[178]

Nos parece interesante resaltar que los ciclos de *stop and go* que se sucedieron en la historia de la economía argentina poseen la singularidad de que cuando resultaba necesario el ajuste del tipo de cambio real, se resentía el salario en términos reales y esa situación se producía, principalmente, por la superposición entre la canasta de "consumo popular" y la canasta de exportaciones (Gerchunoff, 2006).

Asimismo, se debe considerar que esa inflación de carácter estructural es propia de aquellos países que tienen problemas en el sector externo. Después de una devaluación, la suba de precios de origen externo provoca un incremento de los ingresos de los exportadores, que trasladan los mayores precios que reciben en moneda local al mercado interno. Esa situación puede ser controlada mediante los derechos de exportación (Rapoport, 2011, p.3).

Posteriormente a la devaluación de enero de 2014, el gobierno nacional buscaba quitarle presión al mercado del dólar ilegal para reducir la brecha cambiaria con el oficial y, al mismo tiempo, procuraba restarle presión al mercado de divisas.

Con ese objetivo, se llevaba adelante una flexibilización en la compra de dólares para atesoramiento, focalizada principalmente en los ocupados registrados de mayores ingresos, que dio lugar a lo que se conoció como "dólar ahorro" (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017, p.131).

[178] Lukin, T. y Krakowiak, F. (26 de enero de 2014), "'Los precios no dependen de la cotización del dólar'", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-238549-2014-01-26.html (Fecha de acceso, 14/11/2017).

Al mismo tiempo, las mayores tasas de interés fijadas por el BCRA permitían desincentivar por un tiempo la corrida contra el peso, el mercado cambiario se tranquilizó a partir de enero y las reservas revirtieron suavemente su tendencia a la baja.

Por otro lado, la nueva serie de medidas cambiarias y monetarias provocaron la contracción económica sobre el mercado interno, generando una caída de la actividad. Eso generó una reducción sobre las importaciones, aliviando también la presión sobre las reservas.

Mientras tanto, y a pesar de una política monetaria con mayor rigidez, los precios continuaban elevándose por una acción decidida de remarcación por parte de actores económicos locales (Musacchio, 2015a, p.172).

Frente a ese escenario, el secretario de Comercio, Augusto Costa, diseñaba el programa Precios Cuidados", que establecía una canasta de artículos con precios de referencia, que posibilitaba al consumidor tener la capacidad de evaluar los precios entre las distintas marcas. El programa de bienes de consumo masivo poseía una cobertura en todo el país, incluía a las grandes cadenas nacionales de supermercados, mayoristas y distribuidores.

El gobierno nacional atendía con preocupación la suba en los bienes esenciales de consumo masivo, controlando que no existieran traslados injustificados a precios como motivo del impacto de la devaluación.

El titular de la Secretaría de Comercio se reunía con los principales representantes de las cámaras, empresas y proveedores, como la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería, la Copal, las empresas Nestlé, Quilmes, Timbó, Unilever, Bimbo y Lácteos Danone.[179]

No obstante, el mayor problema se concentraba en los grandes proveedores de bienes para los sectores de pymes industriales, que retaceaban algunos insumos básicos del sector, aduciendo que no había stock con la pretensión de remarcar sus precios con relación a la cotización del dólar.

Hay que destacar que la devaluación provocó durante el transcurso del primer trimestre un pico inflacionario que enfrió la demanda y que amenazaba el nivel de empleo. Esa situación se presentaba principalmente en la producción de bienes durables (industria del plástico, automotriz y metalmecánica). Desde principios de ese año 2014, el mercado laboral había presentado una aguda situación, que se expresaba en el recorte de horas extra, eliminación de turnos y suspensión de trabajadores.

[179] "Los precios en la mira" (25 de enero de 2014), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-238492-2014-01-25.html (Fecha de acceso, 16/11/2017).

Durante el transcurso de 2014, el gobierno nacional comenzó a desarrollar una serie de acciones con la intención de comenzar a reacomodar el frente externo con el objetivo de volver al mercado de crédito internacional.

Como primera señal de normalización de las relaciones económicas internacionales, se alcanzó un principio de acuerdo en la negociación con el Consejo de Administración de Repsol por la expropiación del 51% de YPF. Mediante la Resolución 26/2014 se establecía la emisión de bonos del Tesoro Nacional, para comenzar a cancelar el pasivo con la empresa.[180]

Hacia finales del mes de mayo, una delegación oficial encabezada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, celebraba el acuerdo con el Club de París, en una negociación sin la intermediación del FMI, como el gobierno argentino había solicitado al foro de acreedores. El monto consolidado de deuda se establecía en 9.700 millones de dólares y se acordaba cancelar el pasivo antes de los siete años.[181]

El ministro resaltaba en detalle el acuerdo con el foro, su impacto en las reservas del BCRA y subrayaba los futuros beneficios para el país en términos de financiamiento del mercado de crédito internacional:

> Firmamos un memorando de entendimiento general y ahora, antes del primer pago, en julio, se firmarían los acuerdos bilaterales […]. Es un pago anual máximo de US$ 2250 millones desde 2016 y ese año el mínimo sería de US$ 1100 millones, mientras que sólo por lo que resta de esta cosecha esperamos que se liquiden US$ 20.000 millones. Además, los vencimientos de la Argentina, salvo en 2015 por el Boden y en 2017, son muy bajos en el futuro [...]. Si entrara más inversión podríamos aliviarlas [las restricciones a las empresas]. Además, no existen tantas restricciones y vienen dólares del exterior.[182]

Por otro lado, también enfatizaba el origen de la deuda con el Club de París, el tiempo que llevaron las negociaciones, la ausencia del FMI en el monitoreo del acuerdo y alertaba sobre sectores de la economía local que generaban expectativas de una crisis cambiaria:

> Arreglamos en condiciones favorables uno de los tantos entuertos que nos dejó el neoliberalismo, en lo que fue la historia argentina durante décadas y décadas, con foco en la

[180] Ampliación de emisión de Bonos. Emisión y colocación de Letra del Tesoro, 30 de abril de 2014. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/229627/norma.htm (Fecha de acceso, 16/11/2017).
[181] Dellatorre, R. (1 de junio de 2014) "Sin corbata ni soga al cuello", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-247564-2014-06-01.html (Fecha de acceso, 16/11/2017).
[182] Kanenguiser, M. (31 de mayo de 2014), "Axel Kicillof: 'Si entran más inversiones podríamos aliviar las restricciones a las empresas'", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1696238-axel-kicillof-si-entran-mas-inversiones-podriamos-aliviar-las-restricciones-a-las-empresas (Fecha de acceso, 16/11/2017).

> dictadura militar […]. El acuerdo que conseguimos en el Club de París era imposible porque estaba fuera de los canales habituales y por eso llevó tanto tiempo esta negociación. Vamos a pagar sin poner de rodillas al país […]. En esta visita, el planteo del FMI no apareció en la discusión. No estuvieron ni siquiera como observadores […]. El acuerdo con el Club de París puede generar mayores inversiones extranjeras y mayor holgura del sector externo. Pero, más allá de esos beneficios potenciales, en Argentina continúa habiendo sectores interesados en generar una devaluación a pesar de los acuerdos con el Ciadi, Repsol, la reestructuración de la deuda, el pago al FMI y demás esfuerzos.[183]

En ese escenario, aún quedaba por resolver el litigio con los fondos buitre, y se esperaba que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se expidiera favorablemente sobre la apelación realizada por el gobierno argentino al fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, que había sido ratificado por la Cámara de Apelaciones de ese país.

Debemos señalar que el fallo del juez no solo obligaba al país a cancelar una suma cercana a los 1.600 millones de dólares a los fondos especulativos que habían obtenido bonos en cesación de pagos por 80.000 millones de dólares, sino que también determinaba que el país no podía continuar abonando sus vencimientos de capital e interés de su deuda reestructurada (Kulfas, 2016, p.171).

El 16 de junio de 2014, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazaba la apelación argentina en contra de la decisión del juez de Nueva York, el cual reconocía el derecho de los fondos buitre en reclamar el pago nominal total de los bonos que habían comprado en default.

Tanto el gobierno nacional como la oposición esperaban un desenlace favorable para el país. Las expectativas estaban puestas en que la Corte suspendiera su decisión hasta primero conocer la opinión del gobierno de los EE. UU.[184]

Al momento del fallo del juez Griesa, el principal escollo planteado por el gobierno argentino, para entrar en negociación con los acreedores litigantes, era la vigencia de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers).

Durante el proceso de reestructuración de deuda en los años 2005 y 2010, en las negociaciones con los acreedores que habían entrado al canje, se establecía que, en caso de realizarse una oferta superadora a futuro, la misma se extendía a la totalidad de los acreedores (Kulfas, 2016, p.171).

---

[183] "Vamos a pagar sin poner al país de rodillas" (31 de mayo de 2014), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-247501-2014-05-31.html (Fecha de acceso, 16/11/2017).
[184] Pisani, S. (16 de junio de 2014), "El peor de los resultados: la Corte de Estados Unidos niega apelación argentina en el caso de los fondos buitre", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1701767-fallo-de-la-corte-de-estados-unidos-sobre-los-fondos-buitres-y-argentina (Fecha de acceso, 18/11/2017).

El incumplimiento de la sentencia por parte del gobierno nacional podía habilitar al juez a embargar los pagos regulares de aquellos acreedores que habían adherido con anterioridad al canje. A su vez, el pago de ese reclamo podría hacer disparar la cláusula RUFO, que estaba en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. Se presentaba un contexto en donde se podía caer el acuerdo de reestructuración anteriormente alcanzado y multiplicar por varias veces los compromisos de deuda (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017, p.132).

En el mismo día en que se conocía la noticia de que la Corte de los EE. UU. rechazaba la demanda argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizaba una cadena nacional para dar a conocer la posición del gobierno argentino:

> Este fallo es contrario no sólo a los intereses de la Argentina, sino también a los del 92 por ciento de los acreedores que creyeron en el país y en la reestructuración de su deuda, y también va en contra del funcionamiento del sistema económico y financiero global […]. Argentina va a cumplir con su deuda reestructurada, no vamos a defaultear nuestra deuda con los bonistas, pero no vamos a aceptar extorsiones: no queremos ser cómplices de aquellos que están dispuestos a hacer negocios sobre la miseria de la gente […]. Dirigido a los millones de argentinos que estarán escuchando, pero también al 92 por ciento de nuestros acreedores que adhirieron al canje […]. A partir de la última dictadura, la deuda tuvo un crecimiento exponencial, imponiéndole el cepo más extraordinario a la economía argentina […]. Creció en dictadura, pero también en tiempos de democracia, durante los '80 primero y después, en los '90. Con el llamado régimen de convertibilidad, de la mano de la ficción de que un peso era igual a un dólar, el país se endeudó de manera terrible.[185]

En cadena nacional, la presidenta anunciaba que había instruido que se implementase el paso de los próximos vencimientos de deuda de los bonos que habían ingresado al canje. Frente al riesgo de embargo, los pagos podían realizarse en otra plaza distinta a la de Nueva York.

Ahora bien, el dilema que enfrentaba el gobierno nacional era pagar la sentencia y correr el riesgo de demandas futuras de los tenedores de bonos reestructurados con anterioridad, o entrar en default y no poder completar el plan de integración plena al mercado de crédito internacional en busca del financiamiento necesario (Kulfas, 2016, p.172).

Las declaraciones de la presidenta hacían prever que se realizarían los pagos a los acreedores que habían ingresado al canje, y no se acataría la sentencia del juez neoyorquino. El día 30 de diciembre de 2014, el país realizaba el deposito correspondiente al vencimiento de los intereses del bono Discount, con legislación de Nueva York, pero el juez Griesa rechazaba el pago

[185] Dellatorre, R. (17 de junio de 2014), '"Es un fallo contra el país y los bonistas"', *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-248787-2014-06-17.html (Fecha de acceso, 18/11/2017).

y ordenaba que ese dinero no llegara a las cuentas de los tenedores del bono hasta tanto los fondos buitre no cobraran el monto de la sentencia (Kulfas, 2016, p.171).

El gobierno argentino hacía pública una solicitada en el diario *The New York Times*, en donde abordaba el marco de situación por la que atravesaba la deuda soberana, su interpretación de ese contexto y sus pasos a seguir:

> Ratifica su firme e incondicional voluntad de cumplir con sus obligaciones, para honrar sus deudas y para descartar cualquier interpretación solapada que implique la introducción del eufemismo de 'default técnico' con el que se intentó caracterizar la arbitraria prohibición de pago ordenada por la Corte, sin tener en cuenta la voluntad del deudor de cumplir con sus obligaciones […] para la República Argentina y para cualquier otro país soberano pagar significa el depósito de fondos en cumplimiento de las obligaciones previstas en el prospecto de emisión de los Instrumentos de deuda y, por tanto, ejercer voluntariamente un derecho sin buscar con ello entrar en conflicto con otras decisiones judiciales que alteren las bases contractuales de un país soberano […]. Nuestra firme convicción, como reflejan las instituciones y las organizaciones internacionales, junto con analistas y especialistas que han sido incluso críticos del país en periódicos especializados y revistas a nivel internacional, es que el exitoso proceso voluntario de reestructuración de la deuda, que fue aceptado por el 92,4 por ciento de los tenedores de bonos, debe cumplirse […]. Esta decisión soberana de la República Argentina, teniendo en cuenta la responsabilidad internacional de las decisiones tomadas por su Poder Judicial, para el agente fiduciario, para las entidades financieras que participan, para los litigantes, y para el propio juez Thomas Griesa, con respecto a cualquier acción judicial de la que podamos valernos con el fin de reivindicar legítimamente nuestros derechos como miembros de la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos (artículo 61), las Naciones Unidas (artículo 2, párrafos 1 y 4), el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (artículo 4), a la Corte Internacional de Justicia de La Haya como sujetos de derecho internacional, y ante los tribunales de jurisdicción general en la República Argentina […]. El cumplimiento de una sentencia no puede exigir un incumplimiento de las obligaciones asumidas […]. Cualquier conducta que trate de obstaculizar el pago a nuestros acreedores constituirá una violación de la disposición de Derecho internacional público que, en virtud de la igualdad soberana, prohíbe coaccionar a otros Estados. Esta disposición también se encuentra en vigor en los Estados Unidos.[186]

Las entidades financieras de la plaza de Nueva York, el Bank of New York Mellon (BoNY) y Euroclear eran las responsables en la intermediación de la cadena de pago de la deuda. Esas

[186] "El Gobierno reiteró que hizo el pago" (30 de junio de 2014), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-249708-2014-06-30.html (Fecha de acceso, 18/11/2017).

mismas, cuando recibieron el depósito del gobierno argentino para saldar sus obligaciones, fueron intimidadas por el juez Griesa, para que los fondos no llegaran a los acreedores.

Desde el Ministerio de Economía, se habían realizado los procesos correspondientes para que los bancos cumplieran con derivar los fondos hacia los acreedores externos del país y, al mismo tiempo, se sumaban presiones de distintos fondos de inversión que poseían bonos argentinos del canje de 2005 y 2010 para que se habilitaran las transferencias de esos recursos.

A comienzos de 2015, con la expiración de la cláusula RUFO, el gobierno nacional se encontraba con un mayor margen de maniobra para iniciar las negociaciones necesarias con los bonistas que no habían ingresado a los canjes de reestructuración. Esa situación no cambió el panorama, y las posiciones se iban endureciendo aún más. Los fondos buitre no estaban interesados en negociar con una administración que estaba a pocos meses de dejar la conducción del Estado argentino y apostaban a que un próximo gobierno fuera más complaciente con sus peticiones.

En ese marco, el gobierno comprendía que no estaba en condiciones de despejar todos los obstáculos que impedían su reorganización en materia de relaciones con los centros de crédito internacional. La política económica debía considerar los escasos recursos financieros y la estrecha disponibilidad de divisas necesarias para sostener el crecimiento económico, y así evitar el estancamiento.

El gobierno concentró sus esfuerzos para alcanzar los niveles de reservas necesarios para hacer frente a los meses que aún faltaban transitar hasta el fin del mandato presidencial. Para ello, se emitieron señales claras de que no habría una nueva devaluación, se retomaría la apreciación cambiaria como estrategia de anclaje nominal y contención de la inflación, relegando los problemas de competitividad (Kulfas, 2016, pp.173-174).

Posteriormente, se alcanzaría un acuerdo con China para la concesión de un swap de monedas, ampliando el stock de reservas disponibles en el BCRA. Al mismo tiempo, se coordinaba un acuerdo con el sector de las cerealeras para que anticiparan su liquidación de divisas, y se le ofrecía un seguro de cambio atado a cualquier eventual movimiento cambiario (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2017; Kulfas, 2016).

Finalmente, el gobierno lograba el objetivo coyuntural y de corto plazo que se había fijado alcanzar antes de las próximas elecciones presidenciales. La economía lograba una estabilización en materia cambiaria frente a un escenario que abría la posibilidad de un gobierno más amigable con los actores financieros del mercado. Eso generó que inversores externos comenzaran a ingresar divisas para posicionarse en activos argentino (Kulfas, 2016, p.174).

Al final de periodo de gobierno, las intenciones de generar un crecimiento económico chocaban con la restricción externa, y la política desplegada en esos últimos meses buscaba resguardar la calma cambiaria.

Creemos interesante considerar las reflexiones del economista Aldo Ferrer, posteriormente a la devaluación de 2014 y sus apreciaciones del contexto político en general:

> Me parece que en esta circunstancia vuelve a aparecer el conflicto del proyecto de país. Porque desde la perspectiva neoliberal, esto es el resultado de haber hecho una política de otro signo. Y entonces esto le va a dar mucho espacio a la crítica neoliberal y también a la externa, porque la forma en que la Argentina resolvió su tema de deuda externa despertó un gran resentimiento en los mercados financieros. El tema está en cómo se da una respuesta a esta situación de una manera consistente con un proyecto industrial, de inclusión social, de reafirmación de la soberanía. El riesgo es que se sigan perdiendo reservas, que no se estabilice el mercado y que se descontrole la negociación salarial. Creo que esta situación exige un replanteo del manejo de la restricción externa. Hay todo un tema de manejo político, de diálogo. Hace falta establecer una plataforma más amplia y consensuada […]. Esa idea de seguir bombeando el gasto cuando la economía funciona en altos niveles de actividad tampoco se justifica, además en una situación de restricción externa. Yo diría que el problema acá no es el nivel de actividad. El riesgo es el desorden. Que esto se descontrole. Y en materia cambiaria, una posibilidad es desdoblar el mercado: tener un mercado para las transacciones financieras y turismo, un dólar que lo vaya determinando el mercado, y otro mercado comercial controlado con la intervención del BCRA. Y tratar de lograr algo que para mí es alcanzable: el reingreso de fondos de residentes que están fuera del circuito, en el colchón o fuera del país. Hasta ahora eso fue difícil porque está muy confuso el sistema. Un manejo adecuado del régimen cambiario en materia financiera, el incentivo a depósitos en dólares con una tasa de interés atractiva, pueden estimular el reingreso de fondos, frenar la fuga de capitales y configurar un escenario más positivo. Si la macro y la negociación salarial es prudente, es probable que el aumento de precios no absorba totalmente la devaluación y que haya una mejora de la competitividad.[187]

El cierre del ciclo político kirchnerista brindaba las posibilidades de comenzar a desarrollar un debate en términos de su desempeño económico y en función de las imposibilidades de proseguir una senda de crecimiento con el resurgimiento de una severa restricción externa. El proceso de industrialización y de recomposición de los actores del mercado interno se lograba desde la extensión de las bases prexistentes, que a su vez provocaban un incremento en el consumo de divisas, que llevaba a un salto devaluatorio del tipo de cambio.

[187] Lewkowicz, J. (26 de enero de 2014), "'Reaparece el conflicto por el proyecto de país'", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-238528-2014-01-26.html (Fecha de acceso, 18/11/2017).

5.3. Una reconfiguración de las relaciones con los trabajadores y los empresarios

En el transcurso del mes de noviembre, a pocas semanas de haber triunfado en las elecciones presidenciales de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cerraba con su discurso la 17º Conferencia de la Unión Industrial Argentina.

Durante su intervención, defendió la política de administración del tipo de cambio, reclamó mayores inversiones a los empresarios, destacó la ausencia del secretario general de la CGT y argumentó que la distribución de una porción de las ganancias empresarias debe ser debatida en cada sector entre sindicatos y empresarios y no por ley, como figuraba en el proyecto que impulsaba la central sindical.[188]

Asimismo, el mensaje de la presidenta presentaba el cuadro de situación de la economía local, con sus dificultades y perspectivas a futuro. Se ponían de relieve los diversos y complejos problemas que el esquema macroeconómico inaugurado en 2003 comenzaba a presentar:

> Entramos en la etapa de la sintonía fina. Tenemos que comenzar a analizar los grandes temas: inversión, salarios, inflación, subsidios y utilidades […]. Para profundizar el modelo hay que reinvertir para ampliar la capacidad productiva y así abastecer el fuerte mercado interno y también el mercado de América del Sur […]. La competitividad sólo es sustentable con inclusión social. Lo aclaro porque algunos interpretan que la competitividad se hace a costa de los salarios o con exenciones fiscales, bajas de impuestos y subsidios […]. Hay que tener *timing* de cómo se manejan las variables macroeconómicas. Nuestro modelo es de crecimiento, trabajo e inclusión, y no de metas de inflación, que es el método del Consenso de Washington […]. No me molesta que ganen plata, las utilidades de las empresas argentinas superan cualquier estándar internacional. No me molesta en tanto y en cuanto no nos provoque una situación de endeudamiento del sector público […]. Argentina nunca revaluó su moneda. Siempre depreciamos, tal vez no con la intensidad que querrían los exportadores. Pero si no, que no me vengan a hablar de inflación. Si no controlo la variable del dólar se me terminan referenciando los precios de los bienes y los servicios en esa moneda. Pongámonos de acuerdo, no se puede la chancha, los veinte y la máquina de hacer chorizos […]. Seguramente les habló de la ley de distribución de ganancias. Por lo menos yo lo leo todos los días en los diarios con mensajes hacia el Ejecutivo. Si no lo hizo, les digo yo lo que opino de la cuestión, es un tema que hace a la competitividad y la inclusión social […]. Estoy muy de acuerdo. Hay empresas que ya distribuyen.

[188] Olivera, F. (23 de noviembre de 2015), "Fuerte gesto conciliador de la presidenta a los empresarios", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1425642-fuerte-gesto-conciliador-a-los-empresarios (Fecha de acceso, 18/11/2017).

> Pero lo tienen que decir trabajadores y empresarios en cada sector, no lo puede imponer el Estado a través del Parlamento.[189]

Siguiendo y evidenciando su malestar con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, Cristina Fernández de Kirchner aprovechaba la oportunidad para señalar algunos aspectos que hacían a la conflictividad intersindical:

> El conflicto laboral siempre fue entre la patronal y el obrero. ¿Quién puede poner en duda el derecho de huelga? Pero últimamente asistimos a prácticas en las que los conflictos no son con la patronal o con el Estado, sino intrasindicales. Cuando el conflicto se da entre sindicatos porque se tironean trabajadores, no podemos hablar de conflicto laboral, son conflictos sindicales […]. Nadie puede honestamente decirle a esta presidenta que no defiende los derechos de los trabajadores. Uno puede ser dirigente sindical y gritar toda la vida. Yo, sin ser dirigente sindical, soy trabajadora de toda la vida y tengo pergaminos suficientes para decir que siempre voy a estar del lado del más vulnerable.

La presidenta hacía alusión a los conflictos por encuadramiento gremial, una práctica proclive a ser utilizada por el Sindicato de Camioneros con el objetivo de expandir la cobertura bajo convenio colectivo de trabajo de la actividad y, al mismo tiempo, lograr así expandir la cantidad de trabajadores.

La estrategia de "expansión horizontal" hacia otras ramas de actividad –como el transporte de caudales, la recolección de residuos, el correo y la logística– ha sido posible fundamentalmente gracias a procesos de privatización o tercerización del transporte. Las políticas orientadas al mercado no necesariamente conducen a la contracción y desmovilización generalizada del movimiento obrero, sino que pueden fortalecer también su poder de negociación y movilización (Benes y Fernández Milmanda, 2012).

En el marco de la discusión por el reparto de ganancias de las empresas, De Mendiguren, en representación de la UIA, fijaba posición al respecto. Argumentaba que antes se debía discutir cómo mejorar la distribución del ingreso, y sostenía que la pretensión de la CGT era impugnar los balances de las empresas.[190]

[189] Lukin, T. (23 de noviembre de 2011), "Este modelo es de crecimiento e inclusión", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-181850-2011-11-23.html (Fecha de acceso, 18/11/2017).
[190] "Duro cruce de la CGT con la UIA por el reparto de ganancias" (23 de noviembre de 2011), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1425934-dure-cruce-de-la-cgt-con-la-uia-por-el-reparto-de-ganancias (Fecha de acceso, 18/11/2017).

Tempranamente y al poco tiempo de haber tenido lugar las elecciones presidenciales, comenzaban a ganar lugar las rispideces entre la CGT conducida por Hugo Moyano y el gobierno nacional.

El secretario general de la CGT comenzaba a cambiar su estrategia de relación con el kirchnerismo, y hacia finales de ese mismo año tenía lugar un acto por el Dia del Camionero en el estadio del Club Atlético Huracán, en la Ciudad de Buenos Aires.

Días antes del encuentro, existían distintos análisis y versiones sobre el grado de dureza del mensaje del líder camionero hacia el gobierno nacional y sobre las inmediatas consecuencias que podría ocasionar un discurso de ruptura.

Debemos señalar que las tensiones con el líder camionero proveían de larga data, desde antes del mes de agosto, previamente a las elecciones primarias. En aquel momento, Hugo Moyano reclamaba una mayor participación de la CGT en las listas del Frente para la Victoria (FPV), en particular en el distrito de la provincia de Buenos Aires.

La participación del sector fue prácticamente limitada a la candidatura a diputado nacional de Facundo Moyano, y los dirigentes sindicales, particularmente vinculados al gremio de camioneros, se vieron así relegados en sus aspiraciones de ocupar espacios de representación política.

Por otro lado, la disputa con el gobierno nacional se situaba también en torno a la cuestión gremial, poniendo el foco en el poder adquisitivo del salario, sobre el impacto del impuesto a las ganancias y la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Es necesario considerar que los coletazos de la crisis internacional venían ya impactando hace un tiempo sobre el mercado de trabajo, en materia de empleo y salario.

Ahora bien, el punto sobresaliente de la controversia se centraba en los fondos de las obras sociales de los sindicatos. Desde la CGT existía un reclamo de 12.000 millones de pesos anuales que aportaban las obras sociales a la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud, que eran reintegrados como correspondía, pero de manera tardía.[191]

Los Programas Especiales son tratamientos de salud que poseían un alto costo, como enfermedades oncológicas. En esas situaciones, las medicaciones eran suministradas y solventadas por las obras sociales, las que posteriormente tramitaban ante el APE los reintegros de los gastos.

[191] "Por las obras sociales, la CGT y el Gobierno podrían llegar a la Justicia" (15 de diciembre de 2011), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1432966-por-obras-sociales-la-cgt-y-el-gobierno-podrian-llegar-a-la-justicia (Fecha de acceso, 18/11/2017)

En aquellos años, existieron varias denuncias sobre presentaciones de troqueles de medicamentos para tratamientos inexistentes. Esa situación derivó en diversas causas judiciales, una de ellas afectaba directamente al Sindicato de Camioneros.[192] La denuncia con la Obra Social de Camioneros (Oschoca) había sido presentada por el dirigente de la UOCRA, Juan Pablo "Pata" Medina, enemistado con la línea de Moyano.

Ahora bien, creemos necesario remarcar que el financiamiento de las obras sociales es una de las fuentes principales para el sostenimiento de las organizaciones sindicales, ya que esos ingresos le brindan la posibilidad sustentar su estructura y, al mismo tiempo, poseer los recursos necesarios para desarrollar acciones colectivas de carácter gremial y políticas.

Con relación a la deuda que el gobierno nacional mantenía con las organizaciones sindicales, para el financiamiento de las obras sociales, el líder del gremio textil Jorge Lobais afirmaba: "Se está preparando un reclamo judicial de todos los gremios que quieran participar por el dinero que la Nación les adeuda a las obras sociales […]. Hubo un compromiso presidencial de ir devolviéndola, pero no se cumplió".[193]

Retornando al acto en el estadio de Huracán, realizado por el Día del Camionero, en el escenario del acto se encontraba además de la dirigencia del Sindicato de Camioneros, los sectores aliados al moyanismo: Julio Piumato (judiciales), Omar Viviani (taxistas), Omar Plaini (canillitas), Juan Carlos Scmhid (dragado y balizamiento). Hugo Moyano, realizaba un discurso en donde transparentaba las disputas políticas con el gobierno y llevaba a enmarcar su mensaje como de ruptura definitiva con la fuerza política oficialista:

> He ocupado la presidencia interina, pero tengo que ser sincero: el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, uno de los instrumentos más importantes que ha tenido el peronismo, ha dejado absolutamente de tener ninguna trascendencia política. En este momento, ante ustedes, presento la renuncia […]. Frente a ustedes, que me ubicaron en los cargos de relevancia a nivel político y gremial, en este momento presento la renuncia, también, al Partido Justicialista en el orden nacional. No tengo vocación de bufón. No puedo aceptar que otros tomen las decisiones que tienen que tomarse en el seno del justicialismo […]. Las obras sociales han crecido como ha crecido la economía del país […]. Algunas hoy están comenzando a tener dificultades y podrían ingresar en cesación de pagos […]. Desde el Ministerio de Salud se creó una megadenuncia contra las obras sociales que terminó poniendo un manto de sospechas sobre las obras sociales […]. Somos fieles intérpretes de Eva y Perón y seguiremos luchando para que en

[192] "Troqueles falsos de medicamentos siembran dudas" (16 de noviembre de 2010), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-156953-2010-11-16.html (Fecha de acceso, 18/11/2017).
[193] "Aprontes para la guerra de las obras sociales" (18 de diciembre de 2011), *El Argentino.* Disponible en http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/101108/aprontes-para-la-guerra-de-las-obras-sociales (Fecha de acceso, 18/11/2017).

> nuestra Patria se instale definitivamente la justicia social y todos los argentinos sean felices […]. Y como dijo Eva Perón: renuncio a los cargos, pero nunca a la lucha […]. El mejor gobierno de la historia fue el de Perón, que no nos confundan.[194]

El secretario general de SMATA reconocía las controversias con el gobierno nacional, pero procuraba bajar el nivel de conflicto, al mismo tiempo que ponía el foco de atención sobre la futura composición de la mesa de conducción de la CGT:

> El modelo fue acompañado desde 2003 por la CGT y lo defendimos con uñas y dientes. Se fue desgastando algo que se tiene que recomponer. Ahora hay chispazos, pero bueno, son chispazos. Para definir las cosas nos tenemos que sentar en una mesa a conversar. Esto no es una declaración de guerra […] las bendiciones de la presidenta no llegan a elegir un secretario general de la CGT.[195]

Desde la UIA existía una preocupación sobre el conflicto entre el gobierno y la CGT, José Ignacio de Mendiguren, presidente de la entidad, hacía referencia a esa situación y las discusiones paritarias por venir:

> Para nosotros, lo que más nos puede preocupar es que no haya un interlocutor, que el movimiento obrero termine fracturado. Para un año como el que se avecina, es importante tener enfrente un único referente. Lo peor sería un escenario atomizado […]. Lo de hoy no lo veo como una ruptura. Es importante que cuanto antes nos sentemos para entrar en un clima de diálogo, que no es algo se puede recomponer en 15 días. Tenemos que preocuparnos por el salario como elemento fundamental que hace sustentable el mercado interno […]. Si queremos mejorarlo, hay que corregir la asimetría que existe hoy entre el sector formal y el sector informal de la economía […]. En el sector industrial tenemos más de 800 convenios que renovamos todos los años, en muchos casos con niveles por encima de los salarios que se pagan en Brasil y México, que son los países con los que competimos.[196]

Hacia el interior del gobierno nacional, con el objetivo puesto en la renovación de autoridades de la CGT para el año siguiente, se pensaba que el posicionamiento político de Moyano no tenía

---

[194] Lantos, N. (16 de diciembre de 2011), "Con el camión lanzado a toda velocidad", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-183536-2011-12-16.html (Fecha de acceso, 18/11/2017).
[195] "Pignanelli: 'El discurso de Moyano no es una declaración de guerra'" (16 de diciembre de 2011), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1433236-pignanelli-el-discurso-de-moyano-no-es-una-declaracion-de-guerra (Fecha de acceso, 18/11/2017).
[196] Galak, O. (16 de diciembre de 2011), "Preocupa a la UIA un escenario con la CGT fracturada", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1433102-preocupa-a-la-uia-un-escenario-con-la-cgt-fracturada (Fecha de acceso, 18/11/2017).

retroceso. Comenzaba a redefinirse la conducción del movimiento obrero y, en ese sentido, se buscaba desplazar a los sectores representante de las actividades de servicios y postular a Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dándole mayor gravitación a los sectores del sector industrial.

La división de la CGT se producía de hecho el 24 abril de 2012, una vez que los "gordos" y los "independientes" impugnaban ante el Ministerio de Trabajo la decisión del Consejo Directivo de fijar la fecha para la constitución de la nueva conducción.

Pocos días después, el Sindicato de Camioneros organizaba un acto en estadio Parque Roca, de la Ciudad de Buenos Aires, para lanzar la candidatura de Hugo Moyano para conducir la CGT por un periodo más. El líder sindical hacía referencia a su postulación y mandaba un mensaje hacia los demás gremios:

> No me interesa ser el candidato de un funcionario de turno. No me interesa ser el candidato de un gobierno de turno. Soy el candidato de los trabajadores […]. Los secretarios de los ministros llaman a los dirigentes que vacíen la CGT. Operan todo el tiempo para ver cómo evitan que Moyano siga en la CGT […] Respetamos decisión del pueblo de elegir a su gobierno. Pero que respeten también lo que eligieron los trabajadores, porque no es un problema de Moyano, sino de los trabajadores.[197]

En las discusiones paritarias entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, liderada por Pablo Moyano, secretario general adjunto, hijo del líder de la CGT, y la Federación de Empresas de Transporte de Cargas, no lograban ponerse de acuerdo en diferentes cuestiones.

La Federación de Camioneros reclamaba un incremento salarial del 30% y la eliminación del impuesto a las ganancias y el pago de una suma fija de entre 3 y 4 mil pesos para compensar el efecto del impuesto.[198]

La orientación del reclamo estaba dirigida a la Cámara patronal, pero la utilización de la medida de fuerza, anunciada por Pablo Moyano, posteriormente a que las negociones no alcanzaran las expectativas de la Federación de Camioneros, iban en dirección a gobierno. El líder camionero sostenía:

> Hemos decretado un paro de 72 horas por un aumento salarial del 30% porque el tema de la inflación nos comió los salarios y porque queremos el Gobierno elimine el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Es el único país del mundo en el que trabajás para pagar […].

[197] Bruschtein, J. (27 de abril de 2012), "En el Parque Roca, mirando a la interna", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-192815-2012-04-27.html (Fecha de acceso, 18/11/2017).
[198] "Los camioneros siguen su ruta" (19 de junio de 2012), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-196691-2012-06-19.html (Fecha de acceso, 19/11/2017).

> Hace un año que no hay ningún tipo de acercamiento [del Gobierno] con los reclamos de los trabajadores […]. Hace un año que no hay ningún tipo de acercamiento [del Gobierno] con los reclamos de los trabajadores.[199]

Anteriormente, durante el transcurso del mes de junio, tenían lugar las negociaciones con la cámara empresaria de la actividad, se sucedieron distintas medidas de acción colectiva por parte de la Federación de Camioneros. A principios de mes, la organización se había declarado en estado de alerta y movilización, y amenazaba con "paros sorpresivos".

El cese de actividades que se llevó adelante el día 20 de junio, con alcance nacional, pese a que el Ministerio de Trabajo dictaba la conciliación obligatoria, se concentró en las actividades de transporte de combustibles líquidos.

La medida de fuerza del Sindicato de Camioneros incluía, además del cese de actividades, el bloqueo de diferentes refinerías de combustibles, como las plantas petroquímicas de Dock Sud, La Matanza, La Plata, Campana y Junín, en la provincia de Buenos Aires y también en Luján de Cuyo, en Mendoza; San Lorenzo, en Santa Fe; Refinor, situada en Tucumán y Monte Cristo, en Córdoba.[200]

La acción colectiva de alcance nacional estaba generando un desabastecimiento generalizado de combustible en gran parte del territorio, y el gobierno evaluaba distintos pasos a seguir, como establecer sanciones económicas, quite de la personaría gremial y también el modo de aplicar la Ley de Abastecimiento.

Asimismo, la medida de fuerza se había extendido hacia otras actividades, afectando el normal funcionamiento en el transporte de caudales, en la distribución de mercadería a supermercados y en el correo postal.

Paralelamente, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, en un encuentro en la Pastoral Universitaria del arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, expresaba su respaldo al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, subrayando que este soportaba los embates del kirchnerismo y hacía alusión a una adjudicación a la empresa Covellia para la recolección de basura en la ciudad: "Tengo buena relación con el gobierno de la ciudad. Tiene dificultades por

[199] "Camioneros lanzó un paro por 72 horas" (19 de junio de 2012), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1483343-comenzo-un-paro-nacional-en-el-transporte-de-combustible (Fecha de acceso, 19/11/2017).
[200] "El paro de camioneros genera largas filas para cargar combustible" (20 de junio de 2012), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1483653-un-paro-de-camioneros-hace-peligrar-el-abastecimiento-de-combustibles (Fecha de acceso, 19/11/2017).

la mala relación con el gobierno nacional, pero está tratando de sobrevivir, como otros. Con nosotros [por los camioneros] se firmó un convenio histórico por la recolección de residuos".[201]

Desde sectores del gobierno nacional, denunciaban un "pacto político" entre Hugo Moyano y Mauricio Macri, que se expresaba, por ejemplo, cuando el líder del PRO y jefe de gobierno porteño respaldaba las medidas de acción gremial de los Camioneros. Diversos sectores del kirchnerismo señalaban acuerdos entre ambos con relación a la licitación de grúas y parquímetros, en donde intervenían los trabajadores de la actividad de Camioneros.[202]

En el transcurso de las 72 horas de paro y boqueo de las principales refinerías de combustibles del país, Pablo Moyano realizaba declaraciones en contra del gobierno nacional y en la misma intervención convocaba a una movilización a Plaza de Mayo para la siguiente semana:

> Para la semana que viene [convocamos] a una gran movilización a Plaza de Mayo […]. El Gobierno debe vivir la realidad, no en una burbuja, no ven la bronca que hay en la calle. Hay que preguntarle al Gobierno por qué cambió, Moyano no ha cambiado. Nosotros éramos recibidos. El Gobierno se ha alejado de los trabajadores. Recién veía unas imágenes de un camión manejado por un gendarme, descargando (combustible) al mejor estilo militar, rodeado de gendarmes; una imagen de la dictadura militar. Cuando nosotros realizamos medidas contra Techint, Clarín y La Nación, el mismo Gobierno las alentaba desde el Ministerio de Trabajo. Habría que preguntarles a ellos por qué cambiaron de actitud. Es uno de los pocos gremios que siempre está en la calle. Nunca vamos a entregar a los trabajadores, en cualquier gobierno. Lamentablemente, el Gobierno se ha alejado de los trabajadores. En vez de sentarse a negociar, los tipos siguen echando más leña al fuego. No entienden que la gente está recaliente por pagar Ganancias.[203]

Ante la ausencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su participación en un encuentro sobre medioambiente en la Cumbre de Rio+20, celebrada en Brasil, el vicepresidente Amado Boudou encabezaba el acto por el Día de la Bandera. En aquella oportunidad, el mandatario en ejercicio se refería a la situación gremial con el líder de la CGT:

> Las cosas deben solucionarse en la mesa de negociaciones […]. Mientras en los países industrializados se pierden empleos de a cientos de miles, en Argentina están las paritarias para

[201] Balinotti, N. (20 de junio de 2012), "Desafío de Moyano: paraliza el transporte de combustible", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1483545-desafio-de-moyano-paraliza-el-transporte-de-combustible (Fecha de acceso, 19/11/2017).
[202] Pertot W. (24 de junio de 2012), "El pacto", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-197135-2012-06-24.html (Fecha de acceso, 19/11/2017).
[203] "Pablo Moyano convocó a una movilización a Plaza de Mayo para la semana que viene" (21 de junio de 2012), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1483887-pablo-moyano-en-vez-de-negociar-siguen-echando-lena-al-fuego (Fecha de acceso, 19/11/2017).

> mejorar la situación de los trabajadores […]. No es bueno que Pablo Moyano o el Sindicato de Camioneros pretenda tener de rehén a 40 millones de argentinos […]. En la Argentina, está la posibilidad de discutir en paritarias hace más de nueve años y esto da un marco para que en una mesa de negociación se puedan resolver los problemas […]. El conjunto de las paritarias se ha llevado a cabo sin problemas, se han cerrado todas, restan sólo dos de los sindicatos que tienen gran número de trabajadores, y una de ellas es la de camioneros. Si se hubiera agotado el diálogo podría ser comprensible, pero en una instancia de diálogo parece que se quiere usar a los argentinos como una herramienta de presión para una discusión que es sectorial.[204]

La medida de fuerza y el conflicto no retomaban su cauce institucional, sino que iban en escalada a medida que pasaban los días, y tampoco se evidenciaba demasiada predisposición por parte de los actores a retomar las negociaciones. La situación de abastecimiento de combustible ya se encontraba en una situación crítica, y afectaba no sólo a las locaciones fabriles, sino también a los usuarios de automóviles, y a los sectores de mayor vulnerabilidad social que necesitaban calefaccionar sus hogares con garrafas de gas envasado.

Las principales plantas destiladoras de combustibles del país permanecían bloqueadas por el gremio de Camioneros. El gobierno respondía con una denuncia penal contra Hugo Moyano y, al mismo tiempo, organizaba –en conjunto con Gendarmería y el Ejercito, coordinado por el ministro de Seguridad, Sergio Berni– maniobras para sortear los bloqueos y liberar 300 mil litros de combustible que ayudarían a paliar la emergencia energética en las zonas más afectadas.

Con relación a ese operativo, a cargo del Ministerio de Seguridad, el funcionario destacaba las maniobras para abastecer de combustibles a las áreas afectadas:

> Se ha decidido trasladar en aviones de las Fuerzas Armadas a otros choferes, para que aquellas patronales que acceden a entregar sus camiones en el interior puedan alcanzar el objetivo de abastecer […]. Lamentablemente se confunden los roles y estamos siendo víctimas de un movimiento de pinzas entre patronal y gremio. Desde el Gobierno no venimos a confrontar, pero el Estado no puede ser víctima de este monopolio que ahora conforman patronal y gremio.[205]

En sus declaraciones, el ministro dejaba entrever una participación de manera indirecta del sector empresario en las acciones de desabastecimiento de combustible durante esos días. Ubicándolos en una actitud de oposición al gobierno, en conjunto con los sectores sindicales.

---

[204] "'En la mesa de negociaciones'", (21 de junio de 2012), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-196890-2012-06-21.html (Fecha de acceso, 19/11/2017).
[205] Lantos, N. (21 de junio de 2012), "Con los camiones de punta", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-196902-2012-06-21.html (Fecha de acceso, 19/11/2017).

Por otro lado, el ministro de la cartera laboral, Carlos Tomada, hacía referencia a la multa que se le imponía a la Federación de Camioneros por su accionar y por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada. Al mismo tiempo, hacía un repaso de la dinámica paritaria entre los sectores del trabajo y los empresarios, subrayando la baja colaboración para arribar a un entendimiento:

> El tema laboral se resuelve en la mesa de negociaciones, evidentemente acá quieren poner algo más en la mesa que no es el reclamo de la paritaria […]. La multa al gremio es de cuatro millones de pesos. Estas sanciones también se han aplicado a otras empresas cuando no cumplen con la ley […]. En la primera reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, Pablo Moyano estuvo diez minutos e inmediatamente inició un paro de transporte de caudales […]. En la siguiente reunión, hay una cierta mejora de los empresarios, salen y dictan el paro de combustibles con una absoluta irresponsabilidad […]. Nosotros estamos procurando el pleno acatamiento en la ley, hemos dictado una conciliación obligatoria, queremos una negociación en el marco de la tranquilidad.[206]

Finalmente, el 21 de junio el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales del transporte de carga, arribaron a un acuerdo en materia salarial, estableciendo un incremento de 25,5%. En la reunión estuvieron presentes Hugo Moyano y el titular de FADEEAC, Luis Morales.[207]

El acuerdo entre los actores en la mesa de negociación no invalidaba el paro general con movilización para la semana entrante, en Plaza de Mayo. Moyano cerraba el acuerdo sectorial con el empresariado, pero seguía avanzando en el plano político en oposición al gobierno nacional. Su pretensión de continuar las tensiones con el oficialismo comenzaba a generarle rispideces con otros gremios, que no compartían la visión de Camioneros.[208]

La protesta de paro y bloqueo en las refinerías de combustible, que generó un desabastecimiento de combustible a lo largo del territorio nacional, y el llamado de la CGT, conducida por Hugo Moyano, a movilizarse a Plaza de Mayo el miércoles 27 de junio provocaron fuertes oposiciones de distintos sectores sindicales. Los "gordos" ya habían tomado una posición en contra de la conducción del líder Camionero, por el lado de los "independientes", Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión Civil de la Nación (UPCN) expresaba su posición:

---

[206] "'Queremos que todos cumplan la ley'" (22 de junio de 2012), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-196977-2012-06-22.html (Fecha de acceso, 19/11/2017).
[207] Lukin, T. (22 de junio de 2012), "El acuerdo que descomprimió el conflicto", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-196976-2012-06-22.html (Fecha de acceso, 19/11/2017).
[208] Balinotti, N. (22 de junio de 2012), "Moyano llamó a un paro general y marchará contra el Gobierno", *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1484183-moyano-llamo-a-un-paro-general-y-marchara-contra-el-gobierno (Fecha de acceso, 19/11/2017).

> Tiene un trasfondo político de parte de Moyano con el que busca desestabilizar a un gobierno democrático, algo que tiene que estar fuera de toda lógica de la CGT […]. Fue una medida totalmente fuera de lugar. Es una barbaridad lo que ha hecho Moyano. Tiene una actitud politizada que en definitiva no se condice con la defensa de los trabajadores […]. Detrás de lo que puede ser una reivindicación real se esconde una intencionalidad política a la que se quiere arrastrar a la CGT. Tuvo una intención que nada tiene que ver con la finalidad de la CGT […]. Ningún gremio lanza una medida como esta cuando está en medio de una negociación. Y menos para conseguir una cifra normal que tranquilamente podría haberse acordado en el marco de la paritaria […]. Podrá haber asignaturas pendientes, pero no se puede generar semejante zozobra en la población. Tiene un trasfondo político muy grave.[209]

Asimismo, la convocatoria era rechazada por el conjunto del Partido Justicialista y por prácticamente todos los gobernadores peronistas, que expresaban su respaldo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esa posición debemos incluir a la CTA conducida por Hugo Yasky, y los sindicatos de la CGT no alineados con Moyano.[210]

Ahora bien, en la antesala del paro y movilización, la presidenta Fernández de Kirchner, en su vuelta anticipada de la cumbre ambiental Rio+20, caracterizaba la situación política que se había desarrollado desde la protesta gremial. Hacía hincapié en la toma del yacimiento petrolífero más importante del país, ubicado en las provincias de Chubut y Santa Cruz, dejaba entrever la existencia de intereses que sobrepasaban el reclamo sectorial, ponía el énfasis en el contexto internacional y sus repercusiones en la economía local:

> Lo que se estaba buscando es que entrara a sangre y fuego la Gendarmería y producir un evento que escandalizara y desestabilizara al Gobierno […]. Esto pasa muchas veces cuando los empresarios o algunos sindicalistas creen que dividiendo a los sindicatos se obtienen mejores cosas. Cuando se divide el movimiento obrero, cuando se anteponen cuestiones personales que no tienen nada que ver con los intereses de los trabajadores pasan las cosas que pasan […]. Tuve que volver al país porque se había declarado una huelga de combustibles con toma o bloqueo de refinerías que nos colocaba en un paro general. No hace falta ser muy inteligente para saber cuándo uno para el suministro de combustibles para el país […]. Me tocó ver el miércoles a la noche y este fin de semana escenas que realmente creí que los argentinos debíamos haber superado en esta Argentina que ha generado 9.159.186 puestos de trabajo […] Otros sectores que agrupan a otras actividades pudieron resolver sin una hora de paro, sin ningún tipo de

[209] Bruschtein, J. (22 de junio de 2012) "La CGT quedó con su fractura expuesta", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-196981-2012-06-22.html (Fecha de acceso, 19/11/2017).
[210] "El paro nacional convocado por Moyano agrava la fractura del frente sindical" (22 de junio de 2012), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1484271-el-paro-nacional-convocado-por-moyano-agrava-la-fractura-del-frente-sindical (Fecha de acceso, 19/11/2017).

> enfrentamiento ni extorsión para la sociedad, sus situaciones laborales, sin impactar en el resto de los argentinos […]. En el mundo están todos en el Titanic, nosotros hemos construido este bote en el que está la Argentina y que está aguantando la tormenta con todo, y veo que los principales beneficiarios de ese proyecto están tratando de pinchar el bote con la lógica del escorpión […]. La verdad que no lo entiendo. Salvo que haya algo más que cuestiones gremiales, a la luz de los acontecimientos que son públicos y notorios en la región […]. El día que no estemos nosotros irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata como la tuvieron durante décadas […]. No habrá extorsión, amenazas, insulto o agravio que me aparten del camino que me he fijado.[211]

En el acto de 27 de junio en Plaza de Mayo, acompañaron en el escenario a Hugo Moyano, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Roberto Coria (Guincheros), Claudio Rucci (diputada nacional), Jorge Pérez Tamayo (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), Julio Piumato (Judiciales), Sergio Palazzo (La Bancaria), Gerónimo "Momo" Venegas (Peones Rurales), Ricardo Cirielli (Asociación del Personal Técnico Aeronáutico), Guillermo Pereyra (Petroleros) y Omar Plaini (Canillitas).[212]

En su alocución, el líder Camionero, Hugo Moyano, volvía a concentrar sus críticas hacia el gobierno, particularmente, enfocándose en la presidenta de la Nación, y se reposicionaba nuevamente como candidato a conducir la CGT:

> Pareciera que un reclamo legítimo fuera una extorsión, pareciera que una medida de los trabajadores pretende distorsionar la democracia. Pareciera que un paro nacional fuera un golpe de Estado […]. Lo que molesta y no nos gusta es la forma de imposición que tienen [el Gobierno], de hacer todo como si fuera una dictadura […]. La tendencia favorable de la economía global nos permitió superar los problemas. Ya se tendría que haber terminado el hambre y la pobreza en el país […]. Es un proyecto nacional y popular que dejó de ser bastante nacional y bastante popular […]. No pierde nada señora presidenta con dialogar, eso demuestra grandeza. Espero que con esa capacidad e inteligencia que demuestra tener, se dé cuenta que no puede seguir con esa soberbia abrumadora […]. Voy a renovar el contrato el 12 de julio y voy a seguir en la CGT. Lo hago porque no podemos aceptar que se apoderen de la CGT, que se apodere un grupo de dirigentes que van a pasar a ser una especie de ministros del Ejecutivo y van a recibir órdenes.[213]

---

[211] Rodríguez, S. (27 de junio de 2012), '"Están tratando de pinchar el bote"', *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-197341-2012-06-27.html (Fecha de acceso, 19/11/2017).
[212] "Quiénes estuvieron en el palco de Moyano" (27 de junio de 2012), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1485712-quienes-estuvieron-en-el-palco-de-moyano (Fecha de acceso, 19/11/2017).
[213] "Las diez frases más fuertes de Hugo Moyano" (28 de junio de 2012), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1485639-las-10-frases-mas-fuertes-del-camionero (Fecha de acceso, 19/11/2017).

La movilización a Plaza de Mayo, encabezada principalmente por el gremio Camioneros, dejaba en claro que la fractura de la CGT era un hecho, que no existía capacidad de retorno en esa división. Los dirigentes gremiales que se oponían a la conducción de Hugo Moyano ya hablaban en aquel entonces de la formalización de la fractura de la organización de los trabajadores.

La situación llegó a su punto de no retorno cuando se puso en evidencia la disputa con el gobierno nacional. Eso llevó a que los sectores internos –como los "gordos", los "independientes", la UOM y SMATA– comenzaran a plantearse un cambio en la conducción de la central obrera. También ex moyanistas, conducidos por Omar Viviani de taxistas, que conformaban el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), se encolumnaban en contra del Camionero.[214]

Ahora bien, días antes de celebrarse la convocatoria realizada por el sector liderado por Hugo Moyano, el 12 de julio, para elegir el nuevo secretario general de la CGT, y su mesa nacional de conducción, el Ministerio de Trabajo impugnaba el congreso constitutivo.[215]

Paralelamente, en la sede de la UOM; SMATA, UOCRA, Comercio, Luz y Fuerza, Sanidad y Alimentación postulaban al líder Metalúrgico Antonio Caló y anunciaban un confederal para el 5 de septiembre y un congreso para el 3 de octubre.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, tomaba posición a favor de la unidad del movimiento obrero. Dejaba bien en claro hacia donde se orientaban los reclamos de los trabajadores, y la relación que esperaba con el gobierno nacional:

> Si la unidad del movimiento obrero pasa porque Caló se baje de la candidatura, ya lo dije: Caló se baja […]. Si del otro lado Moyano no se quiere bajar de la candidatura, Caló tampoco se quiere bajar de la candidatura […]. Mi problema para discutir salarios es con los empresarios, con el Gobierno tendré que conversar, vamos a conversar, y el tiempo será testigo de la conversación.[216]

El 12 de junio, la CGT conducida por Hugo Moyano realizaba su congreso en el club Ferro Carril Oeste, en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los que apoyaban al líder Camionero se encontraban Gerónimo Venegas (ruralistas), Amadeo Genta (municipales porteños), Julio Piumato

[214] Bruschtein, J. (28 de junio de 2012), "Un adelanto de la fractura que se viene", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-197427-2012-06-28.html (Fecha de acceso, 19/11/2017).
[215] Lantos, N. (7 de julio de 2012), "Cada vez más cerca de consagrar la ruptura", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-198142-2012-07-07.html (Fecha de acceso, 19/11/2017).
[216] "Un candidato que sigue firme" (12 de junio de 2012), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-198499-2012-07-12.html (Fecha de acceso, 19/11/2017).

(judiciales), Omar Plaini (canillitas), Juan Carlos Schmid (dragado), Abel Frutos (panaderos), Jorge Pérez Tamayo (pilotos de avión) y Sergio Palazzo (La Bancaria).[217]

Los gremios que se ubicaban con una posición de cercanía al gobierno nacional realizaban su congreso meses después, el 3 de octubre, en el estadio Obras Sanitarias, de la Ciudad de Buenos Aires. Con el apoyo de los "gordos", los "independientes" y el MASA, Antonio Caló, líder metalúrgico, se consagró secretario general de la CGT "oficialista".

En la mesa de conducción lo acompañaban Andrés Rodríguez (UPCN), Omar Viviani (Taxis), Gerardo Martínez (UOCRA), Ricardo Pignanelli (SMATA), Armando Cavalieri (Comercio), Héctor Daer (Sanidad), Oscar Lescano (Luz y Fuerza) Víctor Santamaría (SUTERH), Marcos Castro (Capitanes de Ultramar), Omar Maturano (La Fraternidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Roberto Fernández (UTA), Enrique Madano (Imprentas), Carlos Barbeito (Molineros), Noé Ruiz (Modelos), Norberto Dipróspero (Personal Legislativo), Horacio Ghilini (SADOP), Carlos Sueyro (Aduana), Alberto Roberti (Petroleros) Eduardo Fuertes (Unión Ferroviaria), Juan Palacios (Comunicaciones), Omar Suárez (SOMU), Sergio Romero (UDOCBA), Jorge Lobais (TEXTILES), Roque Garzón (Farmacia) Daniel Rodríguez (FOETRA), José Lancheri (Personal civil de las Fuerzas Armadas), Ricardo Fresia (Aeronavegantes), Raúl Quiñones (Tabaco), Héctor Laplace (Molineros) y Humberto Bertinat (Confederación de empleados municipales).[218]

En su asunción, Antonio Caló remarcó su apoyo al proyecto político encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y ubicaba a la CGT en el plano de la reivindicación sectorial:

> Vamos a defender este modelo económico que generó miles de puestos de trabajo […]. Hoy demostramos que tenemos una CGT unida y que utilizamos la inteligencia y la prudencia para zanjar las diferencias […]. Se abre una nueva etapa en la CGT para el bien de los trabajadores. Vamos a hacer un esfuerzo para estar a la altura de las expectativas que hay puestas en esta nueva conducción. Va a ser una CGT dialoguista que va a reclamar lo que tenga que reclamar.[219]

Finalmente, el escenario sindical terminaba de reconfigurarse hacia finales de 2012, con la constitución de dos CGT. Una con proximidad al gobierno nacional, con una representación de mayor alcance, abarcando a diversas de actividades con una impronta de carácter industrial. Por otro lado, se encontraba la CGT "opositora", con vínculos cercanos a los sectores partidarios que

[217] "La Unión Ferroviaria, ausente en la reelección de Moyano a último momento" (12 julio de 2012), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1489784-la-union-ferroviaria-ausente-en-la-reeleccion-de-moyano-a-ultimo-momento (Fecha de acceso, 19/11/2017).
[218] "Todos los nombres de la nueva conducción" (4 de octubre de 2012), *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-60668-2012-10-04.html (Fecha de acceso, 20/11/2017).
[219] Bruschtein, J. (4 de octubre de 2012), '"Vamos a defender este modelo económico y social"', *Página 12*.Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-204866-2012-10-04.html (Fecha de acceso, 20/11/2017).

antagonizaban con el gobierno, representados en su mayoría por gremios actividades de servicios. Este sector ampliaba los marcos de acción gremial, es decir que superaban el reclamo sectorial e incursionaban en la arena política partidaria.

Hacia finales del ciclo político nacional, la dinámica del conflicto sindical la encabezaría a nivel de centrales obreras, Hugo Moyano, poniendo sobre relieve diversos reclamos de carácter sectorial, pero que en última instancia se orientaban hacia el gobierno nacional. No se visualizaba en las acciones de CGT opositora un destinatario representativo del sector empresario.

Por otro lado, con la conformación de la CGT oficial, el gobierno nacional lograba reconsolidar la discusión sectorial, mediatizada por las instituciones de las relaciones laborales, volviendo a ordenar el mapa gremial, con el objetivo de regular la puja distributiva entre los actores del ámbito del trabajo.

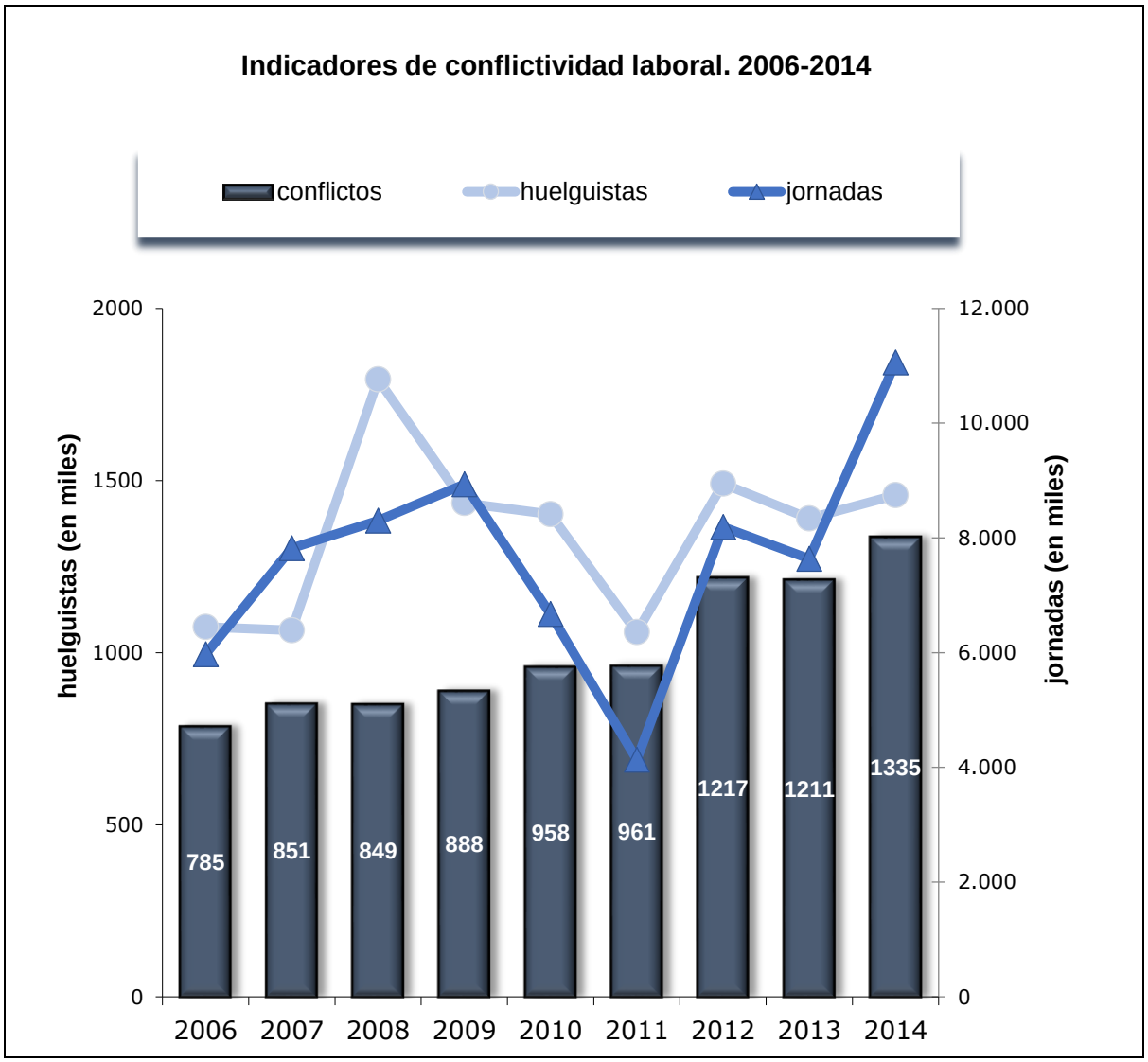
Paralelamente, durante el transcurso de los convulsionados meses de finales de 2011 y 2012, en materia de reorganización del campo sindical, la Unión Industrial Argentina observaba de forma distante el devenir de los acontecimientos. Los empresarios de sectores vinculados a actividades con orientación al mercado interno eran mayormente proclives a que el marco de relaciones con las organizaciones sindicales volviese a su cauce institucional, con el objetivo puesto en que las rondas de negociación colectiva determinaran el ámbito de la disputa salarial.

En ese último periodo de gobierno, la relación con la UIA estuvo marcada por una mayor distancia, en contraposición a los primeros años del periodo kirchnerista. Los desajustes en materia macroeconómica y las políticas de control en el mercado de cambios deterioraron las relaciones con la entidad fabril.

Además, la depreciación del tipo de cambio que sostuvo el gobierno, si bien le quitó competitividad a diferentes sectores revalorizó los salarios en términos reales. Estas situaciones generaban un malestar en toda la comunidad empresaria

A comienzos de 2014, con el salto devaluatorio, la dinámica de la conflictividad laboral fue en ascenso hasta arribar a las negociaciones paritarias por actividad, que lograron en la mayoría de los casos alcanzar acuerdos sin grandes inconvenientes.

Durante el transcurso del primer trimestre, cuando se consolidaba el pico inflacionario, el ascenso de las acciones colectivas de protesta tenía su punto más álgido. Posteriormente, hacia finales del mes de marzo y comienzos de abril, la tendencia en materia de conflictos descendía a medida que se cerraban las distintas paritarias.



Fuente: MTEySS – SSPTyEL – Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo

5.4. La consolidación de un escenario contrahegemónico

A lo largo del último periodo de gobierno kirchnerista, entre 2012 y 2015, se desarrollaron una variedad de protestas, que lograban ocupar el espacio público y que fueron ganando notoriedad con el correr del tiempo.

Una dinámica de protesta que comenzó a tener mayor relieve fue el cacerolazo, de esta metodología participaban principalmente los sectores de ingresos medios y altos de las grandes ciudades del país. Los reclamos que se expresaban en esas movilizaciones eran varios: en contra de la corrupción, en oposición a los controles para la compra de dólares y otros simplemente se manifestaban en rechazo a la figura de la presidenta.

Una de las primeras de esas manifestaciones, con una considerable participación, se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2012.[220] Posteriormente, se repetiría al año siguiente, el 18 de abril, cuando las plazas de los principales centros urbanos del país fueron ocupadas por ciudadanos que se oponían al gobierno nacional.

En esa instancia, la participación de las fuerzas políticas de oposición ya resultaba manifiestas, diferentes dirigentes de partidos políticos se encolumnaban en las protestas contra el gobierno. En entre ellos, podemos destacar la presencia del PRO, de la UCR, el PJ disidente, la Coalición Cívica y el Frente Amplio Progresista.[221]

En esas movilizaciones, con variedad de demandas hacia la gestión de gobierno, se hacía evidente la falta de articulación de esos reclamos en una lógica equivalencial, que posibilitara la conformación de un antagonismo que estuviera en capacidad de disputar la hegemonía política al kirchnerismo. Esa situación era remarcada por muchos medios de comunicación e intelectuales opositores, y señalaban la necesidad indispensable de comenzar a construir en esa dirección.

En otro plano de la disputa política, podemos ubicar lo que señalábamos en el punto anterior, la movilización de centrales de trabajadores que confrontaban con el oficialismo. Entre ellas, además de la CGT opositora de Hugo Moyano, se encontraban la CTA Autónoma, conducida por Pablo Micheli, y la CGT Azul y Blanca, comandada por Luis Barrionuevo.

Ese tridente protagonizó la protesta gremial durante aquellos años, y la medida de fuerza con mayor contundencia a nivel nacional en contra del gobierno se realizó el 10 de abril de 2014. El reclamo hacía eje en el impuesto a las ganancias, el paro tuvo un fuerte acatamiento,

[220] Lantos, N. (14 de septiembre de 2012), "'El que no salta es negro y K'", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-203365-2012-09-14.html (Fecha de acceso, 20/11/2017).
[221] "Cacerolazo 18A: multitudinarias protestas contra el Gobierno en todo el país", (18 de abril de 2013), *La Nación*. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1573998-cacerolazo-18a (Fecha de acceso, 20/11/2017).

y el cese actividades de los sindicatos de transporte logró configurar un clima de día no laborable en las grandes ciudades del país.[222]

Asimismo, los empresarios ligados a la exportación, y vinculados a las actividades agropecuarias, retomaron su rol opositor desde su accionar como actores económicos. El acopio de la cosecha, con la expectativa de una devaluación aún mayor en el tipo de cambio, ponía en un lugar complejo a la gestión de gobierno que poseía una baja cantidad de divisas.

Por otro lado, los sectores industriales observaban que los controles en materia cambiaria los perjudicaban en sus actividades, necesarias de importar bienes de capital. Se ponían de relieve los problemas de los sectores empresariales, vinculados a la producción de bienes destinados al mercado local, una situación en donde se les dificultad seguir sosteniendo y ampliando su tasa de ganancia.

Al mismo tiempo, el contexto de contracción económica y de restricción externa repercutía negativamente sobre el mercado de trabajo, evidenciando dificultades en la generación de empleo, en donde el ritmo era significativamente menor que al comienzo del periodo.

En ese contexto, la hegemonía kirchnerista comenzaba a dislocarse, los principales actores del ámbito laboral, tanto los sectores trabajadores como los empresarios, observaban las dificultades que se venían acarreando en materia económica. Esa situación debilitaba los lazos articulatorios con el gobierno, evidenciando tensiones hacia el interior de la propia formación hegemónica.

Ahora bien, podemos observar como en distintos planos de la disputa política y social iban emergiendo diversos colectivos opositores, cuya vinculación, primeramente, se suscribía en la expresión de rechazo que se personificaba en el kirchnerismo.

En un comienzo, el discurso contrahegemónico se centraba fuertemente en la crítica del orden político y social existente, construyéndose en una lógica diferencial y defensiva, sin una alternativa clara en los ejes principales del discurso dominante.

La identidad de esa amplia coalición política –que en un comienzo se expresaba en términos de rechazo y de lógica diferencial hacia ciertos iconos y representaciones del ciclo kirchnerista– apelaba a cuestiones de carácter simbólicas y de sentido para contraponerse a las figuras identitarias que prevalecía en el periodo.

Luego, esa coalición superaría la lógica diferencial y de negatividad, pasando a un estadio con la capacidad de articular un antagonismo que trascendería el simple rechazo, presentando un orden posible y diferente al dominante.

[222] Bruschtein, J. (11 de abril de 2014), "Un paro sin transporte y con piquetes", *Página 12*. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-243899-2014-04-11.html (Fecha de acceso, 20/11/2017).

Hacia finales del ciclo, y próximo a las elecciones presidenciales de 2015, las expresiones político-partidarias lograron articular ese antagonismo, lo que tendría consecuentes efectos electorales y pondría en crisis el orden político y social constituido desde de mayo de 2003.

No obstante, sin llegar a enunciar en un comienzo con gran nitidez y transparencia sus intenciones en materia de reorganización económica y social, esta articulación política sería eficaz en su retórica de cambio y en su capacidad de interpelación para desarticular el discurso hegemónico que prevaleció durante más de una década.

Conclusiones

En el desarrollo de la tesis nos propusimos analizar las tensiones que se suceden en el marco de un contexto de restricción externa, y cómo esa situación repercutió significativamente en el campo sectorial -capital y trabajo- tendiendo a generar tensiones en torno a la puja distributiva y, al mismo tiempo, ocacionando dificultades hacia el interior de la hegemonía construida por el kirchnerismo a principios del periodo.

En un comienzo, nos propusimos reconstruir el espacio histórico delimitado, ubicándonos primeramente en los sucesos de 2002 y 2003, en donde realizamos una caracterización de las consecuencias de la crisis de convertibilidad.

Nos enfocamos en la desarticulación de la hegemonía neoliberal, que posibilito el paso a un nuevo orden político y social. Pusimos nuestro énfasis en la disputa entre los distintos sectores empresariales, que manifestaban diversos posicionamientos en cómo sortear el contexto de crisis.

Los sectores representativos del capital financiero nacional e internacional, buscaban presionar a las autoridades políticas para que se llevara a cabo una dolarización de la economía local. En cambio, los sectores representados por el Grupo Productivo, en donde se encontraban mayormente los empresarios ligados al mercado interno presionaron por una devaluación del tipo de cambio.

Entre los sectores de las organizaciones de trabajadores, la CGT “oficial” se alineó en la articulación empresaria con vinculación al mercado doméstico, sin grandes capacidades de poder influir en las decisiones de ese ordenamiento sectorial. La GGT “disidente” se encontraba distante entre las dos articulaciones que surgía desde el empresariado, más propensos a aceptar los posicionamientos del Grupo Productivo.

Asimismo, el gobierno de transición de Eduardo Duhalde se construye desde el ámbito laboral y sectorial con el apoyo de los sectores de la UIA, particularmente por la línea interna del Movimiento Industrial Nacional (MIN) o “Industriales”. También obtuvo el apoyo de los sectores del trabajo nucleados en la CGT “oficial”.

Durante el periodo 2002-2003, se consolida una formación empresaria que, a través de sus acciones colectivas logra influir en las decisiones gubernamentales, ocupando también espacios de administración en el Ejecutivo Nacional.

La política económica del gobierno de transición buscó desde la “lógica diferencial” ocupar un lugar de negatividad al orden social y político de la década anterior, pero sin desplegar marcadamente una “lógica equivalencial” de demandas heterogéneas. Por lo tanto, su vocación

contrahegemónica, de antagonismo a la hegemonía neoliberal, no logró transcender la lógica de la negatividad y el rechazo.

En los comienzos de la constitución de ese nuevo orden, el kirchnerismo es el actor emergente que se expresó como una formación social antagónica al paradigma anterior, encontrando apoyos en términos políticos en determinados actores representativos del capital y el trabajo y, al mismo tiempo, puntos de sustentación en el ámbito político partidario.

En el primer periodo de gobierno kirchnerista, nos abocamos a analizar el diseño macroeconómico que se configuró desde una política cambiaria que benefició a los sectores agroexportadores y sectores industriales vinculados al mercado interno.

Al mismo tiempo, en ese marco cobra protagonismo las instituciones de las relaciones del trabajo, en donde el Estado nacional ocupa un lugar sumamente activo en la recomposición del mercado de empleo, a partir de la incrementación del poder adquisitivo de los salarios y la generación de puestos de trabajo.

Durante el periodo 2003-2007, el gobierno nacional y el kirchnerismo como fuerza política, logró articular determinadas relaciones con sectores del empresariado y organizaciones de trabajadores.

La UIA alcanzaba a ocupar un lugar preponderante en la representación de las cámaras fabriles con intereses en las actividades domésticas de la economía y la CGT conducida por Hugo Moyano, ganaba un mayor protagonismo en la interlocución con el gobierno.

Destacamos que, en el ciclo expansivo del periodo 2003-2007, los amplios y heterogéneos sectores representados por la UIA, organizados en el MIN y el MIA, se encontraban beneficiados por la política económica oficial.

Los empresarios vinculados al sector industrial con orientación al mercado interno recuperaban su tasa de ganancia a partir de la dinámica que comenzaba a adquirir la actividad económica interna. Paralelamente, las negociaciones colectivas comenzaban a fijar aumentos salariales de manera gradual, con la intención de no generar un espiral inflacionario y, recuperar el consumo de los trabajadores.

En ese periodo, el Estado retoma las facultades de regular y planificar la economía nacional, coordinado la política cambiaria y monetaria, con el objetivo de robustecer la dinámica interna. Al mismo tiempo, las políticas laborales desarrolladas posibilitaron fortalecer a los actores el mercado de trabajo, principalmente al actor sindical que vuelve a recobrar un protagonismo a partir de sus capacidades de movilización e influencias en función de atender sus intereses en el marco de la puja distributiva.

Desde la unificación de la CGT, el sindicalismo comienza a ser un punto de apoyo de gran importancia para el gobierno, con la finalidad de ampliar su base de sustentación política y, al

mismo tiempo, poder regular los reclamos salariales del sector. En ese contexto, en donde comenzaba a recomponerse la actividad económica y la dinámica del mercado de empleo, emerge nuevamente en la vida política y sectorial cobrando mayor fortaleza las organizaciones obreras.

El kirchnerismo se presentó desde su construcción identitaria, como el actor político que logró suturar el orden abierto luego de la crisis de 2001 y 2002. A través de sus prácticas articulatorias, consiguió con éxito desplegar un discurso equivalencial de demandas que lo posicionaron decididamente como antagonista al orden neoliberal, delimitándolo como su exterior constitutivo.

Asimismo, en el accionar de reparación social que llevó adelante, lo posibilito vincularse estrechamente con los elementos que componían su formación hegemónica. La articulación política que desarrolló lo relacionó estrechamente con los actores de la esfera productiva de la economía.

Destacamos que, las relaciones políticas que poseían como objetivo articular la conformación de un nuevo orden hegemónico, que contuviera a sectores empresariales y sindicales, evidenció una necesaria participación estatal para constituirla y, posteriormente, conducirla.

Luego presentamos segundo periodo kirchnerista, que se caracterizó por remarcar los impactos que se dieron sobre la economía nacional en un contexto de crisis financiera a escala global. Destacamos las dificultades que comienzan a vislumbrarse sobre el mercado interno a medida que fue desarrollándose la crisis internacional, y como está influye en los canales comerciales y financieros. La situación del frente externo se encontraba fortalecido como consecuencias de la política económica que tuvo lugar en el periodo anterior, 2003-2007.

Señalamos que, las dificultades en materia financiera fueron exiguas y que no llegaron a conformaron una típica situación de falta de divisas o de restricción externa. Eso posibilito que las capacidades de maniobra para iniciar un proceso anticíclico, con el objetivo de sostener la actividad economía local, se sostuviera con recursos propios.

Paralelamente, se atendió los efectos que contrajo la crisis de las “hipotecas basuras” en los EE. UU., donde los capitales especulativos se reorientaron hacia los bienes primarios en busca de refugio.

En ese contexto, el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de establecer un mecanismo de retenciones móviles a las exportaciones, sobre la comercialización de granos, con el objetivo de eliminar los efectos internos de los aumentos en los precios internacionales, que termino derivando en un conflicto con el sector agroexportador.

En el desarrollo del conflicto entre el gobierno nacional y los sectores agroexportadores, en donde tuvo lugar una fuerte puja por la apropiación de la renta y el excedente, impactó negativamente sobre el desenvolvimiento de la economía local.

En esa situación, la CGT se destacó como un actor importante para Ejecutivo Nacional, en su despliegue de movilización y apoyo político. La UIA como entidad empresaria, a poseer intereses diversificados hacia su interior y a negarse en tomar posición contraria a los intereses agroindustriales representados en su mayoría en el MIA, tomó una postura neutra en la disputa.

Posteriormente, las controversias con la UIA se orientaron hacia la evolución del tipo de cambio. En donde el gobierno tomó la decisión de apreciar la moneda nacional con relación al dólar, con la finalidad de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en el mercado doméstico. Esto le quito competitividad al sector, y comenzaron a surgir críticas desde la entidad fabril a la política cambiaria.

Ahora bien, el conflicto alrededor de la Resolución N°125 generó un alejamiento de relevantes conglomerados de sectores medios urbanos de las políticas del gobierno nacional. La significación desplegada en la articulación hegemónica delineada por el kirchnerismo, que ponía el acento sobre los actores vinculados al ámbito industrial, fortalecía la delimitación de un espacio social antagónico conformado por los sectores agroempresariales y de sectores urbanos.

En el transcurso del año 2008, en donde tiene lugar el conflicto entre el gobierno nacional y el sector agroexportador, comenzó a configurarse una contrahegemonía que sobrepasó el reclamo sectorial, constituyéndose en el ámbito político. La controversia se presentaba como una disputa de carácter mucho más extensa y de un mayor volumen.

En definitiva, se ponía en cuestión las atribuciones del Estado para utilizar sus capacidades de intervenir en la apropiación del excedente económico, en función de reorientarlo hacia otras actividades de la economía. En ese periodo, comienza a reconfigurarse el campo político y social, en donde pudimos observar la construcción de un principio de articulación antagónica bajo la “lógica diferencial” y de negatividad.

Esa misma disputa tenía su correlato electoral en las elecciones legislativas de 2009. En donde la Mesa de Enlace agropecuaria, a partir de un repertorio de acciones de protesta y negociación logró delinear una estrategia político-partidaria, ubicando en las listas de fuerzas políticas opositoras a candidatos representativos del sector.

En el transcurso del periodo 2012-2015, empezó a manifestarse los primeros desajustes macroeconómicos, acompañados por una tendencia a la baja de los precios internacionales de los bienes primarios y de desaceleración del crecimiento económico. Los impactos de la crisis

internacional, que tenían su origen en 2007-2008, aún sobrevolaban negativamente sobre el mercado interno, ocasionando efectos de contracción sobre el balance comercial.

Paralelamente, destacamos la consolidación de la restricción externa de la economía nacional que provocó dificultades al gobierno en el sostenimiento de una política expansiva, en donde se presentó dificultades de orden cambiario y monetario. El stock de reservas de la autoridad monetaria comenzó a deteriorarse, teniendo en sus orígenes las crecientes importaciones de capital que los actores económicos demandaban con el objetivo de producir para el mercado interno.

En ese contexto, creemos necesario remarcar la fuga de capitales, en donde las empresas transnacionales remitían sus utilidades al exterior, y las complicaciones en materia energética, que implicaron crecientes importaciones.

El escenario de tensión cambiaria llevó a las autoridades del Ejecutivo Nacional a tomar medidas sobre la adquisición de divisas. Las disposiciones que se llevaron adelante provocaron un gran malestar tanto a los sectores del ámbito empresarial como también a los ahorristas de medianos y altos ingresos. Ese marco de situación derivó en una devaluación de la monea hacia comienzos de 2014.

El último periodo de gobierno kirchnerista, el contexto político comenzó a reconfigurarse provocando tensiones hacia el interior de la articulación política construida a lo largo del periodo 2003-20015. La formación hegemónica encontró sus primeras complicaciones en las organizaciones obreras, en donde se generaron fracturas internas que poseían su origen en como posicionarse políticamente frente al gobierno nacional. La CGT se divide entre quienes se alinean detrás del liderazgo de Hugo Moyano, y en aquellos que deciden mantener su relación política con el kirchnerismo.

Los actores sindicales representativos de actividades estratégicas, en particular los de transporte y energía, despliegan un repertorio de acciones de oposición al gobierno, produciendo un aumento en los niveles de conflictividad laboral.

En cuanto al sector empresarial, la UIA comenzó a direccionar críticas a la gestión económica, haciendo hincapié en el “atraso cambiario” con el objetivo de recuperar competitividad a partir de una mayor devaluación. Las dificultades de los actores vinculados a la producción de bienes para el mercado doméstico, se centraba en la imposibilidad seguir ampliando su tasa de ganancias en un contexto contractivo del ciclo económico.

De esa manera, señalamos el comienzo de un escenario contrahegemónico, que llegó a cobrar mayor peso y relevancia cuando se incorporan actores sociales urbanos de ingresos medios y altos con capacidad de atesoramiento en dólares, que exhibirán su rechazo a las

políticas de restricciones en el mercado de cambios. Posteriormente, se integran a ese conglomerado social las distintas fuerzas partidarias de la oposición.

En esa situación, la hegemonía política del kirchnerismo empezó a manifestar su dislocación, los lazos articulatorios constituidos durante el periodo comenzaban a debilitarse. El discurso contrahegemónico emergía en un principio desde la "lógica diferencial" y de negatividad, posteriormente, esa amplía coalición de sectores sociales se expresaría en plenitud en términos de antagonismo, con capacidad de desplegar una "lógica equivalencias" de demandas, expresando una alternativa al orden político y social.

El análisis desarrollado a lo largo de nuestra investigación mostró que las organizaciones empresarias y de los trabajadores, desempeñaron un rol sumamente relevante en las posibilidades de hegemonizar el espacio político por parte del kirchnerismo.

Las posibilidades de sostener esa formación hegemónica evidencio dificultades hacia finales del periodo 2003-2015, en donde comienzan a presentarse dificultades en el diseño macroeconómico, que impactan de forma notable sobre la dinámica del mercado de trabajo bajo un contexto de contracción en el crecimiento económico.

A partir de estos primeros aportes, creemos que se nos posibilita continuar nuestra indagación sobre las características que poseen los actores sectoriales -capital y trabajo- y su capacidad de despliegue en el plano político. Al mismo tiempo, nos permite reflexionar sobre la complejidad de articular una "lógica hegemónica" con orientación al fortalecimiento y ampliación del mercado interno y de matriz distributiva del excedente económico en contextos de restricción externa.

Bibliografía

Abeles, M. (2009). "El impacto de la crisis internacional en la economía argentina", en *Revista de Trabajo*, Año 5, N°7.

Abeles, M. y Borzel, M. (2004). "Metas de inflación: implicancias para el desarrollo" en *CEFID – AR - Documento de Trabajo Nº 1.*

Amico, F. (2008). "Argentina 2002-2008: ciclo económico, inflación y crecimiento", en *Revista de Economía Heterodoxa*, N°10, Año VII.

Amico, F. (2013) "Crecimiento, distribución y restricción externa en Argentina", en *Circus, Revista Argentina de Economía*, N°5.

Amparán, A. (2000). "Melucci: la teoría de la acción colectiva", en *Argumentos* N°37.

Azpiazu y Schorr, (2010). "La industria argentina en la posconvertibilidad: reactivación y legados del neoliberalismo", en *Revista Latinoamericana de Economía*, vol. 41, núm. 161.

Barattini, M. (2013). "La vitalización sindical en el período de la convertibilidad en Argentina", en *Trabajo y Sociedad*, Núm. 20.

Basualdo, E. (2001) *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*. Buenos Aires: Flacso.

Basualdo, E. (2002). *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década de los noventa. Una aproximación a través de la reestructuración de los grupos económico y los capitales extranjeros*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Ediciones.

Becker, J. (2007). *El golpe del capital. Las crisis financieras en el Cono Sur y sus salidas*. Montevideo: Coscoroba.

Beltrán, G. (2012) "Las prácticas del poder. Discusiones en torno al problema de la acción política empresaria", en *Apuntes*, N°70, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

Benes, E. y Milmanda, B. (2012). "El nuevo liderazgo sindical en la argentina posneoliberal: el caso del gremio de camioneros", en *Desarrollo Económico*, Vol. 52, No. 205.

Bezcinsky, (2007). "Inversión extranjera directa en la Argentina. Crisis, reestructuración y nuevas tendencias después de la convertibilidad", en *CEPAL - Documento de Proyecto Nº 127.*

Biglieri, P. (2010). "El retorno del pueblo argentino: entre la autorización y las asambleas. La emergencia de la era kirchnerista", en *Studia Politicae*, N°10.

Bollo, P. (2009). El marxismo según, a pesar de, o sin Marx, en *Pasajes*, N°29

Brenta, N. (2013) *Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI*. Buenos Aires: Eudeba. Buenos Aires: Siglo XXI.

Bresser-Pereira, L. (2009). “El asalto al Estado y al mercado: neoliberalismo y teoría económica”, en *Nueva Sociedad,* N°221

Butler, J. Laclau, E. y Žižek, S. (2011). *Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda*. Buenos Aire: Fondo de Cultura Económica.

Canitrot, A. (1983). “El salario real y la restricción externa de la economía”, *en Desarrollo Económico*, Vol. 23, N°91.

Cantamutto, (2015). “Construcción de hegemonía y Estado: algunas bases teóricas”, en *Estudios Sociales del Estado (ESE)*, Volumen 1, número 1

Castellani, A. y Schorr, M. (2004). “Argentina: convertibilidad, crisis de acumulación y disputas en el interior del bloque de poder económico”, en *CENDES*, vol. 21, núm. 57

Comelli, J. Castro Garcia, M. Godfrid, J. Schvartz, A. Ciccolella, M. y Negro, M. (2009). *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates*. Buenos Aires: Antropofagia.

Cortés, R. y Marshall, A. (2011). “Salarios, desigualdad y sector externo bajo distintos regímenes macroeconómicos”, Realidad Económica, N°196.

Damill, M. Frenkel, R. y Rapetti, Martín. (2005). “La deuda argentina: historia, default y reestructuración”, en *Desarrollo Económico,* Vol. 45, No. 178.

Damill. D y Frenkel, R. (2013) “La economía argentina bajo los Kirchner: una historia de dos lustros”, en Peruzzotti, E. y Gervasoni, C. (eds.): *La Década Kirchnerista*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana (por aparecer).

De Angelis, I., Calvento, M. y Roark, M. (2013). “¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo? Desde la teoría de la regulación. Argentina 2003- 2010”, en *Revista Problemas del Desarrollo*, N°173.

De la Torre, A., Yeyati, E. y Schmukler, S. (2002) “La crisis financiera argentina: moneda flotante, bancos hundiéndose”, en *World Bank 2002 Finance Forum.*

Diamand, M. (1972) La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio, en *Desarrollo Económico,* Vol. 12 N° 45.

Diamand, M. (1978). “Towards a change in the economic paradigm through the experience of developing countries” en *Journal of Development Economics*, 5.

Diamand, M. (1985) “El péndulo argentino, ¿hasta cuándo?”, en *Realidad Económica*, N°64.

Diez, C. (2016). *Néstor Kirchner y la CGT de Moyano.* Tesis para optar al grado de Maestría. Universidad Nacional de Rosario Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Eshag, E. y Thorp, R. (1965). “Las consecuencias económicas y sociales de las políticas económicas ortodoxas aplicadas en la República Argentina durante los años de postguerra”, *Desarrollo Económico*, Vol.4 N°16.

Errejón, I. (2011) “Evo pueblo. La construcción hegemónica del MAS en Bolivia”, en Errejón, I. y Serrano, A. (eds.). *Del asalto a la transformación del Estado en Bolivia*, en Viejo Topo.

Errejón, I. (2012). *La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo*. Tesis para optar al grado de Doctor. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Errejón, I. (2015) “¿Qué es el análisis político? Una propuesta desde la teoría del discurso y la hegemonía”, en *Relacso*.

Etchemendy, S. (2010) “La Concertación y la Negociación Colectiva: perspectiva histórica y comparada”, en *Revista de Trabajo*, Año 6, N° 8.

Etchemendy, S. y Collier, (2008). “Golpeados, pero de pie. resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en argentina (2003-2007)”, en *Postdata 13*.

Fair, H. (2015) “Contribuciones para una operacionalización de la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau”, en *Polis*, Vol.11, N°2.

Fernández, A. y Iglesias, E. (2013). “La dimensión cultural en diversas perspectivas de la acción colectiva”, en *Miriada*, Año 5, N°9.

Frenkel, R. (2004). Frenkel, R. (2004a) “Las políticas macroeconómicas, el crecimiento y el empleo”, en Capítulo II de OIT, Oficina regional para América Latina y el Caribe, Conferencia Regional de Empleo del MERCOSUR.

Gallo, (2014). “Restricción externa de la economía y restricciones sociopolíticas al desarrollo: las limitaciones del régimen de acumulación actual”, en *VII Jornadas de Economía Crítica*, La Plata.

Gálvez, E. (2012) Crisis y recomposición de la hegemonía tras el derrumbe de la Convertibilidad (1999-2003), en *Revista Perspectivas de Políticas Públicas,* Año 2 Nº 3.

Gerchunoff, P. (2006) “Réquiem para el stop and go, ¿Requiem para el stop and go?”, en *UTDT Fundación PENT.*

Gerchunoff, P. y Aguirre, H. (2004). “La política económica de Kirchner en la Argentina: varios estilos, una sola agenda”, en *Real Instituto Elcano*.

Giacaglia, M. (2002). “Hegemonía. concepto clave para pensar la política”, en *Tópicos*, N°10.

Giménez, G. (1997) “Materiales para una teoría de las identidades sociales”, en *Frontera Norte,* Vol. 9, N°18.

Godio, J. (2003) *Argentina: luces y sombras en el primer año de transición. Las mutaciones de la economía, la sociedad y la política durante el gobierno de Eduardo Duhalde (enero-diciembre de 2002)*. Buenos Aires: Biblos.

Godio, J. (2006). *El tiempo de Kirchner. El devenir de una “revolución de arriba”*. Buenos Aires: Ed. Letra Grifa.

Groisman, (2012). “Salario mínimo y empleo en Argentina”, en *Revista de economía política de Buenos Aires,* Vol. 06, Nro. 11.

Grottola, L. (2010). “Neo – desarrollismo y rol del Estado (Argentina 2003 – 2010)”, Trabajo preparado para su presentación en el V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).

Heymann, D. y Ramos, A. (2015). Crecimiento, sustentabilidad externa y distribución de ingreso: algunas notas”, en Bekerman, M y Paikin, D. (Comp*) Integración productiva, restricción externa y desarrollo.* ANÁLISIS Nº 4.

Heymann, D. y Ramos, A. (2010). “Una transición incompleta. inflación y políticas macroeconómicas en la argentina post-convertibilidad”, *REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA DE BS. AS,* Año 4, Vols. 7 y 8

Howarth, D. (2008). “Hegemonía, subjetividad política y democracia radical, en Critchley, S. y Howarth (2008), “Hegemonía, subjetividad política y democracia radical” en S. Critchley y O. Marchart (comps.). *Laclau. Aproximaciones críticas a su obra*. Buenos Aires, F.C.E.

Iglesias, E. (2012). “Modificaciones en el vínculo entre partidos y movimientos en la Argentina de comienzos del XXI”, en *STUDIA POLITICAE*.

Kulfas, M. (2016). *Los tres kirchnerismos. Una historia de la económica argentina, 2003-2015*. Buenos Aires: Siglo XXI

Kulfas, M. Goldstein, E. y Burgos, M. (2014). Dinámica de la producción industrial y la sustitución de importaciones. reflexiones históricas y balance del período 2003-2013, en *CEFIDAR*, Documento de Trabajo Nº 64.

Kulfas, M. (2009). “Una nueva matriz productiva para una nueva matriz distributiva”, en *Informe Industrial.*

Laclau (2011). *Emancipación y diferencia*. Buenos Aires: Ariel.

Laclau, E. (1993). “Discurso”, en Goodin Robert & Philip Pettit (Ed.). *The Blackwell. Companion to Contemporary Political Thought*, The Australian National University. Philosophy Program.

Laclau, E. (1995). “Universalismo, particularismo y el tema de la identidad”, en *RIFP/5*

Laclau, E. (2000). *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Laclau, E. (2006). “¿Por qué construir un pueblo es la tarea principal de la política radical?”, en *CENDE*, Año 23. N°62.

Laclau, E. y Mouffe, C. (2004, [1985]). *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Lafleur y Szretter, (2004). “Los salarios del sector privado en 2004”, en *Trabajo, Ocupación y Empleo*, N°2.

Lenin, V. (1986, [1905]). Dos tácticas de la socialdemocracia. Buenos Aires: Anteo.

López, E. y Cantamutto, F. (2013). "Las demandas económicas de la clase trabajadora en el nuevo modo de desarrollo argentino (2002-2011). De la recomposición parcial a las limitaciones estructurales", en *Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social*, Vol. 6 N° 10

Lucca, J. (2014) "Conflictos y realineamientos de los actores sociales y políticos durante el gobierno de Néstor Kirchner", en *Revista de Ciencias Sociales*, Año 2.

Marchart, O. (2009). *El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Marchart, O. (Comp). *Laclau. Aproximaciones críticas a su obra*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Marshall y Perelman, (2004). "Cambios en los patrones de negociación colectiva en la Argentina y sus factores explicativos", en *Estudios Sociológicos*, Vol. XXII, Núm. 2.

McCarthy, J. y Zald, M. (1977) "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory", en *The American Journal of Sociology*, Vol. 82, No. 6

Melucci, A. (1991). "La acción colectiva como construcción social", en *Estudios Sociológicos*, Vol.9, N°26.

Merino, G. (2012) "El Movimiento Obrero Organizado, la crisis de 2001 y el gobierno de Duhalde. El caso de la CGT disidente", en *Cuadernos del CISH 30*.

Merino, G. (2014). *El surgimiento del grupo productivo y el retorno de los "Capitanes de la industria" al centro de la lucha política, 1999-2003*. Tesis para optar a Doctorado. Presentada en Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Mouffe, C. (2007) *En torno a lo político*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Muñoz, M. y Retamozo, M. (2008) "Hegemonía y discurso en la Argentina contemporánea. Efectos políticos de los usos de "pueblo" en la retórica de Néstor Kirchner", *en Perfiles Latinoamericanos*, núm. 31

Muñoz, M. y Retamozo, M. (2012). "Kirchnerismo: Gobierno, política y hegemonía", en *VII Jornadas de Sociología de la UNLP*

Musacchio, A. (2009). "Las oscilaciones cíclicas de la economía argentina en las dos últimas décadas", en *Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamérica de Economía*, Vol. 40, núm. 159.

Musacchio, A. (2015a) "¿Cielo o infierno? La economía argentina en la postcrisis", en *Revista de Economía Critica*. Barcelona. Vol. 19

Andrés Musacchio (2015b): "Privatization and Re-Nationalisation of Pension Funds", en Ulrich Schüle (Ed.), *International Trade, Finance and Investment Policies in Argentina*. Shaker, Aachen.

Nemiña, J. (2013). "El FMI y la política económica argentina", en *Observatorio Latinoamericano*

Nemiña, P. (2011). Historia de las relaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, en *Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti"*, año 11, N° 11.

Niosi, J. (1974). Los empresarios y el estado argentino (1955 – 1969). Buenos Aires: Siglo XXI

Novick, M. (2006). "¿Emerge un nuevo modelo económico y social? El caso argentino 2003-2006, en *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo (RELET*), Año 11, Nº 18.

Novick, M. y Trajtemberg, D. (2000). "La negociación colectiva en el período 1991-1999", Documento de Trabajo núm. 19, Argentina, Secretaría de Trabajo, Coordinación de Investigaciones y Análisis Laborales, MTESS.

O' Donnell, G. (1977). "Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976", en *Desarrollo Económico*, Vol. 15, N°64.

Palomino y Trajtemberg, (2012). "Negociación colectiva y recuperación económica en Argentina", en *Macroeconomía, empleo e ingresos. Debates y políticas en Argentina frente a la crisis internacional 2008-2009, Oficina Internacional del Trabajo.*

Palomino, D. y Trajtemberg, D. (2006). "Una nueva dinámica de las relaciones laborales y la negociación colectiva en la Argentina", en *Revista de Trabajo*, Año 2, Núm. 3.

Palomino, H. (2005). "Los sindicatos y los movimientos sociales emergentes del colapso neoliberal" en *Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO*

Palomino, H. Szretter, H. Trajtemberg y Zanabria, M. (2006) "Evolución de los salarios del sector privado", en *Trabajo, Ocupación y Empleo*, Nº 5.

Palomino, H. y Pastrana, E. (2013). "Argentina: en busca de un nuevo modelo de desarrollo", en *PNUD Chile, Desarrollo Humano en Chile 2012. Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo.*

Pastrana, F. Toledo, F. y Villafañe, S. (2012). "El modelo económico ante la crisis internacional: sostenimiento de las condiciones laborales y sociales en Argentina", en Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y Oficina de País de la OIT para la Argentina, *Macroeconomía, empleo e ingresos: debates y políticas en Argentina frente a la crisis internacional 2008-2009.*

Peña, M. (1974). *Industria, burguesía industrial y liberación nacional.* Buenos Aires: Ed. Fichas.

Peralta Ramos, M. (2007). *La economía política: poder y clases sociales (1930-2006)*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Pérez, Pablo Ernesto (2011) "¿Nueva política económica, viejos problemas? Viabilidad económica y distribución de ingresos en la postconvertibilidad", en Ensayos en honor a Marcelo Diamand. Las raíces del nuevo modelo de desarrollo argentino y del pensamiento económico nacional. Buenos Aires: Miño y Dávila.

Pineda, E. (2016). "El carácter multidimensional de la acción colectiva y los movimientos sociales: una problematización teórica", *Secuencia*, Núm. 95.

Porta, F. Santarcángelo, J. y Schteingart, D. (2017). Un proyecto político con objetivos económicos. Los límites de la estrategia kirchnerista, en Pucciarelli, A. y Castellani, A. (Coord.) *Los años del kirchnerismo. La disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Portantiero, Juan Carlos (1977) "Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973", en *Revista de Sociología Mexicana*, Vol. 39, N°2

Portelli, H. (1977 [1972]). *Gramsci y el bloque histórico*. Madrid: Siglo XXI.

Pucciarelli, A. (2017) "El conflicto por "la 125" y la configuración de dos proyectos prehegemónicos", en Pucciarelli, A. y Castellani, A. (Coord.) *Los años del kirchnerismo. La disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Rapoport, M. (2011). "Una Revisión histórica de la inflación argentina y de sus causas", en Blanco, V. y Fraschina, J. (2011). *Aportes de Economía Política en el Bicentenario de la Revolución de Mayo*. Buenos Aires: Prometeo.

Rodríguez Prieto, R. y Seco Martínez, J. M. (2007) "Hegemonía y Democracia en el siglo XXI, ¿Por qué Gramsci?", en XXI Jornadas de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, "Problemas actuales de la Filosofía del Derecho", Universidad de Alcalá

Ruiz, O. (2014). "Generaciones: movimientos juveniles, políticas de la identidad y disputas por la visibilidad en el Chile neoliberal", en *Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO*

Santarcangelo, J. y Perrone, G. (2013). El desempeño del mercado de trabajo argentino durante la postconvertibilidad, en *ENSAYOS DE ECONOMÍA,* No.43

Salvia, S. (2014). "Políticas económicas, mercado mundial y acumulación de capital en la Argentina post-convertibilidad", en *Revistas de Economía Critica*, N°19.

Schteingart, D. (2011). "La concepción del desarrollo de la Unión Industrial Argentina (2000-2010)", en *Documentos de Investigación de Ideas*, N°17.

Schuster, F. (2011). "Acción y estructura en política y ciencias sociales. Problemas filosóficos y metodológicos", en Trabajo preparado para la renovación de cargo de Profesor Asociado de Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Schvarzer, J. y Tavosnanska, A. (2008) "Modelos macroeconómicos en la Argentina: del stop and go al go and crash", en *CESPA*, N°15.

Senén González, C. Medwid, B. y Trajtemberg, D. (2011). "La Negociación colectiva y sus determinantes en la Argentina. Un abordaje desde los debates de las relaciones laborales", en *Revista Latinoamericana de Estudios do Trabalho*, Vol. 16

Tarrés, M. (1992). "Perspectivas analíticas en la sociología de la acción colectiva" en *Estudios Sociológicos*, Vol. 10 Nº 30.

Tarrow, S. (1997*). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.

Tarrow, S. y Meyer, D. (1998). *The Social Movement Society: Contentious Politics for a New Century*. Maryland: Rowman & Littlefield.

Tilly, C. (2000). “Acción colectiva” en Apuntes de investigación, *CEyP*, Año IV, Nº6.

Touraine, A. (1969). *Sociología de la acción*. Buenos Aires: Ariel.

Trajtemberg, D. (2007) “La negociación colectiva en 2006: un nuevo mecanismo de coordinación”, en *Trabajo, Ocupación y Empleo*, N°2.

Varesi, G. (2014) “El gobierno de Eduardo Duhalde Hegemonía y acumulación en el inicio de la Argentina posconvertibilidad, 2002-2003”, en *Papeles de Trabajo*.

Varesi, G. (2014). “El "conflicto del campo" de 2008 en Argentina: Hegemonía, acumulación y territorio”, en *Geograficando, 2014, 10 (2)*.

Varesi, G. (2014). “La construcción de la hegemonía kirchnerista en Argentina, 2003-2007”, Temas de Debate, N°28, Año 18.

Wyczykier, G. (2015) “Trayectorias y avatares del modelo de desarrollo industrial argentino: una breve reflexión histórica”, en Svampa, M. (coord.) *El desarrollo en disputa. Actores, conflictos y modelos de desarrollo en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Ed. UNGS.

Wyczykier, G. (2015b) “Las disputas por el desarrollo: narrativas y posicionamientos de los empresarios de la Unión Industrial Argentina en las coyunturas políticas de 2008”, en *Temas y Debates*, N°30, Año 19.

Wyczykier, G. y Anigstein, C. (2015) “Actores y alianzas en el modelo de desarrollo industrial: los trabajadores, los empresarios y el gobierno en la década kirchnerista”, en Svampa, M. (coord.) *El desarrollo en disputa. Actores, conflictos y modelos de desarrollo en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Ed. UNGS.

Wylde, C. (2012). “¿Continuidad o cambio? Política económica argentina posterior a la crisis y el gobierno de Néstor Kirchner, 2003-2007”, en *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*. Núm. 43.